



HAY FUTURO si hay verdad

INFORME FINAL

Comisión para el Esclarecimiento
de la Verdad, la Convivencia
y la No Repetición

COLOMBIA ADENTRO

Relatos territoriales sobre el conflicto armado

VALLE Y NORTE DEL CAUCA

HAY FUTURO
si hay verdad

INFORME FINAL

COLOMBIA **ADENTRO**

RELATOS TERRITORIALES
SOBRE EL CONFLICTO ARMADO

VALLE Y NORTE DEL CAUCA

COMISIÓN DE LA VERDAD



Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad,
la Convivencia y la No Repetición.

Colombia. Comisión de la Verdad, autor

Hay futuro si hay verdad : Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. -- Primera edición. -- Bogotá : Comisión de la Verdad, 2022.

11 tomos en 24 volúmenes : ilustraciones, diagramas, fotografías y mapas a color.

Incluye referencias bibliográficas

ISBN 978-958-53874-3-0 (Obra completa impreso)

ISBN 978-628-7590-12-0 (Tomo 11. vol. 12. impreso)

ISBN 978-628-7590-18-2 (Obra completa digital)

ISBN 978-628-7590-38-0 (Tomo 11. vol. 12. digital)

Tomo 1. Convocatoria a la paz grande: declaración de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición -- **Tomo 2.** Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de Colombia -- **Tomo 3.** No matarás: relato histórico del conflicto armado interno en Colombia -- **Tomo 4.** Hasta la guerra tiene límites: violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivas -- **Tomo 5.** Sufrir la guerra y rehacer la vida: impactos, afrontamientos y resistencias -- **Tomo 6.** Cuando los pájaros no cantaban: historias del conflicto armado en Colombia, tomo testimonial -- **Tomo 7.** Mi cuerpo es la verdad: experiencias de mujeres y personas LGBTIQ+ en el conflicto armado -- **Tomo 8.** No es un mal menor: niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado -- **Tomo 9.** Resistir no es aguantar: violencias y daños contra los pueblos étnicos de Colombia -- **Tomo 10.** La Colombia fuera de Colombia: las verdades del exilio -- **Tomo 11.** Colombia adentro: relatos territoriales sobre el conflicto armado -- **Tomo 11. vol. 1.** Ensayo introductorio -- **Tomo 11. vol. 2.** Amazonía -- **Tomo 11. vol. 3.** Antioquia, sur de Córdoba y Bajo Atrato chocoano -- **Tomo 11. vol. 4.** Caribe -- **Tomo 11. vol. 5.** Eje Cafetero -- **Tomo 11. vol. 6.** Frontera nororiental -- **Tomo 11. vol. 7.** Magdalena Medio -- **Tomo 11. vol. 8.** Nariño y sur de Cauca -- **Tomo 11. vol. 9.** Orinoquía -- **Tomo 11. vol. 10.** Pacífico -- **Tomo 11. vol. 11.** Región Centro -- **Tomo 11. vol. 12.** Valle y norte del Cauca -- **Tomo 11. vol. 13.** Dinámicas urbanas de la guerra -- **Tomo 11. vol. 14.** El campesinado y la guerra.

1. Colombia. - Comisión de la Verdad - Informes 2. Conflicto armado - Colombia - Siglos XX-XXI - Informes 3. Víctimas de la violencia - Colombia - Siglos XX-XXI - Informes 4. Justicia y reparación - Colombia - Siglo XXI - Informes 5. Búsqueda de la verdad - Colombia - Siglo XXI - Informes 6. Testimonio de víctimas - Colombia - Siglo XXI - Informes 7. Reparación de víctimas según grupo poblacional - Colombia - Siglo XXI - Informes

CDD: 303.609861 ed. 23

CO-BoBN- a1096847



COMISIÓN DE LA VERDAD



JEP

JURISDICCION
ESPECIAL PARA LA PAZ



UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

***Hay futuro si hay verdad. Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad,
la Convivencia y la No Repetición***

Comisionados y comisionadas

Francisco José de Roux Rengifo, *presidente*
Alejandro Castillejo Cuéllar
Saúl Franco Agudelo
Lucía González Duque
Carlos Martín Beristain
Alejandra Miller Restrepo
Leyner Palacios Asprilla
Marta Ruiz Naranjo
Patricia Tobón Yagari
Alejandro Valencia Villa
Alfredo Molano Bravo (q. e. p. d.)
María Ángela Salazar Murillo (q. e. p. d.)

Secretario general

Mauricio Katz García

Equipo directivo

Gerson Arias Ortiz, *director para el diálogo social*
Diana Britto Ruiz, *directora de conocimiento*
Sonia Londoño Niño, *directora de pueblos étnicos*
Juan Carlos Ortega, *director administrativo y financiero*
Tania Esperanza Rodríguez Triana, *directora de territorios*

Edición general y coordinación editorial

Karim Ganem Maloof

Coordinación de comunicaciones

Ricardo Corredor Cure

Asistencia editorial

Sofía Libertad Sánchez Guzmán
Andrea Jiménez Jiménez

Bogotá, Colombia, agosto de 2022

Directora de este tomo

Tania Esperanza Rodríguez Triana

Equipo de investigación

Oscar David Andrade Becerra (líder de la investigación), Lehidy Carolina Baltán Salazar, Natalia Zambrano Fernández, Juan Sebastián Rodríguez López, Isabel Cristina Giraldo Quijano, Miguel Ángel Reyes

Editora

Marianne Ponsford

Editor adjunto

Santiago de Narváez Rugeles

Cuidado de textos

Luz Ángela Uscátegui

Revisión de armada

Gustavo Patiño

Equipo de analítica

Lenin Monak Salinas, Jeison Sabogal Sánchez y Andrea del Pilar González (coordinadora)

Cartografía

Fader Eduardo Peña Martín, Natalia Caro Galvis y Mónica Narváez Pastrana (coordinadora)

Transmedia

Luisa Fernanda Orozco Barrios, Andrés Mauricio Riveros Pardo, Julián Vivas Banguera, David Leonardo Riaño Valencia, Martha Isabel Bernal Mora, Elizabeth Builes Cardona y Olga Lucía Lozano (coordinadora)

Colaboraciones

Jennifer Betancur Marín, Clara Mabel Andrade, Maryluz Ramírez Ramírez, Pedro Badrán, Adriana Villegas, Julián Isaza, Alejandra Jaramillo Morales, Pedro Adrián Zuluaga

Asistencia editorial

Esteban Gallego González, Sofía Gómez Piedrahita, Santiago Soto Marín

Agradecimientos especiales

El proceso de despliegue territorial, que fue el corazón de este tomo del Informe Final, no habría sido posible sin el compromiso, dedicación y trabajo de los equipos territoriales; y el acompañamiento de nuestros aliados en los territorios

Equipo macroterritorial de la Región Surandina

Jennifer Betancourt Marín, Mónica María Mondragón Triana, Héctor Fabio Mosquera Reyes, María Del Mar Capote Gómez, David Esteban Cardona García, Ingrid Tatiana Perilla Vallejo, Juan Pablo Ramírez Paz, Juan Pablo García

Equipo macroterritorial del Valle del Cauca

Paula Alejandra Gómez Osorio, Lehidý Carolina Baltán Salazar, Isabel Cristina Giraldo Quijano, Miguel Ángel Reyes Sanabria, Juan Sebastián Rodríguez López, Argeli Arango Vásquez, Natalia Zambrano Fernández, Ximena Izquierdo Urbano

Equipo territorial del Cauca

Clara Mabel Andrade, Juliana Andrea Rodríguez López, Jefferson Gallego Figueredo, Luz Miriam Rosero Guzmán, Gerardo Peña Echavarría, Lina María Rosero Medina, Ángela Arteaga

Equipo de la Dirección de Territorios

Tania Esperanza Rodríguez Triana, Maryluz Ramírez Ramírez, Luisa Fernanda Orozco Barrios, Gabriela Recalde Castañeda, Oscar David Andrade Becerra, Leonardo Salcedo García, Brayan Michel Román Martínez, Paula Cárdenas Pedraza, Jazmín Rodríguez Céspedes, Erika María Rivera Rua, Angy Alexandra Palacio Sánchez, Clara Inés Morales Castaño, Alba Janeth Salgado Vargas, Sebastián Alexander Ruiz Fierro, Emilse Chaparro Alarcón, Daniela Villegas Torres, Martha Lucía Pabón Castilla, Linda Samara Díaz Acosta, Óscar Josué Plata Mejía, Alejandro Zuluaga Saavedra, Josué Jaramillo Flórez, María Esperanza Luna Mendoza, Luis Alberto Ángel Saavedra, Gina Carolina Montoya Cruz, Félix Guillermo Cristancho García, Alejandra Erazo Gómez

Instituciones y organizaciones aliadas del Valle del Cauca y el Norte del Cauca

Este capítulo fue posible gracias a la generosidad de todas las personas, lideresas, líderes, organizaciones de víctimas y organizaciones e instituciones territoriales, campesinas, étnicas, de mujeres, de población LGTBIQ+, gremiales y sectoriales que aportaron con sus testimonios y entregaron informes y casos a la Comisión. En especial por sus aportes y acompañamiento permanente agradecemos a: La Ruta Pacífica de las Mujeres, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, la Corporación para el Desarrollo Regional, el Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos, In Memoriam 11 diputados, Gobernación del Valle del Cauca, Asociación de Familiares Víctimas de La Masacre de Trujillo, Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca, Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados, Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, Misión de Verificación de las Naciones Unidas para la Implementación del Proceso de Paz, Diakonia Suecia, Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca

Coordinación de diseño e impresión

María Barbarita Gómez Rincón

Diseño de portada

Paula Velásquez Molinos

Maquetación inicial

Kevin Nieto Vallejo

Diseño y diagramación páginas interiores

.Puntoaparte
Editores

Dirección de arte páginas interiores

Mónica Loaiza Reina, Mateo L. Zúñiga, Guillermo Torres

Supervisión

Andrés Barragán

Diagramación páginas interiores

Jimena Loaiza Reina

Apoyo cartográfico

Jerson Siabatto Moreno



ISBN Obra completa

978-958-53874-3-0 (impreso) - 978-628-7590-18-2 (digital)

ISBN Tomo 11. vol. 12

978-628-7590-12-0 (impreso) - 978-628-7590-38-0 (digital)

El Informe Final *Hay futuro si hay verdad* es una obra de dominio público, que constituye una medida de reparación del derecho a la verdad individual y colectiva de las víctimas del conflicto armado en Colombia, y por tanto debe ser objeto de la máxima divulgación. En ese sentido, se autoriza a cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, a reproducir, comunicar y distribuir la Declaración y los tomos del Informe Final, siempre y cuando se haga un uso parcial o total de los mismos de manera contextualizada, y se reconozcan a la Comisión de la Verdad como autor corporativo y a quienes aparecen en los créditos correspondientes de cada tomo y documento en sus diferentes roles y actividades. El Informe Final podrá descargarse en el sitio web de la entidad: www.comisióndelaverdad.co



Contenido

Presentación	17
Relatos territoriales del conflicto armado	19
La búsqueda de la verdad en los territorios	21
Las historias territoriales del conflicto	30
El territorio	35
Modernización, crisis y violencia (1958-1977)	45
Crisis agraria campesina y étnica: primer acto	46
Tierra y violencia	50
Por la tierra, el trabajo y la educación	57
La revolución que no fue	64
El ascenso del narcotráfico	73
Insurgencias, paramilitares y mafias: la antesala del horror (1978-1991)	77
Crisis agraria campesina y étnica: segundo acto	78
Insurgencias: entre el convencimiento y la violencia	80
Sangre y terror: carteles, paras y represión estatal	93
La cruda guerra de los múltiples rostros (1991-2004)	107
Crisis agraria campesina y étnica:tercer acto	108
Narcotráfico: una hidra de mil cabezas	111
Guerrillas: el poder a cualquier precio	120
Una nueva generación paramilitar	133
Las insignias e impactos de la guerra	143
Resistir y resistir	149

Reconfiguración de la guerra (2004-2016)	155
Crisis agraria campesina y étnica: cuarto acto	156
Paras y narcos: nuevos grupos, viejas violencias	163
La mano dura del Estado y la revolución guerrillera sin brújula	166
La resistencia incansable	173
La esperanza de la paz y el búmeran de la guerra (2016-2020)	179
Un acuerdo rezagado	180
Una nueva fase de la guerra	185
Conclusiones	197
Referencias	203
Anexos	218

A todas las personas que habitan y caminan los territorios de la Colombia profunda. Sabemos que narrar es volver a vivir y por ello, por el regalo de su memoria, estaremos siempre agradecidos. En su experiencia de la guerra, en su sufrimiento, en sus luchas y resistencias anida la esperanza de la no repetición, de una nación en paz, justa, orgullosa de su diversidad y reconciliada desde las raíces de la verdad.





Presentación

El libro que usted tiene en sus manos pertenece al tomo territorial del *Informe Final* de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (de ahora en adelante, la Comisión).

El problema del territorio para Colombia es capital y el conflicto armado colombiano no se puede pensar si se sustrae al mapa de su territorio. Por eso, si queremos comprender las causas, desarrollos y persistencias del conflicto armado tenemos que entender una historia que ha sido dictada, en buena parte, por la a veces difícil y a veces amable geografía del país, alrededor de la cual se ha construido el tejido político, socioeconómico y cultural de las regiones.

El esclarecimiento de la verdad implica reconocer y comprender cuáles fueron las dinámicas territoriales que permitieron el desarrollo del conflicto armado que asoló el país en la segunda mitad del siglo XX y las dos primeras décadas del siglo XXI, cuyas persistencias aún sufrimos.

En los catorce libros que lo componen, el tomo territorial se propone levantar dicha cartografía y presentar los hallazgos relacionados con las preguntas por las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario que sufrieron las poblaciones en cada uno de los territorios priorizados y los impactos que estas generaron; los desenlaces territoriales que tuvo la guerra, las poblaciones y los proyectos políticos más afectados y los intereses de quienes se beneficiaron. También se propone responder preguntas por la incidencia de los contextos regionales y su relación con el centro político del país en el desarrollo de la guerra en distintos territorios y entender los factores que ayudan a explicar la continuación de la violencia en ciertos territorios después de la firma del Acuerdo de Paz.

Para que el desarrollo de la investigación permitiera encontrar las respuestas a estas preguntas, el proceso de esclarecimiento de la verdad se diseñó con el objetivo de conseguir una mejor comprensión de la historia y las dinámicas territoriales del conflicto armado, es decir, de las dinámicas históricas y espaciales de la relación de los grupos armados con los territorios en los que tuvieron presencia. Este diseño tenía como base la comprensión de que los actores armados no actuaron sobre espacios vacíos, sino que se relacionaron e interactuaron con los actores territoriales, las estructuras de poder regional, los sistemas de autoridad local o participación política, el funcionamiento de las instituciones del Estado presentes en los territorios, las dinámicas económicas de las regiones y la cultura.

Como indica el documento de lineamientos metodológicos *Escuchar, reconocer y comprender para transformar*, para la Comisión lo territorial habla de lo social, del espacio compartido por poblaciones y de las distintas formas de vida de la naturaleza. El territorio se refiere a la historia social con referencia al lugar y, en ese sentido, al «conjunto de relaciones sociales que dan origen y a la vez expresan una identidad y un sentido de propósito compartidos por múltiples agentes sobre el espacio»¹. Como

¹ Schejtman y Berdegú, *Desarrollo territorial rural*, 1.

nos lo dijeron muchas veces en las regiones, «el territorio es el lugar por el que camina la vida [...], es igual a la cultura más [el] espacio natural [...]. El territorio es el lugar por donde corre el pensamiento detrás de los espíritus buscando el buen vivir»².

En el territorio también se expresa la heterogeneidad de los actores regionales. En el espacio concurren y se superponen diversas territorialidades: relaciones sociales sobre el espacio; disputas por el poder y sus alianzas; se superponen intereses, percepciones, valoraciones y actitudes diferentes que generan relaciones de cooperación o conflicto. En este sentido, el territorio no es únicamente un espacio físico delimitado que se reduce a sus cualidades geográficas y ecosistémicas, sino que corresponde a un proceso de construcción social de sentido de los espacios. «Sus límites geográficos se reconstruyen permanentemente y responden a la apropiación simbólica de una colectividad, sus representaciones sociales, construcciones culturales y demarcaciones políticas, económico-productivas y afectivas»³. Por eso los territorios pueden desaparecer y transformarse, aunque los espacios correspondientes continúen inalterados. En consecuencia, en su trabajo misional, la Comisión asumió el territorio como un proceso construido, subrayando así su condición dinámica, su heterogeneidad y el reconocimiento de sus fronteras móviles y fluidas.

Relatos territoriales del conflicto armado

Este tomo tiene la clara voluntad de ser leído en los territorios. Pretende ofrecer a las víctimas y a los ciudadanos de las regiones del país una narrativa que abarque el arco de la guerra en cada región y que refleje el proceso de escucha que ha llevado a cabo la Comisión en los territorios. El espíritu que guía estas narraciones es la búsqueda por aportar una base común sobre lo que nos ha sucedido y brindar de vuelta a las regiones un espejo sobrio, respetuoso y solidario del dolor expresado en las voces de las víctimas que ofrecieron a la Comisión su testimonio, como también las de los excombatientes, responsables y testigos, para comprender las complejidades y el claroscuro que construye la historia. Por ello, los catorce libros que componen el tomo —cada uno de los cuales ha sido trabajado con paciente dedicación por un equipo de investigadores desde la región narrada— quieren circular en ellas de mano en mano. Su callada ambición es la de ser leídos por todas las generaciones, sobre todo por las más jóvenes, en el propio territorio.

² Entrevista 238-VI-00056. Líder de la comunidad de Tabaco, comunidad afrodescendiente.

³ Rodríguez Triana, «La paz comienza por lo territorial», 175.

En los relatos territoriales del conflicto interactúa la verdad factual de casos que fueron investigados a profundidad por la Comisión, sobre los que se aplicó un ejercicio juicioso de contraste de fuentes, y que ilustran dinámicas más amplias del conflicto, con la verdad personal y narrativa de las víctimas, responsables y testigos y la verdad restauradora y curativa que ha emergido en el diálogo entre responsables y víctimas durante los procesos de reconocimiento voluntario de responsabilidades. Estos relatos tienen como base la variedad de experiencias de quienes aportaron sus testimonios y también reflejan los límites del proceso de escucha que realizamos durante estos casi cuatro años. Sectores de la sociedad y del Estado que aún mantienen prevenciones frente al Acuerdo de Paz que dio origen a la Comisión, frente a su composición y sus metodologías, fueron más resistentes a los llamados e invitaciones que les hizo la Comisión para que participaran en el proceso de esclarecimiento. La Comisión se enfrentó no solo a un contexto de polarización en el que la paz y el Acuerdo son parte de la disputa política, sino también a un escenario de violencias persistentes en el que aún permanecen los miedos y prevenciones de sectores sociales heridos por la guerra. Por eso estos textos son un aporte a la comprensión de las dinámicas territoriales del conflicto, para lo cual convocamos a las sociedades regionales a conversar y a seguir profundizando en nuevos y renovados procesos de investigación.

La Comisión quiere hacer de este capítulo un homenaje a Alfredo Molano Bravo, quien orientó hasta su muerte el despliegue territorial. En sus conversaciones y en sus libros, el comisionado Molano hacía énfasis en la importancia de tener una mirada territorial sobre la historia del país y sobre la historia del conflicto armado y narrar la historia con el protagonismo de las voces de los sectores y territorios más victimizados, excluidos y silenciados. Él y la comisionada Ángela Salazar nos convocaron a mirar «el revés de la historia de la guerra»⁴. Como el mismo Molano escribió:

La historia no es algo que ya pasó y, sobre todo, que ya les pasó a hombres notables y célebres. Es mucho más. Es lo que le sucede al pueblo común y corriente todos los días, desde que se levanta lleno de ilusiones hasta que cae rendido en la noche sin esperanzas. No se necesitan documentos acartonados y descoloridos por el tiempo para convertir un hecho en histórico; la historia no se refugia en las notarías ni en los juzgados, ni siquiera en los periódicos. La historia es una voz llena de timbres y de acentos de gente anónima⁵.

⁴ Esta idea fue planteada por Margarita Serje en su libro *El revés de la nación*, en el cual analiza los relatos en torno a las regiones de las «periferias» del país y las llamadas «fronteras internas», habitadas por poblaciones consideradas salvajes, tierras de nadie, territorios que muchas veces fueron considerados obstáculos para la integración y el desarrollo nacional y que se han convertido en el negativo, en el revés del espacio nacional. Serje de la Ossa, *El revés de la nación*.

⁵ Molano, *Del llano llano: relatos y testimonios*, 119.

La búsqueda de la verdad en los territorios

La búsqueda de la verdad histórica, política y ética es crucial para el proceso de construcción de paz en Colombia y la reconciliación del país. La exposición pública de la verdad no solo es un acto de justicia en sí mismo para con las víctimas que buscan explicaciones sobre lo ocurrido, sino que además facilita la reparación emancipadora de ellas. Esa transformación solo es posible si se esclarecen las situaciones políticas, socioeconómicas y culturales que causaron la violencia y su persistencia y se identifican estrategias y mecanismos para su transformación, promoviendo así la justicia social y el empoderamiento de los sectores excluidos y marginalizados. Para esto es necesario que la verdad contribuya a que los ciudadanos recuperen la capacidad para distinguir entre lo justo y lo injusto⁶.

El objetivo fundamental de la Comisión y su despliegue territorial fue ponernos en el camino de esclarecer la verdad del conflicto armado. La Comisión se pensó e implementó para aportar a la construcción de una paz basada en la decisión de encarar la verdad y avanzar en el conocimiento y el reconocimiento de lo sucedido durante el conflicto armado interno, del legado de violencia y también de resistencia, para asumirlo como condición para la convivencia entre colombianos y colombianas, así como para sentar las bases de la no continuación y repetición de la violencia, crear un ambiente transformador que permita la resolución pacífica de los conflictos y avanzar en la construcción de la más amplia cultura de respeto y tolerancia en democracia⁷. Un proceso de búsqueda de la verdad que pretende enfrentar las mentiras y ponerle voz a los silencios que han permitido que la violencia se instale en la sociedad y se normalice⁸.

En el camino nos enfrentamos al miedo que genera la verdad. ¿Para qué revivir los hechos de violencia y el dolor cuando tenemos la oportunidad de pasar la página? ¿Poner sal en las heridas podría promover odios en vez de promover la reconciliación? Son preguntas que escuchamos en la Comisión y que nos hicimos con seriedad para comprender el mandato que teníamos. En el proceso de escucha que realizamos a lo largo y ancho del país –y acompañando víctimas y responsables en los encuentros preparatorios para el reconocimiento voluntario de responsabilidades– confirmamos que se trata de un falso dilema y que la verdad es requisito para construir bases firmes para la paz.

⁶ Dimitrijević, «Justice beyond Blame: Moral Justification of (The Idea of) A Truth Commission».

⁷ Presidencia de la República, Decreto 588 de 2017.

⁸ Coetzee, *Contra la censura: ensayos sobre la pasión por silenciar*, 175.

La reconciliación es, sobre todo, la reconstrucción de las relaciones rotas por la guerra que abre la puerta a la posibilidad de que las partes enfrentadas en el conflicto —actores armados y actores civiles que participaron directa o indirectamente en el conflicto— puedan verse como oponentes políticos y acepten el Estado social de derecho y la democracia como los mecanismos para el trámite de las diferencias. Se trata de reconstruir la confianza entre ciudadanas y ciudadanos que tienen derecho a vivir en el mismo territorio y que han resuelto quedarse en el país y construir desde las diferencias la comunidad nacional. Esto es posible cuando cesa la espera espiritual que deja la violencia⁹, cuando cesan las preguntas constantes por el porqué y se encuentran respuestas honestas. La reconciliación se produce cuando las víctimas y la sociedad presencian el dolor y la vergüenza que para una persona responsable significa pararse frente a la víctima, mirarla a los ojos, enfrentar a los propios hijos y a la sociedad y decir la verdad reconociendo el daño causado, sin justificación alguna¹⁰. Esos reconocimientos llevan el mensaje de que la guerra no es el camino: «la guerra ensordece y se cometen horribles crímenes»¹¹. También llevan el mensaje de que la verdad y la paz representan la esperanza de sanar el odio y la rabia y reconstruir la vida desde la tranquilidad que da saber qué pasó, dónde está ese ser querido, por qué lo hicieron¹². Y perdonar. Así, la reconciliación es posible cuando la verdad y el reconocimiento reparan la dignidad de las víctimas que fue negada por la violencia.

En el proceso de despliegue territorial, las coplas del trovador guajiro Adrián Villamizar dejaron de ser suyas y se convirtieron en una voz colectiva que canta y sublima la esperanza de una Colombia que construye paz desde las raíces de la verdad: «Dime la verdad / Solo la verdad / No hay reparación ni justicia / Si no es con verdad»¹³. Con esa voz inscrita en nuestra conciencia, iniciamos la búsqueda de las verdades que estaban en las regiones y que debemos enfrentar. Como anunciamos en el acto de lanzamiento de la Comisión, el 28 de noviembre del 2018, «vamos a ir a buscarla en la Colombia profunda»¹⁴; y como nos dijo Alfredo Molano en varias ocasiones, «la Comisión debe pasar por donde la guerra lo hizo». Por eso, entonces, nos fuimos *Colombia adentro*.

Nos propusimos lograr intervenciones coherentes con la realidad de los territorios, comprender las dinámicas integrales, orgánicas y complejas de las regiones y

⁹ Relatoría espacio colectivo de preparación de víctimas de los pueblos Embera Chamí y Embera Katío para el reconocimiento de responsabilidades de las antiguas FARC-EP a la población de El Carmen de Atrato (Chocó), 2022.

¹⁰ Entrevista 057-PR-00909. Actor armado, militar, compareciente.

¹¹ *Ibíd.*

¹² Comisión de la Verdad, «Reconocimiento de responsabilidades en el secuestro de Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverri», 7 de agosto de 2021.

¹³ Comisión de la Verdad, «Dime la verdad», 2018.

¹⁴ Evento de instalación de la Comisión, «Palabras del presidente de la Comisión Francisco de Roux, S. J.»

propiciar espacios de conversación y participación de los actores territoriales en los procesos misionales. Éramos conscientes de que el resultado dependía del método, porque el saber y el hacer van de la mano, y por eso decidimos tener presencia permanente en los territorios con 28 equipos de investigación territorial¹⁵, 28 Casas de la Verdad¹⁶ y sedes regionales y territoriales, con el ánimo de garantizar la participación de diversos actores y la accesibilidad de las víctimas, incluyendo las que fueron desplazadas forzosamente.

Como fundamento, tuvimos la consideración de los sujetos reales que pretendíamos investigar en contextos sociales específicos con el fin de interactuar con ellos cara a cara y comprender los significados que las víctimas y responsables, y en general los pobladores de los territorios, le otorgan a su experiencia, en sus propios términos. Reconstruir la historia del conflicto armado obligaba, «en primerísimo término, a prestar oído a la voz silenciada de las víctimas, pues solo su escucha atenta permitiría identificar, para intentar neutralizarlo, el núcleo de la barbarie»¹⁷.

En un espacio de reflexión interno de la Comisión sobre lo que fue el proceso de escucha, una de las coordinadoras territoriales dijo:

«Emprendimos viajes en lanchas de motor y canoas por ríos majestuosos y caños a los que no se les ve el fondo; en mula, en camiones, en aviones, en transportes especiales, carros de línea, chivas, buses escalera, en el carro de los amigos, del presidente de la junta, la moto de la profesora. Anduvimos, quizá no lo suficiente para alcanzar los pasos de la guerra, pero asumimos la tarea de empezar. Una vez podíamos sentarnos a conversar, desaparecían las guías y formularios de la escena, y se ambientaban los momentos con cafés dulces con panela, una que otra risa, el llanto, un mandato en la cabeza y quizás en el fondo la imagen y recuerdo vivo de Alfredo que nos repetía como mantra: que lo nacional no se coma lo territorial.

»Así entendimos que ver a los ojos es una forma de escuchar. Que dedicar tiempo sincero a una persona es una forma de amar, reconocer y dignificar. Quizá lo que nos ha faltado como nación, además de escuchar, es dedicarnos tiempo. *Escuchar* es por sí mismo un acto reparador en un mundo de afanes, metas y estadísticas [...].

»Han sido tres años en los que aprendimos cada día una forma nueva de hacer la misma pregunta, y en cada respuesta repasamos los matices y formas intrincadas que tiene el conflicto, como las montañas mismas. Hemos vivido la experiencia de ver y

¹⁵ Equipos de investigación ubicados en Aguachica, Apartadó, Arauca, Barrancabermeja, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cúcuta, Cundinamarca-Boyacá, Florencia, Ibagué, La Dorada, Medellín, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Puerto Asís, Quibdó, San José de Guaviare, Santa Marta, Sincelejo, Tumaco, Valledupar, Villavicencio y Yopal.

¹⁶ La Dirección de Territorios inauguró 28 Casas de la Verdad ubicadas en Aguachica, Apartadó, Arauca, Barrancabermeja, Barranquilla, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cúcuta, Florencia, Ibagué, La Dorada, Medellín, Mocoa, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Puerto Asís, Quibdó, San José del Guaviare, Santa Marta, Sincelejo, Tumaco, Valledupar, Villavicencio y Yopal.

¹⁷ Sucasas, «Interpelación de la víctima», 79.

sentir a quien está contando como protagonista, es su vida la que nos presenta y pone a la orden de nuestra curiosidad. Eso ha sido posible solo por la confianza que antecede al encuentro, confianza que en ocasiones hemos construido en el momento, cuando la gente se da cuenta [de] que al frente hay otro ser humano que de forma respetuosa, humilde y comprensiva está allí para *escuchar* sin juicios, prejuicios ni reclamos, presentes allí con nuestra subjetividad, definida por las múltiples dimensiones de nuestra propia historia. Aprendimos que escuchar y contar no son acciones asépticas; no pueden despojarse de humanidad para hacerlas legítimas o correctas; todo lo contrario: son acciones marcadas por las emociones, las sensaciones, los pensamientos, y eso no las hace sesgadas o parciales, simplemente son encuentros entre seres humanos»¹⁸.

Desarrollamos un ejercicio de diálogo integral basado en la única forma en que es posible entender la vida de los otros y las otras: la escucha atenta. Esa escucha implica la disposición del cuerpo y del ser para oír y conectarse con la persona, su historia, sus emociones y silencios, incluso con los fantasmas y ancestros que acuden con ella al acto de contar. «Los recuerdos no son un relato apasionado impasible de la realidad desaparecida; son el renacimiento del pasado, cuando el tiempo vuelve a suceder»¹⁹. Y en ese proceso de reunir recuerdos para dar forma a la historia, las personas dan sentido a su vida y se construyen una identidad²⁰. Por eso, para la Comisión, el testimonio no ha sido solo un instrumento para reconstruir lo ocurrido. Va más allá de la transmisión de información fáctica porque se trata del encuentro con sujetos humanos que, en el proceso de contar, elaboran reflexiones sobre sí mismos. Cada narrativa es única, singular y transmite experiencias individuales y también colectivas y compartidas²¹. Se trató entonces de una escucha que obliga a estar en tiempo presente, a proveer espacios para la reflexión, las emociones y el silencio. Es una escucha que obliga a ser conscientes de los propios sesgos y de lo pequeño que se hace el mundo propio cuando vemos los ojos de quien nos habla: con la vida como única garantía del porvenir.

La búsqueda de la verdad comenzó por escuchar testimonios en las regiones, pues fue allí donde tuvieron lugar los hechos del conflicto armado y donde sabíamos que era posible identificar las distintas violaciones a los derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario que sucedieron. Era allí donde podíamos identificar quiénes fueron los responsables y quiénes las víctimas²² e identificar los

¹⁸ Comisión de la Verdad, «Reflexiones en torno al valor de la escucha profunda», 28 de agosto de 2021.

¹⁹ Alexievich, *La guerra no tiene rostro de mujer*, 243.

²⁰ Todorov, *Memoria del mal, tentación del bien*.

²¹ Jelin, *La lucha por el pasado: cómo construimos la memoria social*.

²² Para la construcción de explicaciones comprensivas del conflicto armado interno, la Comisión tuvo entre sus principales herramientas metodológicas el establecimiento de los patrones de distintas formas de violencia y de violaciones a los derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario. Los patrones buscan identificar quiénes (responsables) y contra quiénes (víctimas), su magnitud y frecuencia, el cómo (técnicas y maneras de ejecución), el dónde y cuándo de los hechos, como un paso descriptivo necesario para poder avanzar en una explicación sobre los orígenes del

factores contextuales²³ que nos permitieran acercarnos a responder la pregunta del porqué de la guerra. El recorrido por montañas, trochas, carreteras, llanuras y ríos nos ayudó a comprender el pasado con la dignidad de quien permanece firme en el presente para conservar la esperanza del futuro.

Primero realizamos 36 diagnósticos participativos en todo el país en los que las víctimas, las organizaciones sociales, los empresarios, los funcionarios estatales, los investigadores de universidades y centros de pensamiento y los funcionarios de instituciones de cooperación internacional, entre otros, señalaron lo que consideraban que aún estaba por esclarecer del conflicto armado. Junto a ellos, la Comisión identificó las preguntas que permitieron problematizar el origen y el desarrollo del conflicto y entender el porqué de su persistencia.

Durante el proceso de despliegue territorial, la Comisión escuchó 14.953 testimonios, de los cuales 10.969 fueron individuales²⁴ y 1.250 colectivos²⁵, realizó 2.540 entrevistas en profundidad²⁶ y 194 historias de vida²⁷. Organizaciones de víctimas,

conflicto armado interno y los factores de su persistencia. Esta propuesta permitió establecer y analizar patrones de violencia territoriales para cada uno de los grupos armados (paramilitares, guerrillas y fuerza pública) y para las diferentes etapas del conflicto armado interno. Comisión de la Verdad, «Escuchar, reconocer y comprender», 13.

²³ Para avanzar hacia la explicación de lo ocurrido, los patrones descriptivos de violencia dialogan con los factores contextuales del orden nacional y el análisis de los contextos, dinámicas y escenarios territoriales y nacionales que permitieron la inserción y la persistencia del conflicto armado interno. A esto se refieren los contextos explicativos. Para el caso, se entiende por contexto explicativo al conjunto de condiciones históricas, políticas, económicas, culturales y ambientales que hacen socialmente posible y racionalmente comprensible el conflicto armado interno. Los contextos explicativos trascienden las descripciones de los hechos y se adentran en la exploración de sus porqué y para qué. Permiten reconocer tanto las condiciones estructurales que explican el surgimiento y desarrollo de los acontecimientos del conflicto armado como los procesos coyunturales de su origen, sus variaciones y su persistencia, y abren la posibilidad de identificar las condiciones necesarias para desencadenar los procesos de transformación y lograr la no repetición. *Ibíd.*, 14.

²⁴ Los testimonios individuales están distribuidos de la siguiente forma: Amazonía (308), Antioquia y Eje cafetero (1.757), Bogotá (80), Caribe e insular (764), Centroandina (1.131), Dirección de Pueblos Étnicos (487), Dirección de Territorios (1), Equipo Nacional / Sede Central (342), Internacional (1.507), Magdalena Medio (303), Nororiente (667), Orinoquía (823), Pacífico (480) y Surandina (2.319).

²⁵ Las entrevistas colectivas están distribuidas de la siguiente forma: Amazonía (88), Antioquia y Eje cafetero (91), Bogotá (56), Caribe e insular (100), Centroandina (49), Dirección de Pueblos Étnicos (278), Equipo Nacional / Sede Central (140), Internacional (62), Magdalena Medio (28), Nororiente (85), Orinoquía (86), Pacífico (83) y Surandina (104).

²⁶ Entrevistas en profundidad por macroregión: Amazonía (23), Antioquia y Eje cafetero (174), Bogotá (108), Caribe e insular (177), Centroandina (120), Dirección de Pueblos Étnicos (289), Dirección de Territorios (5), Equipo Nacional / Sede Central (565), Internacional (203), Magdalena Medio (71), Nororiente (70), Orinoquía (199), Pacífico (282) y Surandina (254).

²⁷ Historias de vida por macroregión: Amazonía (3), Antioquia y Eje cafetero (2), Bogotá (40), Caribe e insular (3), Centroandina (2), Dirección de Pueblos Étnicos (35), Dirección de Territorios (1), Equipo Nacional / Sede Central (18), Internacional (6), Magdalena Medio (4), Nororiente (3), Orinoquía (29), Pacífico (45) y Surandina (3).

universidades, empresas, diferentes instituciones gubernamentales (entre ellas, la fuerza pública) y no gubernamentales entregaron a la Comisión casos e informes, de los cuales 100 tienen información territorial específica.

Como parte del proceso de escucha integral, la Comisión acompañó en los territorios 25 procesos de reconocimiento voluntario de responsabilidades²⁸ en los que se desarrollaron diálogos privados y públicos entre víctimas y responsables sobre los daños causados en la guerra. En estos espacios, las víctimas, y especialmente los responsables, contribuyeron al esclarecimiento de la verdad. Durante los encuentros entre víctimas y responsables atestiguamos el dolor, la tensión que se sentía ante las preguntas que indagan sobre los porqués de la barbarie; los silencios cargados de vergüenza de los responsables; las preguntas, las respuestas o su ausencia —porque quienes las conocían murieron en la guerra—. Fueron espacios en los que comprendimos que la cotidianidad de la vida se modificó con el conflicto armado, que las familias y comunidades debieron hacer arreglos que vistos desde afuera serían impensables, pero que en esos entornos se presentaban como la única manera para resistir y encontrarle de nuevo sentido a la vida en contextos de violencia y exclusión, y ante una sociedad y un Estado muchas veces sordos al clamor de la ruralidad. En las conversaciones entre quienes sufrieron y vivieron directamente la guerra es posible entender que nuestra historia no es la de un país que se divide fácilmente entre buenos y malos, sino la de un país herido, de duelos inconclusos en el que la mayor parte de la población no eligió la guerra, pero se enfrentó permanentemente la violencia y que, al elegir la vida, pagó un precio muy alto por su dignidad. Finalmente, la vida digna exige unas condiciones que la guerra nunca podrá propiciar.

Los encuentros alrededor de la verdad transformaron a las personas que participan en el proceso y pusieron luz sobre las características de la sociedad y el Estado —un Estado

²⁸ Realizamos 16 procesos de reconocimiento de responsabilidades con firmantes del Acuerdo de Paz alrededor de las afectaciones e impactos a las poblaciones de Sonsón en la subregión Oriente y en Caicedo (Antioquia); Caldonio (Cauca); San Pedro de Urabá (Antioquia); San Adolfo (Acevedo, Huila), Palestina (Huila); Roncesvalles (Tolima); Florencia (Caquetá); Trocha Ganadera y río Guaviare (San José del Guaviare); Mitú (Vaupés); Villavicencio (Meta); Chalán (Sucre); El Carmen de Atrato (Chocó); Tibú-La Gabarra (Norte de Santander); Arauquita (Arauca) y Chita (Boyacá). Así como un proceso de contribuciones y reconocimiento del antiguo Bloque Caribe de las FARC-EP sobre las afectaciones al movimiento y población campesina de los Montes de María, la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta. Con miembros de fuerza pública comparecientes ante la JEP se realizó un proceso por ejecuciones extrajudiciales coordinado directamente por los equipos territoriales en Tolúviejo (Cesar). Con personas de las extintas AUC se llevó a cabo el reconocimiento de responsabilidades por su operación y despliegue en el Caribe, por afectaciones, persecución y asesinato al sector universitario de Nariño y por la desaparición forzada de personas en el corregimiento Juan Frío (Norte de Santander). Finalmente, por voluntad de las víctimas y la responsable (quien no estaba cobijada por la comparecencia ante el sistema integral derivado del Acuerdo Final), realizamos en Antioquia el reconocimiento por reclutamiento forzado por parte de Elda Neyis, conocida en la guerra como Karina. Igualmente, desde los territorios se promovieron dos Encuentros Nacionales por la Verdad para el reconocimiento de la dignidad de la población campesina (2019) y el sector universitario (2021).

y una sociedad que han favorecido la reproducción de la violencia—. La determinación de ir por la verdad promueve un ejercicio colectivo en el que nos preguntamos por el tipo y la calidad de las relaciones que existen entre las personas en Colombia, entre las instituciones del Estado y la ciudadanía, entre las empresas y las comunidades vecinas, entre nosotros como seres humanos y la naturaleza. El imperativo ético de la verdad nos exige ubicarla en el contexto de estructuras y procesos sociales más amplios y de mayor duración, ligados a la persistencia de múltiples desigualdades y vinculados con el presente político.

Así vista, la verdad supone conversaciones sobre las posibilidades de futuro y por eso lideresas y líderes sociales, étnicos y campesinos, empresarios, jóvenes, académicos, periodistas, funcionarios gubernamentales y líderes políticos aceptaron la invitación de la Comisión en el Eje cafetero, el norte del Cauca, el Huila, el sur del Tolima, Boyacá, Cundinamarca, San José del Guaviare, Córdoba, Atlántico, Cesar, Arauca, Norte de Santander, Chocó (en la región del Bajo Atrato), Antioquia (en la región del Bajo Cauca), Sumapaz y Putumayo a participar en los diálogos para la no repetición del conflicto armado interno y aportar desde su conocimiento recomendaciones para la transformación de la violencia. En estos encuentros, la verdad se convirtió en una invitación plural para preguntarnos cuáles son las relaciones que somos capaces de construir como sociedad pensando en un futuro de paz. «Las marcas ligadas al pasado tienen inscripto un horizonte de futuro, una idea de lo que se inscribe hoy (en relación con el ayer) carga un mensaje para mañana, una intención de intervenir para que el futuro sea mejor si no repite los errores y horrores del pasado»²⁹.

En el tiempo de su mandato, la Comisión pudo acompañar procesos que evidenciaron ese horizonte de futuro. Las calles del barrio Brisas del Polaco en Ocaña se vistieron de murales coloridos para hacernos saber que todos merecemos ser tratados con igualdad y respeto, porque esta es la única manera de hacerle el quite a la estigmatización que la guerra arraigó. Sobre el río Magdalena se extendió la red de la convivencia, una forma de honrar a este río, sus muertos, sus gentes y sus luchas pasadas y presentes, en la búsqueda de un futuro sin violencia. En Bogotá, en la cuenca del río Tunjuelo, jóvenes, familias desplazadas y excombatientes suscribieron un pacto de convivencia en el que decidieron usar su fuerza para ser guardianes del río y junto con los jóvenes de la generación Somos Verdad³⁰ unieron sus corazones en un solo latido por la paz. En el sur del país, en Colón,

²⁹ Jelin, *La lucha por el pasado: cómo construimos la memoria social*, 265.

³⁰ Generación V+, Jóvenes por la Verdad, se ha erigido como una de las propuestas pedagógicas de la Comisión. Es una estrategia con jóvenes, docentes y padres de familia que ha propiciado mediaciones y activaciones que les permiten a los públicos priorizados conmoverse, en especial a los indiferentes o apáticos, es decir, moverse con los otros, vibrar y estremecerse frente a los dolores, los recuerdos, los relatos y las luchas de quienes han sido víctimas del conflicto armado del país. Sin embargo, es importante destacar que conmoverse no es suficiente para aportar a la no repetición. Para ello se requiere aprender a conversar sobre el porqué de lo que nos ha acontecido en el conflicto armado, tanto a la sociedad como a los individuos, y actuar para que no se repita. Generación V+ opera como un voluntariado que

Nariño, las comunidades plasmaron, en un acuerdo de convivencia, un conjuro en quechua contra la violencia, «¡Atatay la guerra, achalay la paz! Atatay», en rechazo a todas las afectaciones del conflicto armado que han impedido la armonía entre los vecinos y el territorio: *achalay* para dar la bienvenida a los actos de esperanza y la posibilidad del buen vivir, de vivir *achalay*. En el Meta, los jóvenes decidieron comprometerse con la convivencia e inspiraron su acción en el cactus, esa planta que en las amplias llanuras expuestas al sol retiene agua y salva al caminante que ha perdido la esperanza³¹. También en el Valle del Cauca los jóvenes se unieron en torno a la verdad, en Quibdó le pusieron ritmo y música a la indignación y así, con el movimiento, aliviaron la carga de tantos años de guerra y dolor. En Casanare, víctimas de minas antipersona y otros artefactos de guerra ofrecieron sus esculturas de manos y pies para abrazar el corazón y recordarnos lo que nunca puede volver a suceder.

En este camino también nos transformamos nosotros; encontramos la ruta de nuestra propia verdad. Varios compañeros y compañeras —algunos, víctimas del conflicto armado— hallaron en este quehacer, en las respuestas de los responsables o en las verdades aportadas por las víctimas una esperanza para su propia búsqueda. En muchas ocasiones experimentamos y fuimos conmovidos por el dolor que presenciábamos. Fue difícil contener las lágrimas. Sentimos vergüenza de que situaciones tan terribles hubieran pasado en Colombia en nuestro tiempo de vida y también sentimos admiración y orgullo por seres humanos que después de vivir tanto dolor seguían en pie para contarlo con dignidad y valentía y con un sentimiento profundo de solidaridad por quienes vivieron las mismas circunstancias. Sentimos agradecimiento de verlos sonreír y vimos en sus ojos la esperanza de un país sin violencia. Al encontrarnos, descubrimos los retos del diálogo, del encuentro, de la escucha. Experimentamos lo difícil que es ponerse en los zapatos de los demás y tratar de comprender sus acciones y sus racionalidades sin juzgarlas. Más aún, comprendimos el reto que significa para los colombianos y colombianas dialogar desde nuestras diferencias generacionales, étnicas, de género y de clase social. Tantos años de guerra nos fueron quitando los

contribuye a la cohesión social y la confianza al promover acciones individuales y colectivas de solidaridad y empatía con el dolor de otros, lo cual conlleva efectos sostenibles para las personas mediante las personas. Los voluntarios ayudan a hacer visibles a los invisibles y están dispuestos a escuchar a todos los ciudadanos y ciudadanas, sobre todo a aquellos marginados o afectados por el conflicto en los territorios, para que su voz, sus experiencias y sus conocimientos sean parte de las acciones colectivas.

³¹ Bajo la metodología de Acuerdos para la Convivencia y el Buen vivir se promovieron espacios de diálogo y encuentro que permitieran generar una conciencia en el país sobre la urgencia de desnaturalizar la violencia. Se realizaron siete acuerdos: acuerdo por el agua en torno al río Magdalena, “Ríos de verdad y vida”; acuerdo por la convivencia y el buen vivir en la cuenca del Tunjuelo (Bogotá); acuerdo por la convivencia y el buen vivir en el barrio Brisas de Polaco (Ocaña, Norte de Santander); acuerdo por la convivencia y el buen vivir en el marco del proceso soberano de Micoahumado (Morales, Bolívar); acuerdo por la convivencia y el buen vivir en Colón (Nariño); Pacto Juvenil por la Verdad del Meta, “Enlazando futuros”, y un diálogo de improbables en Sucre bajo la metodología del mismo nombre.

espacios libres y democráticos para aprender a entendernos en la diversidad, a estar en desacuerdo, pero sin acabar con una vida por ello. En todos los territorios escuchamos que hoy es el tiempo de cambiar, que es posible construir la paz y que todos y todas debemos asumir la tarea. De hecho, presenciamos acontecimientos que eran, en sí mismos, muestras del cambio posible. El siguiente relato es solo uno de ellos.

El 27 de julio de 2021, en Sucre, once familias de un número igual de jóvenes entre los 16 y los 21 años que fueron asesinados y presentados ilegítimamente como bajas en combate tomaron la decisión de encontrarse con el coronel Borja. Para ello, como si fueran una gran familia, se coordinaron para viajar en el mismo bus hacia Sincelejo vistiendo una camiseta blanca con un corazón en el centro con los rostros de sus hijos.

En el ambiente se sentía la tensión: eran once madres, once duelos inconclusos. Ellas, buscando explicaciones menos frías que las develadas en el proceso judicial ordinario, le preguntaron al coronel si tenía hijos y si alguna vez se había detenido a pensar qué hubiera hecho si fueran las víctimas asesinadas. Borja reconoció que, a diferencia de ellas, él no tendría el corazón ni la valentía para presentarse delante del responsable. Luego, con su rostro inclinado, les contó con profunda vergüenza que lo más difícil de todo su proceso fue cuando les dijo la verdad a sus padres y a su hija: él era un asesino y muchos de sus logros militares, de los que su familia se sentía orgullosa, no eran tal. En ese momento la tensión desapareció y las once madres vieron ante ellas a un hijo y a un padre arrepentido. Él no pudo responder a muchas preguntas sobre el modo, el tiempo y el lugar porque daba sus órdenes detrás de un escritorio, sin enterarse de detalles, pero la vulnerabilidad de su vergüenza fue suficiente para que las mujeres creyeran en su palabra.

En ese encuentro, Borja afirmó: «nos creíamos dioses, no había justicia por encima de nosotros». La complicidad con el silencio era la mejor trinchera en la que se ocultaban las violaciones a los derechos humanos en la institución castrense. Un desprecio por el otro, como él mismo afirmaba. Ni él ni sus compañeros sentían que estaban haciendo algo reprochable al quitarle la vida a jóvenes empobrecidos y pensaban que nadie preguntaría por ellos. «¿Quién dio la orden?» es una pregunta que para el coronel debería ir acompañada de otra más: «¿quién más sabía?». Porque muchos en la institución conocían estos hechos.

El día del encuentro por la verdad, Borja recibió una carta de Carlos y Luisa, los dos niños que nunca conocieron a sus respectivos padres. Ellos decidieron perdonarlo, pues era una forma de honrar lo que sus abuelas y madres les habían contado sobre el buen corazón de sus padres asesinados —que no eran guerrilleros o cuatreritos, como Borja reconoció—. Hoy el coronel sí tiene quién le escriba. En su WhatsApp recibe mensajes de una de las víctimas, líder de este proceso, con la que coordina acciones que hacen parte de la reparación; incluso ha podido recorrer las calles de Tolúviejo, almorzar con las madres y conocer así las once historias de vida que orientaron esta ruta por la verdad³².

³² Comisión de la Verdad, «Encuentro por la Verdad: Tolúviejo, once historias de vida», 27 de octubre de 2021.

Las historias territoriales del conflicto

Después de dos años de escucha en el país, la Comisión se enfrentó al reto de definir un índice para el tomo territorial del Informe Final. Con base en los documentos de avance de la investigación, los patrones de violencia identificados y el análisis de los contextos explicativos realizados, se definieron las narrativas regionales sobre las que trataría el capítulo. Aunque consideramos la posibilidad de escribir un relato por cada departamento en el que tuvimos presencia o por cada municipio en el que escuchamos testimonios, priorizamos la idea de dar cuenta de las dinámicas territoriales del conflicto armado, que rara vez han respetado las fronteras político-administrativas de departamentos o municipios, pero que corresponden a la heterogeneidad del territorio, a las lógicas espaciales, sociales, políticas, económicas y culturales que le dan a cada región una identidad propia y que han interactuado con el conflicto armado. Fueron determinantes en esta definición la lectura cruzada de la geografía —las cuencas hidrográficas, cordilleras y serranías—, de la historia social, política y económica de las regiones, de los diferentes grados de presencia y efectividad de las instituciones estatales, de sus relaciones concretas con las particularidades de las regiones y de la dinámica de expansión del conflicto armado a lo largo de la historia —los patrones de violencia y victimización, las racionalidades y despliegues estratégicos de los actores armados y las transformaciones o desenlaces de la guerra en diferentes territorios—. Con estos elementos identificamos los ejes estructurantes de la historia del conflicto armado para cada una de las unidades territoriales sobre las que versa este capítulo del informe.

En esta demarcación de unidades territoriales, las fronteras son flexibles o porosas. Como se mencionó, los territorios aparecen y desaparecen según las dinámicas que se estén estudiando y la mirada de sus pobladores. Por esa razón no se pretende fijar fronteras rígidas entre territorios, sino que se entiende que existen corredores o zonas bisagra que conectan unos territorios con otros y que a lo largo del tiempo los territorios se han expandido o contraído. Así, por ejemplo, el departamento de Córdoba, fundamental para comprender el conflicto en el Caribe, comparte múltiples dinámicas —especialmente la subregión del sur— con Antioquia, particularmente con las provincias de Urabá y del Bajo Cauca. La región del Pacífico, que se entiende como un territorio desde la mirada de las poblaciones étnicas que la habitan —y desde las lógicas coloniales y racistas con las que el Estado y la sociedad andina se han relacionado con el territorio y que se reproducen en el conflicto armado—, tiene diferentes subregiones que se conectan con otras dinámicas territoriales del conflicto: la dinámica del norte del Chocó está vinculada a la dinámica colonizadora de Antioquia; la dinámica de la región del sur del mismo departamento está más relacionada con Risaralda y el norte del Valle; las dinámicas del Pacífico valluno y caucano, más ligadas a los problemas

del sur del Valle y el norte del Cauca; el andén del Pacífico nariñense está ligado a la llegada de la economía cocalera, golpeada en Caquetá y Putumayo. Desde esta lógica, la relativa homogeneidad cultural y étnica y el carácter periférico de la macrorregión se rompen por los diversos intentos de integración económica provenientes del mundo andino más integrado. Igualmente, el Caquetá y el Guaviare son fundamentales para comprender la región de la Orinoquía y los cruces entre los procesos de colonización y el conflicto armado, y también las dinámicas propias de la Amazonía.

Algo similar sucede con las ciudades en este análisis territorial del conflicto armado. Podemos identificar dinámicas urbanas del conflicto armado comunes a las ciudades grandes e intermedias, pero sus particularidades corresponden a las lógicas propias de la región en la que están ubicadas y, por supuesto, hacen también parte del relato de todos los territorios estudiados. En todos los textos, los flujos y relaciones entre las ciudades y las zonas rurales vecinas hacen parte del análisis. Los textos regionales de este tomo no comienzan en la misma fecha: unos se remontan a los tiempos coloniales, otros a los siglos XIX y XX, mientras que algunos se concentran en los tiempos recientes. Esto responde a la realidad de que los actores armados no hicieron presencia simultánea en la totalidad del territorio, sino en períodos diferentes, ligados a los distintos momentos de la integración gradual de las regiones en la vida económica del conjunto de la nación y la difícil articulación de las poblaciones en la configuración política del país.

De esta manera, se definieron once unidades territoriales sobre las que se estructura el capítulo: Amazonía; Antioquia, sur de Córdoba y Bajo Atrato chocoano; Caribe; Eje cafetero; frontera nororiental; Magdalena Medio; Nariño y sur del Cauca; Orinoquía; Pacífico; región Centro; y Valle y norte del Cauca. Adicionalmente, la colección está compuesta por un texto reflexivo que busca sistematizar y analizar las dinámicas territoriales de la guerra, un capítulo sobre las dinámicas urbanas del conflicto y otro más, a manera de epílogo, dedicado a las afectaciones al campesinado, principal víctima del conflicto, que ha buscado incansablemente ser reconocido como sujeto político e incorporado a los esquivos procesos democráticos de la nación. Como dijo alguna vez el escritor argentino Tomás Eloy Martínez —y bien lo sabemos todos—, la guerra en Colombia se ha librado sobre el cuerpo de los campesinos. Como se mencionó, cada uno de estos relatos tiene hilos conductores que en general coinciden con características, problemáticas, conflictos e incluso violencias que anteceden al conflicto armado, en las que se insertan los actores armados y sus disputas por el control territorial e interactúan con ellas, las transforman y profundizan.

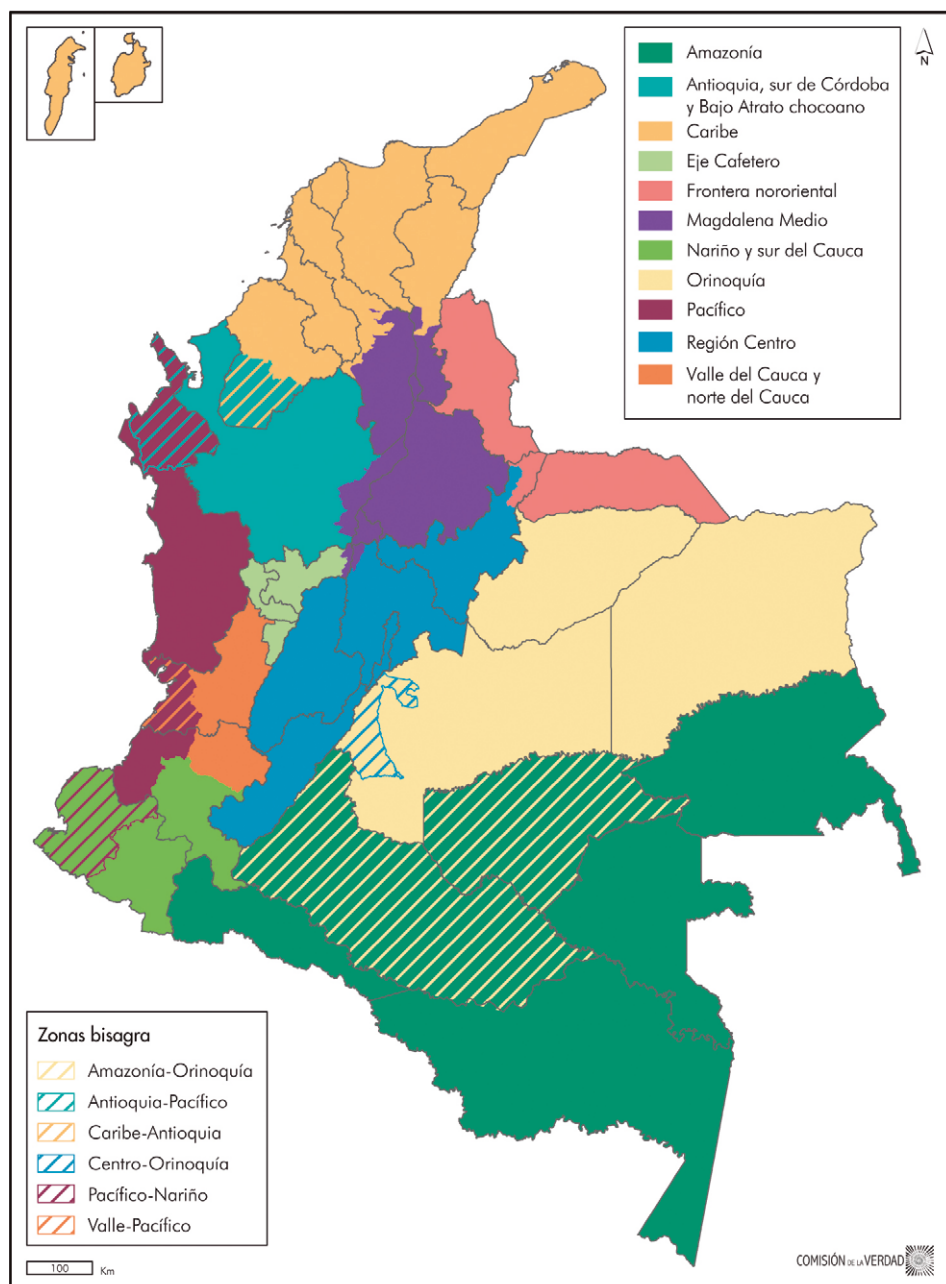
Este volumen del tomo territorial da cuenta de los hallazgos de los hechos que sucedieron en el marco del conflicto armado en Valle y norte del Cauca. Esta región agrupa los 42 municipios del Valle y 13 del Cauca: Suárez, Santander de Quilichao, Villa Rica, Puerto Tejada, Buenos Aires, Caldono, Miranda, Padilla, Guachené, Corinto, Caloto, Toribío y Jambaló. La región se distingue por una fuerte confluencia étnica, pues en su campos y ciudades se asientan mestizos, afrodescendientes y los pueblos indígenas Nasa, Misak, Embera y Wounaan. Su geografía, clima,

economía, población, historia y cultura están signadas por el contraste entre el valle y la montaña. En las planicies que bordean al río Cauca se levantan los cultivos de caña, los ingenios y otras empresas, base de la agroindustria que mueve la economía de la región, mientras que en las zonas medias y altas de las cordilleras Central y Occidental el paisaje se caracteriza por los cultivos de café, frutas, hortalizas y los árboles de pino y eucalipto destinados a la industria papelera.

La Comisión llevó a cabo esta investigación a partir de un amplio ejercicio de escucha, recorriendo parte del valle geográfico del río Cauca y las cordilleras y abriendo las puertas de la Casas de la Verdad en Cali y Popayán y otras ciudades hasta las cuales ha llegado la diáspora de vallunos y caucanos. Fueron entrevistadas víctimas directas e indirectas (de las cuales cerca del 70 % fueron mujeres), a las cuales se sumaron 16 entrevistas colectivas a organizaciones de víctimas y comunidades y organizaciones campesinas, afro e indígenas. También fueron entrevistados de manera individual y colectiva decenas de antiguos combatientes de los grupos armados que actuaron en la región. Asimismo, para la construcción de este capítulo se tuvieron en cuenta 49 informes entregados por la sociedad civil y los aportes de funcionarios y expertos.

En cumplimiento de su mandato, la Comisión llevó a cabo en Valle y Cauca importantes eventos públicos y privados de reconocimiento y diálogo social, donde destaca el conversatorio «¿Por qué continúa la guerra en Cauca?» (marzo de 2020); el diálogo «Cauca habla de otros futuros posibles» (agosto de 2021); el «Reconocimiento por la vida: Caldonio cuenta la verdad» (marzo de 2021); y el «Reconocimiento de la dignidad de las víctimas de secuestro en el Valle del Cauca» (junio 2021). Todas esas voces contribuyeron a esclarecer la verdad y avanzar hacia la convivencia y la no repetición en los valles y montañas del suroccidente de Colombia.

Mapa 1. Regionalización del país de acuerdo con las dinámicas del conflicto armado



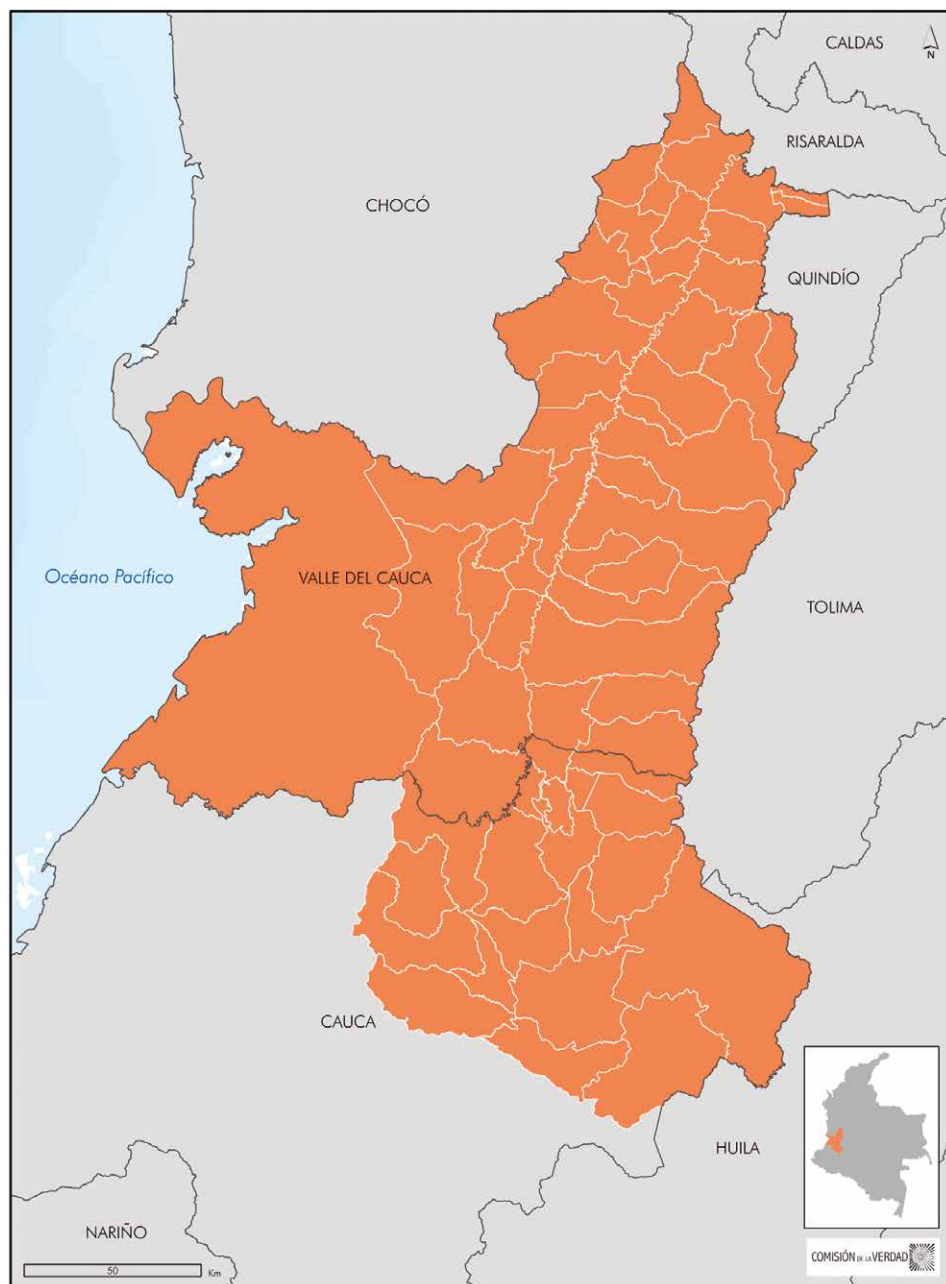
Fuente: DANE, 2021; Comisión de la Verdad, 2022.





El territorio

Mapa 2. Región del Valle y norte del Cauca



Fuente: DANE, 2021, Comisión de la Verdad, 2022.

Los hijos del agua, los nietos del trueno, la gente de la palabra y los sueños no conciben el mundo sin la dualidad. El fundamento de la existencia para los indígenas Nasa y Misak es la coexistencia entre lo masculino y lo femenino, el calor y el frío, el sol y la luna, la quietud y el movimiento, la vida y la muerte, el cuerpo y el espíritu, el agua y la tierra. Bajo el mismo designio, el contraste entre el valle y la montaña marca la historia, la cultura, la economía, la geografía y la demografía del Valle y el norte del Cauca.

En la región es posible pasar en unas cuantas horas del frío de los páramos de Chili-Barragán, Las Hermosas, El Duende, Los Farallones y Tatamá al calor de las playas de Buenaventura; de los nebulosos y grises frailejones a la sombra de las palmeras o los guayacanes de flores blancas, rosadas o amarillas; de un «chompi» por los manglares costeros a los «borondos»³³ vespertinos por el bulevar del río Cali o la plaza colonial de algún pueblo con nombre castellano. Esa misma pluralidad caracteriza a su gente: además de la población mestiza mayoritaria, en la región habitan varios pueblos indígenas –Nasa, Misak, Embera, Wounaan, Eperara Siapidara e Inga, entre otros– y una numerosa comunidad afrodescendiente. Aunque en muchos momentos han luchado y resistido juntos contra los embates de la guerra y la pobreza, sus relaciones no han estado exentas de divergencias, tensiones y conflictos en torno a la política, la tierra y el modelo de desarrollo.

La geografía del Valle y del norte del Cauca configura varias subregiones, donde se distinguen múltiples climas, paisajes, poblaciones y actividades económicas. El alma de la planicie es el río Cauca, que nace en los páramos de Sotará y Puracé, en el corazón del macizo en el suroccidente de Colombia. Custodiado por las cordilleras Central y Occidental, fluye a lo largo de más de mil kilómetros hasta desembocar en las aguas del río Magdalena en el norte del país. Desde hace siglos el río ha sido vital para la alimentación, el transporte, el trabajo, el ocio, el comadreo y el tejido de lazos comunitarios de las comunidades campesinas, indígenas y afro que habitan en sus orillas. Lastimosamente, la guerra lo ha convertido también en un río de muerte. El horror de los cadáveres a merced del caudal está en la memoria de la gente desde la conflagración bipartidista y amenaza de nuevo con volverse cotidiano como resultado de las disputas entre guerrillas, disidencias, paramilitares y mafias.

El verde panorama de las montañas que custodian el transcurrir del río lo componen los cafetales, los cultivos de frutas y hortalizas y millones de diversos árboles, entre los cuales se encuentran pinos y eucaliptos destinados a la producción de cartón y papel. También se observan en ciertos puntos, a veces camuflados y a veces a plena vista, cultivos de amapola, coca y marihuana. Por su parte, la caña de azúcar domina la zona plana del valle geográfico del río Cauca. Cuando los colonizadores españoles sembraron los primeros tallos en sus riberas, en los años 1500, estaban comenzando

³³ En la región, un borondo es un paseo corto, mientras que un chompi es un paseo en un vehículo.

a escribir un capítulo esencial en la historia del suroccidente del país. Hoy en día, los inabarcables cultivos de caña —donde los corteros, que en su mayoría son afrodescendientes, trabajan a punta de machete bajo el sol—, los vagones cargados de dulces tallos y las fabriles estructuras plateadas de los ingenios son testigos de la expansión de la agroindustria que comenzó desde las primeras décadas del siglo XX. En medio de ese mar de cañaduzales apenas quedan algunas casas donde los pobladores mantienen pequeños cultivos de cacao, plátano, yuca, cítricos y otros productos, pálidos recuerdos de la desaparecida economía tradicional. El aroma de la ciénaga ahora se oculta bajo el de la caña quemada y las confituras que desprenden las fábricas de los alrededores.

La agroindustria ha traído resultados ambivalentes para la gente del Valle y norte del Cauca. Como la propia pulpa de la caña, la melaza, el azúcar y los licores que de ella derivan, dulces han sido el progreso, la innovación, el bienestar, la prosperidad y la modernización que han traído las industrias. Según datos de Asocaña³⁴, en 2019 la agroindustria representaba el 0,6 % del producto interno bruto (PIB) total nacional y el 3,7 % del PIB agrícola nacional; específicamente en el Valle, representaba el 31,4 % del PIB agrícola y en el Cauca el 19,7 %. Generaba 286.000 empleos directos e indirectos, de tal manera que 65 de cada 100 familias en los 50 municipios cañicultores en Valle, Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío estaban vinculadas económicamente con la agroindustria. La exportación de 716.000 toneladas por valor de 327 millones de dólares ubicó a la agroindustria como el cuarto generador de divisas después del café, las flores, el banano y el aceite de palma.

Además, los impuestos pagados por la agroindustria representan en algunos casos más del 60 % de los ingresos de los municipios cañicultores, lo cual les permite construir y mejorar la infraestructura y la prestación de servicios de transporte, educación, salud y domiciliarios. En 2019, por ejemplo, a partir del bagazo de caña se produjeron 1.615 GWh de energía eléctrica, suficientes para abastecer una ciudad de un millón de habitantes por un par de meses. De igual manera, en alianza con otras entidades privadas y públicas, los ingenios y otras industrias del sector han hecho millonarias inversiones en diferentes proyectos de responsabilidad social empresarial³⁵ que han traído impactos positivos a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.

Para algunas personas, sin embargo, amargas como los citratos y los carburantes que también se extraen de la gramínea han sido las historias de violencia, despojo, desarraigo y pobreza aparejadas a la expansión agroindustrial. Por supuesto, muchos pobladores vendieron su tierra en aras de mejores oportunidades, pero otros tuvieron que huir hacia las montañas o las ciudades obligados por la crisis económica o las armas. Desde los años cincuenta del siglo XX —primero bajo la forma de Pájaros y

³⁴ Asocaña, «Sector agroindustrial de la caña».

³⁵ Por ejemplo, el Fondo por la Vida y la Sostenibilidad (2009), el Fondo Social de la Agroindustria de la Caña, Familias con Bienestar (2009), La Caña Nos Une (2019), la Red Educativa Azucarera, la Alianza Sena-Asocaña (2010) y el mecanismo de obras por impuestos.

bandoleros y luego de escuadrones de la muerte, mafias y paramilitares—, en la región ha sido constante el ejercicio de la coerción por parte de actores privados interesados en quedarse con la tierra para llenarla de caña, ganado, maderables, fincas de recreo o cultivos de uso ilícito.

Al mismo tiempo, el fomento privilegiado de la agroindustria por parte del Estado y los capitales privados, en detrimento de la economía campesina y étnica, generó desequilibrios ambientales y sociales y dejó a los cultivos de café, frutas y hortalizas en una situación vulnerable ante la crisis y la consecuente penetración de los capitales ilegales. Algo similar ha ocurrido con la silvicultura, pues sus bondades financieras y sociales han tenido un correlato de daño ambiental, violencia y crisis de la economía campesina y étnica que los pobladores de la región resumen bajo el lapidario oxímoron del «desierto verde». Durante las últimas ocho décadas, los cambios en la propiedad y la estructura productiva de la tierra han provocado hondas crisis sobre la economía campesina y étnica que han alimentado tanto los conflictos socioambientales e interétnicos como la guerra.

A lo largo de su recorrido, el cauce del río Cauca se ensancha y el calor se intensifica. Después de atravesar Puracé, la ciudad blanca de Popayán, Cajibío y Morales se adentra en el norte del Cauca. Esta subregión agrupa trece municipios: Suárez, Santander de Quilichao, Villa Rica, Puerto Tejada, Buenos Aires, Caldono, Miranda, Padilla, Guachené, Corinto, Caloto, Toribío y Jambaló. Los primeros cinco se ubican sobre la margen del río, mientras que los demás se recuestan sobre las cordilleras Occidental y Central. Desde las cordilleras fluyen aguas cristalinas que se entrelazan como arterias hasta unirse al río Cauca. La brisa que baja desde lo alto del páramo refresca el caluroso ambiente y el rocío mañanero escarcha los pastizales y los cultivos de yuca, maíz y papa.

El norte del Cauca goza de una confluencia étnica muy fuerte. Según el plan de desarrollo departamental (2020-2023), en la subregión habitan 445.533 personas, de las cuales 136.515 son indígenas (aproximadamente el 30 %), en su mayoría del pueblo Nasa. En el territorio existen 22 cabildos (autoridades indígenas tradicionales), 16 de los cuales están constituidos como resguardos³⁶. En Caloto, Toribío, Jambaló, Santander de Quilichao y Corinto más del 90 % de la población se autorreconoce como indígena. El norte del Cauca es la cuna del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), referentes de la lucha indígena en todo el país. Durante los peores años de la guerra, en medio de las batallas entre actores armados y los hostigamientos y tomas guerrilleras, el pueblo Nasa se atrevió a enfrentar el miedo. Gestaron la Guardia Indígena, símbolo de

³⁶ Tacueyó, Toribío, San Francisco, Jambaló, Huellas Caloto, Tóez, Miranda, Corinto, López Adentro, Nasa Kiwe Tehekshw, Munchique, Canoas, Delicias, Concepción, Guadualito y Kite Kiwe. Según el censo indígena, este territorio está conformado por unos 94.000 habitantes pertenecientes al pueblo Nasa. Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, «Quién lo conforma».

resistencia y dignidad en todo el país; levantaron banderas blancas, bastones de mando de chonta con cintas de cuatro colores y sus voces de trueno para exigir el cese de la violencia, sin importar el uniforme que portaban quienes disparaban.

En cuanto a la población afrodescendiente, la Gobernación departamental estima que en la subregión norte asciende a 213.636 personas (aproximadamente el 47 %), ubicadas principalmente en Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Caloto, Padilla y Villarrica. Como expresión organizativa, existen 41 consejos comunitarios y organizaciones étnicas de comunidades negras agrupadas en la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc). Al ritmo de la esgrima de machete y bordón, de los bambucos, jugas y arrullos que emiten los violines caucanos de guadua, e inspirados por los relatos orales de los mayores y la gastronomía de las matronas, los consejos comunitarios y las guardias cimarronas abanderan la lucha de las comunidades afro por la libertad, la supervivencia de la cultura y las costumbres ancestrales, la autonomía, la protección del medio ambiente y la potestad sobre el territorio.

También luchan por la recuperación de la finca tradicional –desaparecida por el irrefrenable avance de la caña de azúcar– y por el reconocimiento de la minería artesanal. Debido a la guerra y las transformaciones económicas experimentadas en la región desde principios del siglo XX, el río Cauca dejó de ser el lugar donde las comunidades afrodescendientes practicaban la minería artesanal, una costumbre que llegó en el siglo XVI con los primeros asentamientos de personas esclavizadas traídas a las minas payanesas. Aunque la actividad minera se movió hacia otros ríos, pronto las bateas y las técnicas de barequeo aprendidas de los abuelos quedaron en el olvido. Las «máquinas amarillas», como se les conoce popularmente a las retroexcavadoras, comenzaron a arañar la tierra para sacar el oro de sus entrañas bajo la férrea vigilancia de hombres armados y vestidos de camuflado. Cuando se van, a los lugareños no les queda más alternativa que rebuscar algunas migajas doradas que les ayuden a paliar la pobreza.

El norte del Cauca es también el hogar de comunidades campesinas que desde los años cincuenta han levantado las banderas de la lucha por la tierra, la protección del medio ambiente, la paz y la democracia. Pese a la presión de la violencia y la pobreza, han logrado consolidar sus procesos organizativos tanto a nivel local como regional en plataformas como el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente (Pupsoc). En los últimos años, la apuesta común por el reconocimiento de zonas de reserva campesina en el piedemonte de la cordillera Central se ha convertido en la principal manifestación de su anhelo por recuperar la tierra, la tradición y la dignidad que la guerra les arrebató.

Tras ser azotada durante años por guerrillas, paramilitares, mafiosos y las propias fuerzas armadas del Estado –y pese a la amenaza que se cierne sobre la subregión de la mano de las disidencias, paramilitares de nuevo cuño y carteles extranjeros–, la gente y las autoridades del norte del Cauca le siguen apostando a la paz y la reconciliación. Cansados de ser asociados con guerra, drogas y minería ilegal, quieren ser más bien recordados por los paisajes naturales que componen sus cerros, ríos, cascadas y lagunas que hoy en día se pueden recorrer a pie o en bicicleta y por su patrimonio

multicultural inmaterial. También por el legado histórico y arquitectónico que se puede observar en sitios como la capilla Santa Bárbara de Dominguito, construida por negros esclavizados a mediados del siglo XIX en Santander de Quilichao y declarada monumento nacional en los años ochenta, o el puente colonial de Caldono, erigido sobre el río Grande y que durante la época de la Colonia servía como medio de comunicación entre veredas y municipios aledaños y conectaba Popayán con Cali³⁷.

Tras abandonar el norte del Cauca, el río se adentra en el Valle. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para 2018 el departamento contaba con 4.475.886 habitantes, de los cuales 1.092.169 son personas negras, afrocolombianas, raizales o palenqueras que se asientan principalmente en Buenaventura, Dagua, Cali, Jamundí, Palmira, Florida, Pradera, Buga, Candelaria, El Cerrito, Yumbo, Guacarí, Riofrío, Tuluá, Zarzal y Cartago. Igualmente, el departamento cuenta con 27 resguardos indígenas donde viven 11.431 personas que se ubican en Ansermanuevo, Argelia, Bolívar, El Cairo, El Dovio, Restrepo, Trujillo, Tuluá, Vijes, Florida, Jamundí, Pradera, Buenaventura, Dagua y Cali. Estas comunidades corresponden principalmente a los pueblos Embera, Nasa y Wounaan. El 85,55 % de la población del Valle habita en zonas urbanas.

La subregión sur del Valle reúne once municipios: Cali, Jamundí, Candelaria, Florida, Pradera, Palmira, El Cerrito, Yumbo, Vijes, La Cumbre y Dagua. Alberga más de la mitad de la población del departamento –de la cual un significativo porcentaje es afrodescendiente– y, al concentrar la mayoría de las empresas e ingenios azucareros, constituye su principal polo económico. Además del río Cauca, los abundantes riachuelos y quebradas que descienden de la sierra son vitales para los cultivos, la ganadería y el esparcimiento de la población. En los parques centrales de estos pueblos, donde usualmente se congregan los habitantes y los turistas a pasar las tardes calurosas al solaz del sancocho, la lulada y el cholao, aún se observa la arquitectura colonial en casas coloridas e iglesias góticas. El sur del Valle es también un importante epicentro cultural, cuna de cientos de artistas como Jorge Isaacs, Andrés Caicedo, los cineastas del movimiento Caliwood y, más recientemente, escritoras como Melba Escobar y Pilar Quintana.

Cali es la capital del Valle y la ciudad más importante del suroccidente del país. Sultana bañada por siete ríos y por la brisa que baja de las altas montañas de los Farallones, ataviada con el oro de la caña y bailando al ritmo de salsa y guaguancó, se viste de cosmopolitismo, diversidad, cultura, riqueza y poder. La Sultana, sin embargo, también viste de oropel. Miles de personas que llegaron a la urbe desde mediados del siglo XX buscando oportunidades o empujadas por la violencia y la crisis de la economía rural provocada por la expansión agroindustrial se vieron obligadas a instalarse en las periferias del oriente y el oeste bajo acuciantes condiciones de violencia

³⁷ El Nuevo Siglo, «Norte del Cauca, gran destino turístico por descubrir».

y marginalidad que hoy están prácticamente intactas. Muchas de ellas eran afrodescendientes e indígenas que tuvieron que huir de sus tierras apenas con la ropa que tenían puesta.

Desde mediados del siglo XX, esos barrios han sido el núcleo de movimientos cívicos, sindicales, estudiantiles, culturales, políticos y feministas que han levantado la voz para exigir sus derechos. No en vano en los años ochenta los grupos insurgentes eligieron esas zonas para levantar sus campamentos urbanos, intentando ganar adeptos para su causa de la mano de la filosofía y las promesas de un mundo mejor. Las guerrillas, sin embargo, mostraron también el anverso de la moneda. Amenazas, asesinatos, torturas, reclutamientos forzados y desplazamientos convivieron con el trabajo de masas. Años después, bajo eufemismos como «pescas milagrosas», «retenciones», «vacunas» o «impuestos revolucionarios», que poco les sirvieron para sortear la infamia, reventaron la ciudad a punta de secuestros y extorsiones.

Casi al tiempo aparecieron en aquellos barrios populares misteriosos escuadrones de la muerte que prometían seguridad, limpieza y moralidad. Estos escuadrones terminaron viendo en los «bareteros» —consumidores de marihuana—, las personas LGBTIQ+ y las prostitutas las mil cabezas del «monstruo comunista y subversivo», cuando la única revolución que querían era la del cuerpo. Para los vecinos era un secreto a voces que, al lado de mafiosos y matones, detrás de esa «mano negra», de los pavorosos pasamontañas y las camionetas sin placas, en ocasiones se escondían servidores de la ley que durante el día aparentaban rectitud para no manchar el uniforme. Idénticas historias se escucharon de norte a sur en los pueblos y ciudades de la región. Durante los ochenta y los noventa, los narcos ocultaron las balas y las bombas con la estridencia de la rumba dura y la algarabía de los goles.

Continuando el recorrido hacia el norte del país, el río Cauca cruza la subregión central del Valle, conformada por catorce municipios: Trujillo, Bugalagrande, Sevilla, Caicedonia, Riofrío, Andalucía, Tuluá, Calima, Yotoco, San Pedro, Buga, Restrepo, Guacarí y Ginebra. Es un territorio rico en recursos hídricos, con una marcada vocación agrícola —los cultivos de caña también son abundantes en la ribera del río—, comercial y turística. Buga y Tuluá son sus principales núcleos urbanos y concentran la oferta de servicios, incluyendo el turismo religioso; miles de devotos católicos, no solo de la región, sino también de otras partes del país, acuden asiduamente a la Basílica del Señor de los Milagros en Buga.

Tierra de fe y milagros, donde cuentan las abuelas que un pequeño cristo de madera apareció en el río y creció hasta alcanzar el tamaño de un hombre, ha logrado sobreponerse mil y una veces a la tragedia. Primero, en los años cincuenta, fueron las atrocidades del Cóndor y sus Pájaros conservadores; luego, a finales de los ochenta y principios de los noventa, la orgía de sangre del Alacrán y don Diego, que no respetó ni siquiera a los hombres de Dios; y después, a finales de los noventa y principios de los dos mil, la arremetida paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia que arrancó en el corazón del Valle.

El norte del departamento agrupa dieciséis municipios: El Águila, El Cairo, Ansermanuevo, Cartago, Ulloa, Alcalá, Argelia, Toro, Obando, Versalles, La Unión, La Victoria, El Dovio, Roldanillo, Bolívar y Zarzal. La mayoría de la población la componen mestizos emparentados con la cultura paisa, aunque en el norte y el centro del departamento existen más de treinta comunidades indígenas del pueblo Embera. Cuenta con pocas industrias y la mayor parte del territorio tiene vocación agrícola y pecuaria. En las zonas bajas también se levantan cultivos de caña, mientras que en las zonas altas, donde el paisaje se distingue por las pequeñas parcelaciones rurales, el cuadro de la agricultura campesina se dibuja con viñedos, tendidos de granadilla y matas de café. De hecho, algunos de sus municipios –Alcalá, Ansermanuevo, Argelia, El Águila, El Cairo y Ulloa– hacen parte del Paisaje Cultural Cafetero, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

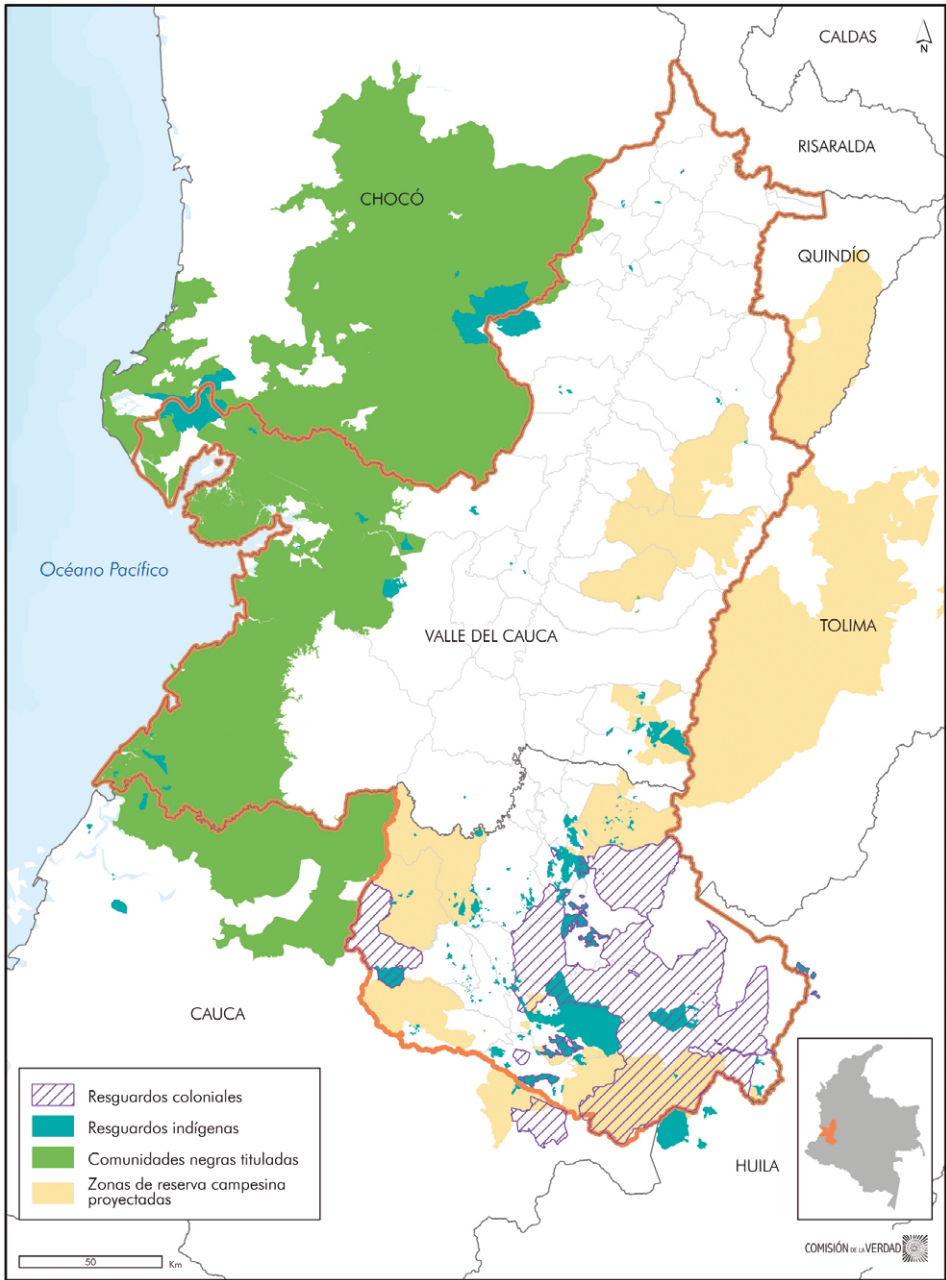
Antes que un terruño de matones y patrones –estigma que carga la región por ser la desafortunada base de otro cartel de la droga– el norte del Valle es una tierra fértil y pujante, madre de la bonanza cafetera; de aguerridos movimientos campesinos que han sido castigados con virulencia por defender la democracia y los derechos; de recias y laureadas deportistas como Carmenza Delgado y de la cultura expresada en las pinturas de Omar Rayo, las composiciones de Pedro Morales Pino, la prosa de Eustaquio Palacio y los versos de Encarnación García.

Finalmente, lejos del cauce del río Cauca, Buenaventura constituye la subregión Pacífica. Pese a sus riquezas naturales, la cercanía con la capital departamental y ser el principal puerto del país, más de la mitad de su población vive bajo la línea de pobreza. El municipio costero, el más grande del departamento, históricamente ha estado azotado por la violencia y el olvido. La infraestructura del puerto y el lujo de los hoteles situados a la orilla del mar contrastan con la miseria del resto del casco urbano y de la zona rural.

En la densa selva del Naya, frontera entre Buenaventura y la costa pacífica caucana, la única forma de llegar a los escasos caseríos es por caminos de herradura, ríos y senderos furtivos, rutas que han usado los grupos armados para el tráfico de drogas y armas. Desde los años ochenta el verde de la selva comenzó a transformarse. Las matas de coca llegaron de la mano de grupos armados ilegales y cambiaron para siempre el paisaje, la economía y la vida de los pobladores campesinos, afrodescendientes e indígenas. Por esas mismas selvas, oprimidos por las cadenas y el agreste clima tropical, caminaron decenas de personas secuestradas por las guerrillas, preguntándose si alguna vez volverían a ver los pájaros de mil colores y los arreboles rojos, naranja, amarillos y violeta que pintan los tibios atardeceres en el suroccidente.

Gracias a la mixtura del temple de la roca alpina y la resiliencia del agua y el viento, las comunidades y organizaciones del Valle y el norte del Cauca han logrado sobreponerse a la violencia, la pobreza, el racismo y la exclusión que sufren desde la época de la Colonia. Vapuleadas por despiadados modelos económicos y por la guerra, han sabido encontrar el coraje para perdonar, levantarse y seguir luchando por vivir en paz y ver nuevos amaneceres en las tierras del valle y la montaña.

Mapa 3. Figuras territoriales étnicas y campesinas del Valle y norte del Cauca



Fuente: DANE, 2021; ANT, 2022; Anzorc, 2020.



Modernización, crisis y violencia (1958–1977)

Crisis agraria campesina y étnica: primer acto

Durante los años cincuenta del siglo XX, se consolidó en el Valle y el norte del Cauca un modelo económico dual: en las zonas planas a lo largo del valle geográfico del río Cauca se asentó la agroindustria de la caña de azúcar, mientras que en las laderas de las cordilleras se desarrollaron los cultivos de café y frutas y la agricultura forestal. No obstante, el fomento de las distintas actividades económicas fue desigual: mientras que la agroindustria de la caña —y en parte la silvicultura— gozaron de apoyo por parte del Estado y las corporaciones privadas, la economía campesina y étnica de las zonas de planicie, así como el café y la hortofruticultura en las montañas, fueron descuidadas. Esta situación no solo agudizó la crisis económica y los conflictos interculturales alrededor de la tierra, sino que tuvo impactos en el devenir de la guerra: por un lado, la crisis de la economía rural arrojó cientos de hectáreas al narcotráfico y no pocas manos dispuestas a empuñar las armas bajo la bandera del mejor postor; por el otro, alimentó una movilización social que fue manipulada, estigmatizada, perseguida y atacada por todos los actores armados y por el Estado.

El desarrollo de la agroindustria de la caña comenzó en los años veinte y se consolidó a lo largo de las siguientes seis décadas. El punto de partida fue la transición de la producción artesanal de los trapiches y los ingenios tradicionales hacia la fábrica gracias a la tecnificación del proceso y el paso de los productos artesanales en pequeña escala a la elaboración masiva de azúcar centrifugado y refinado y derivados cada vez más diversos y sofisticados. A partir de entonces surgieron los ingenios modernos³⁸. La agroindustria nació con propiedad en los años cincuenta, cuando la separación entre la producción agrícola y el procesamiento industrial se hizo nítida y el proceso se tornó más científico —por ejemplo, mediante la introducción de variedades modificadas en laboratorios—³⁹. El desarrollo de la agroindustria fue impulsado por las recomendaciones de la misión Chardon (1930), que identificó el cultivo de caña como el más adecuado para la región y sugirió intensificarlo e introducir diferentes mejoramientos para aumentar la productividad —como nuevas variedades de la planta y el control de las aguas para la irrigación de los cultivos—. Esas transformaciones productivas se completaron con las creencias compartidas

³⁸ Providencia (1926), Riopaila (1928), Bengala (1933), La Industria (1933), Perodías y Mayagüez (1938). En las décadas de los cuarenta y los cincuenta se crearon Pichichí, Oriente, Balsilla, San Carlos, Papayal, Castilla, El Porvenir, La Carmelita, San Fernando, Tumaco, La Cabaña y Meléndez. En 1963 se fundó el Ingenio del Cauca (Incauca), actualmente el más grande del país.

³⁹ Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia, «El cultivo de la caña en la zona azucarera de Colombia», 1995.

entre políticos y técnicos acerca de la relación inversa entre el rendimiento agrícola y el tamaño de la unidad productiva y la incapacidad de las poblaciones rurales de modernizarse y responder a la competencia del mercado⁴⁰.

Sobre esa base, las políticas gubernamentales de fomento fueron determinantes para la expansión de la agroindustria⁴¹, que se benefició de las políticas proteccionistas para cultivos comerciales, los servicios de investigación y asistencia técnica y tecnológica y las facilidades tributarias y de crédito⁴². Durante los años setenta, cerca del 30 % de las inversiones de la industria azucarera provinieron de recursos propios y el resto de préstamos preferenciales y estímulos oficiales o mixtos. En 1975, por ejemplo, los esfuerzos del gremio para concertar políticas con el Gobierno lograron la creación de la Comisión Nacional del Azúcar, organismo consultivo de economía mixta vinculado al Ministerio de Agricultura dedicado al análisis y recomendación de políticas públicas relacionadas con la producción, regulación, mercadeo, exportación, importación, crédito y desarrollo; de igual forma, en 1978 se constituyó el Fondo Nacional Azucarero (Fonazúcar) con el objetivo de regular el precio del azúcar y promover el desarrollo de la industria azucarera y panelera, incluyendo el financiamiento de diversas formas de investigación. Los ingenios también recibieron asesorías de empresas extranjeras⁴³. En ese periodo convergieron otros elementos que aportaron a la consolidación de la agroindustria como el bloque estadounidense contra Cuba, uno de los principales productores mundiales de azúcar. Gracias a todos esos factores, entre 1960 y 1980 el monocultivo de la caña de azúcar gozó de un acelerado crecimiento y pasó de 61.600 hectáreas a 133.187⁴⁴.

Mientras en la planicie del valle geográfico del río Cauca pululaba la caña, en las montañas se levantaban los cafetales. Hasta mediados del siglo XIX la economía de las zonas de cordillera giró en torno a productos como maíz, frijol y papa, destinados mayoritariamente al consumo local. Con la colonización antioqueña y la implantación del cultivo de café, generalmente en explotaciones minifundistas de pequeña propiedad, a finales de ese siglo comenzó una nueva fase de la economía.

⁴⁰ Delgadillo, «La caña de azúcar en la historia ambiental del valle geográfico del río Cauca (1864-2010)».

⁴¹ *Ibíd.*

⁴² Los primeros préstamos y subsidios para el fomento agroindustrial se hicieron gracias a recursos entregados por organismos internacionales al Estado y fueron otorgados entre 1949 y 1954 e intermediados por la Caja Agraria. Entre 1970 y 1973, la principal fuente financiera institucional provino de la Ley 26 de 1959, que en su momento implementó líneas de subsidio y crédito preferencial ofrecidas por el Banco de la República para invertir en mecanización agrícola. Entre 1975-1976 tomaron fuerza los créditos ofrecidos por el Banco Mundial. *Ibíd.*

⁴³ Por ejemplo, compañías como Hawaiian Agronomics, Abarca (Puerto Rico) y Arthur Keller Corp. (Estados Unidos) asesoraron a Castilla, Riopaila, Providencia y otros ingenios en el proceso fabril y en prácticas de cultivo. *Ibíd.*

⁴⁴ Correa et al., «Transformaciones territoriales producidas por la agroindustria de la caña de azúcar en las comunidades étnicas de López Adentro y El Tiple, Colombia», 76.

Gracias a la fertilidad de los suelos y el vertiginoso aumento de la productividad, el Valle se convirtió en uno de los principales productores del grano en el país y entre los años treinta y cincuenta del siglo XX incluso superó a la caña como principal producto agrícola de la región⁴⁵.

La colonización y la bonanza cafetera promovieron la creación de nuevos municipios⁴⁶ y la configuración de importantes centros de acopio y comercialización del café, como Ansermanuevo, Sevilla, Caicedonia, Cartago, Buga y Tuluá. El dinamismo de la economía cafetera y la consolidación de esos enclaves urbanos impulsaron la construcción de carreteras para movilizar la fuerza de trabajo y transportar el producto, primero a los centros de procesamiento localizados en algunas ciudades de la zona plana y luego a los puertos y otros puntos de comercialización, e ingresar los insumos necesarios en el proceso productivo tanto del café como de la caña. La infraestructura vial permitió tanto la integración intrarregional como la conexión con los departamentos aledaños y con el exterior a través de Buenaventura⁴⁷.

La economía de la zona montañosa⁴⁸ también estuvo atada a la explotación forestal. En 1957 la empresa Pulpapel –luego convertida en Cartón Colombia, en Smurfit Cartón de Colombia y finalmente en Smurfit Kappa Colombia– se estableció en Cali para producir pulpa para papeles y cartones. Dos años después, el Ministerio de Agricultura le otorgó 15.000 hectáreas en Bajo Calima (Buenaventura) y en los años siguientes aumentaron las concesiones a la empresa y sus filiales: en 1962 recibieron 25.000 hectáreas, en 1970 otras 11.710 y en 1974 el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente (Inderena) les entregó 60.000 hectáreas para ser explotadas en un lapso de 30 años. De forma paralela, en los años sesenta la empresa comenzó a comprar fincas en Cauca y Valle para expandir los cultivos de pino y eucalipto⁴⁹.

Sin embargo, pronto se hicieron evidentes las incompatibilidades de este modelo económico con la economía campesina y étnica. Por un lado, la economía cafetera se estancó desde finales de los años cincuenta. En los años siguientes, los sucesivos gobiernos del Frente Nacional y los gremios implementaron una serie de medidas técnicas (modernización tecnológica, semillas mejoradas e intensificación del uso del suelo, entre otras) que rindieron frutos y el sector comenzó a recuperarse en los

⁴⁵ Almario, *La configuración moderna del Valle del Cauca, 1850-1940*.

⁴⁶ Entre 1800 y 1940, fueron constituidos Alcalá, Sevilla, Ginebra, Caicedonia y Ulloa en la vertiente occidental de la cordillera Central y El Águila, Versalles, Argelia, Calima-Darién, Restrepo, El Cairo, Trujillo y El Dovio en la vertiente oriental de la cordillera Occidental. Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), *Patrones y campesinos*.

⁴⁷ Almario, *La configuración moderna del Valle del Cauca, 1850-1940*.

⁴⁸ El monocultivo de pino se ubica en las zonas medias de las cordilleras Central y Occidental, en zonas con bajas pendientes entre los 1.650 y los 2.150 metros sobre el nivel del mar. CNMH, *Patrones y campesinos*.

⁴⁹ *Ibíd.*

setenta. No obstante, esas innovaciones se financiaron a través de créditos y muchos campesinos no lograron acceder a ellos o no fueron capaces de pagarlos porque los cultivos no produjeron la rentabilidad esperada. La situación empeoró en 1974, cuando la plaga de la broca echó a perder los granos. Los campesinos se vieron obligados a entregar sus tierras a los bancos, venderlas o arrendarlas a terceros para cubrir las crecientes deudas; desesperados ante la falta de alternativas, terminaron engrosando la fuerza de trabajo de la industria azucarera o migrando a las ciudades⁵⁰.

Mientras la economía campesina de las montañas sufría por la crisis del café, la de la zona plana afrontaba la expansión del monocultivo de caña. Dado que el cultivo, la transformación y la comercialización de la caña requieren grandes extensiones de tierra, desde los años veinte los ingenios iniciaron un acelerado proceso de concentración de la tierra⁵¹ que absorbieron a través de adquisiciones o alquileramientos de las pequeñas y medianas propiedades que los terrazgueros⁵², campesinos y afrodescendientes ocupaban en las zonas planas, apetecidas porque no se inundaban en épocas de lluvias y habían sido mejoradas por sus ocupantes⁵³. Como se verá en el siguiente acápite, aunque muchas personas renunciaron a su tierra libremente a través del mercado y en función de cálculos financieros o de otro tipo, otras lo hicieron bajo coerción.

⁵⁰ Mina, *Esclavitud y libertad en el valle del río Cauca*.

⁵¹ «La industria azucarera, en su progresiva expansión del presente siglo [XX], ha absorbido 332 propiedades, con una superficie total de 47.049 plazas en el período de 1922-1953, en el cual la industria pasó de una a 22 factorías de azúcar centrifugado o refinado. De 1948 a la fecha [1954], ha aumentado en 8 el número de ingenios, mientras que en 1940 sólo existía 8 [...]. Esta expansión es más notoria a partir de 1940, lo que coincide con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. En ese año la adquisición promedio es ya de 1.700 plazas, alcanzando su máximo en los años de 1950 y 1951, cuyo promedio anual fue de 4.500 plazas. Las fincas que fueron base o punto de origen de los ingenios azucareros existentes suman una extensión de 18.664 plazas, que al ser incrementadas por las 47.049 plazas adquiridas posteriormente totalizan 62.633 plazas, descontadas 3.080 de tierra vendida para otros fines en el mismo lapso. De esta superficie se encuentra cultivada con caña el 62,93 % [...]. También domina esta industria 6.000 plazas alquiladas en todo el Valle geográfico del Cauca. De estas sólo 1.750 plazas corresponden al departamento del Valle y están cultivadas con caña en un 62,86 %. El promedio en área en estas fincas alquiladas es de 250 plazas». Mancini, «Tenencia y uso de la tierra por la industria azucarera del Valle del Cauca».

⁵² El terraje consistía en el pago que tenían que entregar los indígenas a los terratenientes, en trabajo o en especie, a cambio de vivir en un terreno de la hacienda llamado «encierro». A principios del siglo XX, como resultado de la expansión de la industria cañera, los hacendados empeoraron aún más las condiciones del terraje reduciendo el tamaño del «encierro», prohibiendo la siembra y cercando los terrenos.

⁵³ CNMH, *Patrones y campesinos*.

Tierra y violencia

Desde la época de la Violencia bipartidista e incluso años antes, durante las Quintiniadas (1915-1917)⁵⁴, en la región fue común la actuación de matones, escuadrones de la muerte, bandas e incluso pequeños ejércitos para atacar a los rivales políticos y económicos y desplazar a los pobladores campesinos, afrodescendientes e indígenas para despojarlos de la tierra. En Tuluá, por ejemplo, nacieron los Pájaros, liderados por León María Lozano alias el Cóndor. Este grupo, que irrumpía en los pueblos dando tiros al aire, con cantos a la Virgen del Carmen y arengas a favor del Partido Conservador, actuó por lo menos en 24 municipios del departamento: Alcalá, Andalucía, Ansermanuevo, Bugalagrande, Caicedonia, Candelaria, La Victoria, Obando, Pradera, Restrepo, Riofrío, Roldanillo, Cartago, Cerrito, El Águila, El Cairo, Florida, La Unión, Sevilla, Toro, Trujillo, Tuluá, Ulloa y Versalles⁵⁵.

Entre 1948 y 1957 los Pájaros dejaron una estela de violencia marcada por altas dosis de sevicia: asesinatos, masacres, amenazas, torturas, violaciones sexuales, desapariciones, robo y destrucción de propiedades. Las principales víctimas fueron campesinos liberales, obreros, sindicalistas y militantes comunistas, pero también indígenas que luchaban por tierra y autonomía. Los Pájaros contaron con el apoyo de algunos hacendados, ganaderos e industriales, así como de sectores de la Policía, autoridades oficiales locales y la Iglesia⁵⁶. Los integrantes de los Pájaros no provenían de las clases sociales campesinas, sino que en su mayoría eran funcionarios, propietarios de negocios y tierras e incluso eclesiásticos, lo que les otorgaba un cierto estatus económico y social⁵⁷. Estas profesiones u oficios no solo les permitían tener recursos y tiempo

⁵⁴ Las Quintinadas (1915-1917), colofón de los conflictos agrarios coloniales, comenzaron en el Cauca (específicamente en Tierradentro) como un levantamiento indígena en contra del terraje y se inflamaron hasta la reivindicación de la recuperación de las tierras ancestrales, la defensa de los resguardos y otros derechos indígenas e inclusive los llamados a una insurrección general. Aunque la rebelión se debilitó por las divisiones internas y fue desactivada a la fuerza por una alianza entre el Gobierno, los terratenientes (algunos de los cuales incluso conformaron grupos de civiles armados) e inclusive indígenas tránsfugas, los levantamientos de Quintín Lame sentaron las bases fundamentales para la larga lucha de los indígenas por la recuperación de la tierra que les fue arrebatada desde la Colonia y son, incluso hoy en día, uno de los principales referentes del movimiento indígena del Cauca.

⁵⁵ Guzmán Campos et al., *La violencia en Colombia*, tomos I y II.

⁵⁶ «Nosotros fuimos desplazados por ambos partidos, tanto Liberal y Conservador. El famoso credo era el que armaba [...]. Mandaban a matar la gente porque a los curas en la época les gustaba la guerra. Fuimos desplazados de Rozo por los chulavitas, que después les pusieron “detectives del DAS”, pero eran los chulavitas». Entrevista 216-VI-00109. Hombre, líder, sindicalista, Buga.

⁵⁷ Betancourt y García, *Matones y Cuadrilleros. Origen y evolución de la violencia en el occidente colombiano 1946-1965*.

libre para actuar, sino también relacionarse con gran cantidad de personas y recoger información sobre sus víctimas⁵⁸.

La arremetida a sangre y fuego de los Pájaros buscaba «conservatizar» la región. La violencia se concentró contra las poblaciones de mayorías liberales ubicadas en las áreas de colonización reciente sobre los flancos de las cordilleras con el objetivo de asegurar la hegemonía y la base electoral de los gamonales conservadores, cambiando las adhesiones políticas y las prácticas electorales de los pobladores⁵⁹. Las personas también eran amenazadas con ser excluidas de las redes clientelares y los «favores» de los gamonales. Los efectos fueron prácticamente inmediatos: mientras que en las elecciones legislativas de 1945, 1947 y 1949 solo tres municipios votaron por los conservadores, en las presidenciales de septiembre de 1949 únicamente cinco conservaron las mayorías liberales⁶⁰.

Esa pretensión conservatizante explica el auspicio explícito a los Pájaros por parte del Estado. En una reunión con representantes de los gremios, los ganaderos y hacendados celebrada el 28 de octubre de 1949, el gobernador conservador Nicolás Borrero planteó la creación de un cuerpo propio de policía compuesto «con unas trescientas unidades, pagadas y dotadas con fondos de los propietarios [...], esta policía dependería de una junta que presidiría el gobernador y que estaría integrada por varios ganaderos y agricultores del departamento». El gobernador ofreció «a los hacendados y agricultores que lo necesitaran y lo desearan, la facilidad de crear un cuerpo de vigilancia de sus respectivas propiedades, el cual tendría todo el respaldo de la autoridad y podría actuar en nombre de ella». Una vez legalizada y oficializada la policía privada, lo propio sucedió con los Pájaros: no en vano muchos de ellos eran expolicías y fueron asignados como protectores de fincas y haciendas. Borrero incluso llegó al extremo de imponer el poder civil para conseguir la neutralidad del Ejército en las zonas de actuación de los Pájaros. Una oleada de acciones violentas se desencadenó contra poblaciones de mayorías liberales después de estos actos del gobernador⁶¹.

Los Pájaros tuvieron vía libre para actuar con total impunidad. Además de que operaron siempre en zonas urbanas o semiurbanas y se movilizaban en vehículos en pleno día, los directorios locales del Partido Conservador asumieron o asesoraron la defensa judicial de varios de ellos y presionaron o corrompieron a testigos, fiscales,

⁵⁸ Rodríguez Machado, «Los pájaros y la violencia en Colombia. Un análisis desde la historia y la literatura».

⁵⁹ Los Pájaros «fueron utilizados para homogeneizar pueblos, para cambiar conciencias, para convertir a radicales liberales, para perseguir a protestantes, para atacar a masones y comunistas en una santa cruzada de las fuerzas del bien contra las dañinas fuerzas del mal. La utilización de los Pájaros fue partidista, electoral e ideológica, buscando, sobre todo, ejercer presión mediante el terror, no sólo contra liberales, sino contra todo aquello que a los ojos de los dirigentes conservadores, estaba en contra del orden, las instituciones, la nación y la Iglesia». Betancourt y García, *Matones y Cuadrilleros. Origen y evolución de la violencia en el occidente colombiano 1946-1965*, 109-10.

⁶⁰ CNMH, *Patrones y campesinos*.

⁶¹ Betancourt y García, *Matones y Cuadrilleros. Origen y evolución de la violencia en el occidente colombiano 1946-1965*.

jueces y otros miembros de la rama judicial para absolverlos, incluso ante pruebas fehacientes de sus delitos; a la par, hicieron lo mismo para ejercer presión judicial en contra de sectores liberales y comunistas⁶².

La cordillera Occidental, especialmente en el centro y el norte del departamento, se convirtió en el bastión azul. En la vereda Aures (Caicedonia, Valle) incluso existió un «Estado soberano» conservador que fue enfrentado bastante tarde, en contraste con lo que ocurría con las «repúblicas independientes» de influencia liberal y comunista en Tolima, los Llanos y otras zonas del país. Por su parte, los liberales se asentaron en las montañas de la cordillera Central, predominantemente hacia el sur del departamento. Guacarí, en la zona central del departamento, era el límite tácito que dividía el Valle liberal del conservador⁶³.

Ante la arremetida conservadora encabezada por la Policía y los Pájaros, desde 1955 se originó en el norte del Valle⁶⁴ una resistencia armada de cuadrillas liberales conformada principalmente por jornaleros, peones y pequeños comerciantes. Su condición de autodefensa les granjeó el apoyo de una base social de campesinos perseguidos por los conservadores e incluso recibieron refuerzos de otras cuadrillas liberales que operaban en Tolima y Quindío⁶⁵.

Sin embargo, con el desvanecimiento de la conflagración bipartidista, estos grupos armados mutaron. Desde 1957 o 1958, a raíz del establecimiento del Frente Nacional, y hasta bien entrada la década de los sesenta, los Pájaros y las cuadrillas liberales del Valle y parte del Eje cafetero entraron en la fase que varios analistas denominan el «bandolerismo tardío» o «bandidismo», caracterizado por la pérdida de su identidad y sus motivaciones políticas partidistas en favor de intereses puramente financieros⁶⁶. Pájaros y cuadrilleros prácticamente se convirtieron en sicarios que actuaban a cambio de un pago.

⁶² Quintero, «Los “pájaros” del Valle del Cauca».

⁶³ Entrevista 440-PR-00759. Experto, movimiento campesino.

⁶⁴ «Hubo tres factores que impidieron el desarrollo más temprano de la resistencia en el Valle: por un lado, casi toda la región occidental había sido dominada por las bandas de Pájaros entre 1949 y 1955, impidiendo así los esfuerzos de conformación de respuesta armada a la violencia. Por otra parte, la violencia conservadora había destruido toda la estructura organizativa del liberalismo y muchos de sus dirigentes se quedaron esperando las órdenes de la Dirección Nacional Liberal; y finalmente, agrupaciones como el Partido Comunista eran relativamente débiles en la cordillera valluna, único lugar seguro para consolidar una acción armada [...]. El norte del Valle ofrecía condiciones muy propicias para la estructuración de la resistencia armada, ya que además de los grandes conjuntos montañosos constituyentes de los paisajes naturales del Tolima y el Quindío, la región concentraba un número reducido de grandes poblaciones en comparación con el centro del Valle. Podría decirse que había allí una estructura de menor desarrollo capitalista, o lo que es igual, de carácter más rural». Betancourt Echeverry, «Las cuadrillas bandoleras del norte del Valle, en La Violencia de los años cincuenta», 59.

⁶⁵ *Ibíd.*

⁶⁶ *Ibíd.* Sánchez y Merteens, *Bandoleros, gamonales y campesinos*; Delgado, *El bandolerismo en el Valle del Cauca 1946-1966*.

Algunos sectores de las clases altas y medias (gamonales, jefes partidistas, hacendados, finqueros y comerciantes tanto liberales como conservadores) contrataron a esas bandas armadas para defender sus propiedades, resolver conflictos locales, homogeneizar políticamente el territorio, imponer tributos en dinero o en especie (por ejemplo, cargas de café o animales), presionar la compraventa de tierras o mercancías a menor precio o sacar a la gente del territorio para apropiarse de la tierra con el fin de acapararla, negociarla, asentar copartidarios o destinarla a cultivos agroindustriales o a la ganadería. Exintegrantes de las cuadrillas liberales comenzaron a atacar a los campesinos liberales, al igual que muchos antiguos Pájaros violentaron a campesinos conservadores. Pese a todo, algunos campesinos las siguieron apoyando, bien fuera por temor, por simpatía o porque eran las únicas defensas ante las agresiones de las bandas contrarias⁶⁷. Un líder afrodescendiente vallecaucano le contó a la Comisión cómo vivió su familia la situación en esa época:

«Entonces los ingenios aprovecharon un poquito esta situación del bipartidismo liberal y conservador de la década del cuarenta [...]. Los ánimos estaban muy tensiionados; mi abuelo y mi papá comentan que tenían que irse a dormir a los montes [...]. Después de la época de la Violencia esta situación fue tan compleja que allí murieron muchos hombres, porque muchos negros, mirando la posibilidad de vida, se alinearon al Partido Conservador [...]. “Darle dedo” a los otros negros significó que mucha gente no volvió a tener la tierra y los ricos, que eran los que manejaban el poder en ese momento, se quedaron con la tierra»⁶⁸.

Los Pájaros, los cuadrilleros y los bandidos despojaron a pobladores campesinos, indígenas y afrodescendientes tanto de las zonas planas como de ladera desde finales de los años cuarenta hasta bien entrados los sesenta. Sus principales mecanismos fueron la violencia directa, la coartación económica y el engaño. La primera funcionó a través de amenazas, intimidaciones, asesinatos y masacres:

«La cuestión que se utilizaba como procedimiento era “yo se los aburro”. Eso era que, ya cuando la persona iba a visitar su finca, encontraba que a la entrada [...] tenía una calavera pintada y estaba la cuestión de la amenaza de que la persona se fuera; si la persona no se aburría con eso, entonces ya le mataban el agregado, y si eso no bastaba entonces ya iban y mataban la peonada, y entonces esa persona terminaba vendiendo la tierra»⁶⁹.

La coartación económica consistió en afectar la capacidad productiva de la tierra: cercaban o bloqueaban caminos veredales, desviaban o secaban las fuentes hídricas y dañaban los cultivos y el suelo con fuego o sustancias tóxicas. También atacaban los bienes de

⁶⁷ Betancourt Echeverry, «Las cuadrillas bandoleras del norte del Valle, en La Violencia de los años cincuenta».

⁶⁸ Entrevista 1036-PR-02315. Víctima, líder afrodescendiente, norte del Cauca.

⁶⁹ Entrevista 336-PR-00343. Experto, académico.

los campesinos y robaban o mataban sus animales para obligarlos a irse o vender⁷⁰. Por otro lado, muchos terratenientes, amparados por políticos locales y otros funcionarios corruptos, acudían a la justicia y la Administración pública para quedarse con la tierra de los indígenas o los colonos a través de artimañas legales como títulos o contratos falsos o adulterados. Prácticas similares se han mantenido hasta la actualidad y han afectado tanto a los campesinos mestizos como a las comunidades indígenas y afrodescendientes. Así lo describió un mayor entrevistado por la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc) en un informe entregado a la Comisión:

Había intermediarios para engañar a los viejitos, arrendaban sus tierras y les hacían un documento falso; al tiempo, el viejito se moría y los herederos iban a reclamar, y el día que iban a reclamar les presentaban una escritura, vea, ya habían hecho escritura por aparte. Entonces se quedaron con esos terrenos⁷¹.

En suma, bajo el estruendo de las carabinas de Pájaros y bandoleros y el esplendor de la agroindustria, el suroccidente comenzó un profundo reacomodo de las clases sociales⁷² y la estructura de la tierra desde los años cincuenta. Pese a las dificultades para medirla con certeza, los datos disponibles muestran claramente el proceso de concentración de la tierra que se dio en el Valle y el Cauca desde esa época. Hacia 1955, la estructura de la propiedad en el Valle tenía una configuración multimodal, con predominio de la pequeña y mediana propiedad: de 99.098 fincas, solo 482 tenían entre 100 y 500 hectáreas y constituían el 0,5 % del total; las fincas entre 50 y 100 hectáreas representaban el 3,9 %; las de 5 a 50 hectáreas representaban el 42,2 % y el 49 % tenían menos de 5 hectáreas. La mayoría de los pequeños propietarios carecían de títulos, por lo cual presentaban una gran vulnerabilidad frente al despojo de tierras. En 1977 ya se veían los cambios en el uso del suelo en el departamento: la pequeña propiedad (explotaciones de menos de 20 hectáreas) representaba apenas el 11,31 % del área de explotación agrícola, mientras que la gran propiedad (mayor a 500 hectáreas) pasó del 24,62 % del área en 1960 al 33,67 % en 1977. En este contexto de transformación, los predios más grandes destinaron la mayoría del suelo a los cultivos permanentes (principalmente caña y café), las plantaciones forestales y la ganadería (tres cuartas partes del suelo se destinaba a pastos)⁷³.

⁷⁰ Entrevista 230-VI-00083. Víctima, campesino, centro Valle del Cauca.

⁷¹ Informe 1180-CI-01017. Aconc, «Memoria del conflicto y resistencia del pueblo negro y afrodescendiente del norte del Cauca», 54.

⁷² Aunque la economía colonial fue sepultada por el nuevo paradigma económico, el modelo del latifundio, basado mayoritariamente en el trabajo en condiciones precarias y donde la propiedad de la tierra era fuente de prestigio y poder, influyó decisivamente en el carácter de hacendados, industriales azucareros, campesinos y trabajadores y en sus consecuentes posiciones frente a la relación con la tierra y la jerarquización de la sociedad. CNMH, *Patrones y campesinos*.

⁷³ *Ibíd.*

Otros datos, como el coeficiente de Gini⁷⁴, muestran también la desigualdad en la distribución de la tierra en la región. En el año 2000, el índice del Valle era de 0,8429 y el del Cauca era de 0,7579. En ese entonces, en el Valle apenas el 5 % de los propietarios poseía el 64,3 % de la tierra, al tiempo que en el Cauca el 61,5 % de la tierra estaba en manos también de 5 % de los propietarios. En general, en ese momento en Colombia el 10 % de los propietarios tenían el 80 % de la tierra. En las últimas décadas la situación no ha variado demasiado: en 2011 se calculaba que en el Valle el 80 % de la tierra estaba en manos del 11,5 % de los propietarios. Puede establecerse una relación directa entre la alta concentración de la tierra en el país con la prolongación de los conflictos agrarios de los siglos XIX y XX, el narcotráfico y el conflicto armado, en el que los intereses de guerrillas, paramilitares, mafias, empresas y el propio Estado han provocado el desplazamiento forzoso de la población civil⁷⁵.

La concentración de la tierra que se dio en el valle geográfico del río Cauca desde mediados del siglo XX provocó tres procesos simultáneos: la expulsión de campesinos, afrodescendientes e indígenas de la planicie hacia las laderas cordilleranas⁷⁶, la «proletarización» de las poblaciones rurales y la transformación del uso del suelo en la región. Los variopintos cultivos tradicionales de la zona plana y la ganadería a pequeña escala fueron reemplazados rápidamente por cañaduzales. Algunos campesinos y hacendados pequeños o medianos que contaban con recursos para quedarse, pero no suficientes para montar ingenios, se convirtieron en proveedores de materia prima para la agroindustria. Sin embargo, el grueso de los campesinos, antes propietarios y productores asociados a mercados locales, se convirtieron en colonos en las zonas montañosas o en asalariados de los ingenios y las plantaciones comerciales en tierras que otrora fueron suyas. Y otros dejaron todo atrás y partieron hacia las ciudades.

El caso del cacao es ilustrativo del impacto del monocultivo sobre las comunidades campesinas y afrodescendientes. Mientras que en 1949 en el norte del Cauca se producían 6.036 toneladas de cacao seco, para 1960 se producían menos de 900; de igual forma, se pasó de 6.000 hectáreas cultivadas de cacao a 4.230. Mientras tanto, en el sur del Valle se pasó de 2.338 toneladas de cacao a 2.099 toneladas y de 8.000 hectáreas a 4.664 en el mismo periodo. Algunos campesinos afrodescendientes intentaron cultivar caña para los ingenios accediendo a créditos bancarios, pero no pudieron pagarlos y terminaron perdiendo la tierra⁷⁷. La sustitución del cacao por caña fue un

⁷⁴ El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, donde 1 corresponde a la desigualdad absoluta y 0 corresponde a la perfecta igualdad. Suele utilizarse para medir la desigualdad en los ingresos monetarios, pero sirve para mostrar cualquier tipo de desigualdad, como la de la distribución de la tierra.

⁷⁵ Del Pilar y Cepeda, «Concentración de la tierra en Colombia».

⁷⁶ Entrevista 216-VI-00126. Líder social, sur del Valle, campesino.

⁷⁷ Así lo explicó un informe entregado por la Asociación Comunitarios del Norte del Cauca (Aconoc) a la Comisión: «Comienza así, en la segunda mitad del siglo XX, el auge de la industrialización

revés para la economía local que ocupaba la mano de obra liberada que no se insertó en las dinámicas de las haciendas. También truncó el ascenso social y económico de una pequeña élite negra que se estaba configurando con el comercio de cacao e impidió el afianzamiento de sistemas productivos locales que pudieron contribuir al desarrollo económico y la soberanía alimentaria de las comunidades afrodescendientes⁷⁸.

Paradójicamente, al tiempo que la agroindustria expulsaba gente a las montañas y las ciudades, atraía a miles de personas que estaban buscando oportunidades. Hacia 1974, seis grandes ingenios empleaban a más de 6.000 personas en labores de corte y 7.200 en alza de caña⁷⁹. Debido a las olas migratorias estimuladas por la Violencia bipartidista y la industrialización, ciudades secundarias del sur del Valle como Palmira, Jamundí y Yumbo crecieron rápidamente desde los años cincuenta. De igual forma, Cali se expandió hacia las periferias. Algo similar ocurrió en municipios del norte del Cauca cercanos a la capital del Valle como Puerto Tejada, Villa Rica, Miranda, Santander de Quilichao, Caloto y Corinto. Las personas migrantes generalmente se establecieron en las zonas marginales de esos núcleos urbanos, donde tuvieron que enfrentar condiciones socioeconómicas adversas y una irrisoria oferta institucional. No en vano allí anidaron las primeras luchas por la vivienda y por servicios públicos básicos y en los ochenta se convirtieron en los lugares predilectos de las guerrillas.

En Cali, las primeras oleadas de poblamiento en los cincuenta y parte de los sesenta encontraron algunas áreas apropiadas para construcciones residenciales en las laderas del oriente y el occidente de la ciudad. Por el contrario, los nuevos pobladores que llegaron a finales de los setenta, en un momento de tercerización de los empleos, desaceleración industrial y aumento de precios, tuvieron que lanzarse a la ocupación de nuevos terrenos para vivienda, muchos de los cuales eran ejidos municipales, fincas privadas o zonas altas de difícil acceso e inseguras⁸⁰. El auge de la caña y las industrias asociadas estimuló también una ola migratoria de población afro proveniente del Pacífico (principalmente de Buenaventura y la costa caucana y nariñense). Detrás de ese trasegar, sin embargo, hubo profundas rupturas sociales: «eran hombres en su mayoría los que migraban, las mujeres no eran las que tomaban iniciativa de migrar;

azucarera, que se asentó justo en el norte caucano y por su carácter expansivo redujo de manera gradual la tenencia de la tierra entre la comunidad negra, generando la pérdida de su autonomía y liderazgo regional. Ese despojo se logró mediante contratos de arrendamientos a cambio de cubrir deudas en la Caja Agraria y pagos en azúcar por períodos superiores a 10 años. Se estima que decenas de personas pasaron de propietarios a corteros de caña». Informe 1180-CI-01017. Aconc, «Memoria del conflicto y resistencia del pueblo negro y afrodescendiente del norte del Cauca».

⁷⁸ Mina, *Esclavitud y libertad en el valle del río Cauca*.

⁷⁹ Rojas, *Sociedad y economía en el Valle del Cauca. Tomo V. Empresarios y Tecnología en la formación del sector azucarero en Colombia 1860-1980*.

⁸⁰ Holguín, «Generaciones de militantes y accionar colectivo del Movimiento 19 de Abril, Cali-Colombia 1974-1985», 1974-85.

ellas empiezan a migrar posteriormente como mujeres del servicio doméstico [...]. El Pacífico empieza a perder la integridad de su composición familiar»⁸¹.

Por la tierra, el trabajo y la educación

El ambiente de conflictividad social en el campo y la ciudad, sumado al contexto internacional, le dio un nuevo aire a la organización y movilización social que había germinado en los años treinta, cuando nacieron las primeras organizaciones obreras y sindicales asociadas con sectores liberales, gaitanistas y comunistas. En ese entonces surgieron sindicatos como la Federación de Trabajadores del Valle del Cauca (Fedetav, 1935), la principal organización obrera de la región que en los años cuarenta agrupó 70 sindicatos de los 120 existentes en el Valle, y también se destacó el sindicato del Ferrocarril del Pacífico, que agrupaba 5.000 afiliados. Estas organizaciones habían llevado a cabo manifestaciones importantes, como la huelga de noviembre de 1946.

Los primeros sindicatos de la industria cañera nacieron en los ingenios de Riopaila (1944), Manuelita y Providencia (1945), luego, en 1954 se creó el sindicato de Central Castilla, en 1955 el sindicato del ingenio Meléndez y en 1956 el de Papayal. La Iglesia católica, particularmente de la mano de los jesuitas, promovió la conformación de sindicatos y cooperativas en el Valle. En 1946 participó en la creación de la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC), un sindicato de orientación católica y conservadora que posteriormente se integró a la Federación Agraria Nacional (Fanal). Los jesuitas también lideraron la creación de la Juventud Obrera Colombiana (JOC), la Universidad Obrera en Cali y el Instituto Mayor Campesino (IMCA) en 1962⁸².

A pesar del resquemor de gamonales y sectores de las élites políticas y económicas que percibieron que la Iglesia les estaba disputando el poder local, la institución continuó con la formación de líderes obreros y campesinos. Amparado en un discurso político y pastoral de promoción de valores cristianos asociados con la organización y pacificación del campo, el apoyo eclesiástico a sindicatos, cooperativas y otras formas de organización buscaba mitigar la agitación social y política derivada de los enfrentamientos entre obreros y patronos de la agroindustria —que se veía como un efecto de la expansión del comunismo internacional— y contrarrestar la organización sindical de orientación comunista⁸³, notoria en los sindicatos de los ingenios azucareros que habían

⁸¹ Entrevista 431-PR-00066. Experto, académico, Pacífico.

⁸² CNMH, *Patrones y campesinos*.

⁸³ «Sindicatos, cooperativas y Juntas de Acción Comunal configuran el panorama de las organizaciones con participación campesina, constituidas en el Valle rural desde 1958 hasta 1968 con el patrocinio directo de la Iglesia y particularmente de los jesuitas. El objetivo era hacerlas converger en Fanal para

impulsado importantes movilizaciones como la «marcha del azúcar» que emprendieron los trabajadores desde Palmira hasta Cali en agosto de 1959⁸⁴. Ciertamente, aunque varios sindicatos estaban afiliados a la conservadora Unión de Trabajadores de Colombia (UTC), muchos otros hacían parte de la Central de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC) del Partido Comunista. Entre 1958 y 1967 surgieron en el Valle 38 sindicatos y 10 cooperativas de trabajadores agrícolas, aunque la mayoría tuvieron corta vida y poca actividad. En los años setenta se observaron los índices de sindicalización más altos; por ejemplo, en 1974 el 53 % del personal de las grandes y medianas industrias azucareras estaba sindicalizado⁸⁵.

Un punto central de las luchas sindicales ha sido la oposición a la mecanización de las fases del proceso productivo de la caña, ya que, si bien ha aumentado la productividad y ha rebajado los costos de las labores de cultivo, corte, producción y transporte, ha traído consigo la sustitución de mano de obra. Pese a la cautela de los industriales a la hora de introducir maquinaria en la fase de corte (la que requiere mayor número de trabajadores) y a los intentos por mejorar las condiciones económicas y sociales de los corteros, desde finales de los años cincuenta venían aumentando las protestas⁸⁶.

Uno de los puntos más álgidos de la movilización sindical fue el paro transcurrido entre noviembre de 1975 y febrero de 1976⁸⁷. El 14 de noviembre un grupo de trabajadores de la empresa Riopaila declaró un paro en toda la empresa arguyendo una supuesta violación de la convención laboral. Tres días después el Ministerio de Trabajo declaró ilegal la huelga y le reconoció a Riopaila el derecho de despedir a

que cumplieran finalmente el objetivo de fortalecer el sindicalismo conservador, representado regionalmente en Utraval [Unión de Trabajadores del Valle], y hacerle contrapeso al auge del movimiento sindical orientado por Fedetav». Escobar, *Experiencia de organización campesina en el Valle del Cauca*, 35.

⁸⁴ El 14 de agosto de 1959 se llevó a cabo una marcha de cerca de 10.000 manifestantes que partió en horas de la tarde desde Palmira con destino a Cali para reclamar del presidente Lleras Camargo, quien se encontraba en la Gobernación del Valle, el derecho de realización de acciones solidarias con los trabajadores en conflicto y explorar el reintegro de los trabajadores despedidos en huelgas anteriores. Se paralizó la producción en catorce ingenios y en seis fábricas en Cali y se estima que participaron 50.000 trabajadores. Sánchez, «Las iras del azúcar: la huelga de 1976 en el Ingenio Riopaila».

⁸⁵ CNMH, *Patrones y campesinos*.

⁸⁶ «En 1936 adelanta la primera huelga reivindicativa, en que los trabajadores son reprimidos, despedidos y la misma policía se encarga de sacarlos de los campamentos. No hay otras manifestaciones hasta 1944, año en que se crean nuevos sindicatos con patrocinio de las empresas y que en palabras de un sindicalista azucarero se hacen para “montarse en las organizaciones laborales de los ingenios” [...]. En 1953 el sindicato [Manuelita] presenta un pliego, y en 1956 toda la Junta Directiva es encarcelada y permanecen 83 días en presidio. En 1960 los trabajadores del Ingenio Papayal pararon sus labores durante cinco meses buscando librarse de la tutela patronal. En 1964 estalla una huelga en la hacienda San José, propiedad de Manuelita, en 1966 en el Ingenio Arado y en 1969 en Papayal por despidos injustificados. En pequeñas industrias paneleras también se presentaron algunos paros durante los sesenta». Sánchez, «Las iras del azúcar: la huelga de 1976 en el Ingenio Riopaila», 39.

⁸⁷ *Ibid.*

todos aquellos trabajadores que persistieran en el paro por cualquier causa, incluyendo a los directivos con fuero sindical. El 18 de noviembre la empresa presentó ante el Inspector del Trabajo de Tuluá una solicitud para despedir 140 trabajadores, la cual fue autorizada. También instó mediante boletines y radiodifusión a los trabajadores a regresar sus labores, advirtiendo que si persistían en la rebeldía y el desacato a la ley se cancelarían los contratos y se incorporaría nuevo personal. Ante el rechazo de los trabajadores, la empresa canceló el contrato de 298 de ellos; también se congelaron los fondos y se canceló la personería jurídica del Sindicato de la Industria del Dulce de Utraval (SID).

Además de las medidas legales, el paro fue reprimido militarmente. La noche previa a la declaración del paro, un contingente de 500 soldados del Batallón Tesorito (ubicado en Zarzal, Valle del Cauca) y 300 agentes de la Policía y el DAS se movilizaron para controlar el orden público cercando las instalaciones de la empresa y las poblaciones vecinas. Funcionarios de la empresa e integrantes de la fuerza pública intimidaron a los trabajadores leyendo las disposiciones gubernamentales sobre el estado de sitio y endosándoles la responsabilidad de lo que ocurriera. Los huelguistas, junto con los activistas solidarios que fueron llegando de otras zonas del país, fueron vigilados o detenidos. Según los trabajadores, 800 de ellos fueron despedidos (pues los obreros de otros ingenios fueron echados aprovechando la ilegalización del sindicato), aunque Riopaila solo reconoció 488 despidos.

Entre enero y febrero de 1976 la situación escaló. Los comités de base y los sindicatos azucareros, a los que se unieron estudiantes y otros colectivos (como trabajadores de las empresas Sofasa de Medellín, Anchicayá de Cali, Aluminio Alcán de Cali, Tejidos Única de Manizales, IMPA de Palmira, Cicolac de Bugalagrande, el Comité Intersindical del Valle, Sintrapopular y Sidelpa, entre otras), agudizaron las protestas a través de «cadenas humanas», barricadas, pedreas, mítines y enfrentamientos con la fuerza pública. El 19 de enero de 1976, como resultado de violentos choques ocurridos en La Paila cuando la fuerza pública intentaba despejar la carretera central que había sido bloqueada por centenares de huelguistas que exigían el reintegro de los trabajadores despedidos, un agente de policía y dos obreros murieron y resultaron heridos 35 civiles y cinco agentes. Bugalagrande, Roldanillo, Zarzal y La Paila fueron militarizados y el 16 de febrero de 1976 se convocó un Consejo Verbal de Guerra a órdenes de la Tercera Brigada y del juzgado 76 de Instrucción Penal Militar, bajo la acusación de asonada, incendio y asociación para delinquir. Los trabajadores no aguantaron la presión y el paro cedió a finales de febrero de 1976.

La dinámica del movimiento sindical popular llevó a la conformación del sindicalismo empresarial, que tenía el objetivo de quebrar el liderazgo ejercido por los sindicatos de izquierda. Desde mediados de la década de los setenta, los gremios agroindustriales implementaron otras estrategias para prevenir la cristalización de un movimiento sindical unificado en el valle geográfico del río Cauca. Paralelamente, las actividades políticas de los obreros y su cooperación con los sectores campesinos

y étnicos en torno al cuestionamiento de los poderes patronales fueron objeto de estigmatización⁸⁸, persecución y coerción, como sucedió con los obreros despedidos por participar en el paro de 1975. Todas esas medidas dieron resultado, pues el sindicalismo se atomizó y prácticamente desaparecieron las huelgas. La organización y movilización de los asalariados de la agroindustria apenas comenzó a recomponerse en los ochenta⁸⁹.

Otro actor clave para la organización social fueron las juntas de acción comunal (JAC), creadas mediante la Ley 19 de 1958. Entre 1961 y 1966 se constituyeron 720 JAC en todo el Valle, aunque muchas se disolvieron rápidamente, al igual que los sindicatos y las cooperativas. Muchas de ellas se vincularon a la Fanal y con ello el sindicalismo conservador tomó más fuerza en el departamento. Además tuvieron un apoyo fuerte por parte de la Iglesia católica (particularmente de la Arquidiócesis de Cali, las Diócesis de Buga y Cartago y la Acción Católica del Valle, liderada por los jesuitas), que vio su potencial para contribuir a la labor de pacificación de las zonas rurales. Las JAC intervinieron y cuestionaron el manejo político de los gamonales y líderes tradicionales, a la vez que sirvieron de intermediarios entre el Estado, los partidos políticos y las comunidades rurales⁹⁰.

La organización social tuvo otro impulso en 1962 con la conformación de la Asociación de Agricultores del Norte del Valle (Asgrinov). La organización tuvo el respaldo del sindicalismo independiente que no concordaba con los modelos de organización y acción promovidos por el sindicalismo conservador y la Iglesia católica. Su base social estaba conformada en su mayoría por jornaleros sin tierra, razón por la cual presionaron por la expedición de leyes y políticas de reforma agraria y promovieron la ocupación de predios localizados principalmente sobre la margen derecha del río Cauca. Estas acciones beneficiaron a cerca de mil familias, pero para 1967 prácticamente todas habían sido desalojadas. En los años setenta, esta organización estuvo detrás de los paros y protestas emprendidas por los trabajadores del algodón en Zarzal, Cartago y Sevilla, en las cuales participaron aproximadamente 30.000 trabajadores, a pesar de que la asociación solo contaba con 1.200 afiliados. Pese a todo, la Asgrinov no tuvo mucho éxito en su lucha por el mejoramiento de

⁸⁸ Por ejemplo, en medio de las negociaciones en torno a la convención colectiva entre trabajadores y la empresa Riopaila en 1975, la gerencia afirmó en un comunicado público que al interior de la empresa jamás se había declarado una huelga legal, pues los trabajadores no habían presentado pliegos de peticiones como lo estipulaba el Código Laboral. La empresa enfatizó que, pese a que la convención colectiva negociada era una de las más amplias y generosas en la industria azucarera y en otros sectores de la producción nacional, se implantó por parte del sindicato y de los trabajadores la costumbre de realizar paros de actividades para respaldar cualquier exigencia, lo cual coincidía con consignas de dirigentes de la extrema izquierda revolucionaria. Sánchez, «Las iras del azúcar: la huelga de 1976 en el Ingenio Riopaila».

⁸⁹ CNMH, *Patrones y campesinos*.

⁹⁰ *Ibíd.*

la remuneración para los trabajadores y la instalación de almacenes para la comercialización de productos agrícolas y pecuarios. La persecución y el asesinato de los líderes campesinos, sumadas a la represión de sus actividades debido a su orientación política y composición, condujeron a su desaparición hacia finales de la década de los sesenta⁹¹.

En 1970 se fundó en Corinto el Frente Social Agrario (Fresagro) para agrupar a los campesinos pobres del norte del Cauca. Asimismo, en diciembre de 1976 nació la Federación Nacional Sindical Agropecuaria (Fensa), que en 1987 pasó a llamarse Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), una importante organización que hoy en día reúne sindicatos y asociaciones de pequeños agricultores en 22 departamentos de Colombia.

La creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) al principio despertó recelo entre los liderazgos campesinos⁹², pero pronto se ganó un lugar importante entre las organizaciones del suroccidente. En agosto de 1967 se inició la campaña de organización en el Valle, que contaba con un potencial de 80.000 inscripciones, si bien se recibieron casi 51.000. La organización promovió tomas de tierras a lo largo de los años siguientes. Sin embargo, a diferencia de otras zonas como el Cauca, estas acciones no tuvieron mayor incidencia en el Valle. Los jornaleros y minifundistas que ocuparon fincas en la zona plana de Candelaria, Zarzal, San Pedro y otros municipios fueron desalojados por la fuerza pública y acusados por los dirigentes políticos y los terratenientes de estar influenciados por los comunistas. La ANUC también apoyó paros y movilizaciones de otras organizaciones campesinas y sindicatos. A finales de los setenta, la ANUC perdió fuerza como corolario no solo de la violencia, sino también de la decepción que produjo en las bases campesinas la crisis general de las organizaciones campesinas y los conflictos ideológicos y políticos internos de la ANUC, ligados sobre todo a la orientación del trabajo social campesino y su relación con el Estado⁹³.

El movimiento estudiantil también tomó fuerza al final de los años sesenta y principios de los setenta. En esa época el sector educativo llevó a cabo varias movilizaciones y protestas en favor de la educación pública de calidad y masiva; la democratización interna de los planteles educativos; la defensa de lo público ante las privatizaciones y la injerencia de Estados Unidos (a través del Plan Atcon y los cuerpos de paz) y la apertura democrática del régimen político, entre otras consignas. El punto más alto de la movilización estudiantil se alcanzó en febrero de 1971, cuando todos los sectores

⁹¹ *Ibíd.*

⁹² Líderes de Fanal, Asgrinov y otras organizaciones veían a la ANUC y las JAC como una estrategia para organizar, canalizar y desactivar las demandas del campesinado desde el Estado, subrogando la alianza entre sectores populares (obreros, campesinos, pueblos étnicos y estudiantes).

⁹³ CNMH, *Patrones y campesinos*.

educativos (universitario, secundario y técnico) entraron en paro y se unieron a la protesta de los estudiantes de la Universidad del Valle.

Los años sesenta y setenta también fueron significativos para la organización y la movilización indígena caucana. Las primeras organizaciones, fundadas a comienzos de los sesenta, eran de carácter cooperativo, como la Cooperativa Agraria de Paniquitá, la Cooperativa Agraria de Las Delicias o el Sindicato del Oriente Caucaño. Luego, en los setenta, comenzaron a surgir entidades con carácter más político, como el Frente Social Agrario (Fresagro) y el Movimiento de Unidad Popular, que llegó a conseguir representación en el Concejo de Corinto⁹⁴. Tras un periodo de trabajo conjunto con la ANUC y otras expresiones campesinas, las comunidades indígenas tomaron un camino propio⁹⁵. El resultado fue la creación del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la organización indígena más importante del departamento y del país, líder en la lucha indígena por la recuperación de la tierra, la autonomía, la cultura y la paz. La organización nació el 24 de febrero de 1971 en el marco de una asamblea celebrada en Toribío con representantes de Fresagro y varios resguardos (Toribío, Tacueyó, San Francisco, Jambaló, Guambía, Totoró y Pitayó). El 6 de septiembre del mismo año se llevó a cabo otra reunión en Tacueyó a la que se sumaron delegados de Paniquitá, Poblazón y Puracé y se aprobó la plataforma de lucha que aún conserva la organización⁹⁶. Así describió el proceso el CRIC en un informe entregado a la Comisión:

[Como] resultado de la incidencia externa en el proceso organizativo campesino e indígena, hubo una separación que ustedes seguramente conocen. Una separación dentro del proceso de la ANUC y después hay un proceso de separación de los indígenas que estábamos al interior del movimiento campesino [...]. Es producto de la situación que vivían nuestras comunidades, fundamentalmente porque no había tierra para trabajar y sí había terrajeros de los principales terratenientes del país, en este caso, del departamento del Cauca. Por eso la creación del CRIC no surge solo de los cabildos de la época, no surge como iniciativa exclusiva de los indígenas, surge por iniciativa conjunta al interior del proceso campesino y junto con compañeros

⁹⁴ CNMH, *Nuestra vida ha sido nuestra lucha. Resistencia y memoria en el Cauca indígena*.

⁹⁵ Así lo relató un comunero en un informe entregado por el CRIC a la Comisión: «A mediados del siglo pasado, más o menos en los sesenta, setenta, se da un auge muy importante de lo que es la organización campesina, más concretamente la ANUC [...]. En ese tiempo no había organización indígena, sino que había organización campesina, pero ahí comenzaron los mayores a pertenecer a esos espacios, a esas directivas de ANUC [...]. Los mayores se pegaron ese proceso, avanzaron sobre ese proceso en unidad con los sectores campesinos y luego se dieron cuenta, pienso yo, que analizaron la posibilidad de constituir una organización indígena». Informe 651-CI-01452. Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Informe 651-CI-01452, Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), «Entonces, ¡hablamos! Afectaciones del conflicto político armado a los pueblos indígenas que conforman el Consejo Regional Indígena del Cauca», 50.

⁹⁶ CNMH, *Nuestra vida ha sido nuestra lucha. Resistencia y memoria en el Cauca indígena*.

no indígenas; aquí recordamos la convocatoria de Gustavo Mejía, del padre Pedro León Rodríguez, del compañero Luis Ángel Monroy y del compañero Pablo Tatay, entre otros. De esas convocatorias surge el movimiento indígena⁹⁷.

Durante los setenta, los ochenta y los noventa, la lucha indígena, que hasta ese momento había estado fragmentada, combinó varios elementos: la defensa de la tierra; la lucha por la autonomía, expresada en el rechazo a la injerencia del Gobierno y los grupos armados; el repudio a la violencia desatada contra las comunidades indígenas y sus autoridades; y un proceso de configuración de organizaciones políticas independientes que aprovecharon las oportunidades que se abrieron como resultado de las transformaciones del régimen político. Los principales objetivos de la movilización durante esta etapa fueron la recuperación de las tierras ancestrales y un proceso de reconstrucción identitaria que incluyó el fortalecimiento de las autoridades tradicionales y la restauración de valiosos rasgos culturales, como la lengua, las creencias, las costumbres y la historia⁹⁸.

La lucha indígena por la tierra tuvo tres componentes: primero, uno institucional, bajo el cual se buscó la reforma agraria a través de los marcos normativos y de entidades como el Incora; segundo, uno de organización comunitaria local, liderado principalmente por las víctimas de despojo; y tercero, uno de ocupación de la tierra a través de las acciones de hecho, bajo las cuales nutridos grupos de indígenas, generalmente en horas de la noche, entraban a las haciendas, se asentaban, dividían los terrenos (parte para el cabildo y parte para el usufructo particular de los comuneros) y comenzaban a cultivarlos⁹⁹. Una lideresa del norte del Cauca recreó las condiciones que llevaron a los indígenas a emprender esa estrategia durante los setenta:

«Esta tierra había quedado en manos de terratenientes, los Mosquera, los Chaux, los Valencia [...], se tomaron los predios y vivieron aquí, y la gente que vivía en estas tierras tenía que servirles a ellos solo por existir aquí [...]. Entonces las familias de aquí empezaron a vivir en los picos de la montaña, ya no podían cultivar, no podían tener animales y vivían con la ovejita colgada en un lechero, en una mata que se llama lechero; pasaron mucha hambre. Ya fue el extremo total de esas violencias que se vivieron. Entonces por eso se hizo el levantamiento [para] que recuperáramos estas tierras: ¡hay que recuperarlas!»¹⁰⁰.

Incluso hasta el día de hoy, las polémicas y tensiones alrededor de la recuperación de tierras son particularmente agudas. Pese a las opiniones divididas, para el grueso del

⁹⁷ Informe 651-CI-01452. Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), «Entonces, ¡hablamos! Afectaciones del conflicto político armado a los pueblos indígenas que conforman el Consejo Regional Indígena del Cauca».

⁹⁸ CNMH, *Nuestra vida ha sido nuestra lucha. Resistencia y memoria en el Cauca indígena*.

⁹⁹ *Ibíd.*

¹⁰⁰ Entrevista 059-PR-00004. Mama Misak, exautoridad.

movimiento indígena y campesino la toma de tierras es una estrategia legítima para recuperar la tierra arrebatada a través de la fuerza y los engaños por terratenientes y empresas incluso desde la época de la Colonia. Particularmente para los indígenas, la idea de «liberación de la tierra» no solo consiste en recuperar el terreno, sino en rescatar y proteger los espacios de vida en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. Es una apuesta desde la identidad y la tradición para oponerse y plantear alternativas al sistema moderno-capitalista, basado en la explotación de la naturaleza, la industrialización, la desigualdad y la acumulación de riqueza, en ocasiones apuntaladas por la violencia¹⁰¹.

En contraposición, los propietarios que se ven afectados por estas acciones, las autoridades públicas y parte de la opinión hablan de invasión, expropiación y saqueo, entre otras ideas, ya que las entienden como acciones ilegales, ilegítimas y violentas que atentan no solo contra la propiedad privada y otros derechos, sino también contra el orden público y el desarrollo económico. Consideran que esas tierras se tornan improductivas y que se pierden las garantías para la inversión pública y privada. Las posiciones más radicales dentro de este sector incluso aseveran que se trata de estrategias subversivas y comunistas y tienen la convicción de que existe infiltración de las guerrillas; en consecuencia, demandan soluciones de fuerza tanto desde lo jurídico como desde lo policial y militar.

Múltiples voces escuchadas por la Comisión durante el proceso de esclarecimiento dejaron en claro que mientras no haya una solución de fondo al problema de la tierra en la región esas visiones antagónicas seguirán chocando y alimentando no solo los conflictos ambientales, agrarios e interculturales, sino también la guerra en el suroccidente y el resto de Colombia.

La revolución que no fue

En 1953, el general Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957) ofreció una amnistía a las guerrillas liberales, pero como algunas de ellas se negaron a entregar las armas lanzó una ofensiva sobre la región caucana de Tierradentro. Las guerrillas, compuestas en ese entonces por cerca de 130 hombres, abandonaron la zona, se movilizaron al sur del Tolima y allí se reagruparon. Paulatinamente una parte de esas guerrillas, lideradas por Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda o Tirofijo, abrazaron la plataforma política e ideológica comunista, lo cual produjo tensiones con los denominados liberales «limpios», quienes se unieron al Gobierno militar para liquidar a los comunistas agrupados en la hacienda El Davis (ubicada entre Rioblanco y Ataco, en Tolima). Una

¹⁰¹ Vargas y Ariza, «Liberación de la madre tierra: entre la legitimidad y los usos sociales de la ilegalidad».

fracción de los liberales comunistas en armas retornó a la vida civil y otra se replegó hacia El Pato (Caquetá) y los ríos Duda y Guayabero (Meta)¹⁰².

Una vez derrocada la dictadura militar, el gobierno de Alberto Lleras (1958-1962) ofreció una segunda amnistía y negoció con las guerrillas. En 1959 se alcanzaron los primeros acuerdos y los núcleos guerrilleros cesaron los levantamientos, pero no entregaron las armas (los pactos con el Gobierno no lo exigían) y conformaron grupos de autodefensa. Pese a que nunca se tocó de fondo el problema de la tierra, los líderes guerrilleros y sus subalternos volvieron a trabajar en el campo confiando en el plan de restauración propuesto por el Gobierno, que prometía salud, educación, créditos, asistencia técnica y obras públicas. Tirofijo incluso se empleó como inspector de carreteras, al tiempo que Jacobo Prías Alape, alias Charro Negro, fue nombrado presidente de la Unión Sindical de Agricultores de Tolima y Huila y Ciro Trujillo ocupó idéntico cargo en la Unión de Agricultores de Riochiquito y Tierradentro. Las autodefensas campesinas pronto se transformaron en un movimiento agrarista¹⁰³.

No obstante, ante la presión de las fuerzas armadas, la persecución por promover el comunismo entre los campesinos y el asesinato de Charro Negro en enero de 1960 por una alianza entre el Ejército y un grupo paramilitar de liberales «limpios», liderados por Jesús María Oviedo alias Mariachi, Tirofijo conformó un nuevo grupo armado de aproximadamente 30 hombres y se estableció en el corregimiento de La Gaitania, municipio de Planadas, en Tolima. En abril de 1961 se llevó a cabo una conferencia con presencia de los grupos de autodefensa campesina y el Partido Comunista¹⁰⁴.

A lo largo de 1963, Tirofijo amplió la influencia de las autodefensas en Huila y Tolima y llegó a cubrir Balsillas, Aipe, Palermo, Órganos, Chapinero, San Luis, La Julia, Aipecito, El Carmen, Natagaima, El Patá, Monte Frío, Praga, Casa de Zinc, Santa Rita, Sur de Atá y Gaitania. Esta amplia región fue la que constituyó la denominada «república independiente de Marquetalia», donde las autodefensas se dedicaron a cultivar maíz y arroz, construir depósitos de alimentos y pertrechos, organizar a la población civil bajo unas normas de convivencia y adiestrar unidades y mandos militares¹⁰⁵. En 1964 ingresaron a las filas guerrilleras Arturo Alape, Hernando González Acosta y Luis Alberto Morantes Jaimes, alias Jacobo Arenas, quienes serían determinantes para cimentar la doctrina comunista y el posterior desarrollo de la guerra de guerrillas¹⁰⁶. Ese mismo año se llevó a cabo una conferencia donde se conformó una especie de secretariado compuesto por Tirofijo, Isauro Yosa y los recién llegados. La conferencia adoptó la estrategia de la movilidad absoluta de las

¹⁰² Verdad Abierta, «El origen de las FARC (1953-1964)»

¹⁰³ Molano, «Asalto a Marquetalia».

¹⁰⁴ Verdad Abierta, «El origen de las FARC (1953-1964)».

¹⁰⁵ Molano, «Asalto a Marquetalia».

¹⁰⁶ Verdad Abierta, «El origen de las FARC (1953-1964)».

guerrillas y ordenó la evacuación de la población civil, pues sabían que se aproximaba una fuerte ofensiva del Ejército¹⁰⁷.

En mayo de 1964 el gobierno de Guillermo Valencia (1964-1966) desplegó la operación Marquetalia, un feroz ataque por aire y tierra emprendido por cerca de 1.200 soldados (aunque los líderes históricos de la guerrilla siempre han asegurado que fueron más de 10.000) que contaban con la asesoría de militares estadounidenses del Plan Laso (Latin American Security Operation). El grupo guerrillero no superaba las 60 personas, pero aun así logró resistir un mes de combates y bombardeos; el Ejército finalmente logró el control de la zona y los guerrilleros se dispersaron. En respuesta a esa operación y la ofensiva del gobierno contra las demás «repúblicas independientes», el 20 de julio de 1964 el grupo de Marín tomó la decisión de convertirse en una guerrilla revolucionaria que defendía un programa agrario¹⁰⁸. En 1965 se conformó el Bloque Sur y en 1966 este se convirtió en las FARC. Para ese entonces ya agrupaba aproximadamente 300 personas divididas en seis frentes¹⁰⁹.

En 1964 parte del Bloque Sur migró hacia la región caucana de Riochiquito, agobiado por la operación Marquetalia y en busca de construir un corredor entre el sur del Tolima, el nororiente del Cauca y el suroccidente del Huila que les permitiera ampliar sus zonas de influencia y seguridad. A cargo de Ciro Trujillo, una comisión se movió con el objetivo de establecerse, reconstruir la autodefensa campesina y levantar un movimiento agrario integrado por guerrilleros y sus familias, campesinos locales y habitantes indígenas. La labor, sin embargo, no era fácil, pues los intereses de unos y otros no siempre eran convergentes. Con tiempo y esfuerzo, el trabajo político, social y económico del movimiento en Riochiquito rindió frutos. Se levantaron escuelas y programas educativos, al tiempo que las iniciativas de acción recíproca fomentaron el intercambio cultural, la solidaridad y la confianza entre campesinos mestizos e indígenas¹¹⁰.

Las comunidades, empero, también sufrieron desde temprano la violencia de la guerrilla. Una víctima del municipio de Páez relató:

«Entonces, gente que no quisiera adherirse o sumarse a ellos [FARC], pues era asesinada; y los que no, pues que se fueran, porque necesitaban ellos crear sus ejércitos de la guerrilla ahí, y fue mucha gente que se desplazó a otros lugares. [...] Otros se

¹⁰⁷ Molano, «Asalto a Marquetalia».

¹⁰⁸ La asamblea de la guerrilla aprobó un programa agrario cuyo primer punto convocaba a la lucha por una reforma agraria para cambiar de raíz la estructura social del campo, entregando en forma gratuita la tierra a los campesinos sobre la base de la confiscación de la propiedad latifundista. El segundo punto decía que los colonos, ocupantes arrendatarios y aparceros agregados recibirían títulos de propiedad sobre los terrenos que explotaran y se crearía la unidad económica en el campo, y llamó a la creación de un Frente Único del Pueblo. *Ibíd.*

¹⁰⁹ Verdad Abierta, «El origen de las FARC (1953-1964)».

¹¹⁰ Medina, «FARC-EP. Notas para una historia política 1958-2006».

desplazaron hacia el Huila, otros llegaron a la capital del Cauca, otros se fueron para el Caquetá»¹¹¹.

En marzo de 1965 más de 100 guerrilleros tomaron la cabecera municipal de Inzá, acción que dejó 16 personas muertas¹¹². Pese a las voces que pedían un enfoque distinto para tratar la situación de Riochiquito, como la del general Álvaro Valencia Tovar (quien incluso en 1964 tuvo acercamientos con Trujillo para negociar la entrega de armas), latifundistas, políticos locales y los sectores más reaccionarios de la fuerza pública sentenciaron la región bajo la rúbrica de las «repúblicas independientes». Afirmaban que allí la guerrilla se dedicaba a despojar la tierra de los labriegos e indígenas y cometer asesinatos y secuestros¹¹³. Sin distinguir entre campesinos civiles, exguerrilleros y combatientes, la población comenzó a sentir el acoso de las fuerzas militares bajo allanamientos, ataques armados, destrucción de viviendas y cosechas, asesinatos y masacres. Muchas personas abandonaron la región, pues intuían que una operación militar incluso más fuerte que la de Marquetalia estaba en ciernes. Efectivamente, en septiembre de 1965 el Ejército atacó por aire y tierra. Así lo recordó un dirigente campesino de la época:

Salimos corriendo cuando los aviones grandes llegaron cargados de bombas que soltaron alrededor del pueblo, no en el pueblo. Seguro ya sabían que andábamos por los montes de huida. No íbamos solos, éramos muchas familias con lo que se podía llevar, que era poco porque la loma para donde nos orientaban era parada y no había camino. Íbamos desparramados, cada cual ayudándose solo, con hombres de fila, armados y entrenados para la guerra. No vi que a nadie mataron las bombas; la gente se moría, pero de hambre y no por las bombas. Caían lejos, sin puntería. Se oyó decir que íbamos para Tolima [...]. Un camino largo. Y mi mamá con su puerca. Al principio el animalito caminaba arriadita, por las buenas; pero al rato se ranchó a gritar como si supiera que la iban a matar. Daban miedo esos gritos no por ellos, que uno sabe oír, sino por el ruido que hacían y que los chulos [militares y paramilitares] podían oír. Porque después de las bombas, llegaron las tropas¹¹⁴.

Tras la operación, campesinos y guerrilleros se desperdigaron por Cauca, Tolima, Huila, Caquetá y el centro del país. Aunque mantuvieron una presencia dispersa, tras la Quinta Conferencia (1974) las FARC decidieron ampliar su pie de fuerza y sus territorios de influencia y retornaron con propiedad al Valle y el norte del Cauca.

¹¹¹ Entrevista 219-VI-00056. Hombre, víctima, afrodescendiente, Cauca, Movimientos sociales.

¹¹² El Espectador, «Tomas de pueblos por las FARC: Nunca más».

¹¹³ Medina, «FARC-EP. Notas para una historia política 1958-2006».

¹¹⁴ Molano, «Riochiquito».

Crearon el Frente 6¹¹⁵ e iniciaron la expansión sobre Florida, Tuluá y Palmira, en el Valle, y Miranda, Corinto y Toribío en el Cauca¹¹⁶. Así contó un campesino de la región las incidencias de ese proceso de expansión que comenzó en los años setenta:

«Ellos [las FARC] parece ser que necesitaban todo este corredor de la cordillera, desde el sur del Cauca, todo el Cauca, para tener el corredor al Tolima y paso a los Llanos Orientales, para manejar toda esta zona para su andar y su hacer. Quien manejaba esto era Pablo Catatumbo, comandante del Sexto Frente, él era muy conocido con todo el mundo y él conocía a mucha gente aquí. Esa era la intención de ellos y cuando llegaron aquí, a mucha gente le tocó irse, que por cuatrero, que si robaban, lo de la venta de droga, toda esa cuestión; el que no se iba, llevó, lo mataban»¹¹⁷.

Por su parte, luego de su fundación entre finales de 1973 y los primeros meses de 1974, el M-19 comenzó a funcionar clandestinamente en las ciudades¹¹⁸. Desde el principio enfocó sus tareas de propaganda principalmente en colegios y universidades de Cali y apoyaron las demandas del movimiento estudiantil a través de la participación de sus cuadros en manifestaciones públicas como marchas, paros y mítines¹¹⁹. Su otro campo de acción fueron los sindicatos. A la par de entregar propaganda política en las concentraciones obreras, el M-19 infiltró comandos obreros compuestos por cuatro o cinco personas que operaban clandestinamente y tenían la tarea de orientar el trabajo propagandístico al interior de la empresa, hacer inteligencia, apoyar la operatividad de la organización en la ciudad y respaldar las distintas movilizaciones legales de los trabajadores. Este trabajo político se llevó a cabo en sindicatos de empresas como la Industria Metalúrgica Carlos Benítez y la Hidroeléctrica Anchicayá y Siderúrgica del Pacífico¹²⁰. Un exmilitante del M-19 le señaló a la Comisión la importancia que tuvo el movimiento obrero para el grupo:

«Había una decisión por parte del M-19 de incidir en el movimiento obrero, pues de alguna u otra manera las organizaciones revolucionarias de la época tenían esa definición de que el movimiento obrero cumplía un papel muy importante por su vínculo con las fuerzas productivas. [...] Había una estructura del movimiento

¹¹⁵ El Frente fue bautizado Hernando González Acosta en honor a un dirigente comunista asesinado en la operación de Riochiquito en septiembre de 1965.

¹¹⁶ Fiscalía General de la Nación, «Tomo XXX. Génesis. Bloque Occidental “Comandante Alfonso Cano” FARC-EP».

¹¹⁷ Entrevista 421-VI-00017. Víctima, campesino, Tuluá, Valle del Cauca.

¹¹⁸ Destaca que varios de los pioneros del M-19 eran vallecaucanos: Iván Marino Ospina era de Roldanillo, mientras que Álvaro Fayad de Ulloa y María Eugenia Vásquez eran de Cali.

¹¹⁹ Arjaid Artunduaga, miembro fundador del M-19, relató en una entrevista: «[El M-19] se fortalece de una juventud sobre todo del bachillerato/en Cali la militancia de la década del 70 son todos estudiantes de bachillerato/de Santa Librada/del Politécnico/del Camacho/y eso le da un empuje a la organización [...], eso genera una militancia arrojada». Holguín, «Generaciones de militantes y accionar colectivo del Movimiento 19 de Abril, Cali-Colombia 1974-1985».

¹²⁰ *Ibíd.*

obrero que fue creciendo y había unos líderes obreros muy importantes con quienes teníamos una relación y creamos organizaciones de coordinación: la coordinadora obrera estudiantil, la coordinadora obrera barrial y toda la cosa; y eso nos reuníamos y eran reuniones tranquilamente de 50, 60, 70 dirigentes decidiendo cómo movilizar la situación, cómo generar algún tipo de movilización social que le hiciera frente a las estrategias del Gobierno»¹²¹.

Sin embargo, dado que en sus orígenes el M-19 era una guerrilla pequeña (en Cali no eran más de 20 integrantes actuando a tiempo completo), esos mismos comandos estudiantiles y sindicales recibían entrenamiento militar y participaban en asaltos bancarios y robo de armamento liviano a guardas de vigilancia privada, automóviles, equipos de comunicación y secuestros a personas acaudaladas con el objetivo de conseguir recursos para las estructuras de la organización en Cali¹²². En los primeros años el M-19 ejecutó pocos operativos a nombre propio, por lo que estas acciones fueron registradas por las autoridades y la prensa local como delincuencia común. Una de las primeras operaciones reivindicadas públicamente por la guerrilla fue el robo de 80 armas de la firma de valores Thomas de la Rue el 8 de noviembre de 1976, operación que mostró la progresiva especialización de cuadros para actividades militares paralela al fomento de las estructuras estudiantiles y sindicales¹²³.

A partir de 1977 las estructuras urbanas del M-19 presionaron pliegos de peticiones sindicales y llevaron a cabo acciones obreristas, como la toma de buses transportadores de trabajadores donde arengaban a los ocupantes y distribuían propaganda. También emprendieron acciones violentas contra las empresas. Por ejemplo, el 30 de enero de 1978 un comando de la guerrilla penetró en las instalaciones de Cartón Colombia ubicadas en el complejo industrial Cali-Yumbo y quemó el bosque de eucalipto de la empresa. Unos días antes habían robado las armas de dotación de los vigilantes¹²⁴.

Las autoridades civiles del Estado, la fuerza pública y los civiles armados recurrieron al discurso de la amenaza insurgente para justificar la represión contra los partidos políticos alternativos y las organizaciones que se movilizaban en pro de los derechos y la solución del problema de la tierra. Sin embargo, en los años sesenta y setenta la presencia de las insurgencias era incipiente y sus acciones escasas, intermitentes y de bajo impacto. Ni siquiera las cuadrillas liberales representaban un riesgo mayúsculo en ese sentido, pues, a diferencia de lo que ocurrió en otras partes del país, en el Valle no abrazaron la ideología comunista ni se propusieron convertirse en guerrillas

¹²¹ Entrevista 112-PR-02085. Actor armado, excombatiente del M-19.

¹²² Holguín, «Generaciones de militantes y accionar colectivo del Movimiento 19 de Abril, Cali-Colombia 1974-1985».

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ *Ibid.*

revolucionarias¹²⁵, factor que contribuye a entender las dificultades que tuvieron las FARC en los sesenta para asentarse en la región, toda vez que eran una guerrilla foránea sin aliados locales que conocieran el territorio y sus actores y dinámicas.

La fundación del CRIC y la potencia de la movilización atrajeron la violencia sobre las comunidades indígenas en el Cauca. Un informe de la División de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno registró 155 hechos violentos entre 1972 y 1979, la mayoría atribuidos a terratenientes y agentes estatales. La mayor parte de las denuncias estaban relacionadas con problemas de tierras: 68 casos, que equivalen al 44 % del total; le siguen 52 acciones represivas o abusos cometidos por agentes estatales (34 %); 16 denuncias contra instituciones gubernamentales (10 %); 14 asesinatos (9 %) y otros hechos (3 %). El 81 % de las denuncias corresponden a hechos ocurridos en Toribío, Caldonó, Jambaló, Silvia, Totoró, Tierradentro y Coconuco; el 12 % corresponde a Popayán, El Tambo y Morales y el 7 % restante a Santander de Quilichao, Caloto y Corinto. Jambaló, Toribío y Tierradentro presentaron los mayores índices de denuncias, con 25, 24 y 23 acusaciones respectivamente¹²⁶.

La movilización campesina en el norte del Cauca también fue violentamente reprimida y debilitada. Así lo contó un líder campesino de la región:

«Este movimiento campesino que estaba en los años setenta de la mano de la ANUC y de otros grupos ligados a Fensuagro en el norte, y que están en ese momento también en las luchas de tierras, es como muy golpeado violentamente por la represión estatal; ese movimiento campesino como que se ha debilitado»¹²⁷.

El péndulo de la represión también recayó sobre el movimiento estudiantil. Así lo contó un antiguo líder universitario que luego se enroló en el M-19:

«Los primeros años de 1970 hubo grandes movilizaciones estudiantiles en todo el país, pero Cali fue el centro de esa gran movilización estudiantil; esas movilizaciones estudiantiles eran muy fuertes y permanentes. [...] Por supuesto, había una muy fuerte influencia de la Universidad del Valle, de la Universidad del Cauca, pero lo que más nos indignaba era que esas movilizaciones, que eran una gran expresión cultural y de sueño de movilización, fueron siempre atacadas de manera violenta [...], eran atacadas agresivamente por parte de las fuerzas del Estado»¹²⁸.

¹²⁵ «No puede desconocerse que detrás del tránsito hacia la guerrilla política o hacia el bandolerismo de las diferentes cuadrillas, jugó papel fundamental la pérdida o la ruptura de la legitimidad partidista (liberal, conservadora) alegada por éstas, y que las cuadrillas bandoleras y el bandidismo son los sectores “descompuestos” de la cuadrilla, que por la incapacidad de armarse de una ideología distinta a la del bipartidismo, y ante la pérdida de respaldo de estos sectores, no construyeron condiciones para evolucionar hacia la guerrilla con proyecto político alternativo». Betancourt Echeverry, «Las cuadrillas bandoleras del norte del Valle, en La Violencia de los años cincuenta», 62.

¹²⁶ CNMH, *Nuestra vida ha sido nuestra lucha. Resistencia y memoria en el Cauca indígena*.

¹²⁷ Entrevista 070-PR-00893. Mujer, activista social, Valle del Cauca.

¹²⁸ Entrevista 112-PR-02085. Actor armado, excombatiente del M-19.

Por ejemplo, las protestas lideradas por la Universidad del Valle en febrero de 1971 en Cali fueron apabulladas por las fuerzas militares. Los estudiantes habían tomado el campus y declararon cese de actividades para mostrar su desacuerdo con varias decisiones de las autoridades que consideraban arbitrarias y pedir reformas internas. A lo largo del mes organizaron marchas, mítines y concentraciones en distintas partes de la ciudad; poco a poco, el paro ganó respaldo en decenas de universidades y colegios. Así mismo, estaban planeadas movilizaciones en Cali y otras ciudades del país para los últimos días del mes.

En la madrugada del 26 de febrero un operativo conjunto entre la Policía y el Ejército desalojó la universidad a la fuerza. Un grupo de estudiantes se reunió cerca del campus para emprender la retoma, pero en el camino se armó una refriega con la fuerza pública y fue asesinado el estudiante Édgar Mejía. Su muerte, presuntamente, fue consecuencia de un disparo del Ejército, pero los hechos nunca fueron esclarecidos. Rápidamente se difundió la noticia y estallaron violentas protestas en diferentes puntos de la ciudad. En horas de la tarde las autoridades declararon el toque de queda en Cali, pero eso no aplacó las protestas totalmente. En la noche, el presidente Misael Pastrana (1970-1974) decretó el estado de sitio en todo el país y este se mantuvo hasta el final de su mandato.

Fuentes de prensa de la época informaron que el saldo de la violenta jornada fueron cientos de detenidos, millones de pesos en pérdidas por la destrucción de locales comerciales, semáforos, edificios públicos y automóviles y ocho muertos, aunque algunos protestantes aseguraron que fueron más de quince¹²⁹. A lo largo de los siguientes meses, la represión sobre los estudiantes y profesores fue constante. Algunas universidades y colegios fueron militarizados; profesores y estudiantes que participaban en las movilizaciones y protestas o que se quejaban por la presencia militar en las aulas fueron sancionados o expulsados; las federaciones estudiantiles fueron desfinanciadas y sus líderes fueron acusados de militar en las guerrillas¹³⁰.

La coerción, sumada a las divergencias ideológicas de las diferentes organizaciones, sofocaron la protesta y fragmentaron al movimiento estudiantil, que tardaría varios años en recomponerse. Una nueva oleada de represión contra sindicalistas y estudiantes se presentó a raíz del paro cívico de septiembre de 1977, un hecho clave por su potencia, pero también por la agudización de la violencia política que se dio a su alrededor. Durante el paro y en los días siguientes, hubo detenciones masivas y allanamientos a sedes sindicales y viviendas en Cali¹³¹.

¹²⁹ Gironza, «Memoria del movimiento estudiantil de 1971 en la Universidad del Valle».

¹³⁰ *Ibíd.*

¹³¹ «Nos enfrentamos a los rigores de un establecimiento que nunca ha sido distinto, terriblemente intimidatorio, terriblemente autoritario y amenazador. Por ejemplo, en el paro cívico sindical del 77 a nosotros nos detuvieron; nosotros éramos un grupo de sindicatos, era un edificio donde teníamos sede como unos 10 sindicatos, bancarios y de otras empresas, y a nosotros nos allanaron, todas las oficinas

La transformación política y económica que arrancó en Cauca y el Valle desde mediados del siglo XX se construyó sobre una paradoja¹³²: el campesinado, los obreros y las poblaciones étnicas eran simultáneamente la solución y la amenaza para el nuevo modelo económico y el régimen político regional y local. Por un lado, constituían la fuente principal de mano de obra al servicio de las plantaciones y las empresas, una capa importante de los consumidores y el grueso del electorado necesario para acceder al manejo del Estado. Pero, al mismo tiempo, sus luchas en pro de la tierra, la defensa del medio ambiente y diferentes derechos económicos, políticos y sociales frenaban la expansión y la rentabilidad agroindustrial y bloqueaban el posicionamiento político de ciertos proyectos y sectores en el Gobierno regional y local. Esto, sumado a la doctrina anticomunista y antinsurgente en auge, explica por qué la agitación social encontró respuestas violentas por parte del Estado y los grupos de civiles armados conformados por terratenientes y empresarios.

Paradojas similares enfrentaron las guerrillas, los paramilitares y los ejércitos de narcos que progresivamente iban llegando al territorio, pues a la par que necesitaban a la gente para dinamizar las economías ilegales, legitimar sus proyectos político-militares (lo cual era particularmente importante en una región tan étnicamente diversa como el Valle y el Cauca) e incluso engrosar las filas de la tropa, les estorbaban debido a sus reivindicaciones y a sus ejercicios de autoridad territorial donde ningún actor armado era bienvenido.

Durante esa época, la violencia también cundió en las ciudades bajo la forma del aniquilamiento social, mal llamado «limpieza social». Entre principios de la década de los setenta y mediados de los noventa, en Cali, Jamundí, Palmira, Yumbo y otros núcleos urbanos, distintos escuadrones de la muerte¹³³ compuestos por narcotraficantes e integrantes de la Policía y el Ejército¹³⁴ atacaron a diferentes personas y colectivos debido a sus características o identidades sociales, económicas y políticas. Los asesinatos, las amenazas, las torturas y los destierros, característicos de esa modalidad de violencia, tenían

nos allanaron, nos detuvieron a algunos». Entrevista 216-VI-00142. Víctima, hombre, sindicalista, movimientos sociales, Cali.

¹³² «Este proceso de modernización, en el cual el campesino asumía la doble condición de amenaza/solución para los industriales, es el caldo de cultivo que permitió la conformación de variadas experiencias organizativas campesinas, que desde distintas ópticas ideológicas y políticas procuraron el mejoramiento de sus condiciones de vida, luchando incluso por garantizar, entre otras cosas, la propiedad de la tierra». CNMH, *Patrones y campesinos*, 153-54.

¹³³ Grupos como Cali Limpia, Amor a Cali, Palmira Eficiente, Bandera Negra, Muerte a Jíbaros (MAJI), Muerte a Jaladores de Carros (Mujaca), Muerte a Homosexuales Peligrosos (Mahope), Colombia sin Guerrilla (Colsingue), Juventud Inconforme Anticomunista (JIAC), Kankil, Comandos Verdes, Vengador Solitario, Justiciero Implacable y la Asociación Anticomunista Americana (Triple A), entre otros.

¹³⁴ «Los peores criminales del Ejército los tuvimos en Cali, en la Tercera Brigada [...]. El Ejército tenía los Comandos Verdes, aquí había un grupo que se llamaba Mahope, Muerte a Homosexuales Peligrosos. O sea, los grupos de limpieza social [...], bueno, grupos que se armaron con plata de estos señores ricos de Cali para hacer “limpieza social”». Entrevista 216-PR-00787. Testigo, periodista, exmilitante M-19.

como propósito eliminar personas a las que se les asignaba una identidad estigmatizada que cambia con el tiempo en función de los intereses en disputa: el chivo expiatorio pasó de prostitutas y homosexuales a los asaltantes, ladrones y miembros de pandillas; luego a los subversivos, los militantes y simpatizantes de la izquierda y sectores que promovían y defendían la organización como mecanismo de defensa de derechos. El trasfondo del exterminio era la construcción de un orden social jerarquizado, pero también tuvo que ver con la irrupción de los «nuevos ricos» que con los ríos de dinero del narcotráfico fragmentaron el orden tradicional y favorecieron una extraordinaria movilidad social, estableciendo un nuevo linaje que tenía menos abolengo, pero mucho más dinero.

El ascenso del narcotráfico

El negocio en torno a la marihuana en la región dio sus primeros pasos en los años cincuenta, cuando en el contexto de la «bonanza marimbera» se establecieron cultivos de marihuana en Corinto, Caloto, Palmira y Florida y se forjaron precarias organizaciones dedicadas a diversos eslabones del negocio. En esa época se dieron las primeras detenciones de campesinos dedicados al cultivo de marihuana. A principios de los setenta, José Santacruz Londoño, alias don Chepe, y los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela conformaron la base del futuro Cartel de Cali: una banda criminal llamada «Los Chemas», dedicada a los asaltos y la extorsión y luego al tráfico de marihuana.

Durante los setenta, la economía ilegal de la marihuana prosperó también en el norte del Valle gracias a la existencia de agentes al margen de la ley que controlaban el territorio desde la época de la Violencia política bipartidista y a los flujos que permitía la subregión con Chocó, Antioquia, el Eje Cafetero y el suroccidente del país. En la cordillera Occidental, sembraron cultivos financiados por medianos negociantes de Cartago, Ansermanuevo, El Águila y municipios aledaños que apenas se iniciaban en el negocio y que años más tarde entraron de lleno en el negocio de la cocaína. Aquí destaca Gerardo Martínez, alias Drácula, quien tejió redes entre los ilegales del Valle, el Eje cafetero, Antioquia y el Caribe alrededor de variadas actividades, incluyendo transacciones de tierras, tráfico de drogas, lavado de dinero, conformación de grupos armados y otras empresas ilegales. En la segunda mitad de los años ochenta algunos de sus hombres, como Orlando Henao, alias el Hombre del Overol, y Luis Hernando Gómez, alias Rasguño, se convirtieron en los capos más importantes del Cartel del Norte del Valle y consolidaron una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas que prosperó a la sombra de los carteles de Medellín y de Cali.

El asunto alrededor de la coca en el Cauca fue más complejo. Para empezar, no todos los cultivos hacen parte de la cadena de producción del narcotráfico e incluso

hasta el día de hoy la hoja de coca hace parte de los usos y costumbres de las comunidades indígenas asentadas en el departamento. Históricamente, además, hay registros de que durante la Colonia los terratenientes la utilizaron para pagar parte del jornal de los indígenas y que hasta mediados del siglo XX era usada en el campo medicinal y por los trabajadores agrícolas (no solo indígenas) para aguantar largas jornadas de trabajo. Según datos registrados por la Dirección de Higiene y la Policía Sanitaria, para 1940 había cerca de 400 hectáreas de coca en el Cauca (correspondientes a 86.000 arbus-tos) distribuidas en 20 municipios, dentro de los cuales destacaban Almaguer (100 hectáreas) y Belalcázar (60 hectáreas). El gobierno de Mariano Ospina (1946-1950) intentó restringir el cultivo de coca y marihuana a través del Decreto 896 de 1947, pero la norma finalmente fue derogada debido a las protestas de los cultivadores, quienes argumentaban que no tenían otros medios de subsistencia¹³⁵.

Las actividades ilícitas en torno a la coca en el Cauca comenzaron en los años setenta. Aunque la «bonanza marimbera» se extendió hasta mediados de los ochenta, hacia 1973 había empezado el auge de la cocaína. Debido a la demanda de esa droga en el mercado internacional, en el Cauca comenzaron a crecer los cultivos de coca, que alcanzaron las 617 hectáreas (aproximadamente 500.000 matas). Aunque había algunos en el norte, se ubicaban principalmente en el sur debido a la dinámica del negocio que se estaba consolidando en Putumayo y Caquetá. El poder adquisitivo proveniente de la venta de hoja de coca les permitió a los cultivadores (en su mayoría campesinos e indígenas) adquirir algunos bienes —en ocasiones incluso compraron electrodomésticos que no podían usar porque no tenían servicio de electricidad—, pero también generó roces con las comunidades y los comerciantes legales como resultado de los cambios culturales y productivos¹³⁶.

Narcotraficantes como Jaime Caicedo, alias el Grillo, y Benjamín Herrera, alias el Papa Negro, crearon las primeras rutas internacionales para el tráfico de cocaína. En ese entonces, la pasta de coca se trasladaba desde Perú y Bolivia, se procesaba en laboratorios en Colombia y luego se mandaba hacia Estados Unidos. Tras la muerte de Caicedo en enero de 1977, el negocio quedó en manos del clan de los Rodríguez Orejuela y nació el Cartel de Cali. A principios de los ochenta, en medio de la búsqueda de socios para expandir el negocio, los Rodríguez se asociaron con Hélder «Pacho» Herrera, un traficante que vivía en Nueva York y que asumió la tarea de aportar contactos para abrir rutas, distribuir la droga en las calles y coordinar las operaciones de lavado de dinero.

Entre finales de los setenta y mediados de los ochenta, el narcotráfico en el norte del Valle estuvo más fraccionado y respondía a delimitaciones territoriales y relaciones de

¹³⁵ Unodc, «Atlas de la caracterización regional de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el departamento del Cauca».

¹³⁶ *Ibíd.*

patronazgo. En la segunda mitad de los ochenta, gracias a la hidrografía de la región, pero también a una amplia red de carreteras que pavimentaron los propios narcos, se consolidó el corredor que permitió conectar los núcleos narcotraficantes del norte (con intenciones de expansión hacia el cañón de las Garrapatas), el centro, el Pacífico (Buenaventura y otros embarcaderos en la costa) y el sur (donde se accede a la capital, la carretera Panamericana y el aeropuerto de Palmaseca). Como resultado de la expansión del negocio, se estructuró más claramente la estructura mafiosa del norte del Valle. Los jefes más poderosos eran Orlando Henao Montoya, el Hombre del Overol, y su cuñado Iván Urdinola Grajales. Otros jefes importantes eran Víctor Patiño Fómeque alias el Químico, Hernando Gómez Bustamante alias Rasguño, Henry Loaiza Ceballos alias el Alacrán, Arturo de Jesús Herrera Saldarriaga alias Bananas, Gabriel Puerta alias el Doctor, Juan Carlos Ramírez Abadía alias Chupeta y Carlos Alberto «Beto» Rentería. Sin embargo, el Cartel del Norte del Valle nunca dejó de funcionar del todo como una federación o una red de núcleos narcotraficantes que controlaban diferentes porciones del territorio donde las jerarquías se medían por la capacidad militar y el grado de dominio territorial¹³⁷.

Urdinola y otros narcos de la «primera generación» de los años ochenta tenían cercanía con el Partido Conservador, lo que atenuaba las tensiones con las élites tradicionales de la región y facilitaba la intervención político-institucional en los municipios de mayor control para obtener el manejo de la renta pública, la colaboración de la fuerza pública y la construcción de un orden social afín a los intereses de los narcos. En cambio, los otros jefes del Cartel del Norte del Valle se decantaron por un control más violento y conformaron grupos armados encargados de prestar seguridad o eliminar a quienes fueran considerados competencia o amenaza. Para finales de los noventa, ya eran poderosos ejércitos privados como Los Machos, bajo el mando de don Diego, y Los Rastrojos, encabezados por Wilber Varela, alias Jabón¹³⁸. Esas estructuras criminales que operaron en el norte del Valle durante parte de los ochenta y principios de los noventa fueron paramilitares porque el designio de su accionar era parte de una lucha contrainsurgente y porque operaron en alianza con integrantes de la fuerza pública. Sin embargo, actuaban siguiendo una lógica sicarial más próxima al modelo paramilitar de los Pájaros que operaron durante la Violencia que al de los ejércitos contrainsurgentes surgidos a mediados de los años noventa durante la «segunda generación paramilitar» encarnada en las AUC¹³⁹.

Durante los setenta y los primeros años de los ochenta, los pioneros del narcotráfico, al igual que las primeras generaciones de guerrillas, contaban con organizaciones incipientes y acotada influencia, y sus actividades eran marginales. Las violencias del narcotráfico, aunque existían, no eran tan intensas debido a que no se trataba de un

¹³⁷ Centro Nacional de Memoria Histórica, *La masacre de Trujillo: una tragedia que no cesa*.

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ *Ibid.*

negocio de gran envergadura, la competencia era escasa y el Estado ni siquiera era consciente de la amenaza. Las primeras violencias imputadas al narcotráfico se agotaron en ajustes de cuentas relacionados con indelicadezas en los negocios (o en asuntos personales) que, si bien causaron ciertas alarmas, estuvieron localizadas al interior del negocio y no tuvieron conexión con otras esferas de la sociedad, con algún tipo de amenaza al Estado o sus representantes o con el control del mercado¹⁴⁰. Si bien desde un momento temprano el tráfico de drogas fue ilegal, la persecución se agotaba en la captura de campesinos que entreveraban sus cultivos de subsistencia con matas de marihuana y consumidores que afectaban más bien una cierta moral y las «buenas costumbres» que la seguridad y la convivencia. Los actores del narcotráfico y del conflicto armado en el Valle y el Cauca surgieron en la misma época, pero al principio siguieron sus recorridos con cierta autonomía. Este panorama se transformó radicalmente en los años ochenta y noventa.

¹⁴⁰ Por ejemplo, en 1973 los periódicos de Cali daban cuenta del enfrentamiento entre las bandas de Jaime Caicedo Caicedo (El Grillo) y de Samuel Ceife Zapata (El Gitano), dos de las primeras organizaciones dedicadas al tráfico de cocaína. En el registro de prensa se aprecia que no hay calificativos precisos para este tipo de ilegales: se les llama hampones, gánsteres o pistoleros. Un enfrentamiento semejante entre dos bandas ilegales ocurrió en agosto de 1981 en el norte del Valle del Cauca entre Gerardo Martínez (Drácula) y Carlos Jaramillo (Maluco), que se saldó a favor del primero. El primer registro de violencias del narcotráfico contra un funcionario del Estado fue el 6 de mayo de 1977 y consistió en un ataque sicarial (el primero que sucedió en la ciudad) contra Eduardo Moya Tovar, juez segundo de instrucción criminal que había estado a cargo de la investigación sobre el secuestro de un par de ciudadanos suizos en el que estuvieron comprometidos los Rodríguez Orejuela y José Santacruz y otras investigaciones más relacionadas con el tráfico de cocaína. El País, «La “guerra del hampa” en Cali».



**Insurgencias,
paramilitares y mafias:
la antesala del horror
(1978-1991)**

Crisis agraria campesina y étnica: segundo acto

La economía cañera continuó su expansión y crecimiento sostenido en el valle geográfico del río Cauca: entre 1973 y 1979 hubo un crecimiento en el área sembrada de cerca de 20.000 hectáreas que permaneció constante en la década de los ochenta y aumentó nuevamente a partir de 1990, cuando sobrepasó las 150.000 hectáreas. Por su parte, la producción de caña por hectárea pasó de 108 toneladas en 1973 a 125 en 1980 y 135 en 1993. La capacidad instalada de molienda pasó de 17.623 toneladas de caña en 24 horas en 1960 a 53.300 toneladas en 1985. El rendimiento comercial (toneladas de azúcar total/toneladas de caña molida) pasó de 10,75 en 1986 a 11,02 en 1993¹⁴¹.

Una de las iniciativas que incidió en el crecimiento del área cultivada de caña de azúcar fue el proyecto hidroeléctrico de la Salvajina. Entre 1975 y 1985, con la aquiescencia de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), se construyó en el municipio de Suarez (Cauca) un embalse para generar energía eléctrica y controlar el cauce del río, que en la zona plana del valle geográfico afectaba frecuentemente la economía agrícola¹⁴². Para las comunidades afrodescendientes que predominan en esa zona el proyecto generó impactos en términos culturales y económicos, ya que el río Cauca era su medio de transporte, el lugar de donde extraían oro artesanalmente y donde se tejían las relaciones tradicionales y culturales en torno a estas actividades. Un informe entregado a la Comisión por la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca (ASOM) recoge el testimonio de una pobladora del municipio de Buenos Aires (Cauca) que expone, desde su perspectiva, el impacto de la represa en las comunidades afrodescendientes y el territorio:

A raíz de la construcción se dividió el municipio y mucha de nuestra gente fueron desplazadas, porque toda esa zona era Buenos Aires, mucha gente trabajaba en las cercanías de lo que hoy es la Salvajina, tenían sus parcelas, tenían sus fincas, y de allí las desplazaron. Por eso hoy en día usted encuentra gente en la zona de La Alsacia, porque esa gente por allá trabajaba la mayoría en las orillas del río Cauca [...]. Nos tocó meternos más adentro para poder sobrevivir, nos tocó pasarnos

¹⁴¹ Delgadillo, «La caña de azúcar en la historia ambiental del valle geográfico del río Cauca (1864-2010)».

¹⁴² Así lo manifestó a la Comisión un líder afrodescendiente de la región: «El río Cauca crecía e inundaba todo a su alrededor [...]. En ese proceso de regular las aguas dijeron que había que hacer un proyecto macro y el proyecto macro, creado en 1953 o 1954, fue la Salvajina, [que] tenía para ellos una doble proyección: cerrar el río Cauca, pero además producir energía». Entrevista 1036-PR-02315. Víctima, líder afrodescendiente, norte del Cauca.

para San Pablo, al otro lado de La Alsacia. Otros se fueron para la ciudad, a Cali, a Jamundí. Mucha gente de la que hay en la zona de las Orquídeas, la mayoría eran pobladores de acá; otros que sobrevivíamos de la minería, que sobrevivíamos extrayendo en las orillas el granito de oro, para uno poder sacar una décima, dos décimas, lo que uno hiciera vendía y eso daba, pero eso hoy ya no se puede hacer porque llegó la Salvajina y se acabó todo eso¹⁴³.

Por otro lado, desde la segunda mitad de los años setenta se recuperó la economía cafetera en las cordilleras gracias a las medidas técnicas implementadas por el Gobierno y los gremios (cambio tecnológico, semillas mejoradas e intensificación en el uso del suelo, entre otras). Entre 1976 y los primeros años de la década de los ochenta se fortalecieron epicentros de cultivo y comercialización de café como Sevilla, Caicedonia (cordillera Central), El Águila, Ansermanuevo, Trujillo y Riofrío (cordillera Occidental). El renovado auge de la economía cafetera aumentó la participación porcentual de la agricultura cafetera en la generación de empleo agrícola: según un estudio del Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle (Cidse), para 1985 generaba el 55 % de los empleos agropecuarios del departamento, cifra que subió al 74,4 % en 1986¹⁴⁴.

Sin embargo, debido a la infestación de los cafetales por la roya y la broca y la ruptura del Pacto Internacional del Café (1989), a finales de los ochenta y principios de los noventa estalló una nueva crisis en la economía cafetera nacional que se tradujo en la disminución del empleo (más del 50 %) y de la producción cafetera en la mayoría de los municipios del Valle. Sin el Pacto, la competencia en el mercado internacional provocó la disminución de los precios; además, la liquidación de la política de protección de precios de sustentación que se hacía a través del Fondo Nacional del Café condujo a la crisis a los caficultores y a quienes dependían indirectamente de esa economía¹⁴⁵.

La Federación Nacional de Cafeteros implementó algunas medidas de choque (renovación de cafetales, control de plagas, tecnificación), pero lo hizo en gran medida a través de endeudamiento, lo cual agravó la crisis para los pequeños productores. Además, la entidad redujo la prestación de asistencia técnica y la cofinanciación de obras de equipamiento colectivo e infraestructura en los municipios cafeteros. A raíz de eso, en el Valle, Antioquia, el Eje cafetero y otras zonas surgieron asociaciones de productores independientes (por ejemplo, Cafeteros en Alerta, con sede en Caicedonia) que lideraron protestas y exigieron al Gobierno alternativas

¹⁴³ Informe 110-CI-00217, Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca (ASOM) y Women's Link Worldwide, «Voces valientes».

¹⁴⁴ CNMH, *Patrones y campesinos*.

¹⁴⁵ *Ibid.*

para enfrentar las recurrentes crisis: respaldar al Fondo Nacional del Café, eliminar gravámenes, implementar precios de sustentación, asesorar a los campesinos en el control de plagas, líneas de crédito de fomento con bajas tasas de interés, condonación de deudas, fortalecimiento del programa de asistencia técnica y, en general, formulación de políticas de respaldo para los productores cafeteros¹⁴⁶.

Los gobiernos desoyeron la mayoría de esas propuestas y las medidas implementadas resultaron insuficientes. Por ejemplo, la refinanciación de las deudas no impidió a la larga el embargo de las propiedades de muchos caficultores por parte de los bancos. A pesar de la gravedad de la crisis, los productores de café no contaron con los mismos estímulos y protecciones que los productores agroindustriales de caña. El resultado fue el cambio en el uso de suelo y la actividad económica, reflejado en la disminución del área cafetera y el incremento del área de agricultura forestal, de hortofruticultura y de ganadería extensiva, actividades legales en las cuales frecuentemente se colaron los dineros del narcotráfico¹⁴⁷.

Insurgencias: entre el convencimiento y la violencia

Aunque los gobiernos de Belisario Betancur (1982-1986) y Virgilio Barco (1986-1990) exploraron con dificultades el camino de la paz a través de la negociación¹⁴⁸, los actores armados comenzaron a cargar sus baterías para la guerra total. Las guerrillas trazaron sus planes de toma del poder y fortalecieron sus acciones políticas y militares. Tras las decisiones estratégicas tomadas por sus respectivas cúpulas a finales de los setenta y principios de los ochenta en diversas conferencias, se propusieron aumentar sus tropas, crear nuevas subestructuras (frentes, milicias urbanas y comandos), enfrentar a las fuerzas armadas estatales, incursionar en nuevas zonas y cercar las ciudades principales; al tiempo, con el objetivo de conformar redes de apoyo, penetraron en las organizaciones sociales.

Por el lado de las FARC¹⁴⁹, tras la Sexta y la Séptima Conferencia (1978 y 1982 respectivamente), el Frente 6 se posicionó en el norte del Cauca (Caloto, Corinto, Miranda, Toribío, Caldono, Jambaló y Santander de Quilichao). En 1984, a partir

¹⁴⁶ *Ibíd.*

¹⁴⁷ *Ibíd.*

¹⁴⁸ Ver *No matarás. Relato histórico del conflicto armado* del Informe Final de la Comisión.

¹⁴⁹ En su Séptima Conferencia, en 1982, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) añaden a su nombre «Ejército del Pueblo» y pasan a llamarse «FARC-EP».

del desdoblamiento de los frentes 6 y 8, conformaron el Frente 30 José Antonio Páez. El objetivo de estas estructuras era crear las condiciones militares y políticas que permitieran controlar Cali y sus conexiones con el Pacífico, el centro y el norte del país. La estrategia política de la guerrilla, según antiguos mandos medios que operaron en la región, consistía en crear una base de apoyo social y político mediante redes denominadas «núcleos solidarios» o «uniones solidarias». Para tal fin, la guerrilla comenzó a influenciar las juntas de acción comunal, los comités de trabajo, los sindicatos y las asociaciones de base locales. Así lo afirmó un antiguo comandante de las FARC:

«Nosotros teníamos un plan estratégico, [que] era ubicarnos, por ejemplo, en el occidente, [donde] estaba Pasto, Popayán y Cali. [...] Y nuestra actividad política, entonces, iba dirigida a toda esa gran masa de la población; por eso nuestras políticas iban dirigidas a poder hacer contacto con todos los movimientos sociales y políticos y con los partidos que existieran allí y que tuvieran concepción para hablar de la problemática nacional y la situación en la que se iba a desarrollar el plan estratégico»¹⁵⁰.

Las estrategias de cooperación y convencimiento ideológico¹⁵¹ le significaron a las FARC adhesión política y otros tipos de apoyo dentro de la población civil en ciertos sectores y momentos históricos. Así lo expresó un antiguo colaborador de la guerrilla a la Comisión:

«Se hacía un trabajo fundamentalmente con los compañeros de salud, con médicos, se hacía un trabajo de recuperar heridos, se hacía un trabajo de conseguir de pronto plata cuando se necesitaba, se hacía un trabajo de recoger implementos de aseo, elementos que se necesitaban, eso era lo que básicamente nosotros hacíamos. [...] Lo que sí era muy claro era que nosotros hacíamos ese trabajo independientemente. [...] Yo nunca estuve en el trabajo operativo ni en ese trabajo de dirección, básicamente lo que hicimos fue eso; en esa época [en] que yo estaba se [les] llamaba “auxiliadores” y no solamente el gobierno nos llamaba, sino que nosotros nos autodenominábamos auxiliadores»¹⁵².

En las zonas rurales donde operaban las FARC, la gente se tuvo que plegar a las normas que impusieron en la vida cotidiana e incluso en la apariencia física¹⁵³.

¹⁵⁰ Entrevista 615-PR-00407. Actor armado, excomandante Bloque Occidental FARC.

¹⁵¹ Un excombatiente de las FARC-EP le contó a la Comisión los motivos que los llevaron a su papá y a él a sumarse a las filas del grupo: «Mi papá les presta la escuela y empieza allí un trabajo político en el cual mi papá se integra el Partido Comunista y la gente de la comunidad, pues, toda es afín a la ideología guerrillera en esa época [...]. Mi papá, desde que nosotros nacimos, nos inculca una formación guerrillera, nos da cartilla; desde los 4, 5 años, nos sentaba a todos en el comedor a hablarnos del capitalismo, del comunismo; uno no sabía ni cómo se comía eso en esa época ni qué era, pero siempre fuimos creando esa conciencia revolucionaria desde muy pequeños gracias a mi papá». Entrevista 582-PR-02416. Actor armado, hombre, excombatiente FARC.

¹⁵² Entrevista 667-CO-00553. Actor armado, excombatientes FARC, Risaralda.

¹⁵³ «Le dijeron a la gente que nada de hombres que les pegaran a las mujeres, que niños menores no podían jugar en billar, que nada de hombres con aritos». Entrevista 112-VI-00029. Hombre, víctima de desplazamiento forzado.

En algunos casos, quienes no seguían las reglas fueron asesinados o expulsados del territorio, al igual que aquellas personas acusadas de ser aliadas de la fuerza pública o de cometer crímenes (por ejemplo, robos o violencia intrafamiliar). Esa violencia insurgente, sin embargo, en algunos casos se transigía porque era considerada aleccionadora: «la misma comunidad lo denunciaba a la guerrilla: “fulano de tal está haciendo daño”; entonces la guerrilla bajaba y le llamaba la atención y si no hacía caso, pues ya lo mataban, pues ya era [por] terco»¹⁵⁴. La guerrilla era percibida como una especie de Estado paralelo o de organización justiciera más efectiva que el Estado oficial: «había mucha gente que se mofaba diciendo “no, es que yo voy a hablar con los de arriba” [...] cuando se hablaba con “los de arriba”, se sabía que era con las FARC o con los elenos¹⁵⁵, entonces era la forma de amenazar a la persona con la que uno tuviera el problema; en ese tiempo, la Fiscalía eran ellos»¹⁵⁶.

En otros casos, pese a posibles proximidades ideológicas o beneficios momentáneos, la violencia quebró las relaciones entre la guerrilla, las comunidades y las organizaciones. Entre finales de los setenta y 1985 las comunidades indígenas del Cauca tuvieron agudas tensiones con las FARC, determinadas por la incompatibilidad entre los respectivos proyectos políticos: mientras que uno buscaba la autonomía de los cabildos, el otro pretendía instaurar un orden centralizado en el Estado Mayor insurgente¹⁵⁷. Debido a la pretensión de consolidar un dominio territorial y un poder político y militar exclusivo, la guerrilla pasaba por encima de las autoridades indígenas y coaccionaba a las comunidades mediante el cobro de impuestos y la imposición de un estricto control militar que incluía el fusilamiento de aquellos considerados «traidores» o «desertores»¹⁵⁸. Así lo explicó el CRIC en un informe entregado a la Comisión:

[Los movimientos guerrilleros] veían en la población indígena potencial revolucionario y en nuestra organización regional un obstáculo para su alistamiento en la guerra popular prolongada. El fortalecimiento de los vínculos de la base social con la tierra de resguardo y con la autoridad del cabildo generó un obstáculo a las pretensiones de control sobre la población por parte de los grupos armados. Es así que las tensiones, tanto con la fuerza pública como con grupos armados como las

¹⁵⁴ Entrevista 230-VI-00027. Víctima, campesino, Pradera.

¹⁵⁵ «Elenos» era una denominación habitual empleada para referirse a los miembros del ELN.

¹⁵⁶ Entrevista 112-VI-00029. Hombre, víctima de desplazamiento forzado.

¹⁵⁷ Informe 651-CI-01452. Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), «Entonces, ¡hablamos! Afectaciones del conflicto político armado a los pueblos indígenas que conforman el Consejo Regional Indígena del Cauca».

¹⁵⁸ CNMH, *Nuestra vida ha sido nuestra lucha. Resistencia y memoria en el Cauca indígena*.

FARC, particularmente el Sexto Frente, se recrudecieron y derivaron en el asesinato de dirigentes de la zona norte del Cauca¹⁵⁹.

El control que ejercieron las FARC en la región incluyó la extorsión generalizada a los propietarios de haciendas a cambio de protección contra las tomas de tierras emprendidas por los indígenas. La guerrilla comenzó a dar a los recuperadores de tierra el tratamiento represivo destinado a los delincuentes comunes, situación que significó la muerte de más de cien indígenas durante el primer lustro de los ochenta. Por ejemplo, en la masacre de Los Tigres, sucedida el 3 febrero de 1981 en el resguardo La Aurora de Santander de Quilichao, el Frente 6 de las FARC asesinó siete indígenas acusados de cuatreros y desertores, entre los que se encontraba el dirigente local José María Ulcué, antiguo miembro del Partido Comunista; la guerrilla, además, los responsabilizó por la pérdida de influencia del partido en la región. Esas agresiones fueron respondidas por los núcleos de autodefensa indígena antecesores del Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), lo que a su vez generó retaliaciones que cobraron la vida de varios dirigentes indígenas y campesinos. La situación fue temporalmente aplacada en 1985 con la firma de un acuerdo entre la dirigencia regional del Partido Comunista y el Comité Ejecutivo del CRIC y la declaración de Vitoncó¹⁶⁰.

Un líder indígena del norte del Cauca expresó las tensiones que existían con las FARC en esa época:

«En un inicio con las FARC no hubo relaciones muy buenas porque de todas maneras las FARC siempre han tenido su paso por los diferentes territorios. El Quintín Lame, siendo un grupo guerrillero, pues como que les impedía ese paso y hacer lo que quisieran en los diferentes resguardos; entonces, para las FARC, pues no fue como muy alentadora esa situación. [...] Claro, porque es que las FARC también mataban a algunos compañeros nuestros. Entonces había que recriminarles y había que decirles que acá hay un brazo armado pa' defender a la gente. Y si había que combatir con las FARC, pues se combatía con las FARC igualmente»¹⁶¹.

En el mismo sentido se pronunció el CRIC en un informe entregado a la Comisión:

Después de que nace el CRIC la gente empieza a recuperar las tierras que fueron usurpadas. ¿Qué hizo las FARC? Las FARC amenazó a los grandes compañeros dirigentes, recuperadores de tierra y a muchos de ellos las FARC los asesinó; porque el terrateniente, en complicidad del gobierno, ofrecía recursos, porque las FARC desde el principio sacaba plata a la gente pudiente y como los terratenientes

¹⁵⁹ Informe 651-CI-01452. Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), «Entonces, ¡hablamos! Afectaciones del conflicto político armado a los pueblos indígenas que conforman el Consejo Regional Indígena del Cauca».

¹⁶⁰ CNMH, *Nuestra vida ha sido nuestra lucha. Resistencia y memoria en el Cauca indígena*.

¹⁶¹ Entrevista 602-PR-00270. Líder indígena, norte del Cauca.

perdieron las tierras, en varias oportunidades hacen acuerdos con las FARC para neutralizar a los compañeros que recuperaban las tierras¹⁶².

El informe añade:

Así, bajo la presión de múltiples fuerzas que convergían en los territorios indígenas, comenzando con la fuerza pública, los terratenientes, la prefectura apostólica y luego las guerrillas, los grupos de autodefensa indígena emergieron como parte de un mecanismo de seguridad que acompañó inicialmente las recuperaciones de tierras y posteriormente fue asumiendo responsabilidades asociadas con la resolución de conflictos familiares y el posicionamiento de fuerza ante las FARC, dadas sus pretensiones de ejercer como autoridad en los resguardos¹⁶³.

Mientras tanto, el M-19 atravesó importantes transformaciones¹⁶⁴. Tras el asalto al Cantón Norte en Bogotá, el 1 de enero de 1979, el Ejército arremetió contra las estructuras urbanas de la guerrilla. En Cali, de las tres columnas que operaban, solo se salvó una parte de las estructuras estudiantiles; el sector sindical fue duramente golpeado y muchos dirigentes fueron capturados y acusados de pertenecer al M-19. La guerrilla entonces comenzó un proceso de reforma ideológica y orgánica. Tras su Séptima Conferencia, en junio de 1979, dejó de agitar las banderas de la revolución socialista y tomó las de la democracia. Aunque en Cali persistieron algunos comandos militares especializados y compartimentados encargados de desarrollar acciones ofensivas contra la fuerza pública y operaciones financieras o de apropiación de material de guerra, se decidió, con el objetivo de convertirse en una organización político-militar con diferentes frentes de masas, adelantar acciones concretas de intervención en las dinámicas barriales, al tiempo que gradualmente comenzaron a integrar militantes provenientes del sector popular. Esas personas fueron vinculadas para desempeñar tareas de apoyo o propiamente como combatientes. Así lo explicó un exmilitante del M-19 a la Comisión:

«Nos daban unas tareas, o sea, hay que hacer una operación de propaganda armada, hay que hacer una acción de recuperación [...], de consecución de recursos, o de armas o de recursos para la organización [...], esas tareas eran para las estructuras de militantes [...]. En dos meses o tres meses había que hacer esa operación o esas

¹⁶² Informe 651-CI-01452. Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), «Entonces, ¡hablamos! Afectaciones del conflicto político armado a los pueblos indígenas que conforman el Consejo Regional Indígena del Cauca».

¹⁶³ *Ibíd.*

¹⁶⁴ Holguín, «Generaciones de militantes y accionar colectivo del Movimiento 19 de Abril, Cali-Colombia 1974-1985».

tareas y entonces empezamos a hacer la asamblea obrera de textiles, de los buses, que camiones de leche y cosas de ese orden»¹⁶⁵.

Bajo esa estrategia, aumentó la presencia clandestina de militantes del frente barrial en las juntas de acción comunal y en los comités cívicos de los barrios surgidos en Cali durante los procesos de poblamiento de los años setenta, que generalmente presentaban carencias en servicios públicos básicos, salubridad e infraestructura¹⁶⁶. Tanto en los barrios populares de la ladera occidental (Terrón Colorado, Siloé, Lleras, El Cortijo y Brisas de Mayo) como del oriente de la ciudad (El Vergel, Marroquín y Petecuy, entre otros) se instalaron Campamentos de Paz y Democracia en casas alquiladas o cedidas por civiles. Gracias a la amnistía promulgada por el gobierno de Belisario Betancur en noviembre de 1982, muchos militantes del M-19 en Cali abandonaron la clandestinidad y comenzaron a actuar públicamente. Las actividades proselitistas en esos lugares se intensificaron desde 1984, aprovechando la tregua pactada en los acuerdos de Corinto, Hobo y Medellín¹⁶⁷.

En esos barrios, el M-19 prohibió la entrada de la Policía y organizó actividades cívicas, campañas de seguridad, jornadas de mejoramiento de infraestructura y prestación de servicios públicos básicos (por ejemplo, pavimentación de vías, conexiones de energía o recolección de basura), alfabetización, obras de teatro y ollas comunitarias; además, reguló los precios y distribuyó alimentos y mercancías (por ejemplo, material de construcción o leche robada de los camiones repartidores). También apoyó las movilizaciones y protestas autónomas de la comunidad y asumió funciones de administración de justicia¹⁶⁸ y de mediación de conflictos¹⁶⁹. Así lo recordó un exmilitante del M-19:

¹⁶⁵ Entrevista 112-PR-02085. Actor armado, excombatiente del M-19.

¹⁶⁶ Holguín, «Generaciones de militantes y accionar colectivo del Movimiento 19 de Abril, Cali-Colombia 1974-1985».

¹⁶⁷ Acuerdos firmados el 24 de agosto de 1984 entre el M-19 y el EPL con el gobierno de Belisario Betancur, en los cuales las partes se comprometieron a un cese bilateral del fuego y la búsqueda conjunta de una salida política al conflicto armado interno. La tregua duró menos de un año debido a que las fuerzas militares no suspendieron las hostilidades contra las guerrillas ni los atropellos contra militantes de la izquierda legal.

¹⁶⁸ «Un caso de esto se puede ver en el control que ejercía el M-19 sobre “urbanizadores piratas” que sobrevendían lotes o incumplían con las entregas de los terrenos en el oriente de Cali. Este fue el caso de Luis Alberto Marroquín, parlamentario liberal por el Valle del Cauca que desde hacía varios años negociaba con terrenos en el sector de Aguablanca. Un comando urbano del M-19 atacó con explosivos la residencia del político liberal y publicó un anuncio en la prensa local donde advertían literalmente: “Si no paga irá a juicio popular” e instaba a este político a devolver 100 millones de pesos que correspondían a 2000 familias que decían haber sido estafadas». Holguín, «Generaciones de militantes y accionar colectivo del Movimiento 19 de Abril, Cali-Colombia 1974-1985».

¹⁶⁹ Entrevista 582-VI-00008. Víctima, hombre, familiar ex combatiente, Cali. Entrevista 216-CO-00016. Víctimas, contexto urbano, Cali. Entrevista 582-VI-00010. Víctima, líder cultural, comunal. Entrevista 112-AA-00004. Actor armado, excombatiente del M-19. Entrevista 216-AA-00005. Actor armado, excombatiente M-19.

«La gente dejaba las puertas abiertas, nadie robaba, se acabaron los robos, se acabó el expendio, se solucionó en parte lo de las basuras [y algunos] tipos de conflictos de pareja. Estas sociedades no son muy dadas a que se respete a la mujer, a cada rato llegaban: “vea, que ese man me mantiene dando garrote y no quiero vivir más con él y me amenazó, que si lo dejo me mata”. [Entonces] se iba y se le daba destierro, destierro era: “váyase de aquí, hermano, aquí no queremos verlo” [...]. Cuando llegan las milicias, llegan a resolver problemas que el Estado no resolvía, ni la Policía»¹⁷⁰.

Estas estrategias le granjearon legitimidad y apoyos importantes a la guerrilla en los sectores urbanos marginados¹⁷¹. Empero, allí la gente también sufrió el yugo de la violencia insurgente: patrullajes, restricción de horarios y control de la delincuencia y del expendio y consumo de drogas mediante expulsiones o asesinatos ejemplarizantes, pese a que, bajo la concepción de una revolución que incluyera y reformara los sectores marginados de la población, defendían el reclutamiento de jóvenes delincuentes, habitantes de calle o consumidores de estupefacientes¹⁷². Además, la guerrilla utilizó menores de edad como combatientes y para tareas de apoyo logístico, obtención de información y ocultamiento de armas, dinero y pertrechos.

Combinando razones propagandísticas y financieras, el M-19 también recurrió al secuestro. En una casa del barrio Tequendama en Cali montaron la denominada «Cárcel del Pueblo», un lugar subterráneo con alta seguridad donde retenían a las víctimas bajo la vigilancia de guerrilleros mientras se adelantaban las negociaciones del pago del rescate para su liberación. Para esa práctica, la guerrilla recibió instrucción de Los Tupamaros de Uruguay. Así lo relató a la Comisión una excombatiente del M-19:

«Con Navarro estuve aquí, teníamos la Cárcel del Pueblo en el barrio Tequendama [...], él y yo éramos los que frentiábamos la casa, ¿sí? Nosotros allí tuvimos algunos operativos con la gente de las FARC donde teníamos retenidos sujetos de aquí de las multinacionales, que nosotros reteníamos para podernos abastecer de dinero. [...] La gente de Los Tupamaros nos enseñó ese sistema, los fines eran económicos»¹⁷³.

De forma paralela a sus acciones en Cali, el M-19 extendió sus actividades a otros municipios del sur del Valle (Yumbo, Florida, Pradera y Palmira) y el nororiente del Cauca. En Tierradentro, Corinto, Caloto, Toribío, Jambaló y Caldono montaron escuelas de formación dirigidas no solo a combatientes, sino también a integrantes de las comunidades y organizaciones locales:

¹⁷⁰ Entrevista 216-AA-00005. Actor armado, excombatiente M-19.

¹⁷¹ «Entonces, claro, eso fue una vaina impresionante, impresionante, digamos, el nivel de legitimidad [...], había milicianos en Cali, allá podía haber cientos, mil, yo creo más [...] porque eso empezó a fructificar y terminó convirtiéndose en un modelo; de hecho, empezaron a llegar compañeros [...] y empezó a llegar la gente de Bogotá, de Medellín, de Bucaramanga a conocer la experiencia de los campamentos de paz y de la democracia en Cali». Entrevista 112-PR-02085. Actor armado, excombatiente del M-19.

¹⁷² Entrevista 112-PR-02085. Actor armado, excombatiente del M-19. Entrevista 216-AA-00004. Excombatientes, M-19, Conflicto urbano, Cali.

¹⁷³ Entrevista 112-VI-00044. Actor armado, mujer, M-19.

«En esa época había gentes muy pensantes, gentes muy brillantes [...], ellos lo ponían a uno estudiar y a leer [...], Marx, Mao Tse-Tung [...], libros de estos personajes de izquierda en el mundo, muy buena esta parte ilustrativa [...]. Nos fueron inculcando que el Estado era nuestro enemigo por la pobreza, por la inequidad, porque no había formas de desarrollo social [...], entonces el culpable y el único culpable era el Estado [...]. Llegaba mucho decano a darnos clase de filosofía, nos llegaban a dar clases de cátedra de la parte administrativa, del orden público, del orden territorial, cátedra económica»¹⁷⁴.

Por su parte, entre 1978 y 1983 el ELN atravesó un período de reestructuración y fijó un plan basado en la organización de masas y la ocupación de puntos estratégicos alrededor de zonas de desarrollo económico, centros urbanos y corredores rurales¹⁷⁵. Bajo ese lineamiento, el ELN se concentró en Cali y en 1986 desplegó el Frente Luis Carlos Cárdenas sobre el norte del Valle y el Cañón del Garrapatas. En 1989 creó la regional Omaira Montoya y a finales de los años noventa fundó el Frente José María Becerra para expandirse en el sur del Valle¹⁷⁶.

Otra guerrilla importante en la región fue el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL). Aunque esta guerrilla indígena apareció en la escena pública en 1985 con la toma de Santander de Quilichao, se gestó desde los setenta en el contexto de las luchas por la tierra en el Cauca. Sus principales objetivos eran asegurar el monopolio de la violencia en los territorios indígenas, contener la expansión de los grupos armados, proteger a las comunidades y sancionar a los terratenientes que ejercían violencia contra los dirigentes comunitarios¹⁷⁷. El MAQL trabajó mancomunadamente con el M-19, con quien no solo intercambió personal e implementó escuelas de formación, sino que coordinó acciones bélicas. Un informe entregado a la Comisión por el CRIC, por ejemplo, recoge el relato de un excombatiente del MAQL sobre la toma conjunta de Inzá en 1986:

En la toma guerrillera hubo un acuerdo entre el Quintín Lame y el M-19 para tomarnos el pueblo de Inzá. En ese tiempo se necesitaba recuperar los fusiles, se necesitaba armamento, entonces hubo un acuerdo con el M-19 y ahí fue que se unieron los dos. [...] Fuimos a Inzá y en el punto que se llama Crucero minamos todo ese sector de carretera. [...] Casi un kilómetro minado. Bueno, con trincheras; de noche abriendo huecos para acomodar el fusil cuando pasara el Ejército y minas para levantarlos. Nosotros ahí esperando al Ejército y los otros ya en la toma del pueblo y se hizo esa toma. Y el Ejército no se atravesó, porque nos

¹⁷⁴ Entrevista 602-PR-00270. Líder indígena, norte del Cauca.

¹⁷⁵ Medina, «FARC y ELN. Una historia política comparada (1958-2006)».

¹⁷⁶ Misión de Observación Electoral, *Monografía Política Electoral Departamento del Valle del Cauca 1997 a 2007*; Centro Nacional de Memoria Histórica, *Bloque Calima de las AUC*.

¹⁷⁷ Peñaranda, *De rebeldes a ciudadanos: el caso del Movimiento Armado Quintín Lame*, 75-132.

alcanzaron a pillar que los estábamos esperando. Entonces dieron la vuelta por otro lado y llegaron al pueblo de Inzá y por la noche fue el enfrentamiento más verraco. Allá nos cogieron a plomo¹⁷⁸.

Las acciones del grupo, que tuvieron su pico entre 1985 y 1986, consistieron principalmente en tomas a centros poblados, emboscadas a la fuerza pública y acciones punitivas contra propietarios rurales a los que consideraban responsables de la violencia desatada contra los líderes indígenas. Dentro de las últimas, destaca la masacre de La Chorrera, en Popayán, el 10 de abril de 1986, cuando un comando del MAQL intentó secuestrar a los cuatro ocupantes de un vehículo y les disparó ante su negativa a detenerse. Las víctimas fueron Alfonso Valencia Paredes, un reconocido ganadero, concejal de Puracé y familiar del expresidente Guillermo Valencia, sus dos guardaespaldas adscritos al DAS (Carlos Padilla y Eduardo Delgado) y el conductor.

El MAQL tuvo una corta vida (1985-1990), principalmente porque las autoridades indígenas se dieron cuenta de que la lucha armada era inconveniente en tanto terminaba atrayendo más violencia y estigmatización sobre el movimiento indígena. Así lo explicó un comunero de la región caucana de Tierradentro en un informe entregado por el CRIC a la Comisión:

Y las mismas autoridades, los mismos territorios, las mismas dirigencias vieron que había allá un desorden, que cómo así que el Quintín y el CRIC son guerrilleros. Por esa razón se dio un paso político, que el Quintín debe entregar las armas, debe negociar y por eso hicieron el pacto en el cambio de la Constitución¹⁷⁹.

En 1984 se creó la Coordinadora Nacional Guerrillera (CNG) con el objetivo de abrir espacios de debate ideológico y articular las acciones políticas y militares de los grupos insurgentes. Participaron el M-19, el EPL, el PRT, el MAQL, el MIR-PL y el Comando Ricardo Franco (CRF). Esta última estructura surgió en 1982, cuando José Fedor Rey Álvarez, alias Javier Delgado, comandante de las FARC que operaba en la zona nororiental del Cauca, desertó y conformó una disidencia. El segundo al mando era Hernando Pizarro Leongómez, alias Pesca o Pescado, hermano del comandante del M-19 Carlos Pizarro. El CRF llevó a cabo algunas operaciones conjuntas con el M-19 y el MAQL en el nororiente y el norte del Cauca, pero las FARC nunca perdonaron la traición. De hecho, las FARC se mantuvieron al margen de la CNG dado su objetivo de continuar con la toma del poder delineada en la Séptima Conferencia (mayo de 1982) y las rencillas que tenían con el CRF.

¹⁷⁸ Informe 651-CI-01452. Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), «Entonces, ¡hablamos! Afectaciones del conflicto político armado a los pueblos indígenas que conforman el Consejo Regional Indígena del Cauca», 98.

¹⁷⁹ *Ibíd.*, 17.

Esta última estructura fue expulsada de la CNG como consecuencia de la brutal masacre de Tacueyó¹⁸⁰. A raíz de rumores de infiltración que surgieron luego de la toma de Miranda (Cauca), Rey y Hernando Pizarro ordenaron, entre noviembre de 1985 y enero de 1986, la tortura, asesinato y desaparición¹⁸¹ de más de un centenar de sus compañeros (las fuentes oscilan entre 125 y 165), acusándolos de ser espías del Ejército, la Policía y otros organismos de seguridad e inteligencia del Estado. La mayoría eran jóvenes campesinos y universitarios ingresados recientemente a las filas guerrilleras. El testimonio de un excombatiente del CRF recogido en un informe entregado por las fuerzas militares a la Comisión muestra las atrocidades cometidas por la guerrilla:

A los 15 días de haber yo ingresado, ya comenzaron a movernos [...] donde ya yo vi cómo comenzaron también a coger a los mismos compañeros, ya también los comenzaron a encadenar y a torturar y todo eso. [...] Entonces lo cogían, lo desarmaban a uno y lo amarraban. [...] Entonces, ellos comenzaban a decir: «bueno, los que no tienen nada que ver, no teman porque los que hoy estamos nosotros aquí amarrándoles es porque son infiltrados, son infiltrados y no vamos a permitir que en nuestro grupo hayan infiltrados» [...] eso fue horrible porque ya más adelante eso ya eran 10, 15, 5, 8 que iban ya amarrándolos, los iban torturando y los tiraban en una fosa. [...] Mandaban hacer las fosas, hacíamos las fosas y nos tocaba que tapar las fosas y todo eso. Cuando tiraron a 10 personas allá, eso es algo como [...] misterioso porque [...] la sangre no nos dejaba, no nos dejaba sellar, no nos dejaba tapar porque levantaba la tierra. ¿Entonces que tocaba que hacer? Tocaba que conseguir piedras, troncos, raíces de lo que sea para poder [hacer] que no se levantara¹⁸².

En 1986, tras el duro revés político y militar que significó la toma del Palacio de Justicia (6 y 7 de noviembre de 1985 en Bogotá), el M-19 adoptó un plan de ofensiva estratégica que comenzaba en Cauca y pretendía provocar una insurrección popular en Cali. El comandante Álvaro Fayad propuso el plan a las otras guerrillas, quienes no lo compartieron porque persistían en su estrategia de acumular fuerzas y hacer ofensivas guerrilleras tácticas y no creían que existieran las condiciones para tomar el poder. Entonces el M-19 concentró sus efectivos en Cauca y logró la adhesión del MAQL y de

¹⁸⁰ Consultar el caso sobre la masacre de Tacueyó y el impacto de lo ocurrido en el movimiento guerrillero en Colombia, elaborado por la Comisión.

¹⁸¹ «Eso fue lo que conocí de la masacre del Ricardo Franco, pues eso es lo que nos contaban, que en Gallinaza había fosas, que en la parte alta de la Calera habían fosas y que en Chimueto habían fosas y que los perros bajaban de allá con la barriga llena de comer muertos». Entrevista 295-VI-00005. Mujer, indígena, víctima, Norte del Cauca.

¹⁸² Informe 748-CI-00642, Fuerzas Militares, «Informe Aletheia», 97.

algunos núcleos guerrilleros aliados de Ecuador (Alfaro Vive) y Perú (Tupac Amaru)¹⁸³. Esta estructura, compuesta por cerca de 500 guerrilleros, se llamó Batallón América y quedó bajo el mando de Carlos Pizarro.

El plan no prosperó. El batallón sufrió duras bajas en los combates con el Ejército en Cauca y Valle. El MAQL se retiró y retornó al Cauca. Debilitado, el M-19 llegó a Cali, donde el levantamiento popular esperado no sucedió y tuvo que actuar marginalmente con apoyo de su núcleo miliciano en los barrios populares, especialmente en Siloé. Tras este nuevo fracaso, en 1988 el M-19 replegó sus efectivos al Cauca y adoptó un giro estratégico con acento más político que militar. Bajo la consigna de «tregua a las fuerzas armadas, guerra a la oligarquía y paz a la nación» y la aspiración de «ser gobierno», el M-19 comenzó el camino a la paz que concluyó con la entrega de las armas y la participación en la asamblea constituyente dos años después¹⁸⁴.

Pese a que la base social de las guerrillas en Valle y Cauca nunca desapareció del todo, se fracturó a lo largo de los años a raíz de la escalada de violencia de las propias guerrillas contra la población civil —especialmente contraproducentes serían los secuestros y el cobro de «vacunas» que se dispararon en los noventa— y su involucramiento con el narcotráfico.

El cruce entre las guerrillas y las organizaciones narcotraficantes se hizo inevitable ante la expansión territorial que experimentaron las primeras desde mediados de los setenta. En los ochenta, en las zonas de control donde el equilibrio de fuerzas era favorable, las FARC-EP comenzaron a cobrar a los narcos el denominado «gramaje», un impuesto sobre cada kilo de cocaína que salía de las áreas que ocupaban. El gramaje inicialmente buscaba mitigar los abusos a los que los narcos sometían a los campesinos cocaleros, pero era también un rentable mecanismo de financiación de la guerra y de acumulación de capital. Además, la guerrilla consideró el secuestro de narcos o de sus familiares como una rápida fuente de recursos. Por ejemplo, en septiembre de 1992, unidades del Frente 30 de las FARC-EP secuestraron a Cristina Santacruz, hermana del narcotraficante José «Chepe» Santacruz, y exigió doce millones de dólares por su liberación; en retaliación, el Cartel de Cali secuestró a integrantes de la UP, del Partido Comunista y familiares de los cabecillas de la guerrilla¹⁸⁵. Las FARC-EP y el cartel establecieron un pacto de no agresión¹⁸⁶ y arreglaron un canje bajo el cual las personas

¹⁸³ Villarraga, «30 años de una paz pionera», *El Tiempo*.

¹⁸⁴ *Ibíd.*

¹⁸⁵ El 22 de octubre de 1992 el Cartel de Cali secuestró a Amparo Torres Victoria, hermana de Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo. Los narcotraficantes también raptaron por lo menos a cuatro guerrilleros de la red urbana de las FARC-EP, a Javier Torres, quien tenía relaciones comerciales con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), y a otras quince personas pertenecientes a la Unión Patriótica y el Partido Comunista. *El Tiempo*, «Guerra entre FARC y Cartel de Cali».

¹⁸⁶ «Ellos [el Cartel de Cali] mandaron muchas razones y todas esas cosas, que querían hablar [...]. Entonces, cuando hablamos con ellos, les dijimos: “bueno, lo que nos preocupa a nosotros es que ahora esa señora se convierta en un trofeo de guerra y si nosotros la dejamos ir sin garantía de que ustedes

secuestradas por ambas partes fueron liberadas en enero de 1993¹⁸⁷. Así relató la situación un exintegrante de las FARC-EP entrevistado por la Comisión:

«Un personal que trabajaba en actividades económicas con el Frente 30 retuvo a una hermana de Chepe Santacruz, los narcotraficantes en Cali se dan cuenta de ese hecho y comienzan a secuestrar cualquier cantidad de miembros del partido, familiares de miembros de las FARC, de [Pablo] Catatumbo, de Pacho Chino, con una serie de amenazas. Hasta que hay un arreglo, se suelta; soltamos y eso no pasó a mayores, pero no hubo a partir de ese momento más complicaciones con ese sector de los narcos aquí en el Valle del Cauca; eso fue un hecho que dejó esa lección aprendida»¹⁸⁸.

Las guerrillas pasaron de relaciones parasitarias con el narcotráfico a relaciones simbióticas en las que se registraron antagonismos violentos, pero también insospechadas alianzas. Al principio la guerrilla se opuso a que los campesinos se dedicaran al cultivo de coca e instalaran laboratorios para el procesamiento de cocaína, pero en los noventa terminaron involucrándose en distintos eslabones del negocio. Muchos guerrilleros incluso se volvieron traficantes o pasaron a formar parte de los carteles del Valle. Pese a que algunos excomandantes de las FARC niegan el involucramiento de la guerrilla en el narcotráfico o aseguran que el lucro se basaba en el cobro del gramaje y no en la producción y comercialización, los testimonios de exguerrilleros rasos y otras fuentes demuestran que la guerrilla simultáneamente promovió los cultivos en algunas zonas rurales del Valle y el norte del Cauca, instaló laboratorios propios para el procesamiento de alcaloides y facilitó la entrada de colonos cultivadores a los territorios. También reguló la siembra estableciendo topes de matas y les exigió a los campesinos que sembraran una parte de cultivos comestibles en cada hectárea de coca. Sobre ese involucramiento de la guerrilla en el narcotráfico, por ejemplo, un excombatiente del Bloque Móvil Arturo Ruiz de las FARC le contó a la Comisión:

«Escuchaba uno que comentaban que fulano tenía una cocina o que el comandante de finanzas se voló y se robó 3.000 millones, 5.000 millones, que tiene una finca en tal parte, que compró carro, o que fulano sí mandaba de vez en cuando sus 1.000 libritas con el narcotraficante, o sea, se asociaba con un narcotraficante; el narcotraficante tenía la ruta y él le ayudaba por medio del impuesto, no le cobraba impuesto, pero le decía: “lléveme en tantos millones”»¹⁸⁹.

sepan que salió viva y sana y salva desde el campamento y le ocurre algo en el camino, entonces quedamos de enemigos los dos, no podemos permitir eso [...]. El secretariado metió la mano y dijo: “no, eso es una cuestión muy seria y no podemos dar pasos en falso, no queremos convertirnos en enemigos del Cartel de Cali y mucho menos enemigos de la familia de Chepe Santacruz porque no le queremos mandar un mensaje a la gente de que nosotros somos arbitrarios». Entrevista 615-PR-00407. Actor armado, excomandante Bloque Occidental FARC.

¹⁸⁷ El Tiempo, «Liberada la hermana de José Santacruz Londoño».

¹⁸⁸ Entrevista 326-CO-00517. Actor armado, excombatientes, Frente 30 y Frente Urbano Manuel Cepeda FARC, Valle del Cauca.

¹⁸⁹ Entrevista 068-AA-00001. Actor armado, hombre, excombatiente FARC-EP.

El narcotráfico se convirtió en la principal fuente de financiación de las FARC-EP desde los años noventa. Sin abandonar los secuestros extorsivos ni la práctica de cobrar gramaje a las organizaciones de narcotraficantes y negociar con ellas los precios, el control directo de cultivos, laboratorios o «cristalizaderos» y rutas de comercialización le proporcionó a la guerrilla ingresos muy superiores. Paulatinamente las FARC-EP se convirtieron en poderosos competidores en el negocio ilegal. Los roces provocados por estos factores fueron determinantes en la violenta campaña contrainsurgente que desataron los narcos durante los ochenta y los noventa con el apoyo de otros grupos paramilitares y del Estado. Al respecto, un antiguo militante de la UP cercano a las FARC-EP le relató a la Comisión:

«Los narcotraficantes del Cartel de Medellín, en solidaridad con la familia Ochoa, crean Muerte A Secuestradores, el MAS. Eso lo hizo el M-19, y finalmente, pues ellos secuestran varios del M-19 y también los matan, y finalmente llegan a un acuerdo de no agresión entre el M-19 y el Cartel de Medellín. Esto lo cuento porque fue lo que me dijo posteriormente en una conversación que yo sostuve con Gonzalo Rodríguez Gacha, el Mexicano, que era uno de los jefes del Cartel de Medellín.

»Era el año 86 y él me busca, me manda la razón para que nos reunamos a través de un abogado y nos reunimos en el año 86 en Medellín. [...] Él me dice básicamente que él tiene en toda esa zona del Meta y Guaviare sus cultivos, sus laboratorios, etcétera, y que él sabe que un comandante guerrillero necesita dinero para alimentar a sus hombres y que él no tiene problema en darles dinero para eso, pero que [las FARC] le han estado asaltando los laboratorios, le han estado robando la mercancía, y que cuando él manda la gente a comprar pasta o base de coca, por ejemplo, a San José del Guaviare, si saben que es de él, entonces los asaltan, les roban el dinero, etcétera. Así que lo que plantea el Mexicano es: “mire, nosotros no tenemos problemas con la guerrilla, con el M-19 tuvimos el problema, pero en este momento ya no tenemos problema, incluso en algunos momentos se han alojado temporalmente en propiedad mía algunos de ellos, pero yo lo que quiero es trabajar, yo soy comerciante y lo que quiero es trabajar y que me dejen trabajar”. Y luego vino la amenaza: “mire, el tema es el siguiente: o llegamos a un acuerdo o nos vamos a una confrontación; yo en estos momentos exporto 2.000 kilos a la semana y los vendo en el mercado internacional a 16.000 dólares el kilo, eso son 32 millones de dólares a la semana, o sea, son casi 128 millones de dólares al mes. Así que, si quiere guerra, pues guerra hacemos y yo soy capaz de armar un ejército de 2.000 hombres y nos damos duro”. Esa fue la cosa que él planteó y me dijo que por esa época había tenido una conversación con el Mono Jojoy, que en esa época era comandante de un frente en el Caquetá y que viéramos qué íbamos a hacer.

»Pues yo llevé la razón y hablé y toda la cosa, pero realmente Jacobo Arenas no estaba interesado en tener ningún tipo de negociación con el Mexicano, no sé por qué, no entiendo la razón; Alfonso Cano me dijo que eso iba a ser una pendejada

porque íbamos a terminar poniéndolos de aliados con los militares y que esa era una pelea que no valía la pena sostener»¹⁹⁰.

Sangre y terror: carteles, paras y represión estatal

Durante los ochenta, los carteles renovaron el negocio mediante la introducción de nuevas variedades de semillas procedentes de Bolivia y Perú y la asistencia técnica a los nuevos cultivadores, con lo cual incrementaron el rendimiento de los cultivos. También se ampliaron las áreas de siembra (el norte del Cauca, por ejemplo, empezó a reportar un crecimiento importante de cultivos de coca con fines ilícitos desde finales de los setenta) y se abandonó el modelo de importar pasta base para comenzar a producirla en territorio nacional. El objetivo de aumentar las exportaciones de droga significó una exacerbación de los artificios para llevarla hasta los consumidores estadounidenses y europeos: de las «mulas», los dobles fondos de maletas, las suelas de los zapatos y los paquetes de comida que permitían mover kilos, se pasó a barcos, submarinos y avionetas cargadas de toneladas de droga.

Las impresionantes fortunas que amasaron los narcos les permitieron aumentar sus aparatos armados privados, además de ganar prestigio y posición social; sus ámbitos de influencia se ampliaron y participaron en todo tipo de colusiones con el mundo de la legalidad. Compararon y reconvirtieron miles de hectáreas de tierra y penetraron diversos negocios¹⁹¹, financiaron campañas políticas en distintos niveles y desde todas las orillas del espectro político y pusieron de rodillas a la fuerza pública. En suma, con sus recursos financieros y su capacidad de administrar coerción, contribuyeron a la construcción y el mantenimiento del orden social.

A diferencia de lo sucedido en años anteriores, en la década del ochenta la violencia se convirtió en el mecanismo para regular tanto el negocio del narcotráfico como las relaciones de las mafias con la sociedad. No obstante, a diferencia del Cartel de Medellín, las mafias del Valle evitaron desafiar al Estado abiertamente y a gran escala a través de prácticas como el terrorismo, los magnicidios o el «plan pistola» contra integrantes de la fuerza pública. Más bien se hicieron expertos en corromper funcionarios para sus propósitos ilegales. El propio Orlando Henao y otros miembros

¹⁹⁰ Entrevista 660-VI-00011. Hombre, excombatiente de las FARC, exiliado.

¹⁹¹ La mayoría de los 5.248 bienes de narcotraficantes en poder de la Dirección Nacional de Estupefacientes en 2018 estaban ubicados en el Valle. Verdad Abierta, «Bloque Calima, un 'depredador' paramilitar marcado por el narcotráfico».

del Cartel del Norte del Valle como Wilber Varela, alias Jabón, habían pertenecido a la Policía, lo que facilitó las relaciones de cooperación con la entidad. De hecho, el cartel contó con la estrecha colaboración del coronel de la policía Danilo González Gil. Gracias a sus alianzas, durante mucho tiempo estuvieron a salvo de cualquier asedio estatal¹⁹². A propósito de la relación de Danilo González con la Policía, el propio Rasguño afirmó en una declaración judicial:

La actividad de Danilo González con el Cartel del Norte del Valle fue muy cercana. [...] Era una persona que nos manejaba demasiadas cosas en la Policía, de corrupción, de traslados, de poner unos policías amigos de él cerca de nosotros, de cuadrar con la Fiscalía, en el CTI, de estar sobornando comandantes de policía, oficiales, a todo nivel, fue muy cercano con nosotros. Danilo, después de que se retiró de la Policía, siguió haciendo lo mismo y, a su vez, traficando con nosotros; Danilo traficó drogas conmigo, Danilo trabajaba con todos nosotros, con Arcángel, con Chupeta, con Orlando, con el mismo don Diego en su momento, con Varela, con Patiño. Danilo trabajaba con todo mundo, esa es la verdad¹⁹³.

Sin embargo, las diferencias en las estrategias económicas y en el ejercicio de la violencia entre el Cartel de Cali y el del Norte del Valle fueron notorias:

«Esa generación de los forjadores, los narcotraficantes caleños, van a tener la pretensión de ser “señores”, es decir, de ser incluidos dentro de la sociedad, de ser contados dentro de los notables, de ser parte de la clase dirigente de la ciudad. [...] No tenían todo su dinero debajo del colchón, sino que invirtieron en empresas, en bancos, en emisoras, en una universidad, en droguerías, en laboratorios, en fin, eran unos empresarios que tenían un pie en la legalidad y otro en la ilegalidad. [...] Esta gente del norte cree más en que el prestigio y el nombre es producto del dinero [...], lo que interesa es cuánto tiene y qué puede comprar. [...] [El Cartel de Cali], con una idea más moderna de capital, invierte en empresas, en bancos, en equipos de fútbol, mientras que los del norte están mucho más vinculados a una idea de la tierra, de haciendas muy tecnificadas. [...] La forma de hacer violencia es distinta: las de Cali son más asépticas, no quiero decir con eso menos crueles, pero son más dirigidas, más funcionales al negocio. Las del norte son sin medida, tienen unos niveles de sevicia impresionantes y la violencia se entiende como una estrategia aleccionadora»¹⁹⁴.

En efecto, el interés por la tierra explica en gran medida la violencia ejercida por el Cartel del Norte del Valle. En los años ochenta, Iván Urdinola, don Diego, el Alacrán,

¹⁹² El Espectador, «El fin del imperio Henao».

¹⁹³ Transcripción de la declaración rendida por Luis Hernando Gómez ante la Corte Federal de Brooklyn (USA) y la Fiscalía General de la Nación (Colombia). Nueva York, 15 de diciembre de 2020.

¹⁹⁴ Entrevista 230-PR-02003. Experto, Valle del Cauca.

Bananas y otros mafiosos, quienes habían emigrado al departamento de Putumayo para acumular capital aprovechando la bonanza cocalera en la región, regresaron al Valle con el objetivo de adquirir tierra no solo para implantar el narcotráfico, sino también para montar negocios legales (por ejemplo, fincas ganaderas y turísticas) e integrarse a las élites locales y regionales en calidad de ricos emergentes¹⁹⁵.

El despojo cometido por los narcotraficantes del norte del Valle se caracterizó principalmente por el ejercicio de violencia directa (amenazas, asesinatos y masacres para provocar terror) contra pequeños propietarios que fueron obligados a desplazarse o a vender la tierra a muy bajo costo. Hubo algunos casos donde los narcos, por el contrario, ofrecieron exorbitantes cantidades de dinero por la tierra —en coincidencia con una modalidad de lavado de activos—, lo cual llevó a muchos campesinos a vender, seducidos por el dinero fácil o desesperados por la crisis económica que atravesaban:

«Entonces [...] empiezan a comprar cara [la hectárea], comparado con lo que la gente la vendía; anteriormente, la gente la vendía por 300.000 pesos, 200.000, llegaron dando 500.000. Entonces la gente empezó a vender también. [...] En la década del ochenta tuvimos una situación muy compleja en la región [...], la gente del narcotráfico llega comprando tierra, por ejemplo, una hectárea de tierra por millones»¹⁹⁶.

Debido al poder económico conseguido gracias al narcotráfico y la acumulación de tierra y propiedades, los mafiosos comenzaron a ser víctimas de extorsiones, secuestros y asaltos por parte del ELN, aunque en algunas ocasiones las responsables fueron bandas delincuenciales que se hicieron pasar como integrantes de esa organización¹⁹⁷. La violenta reacción de los narcos coincidió con la política contrainsurgente del Estado y de ahí derivaron las alianzas con miembros de la fuerza pública que se tradujo en la ola de violencia que a finales de los ochenta y principios de los noventa se concentró justamente en los municipios donde los narcos tenían intereses económicos, como Trujillo, Riofrío, Bolívar y Sevilla.

No obstante, el propósito criminal de las estructuras del narcotráfico no era propiamente contrainsurgente, sino la expansión y la consolidación del negocio ilegal. Atacaron a la guerrilla y su base social porque eran vistas como competencia o como una amenaza, pero cualquier contrincante debía ser eliminado, como se evidenció luego, a mediados de los noventa, con la colisión entre Los Machos y Los Rastrojos. Por eso, pese a la agencia que tuvieron los narcos en la «importación» del Bloque Calima de las AUC, esta estructura no se pudo articular con los ejércitos locales de los narcos, aun cuando la acción criminal del BC los benefició en tanto combatió y debilitó a las guerrillas, enemigo común de todas las organizaciones narcoparamilitares. La complejidad de las relaciones entre los narcos del norte del Valle y los paramilitares

¹⁹⁵ Centro Nacional de Memoria Histórica, *La masacre de Trujillo: una tragedia que no cesa*.

¹⁹⁶ Entrevista 1036-PR-02315. Víctima, líder afrodescendiente, norte del Cauca.

¹⁹⁷ Centro Nacional de Memoria Histórica, *La masacre de Trujillo: una tragedia que no cesa*.

del Bloque Calima se evidenció nuevamente años después durante las negociaciones de paz entre el Gobierno nacional y los paramilitares en 2002. Diego Montoya y Wilber Varela intentaron dar a sus ejércitos un estatus político contrainsurgente y conseguir un proceso de desarme, desmovilización y reinserción bajo un estatuto jurídico favorable¹⁹⁸, para lo cual negociaron con algunos jefes de las AUC; sin embargo, fracasaron en su intento y no entraron en el proceso. Aunque el paramilitarismo no se agota en el narcotráfico, su historia evidencia que sus vínculos con el negocio ilegal nunca se han disuelto. Las articulaciones son continuas a pesar de que las modalidades del narcotráfico y el paramilitarismo cambian en el espacio y a través del tiempo¹⁹⁹.

Entre 1986 y 1994, Trujillo, Riofrío, Bolívar, Sevilla y municipios aledaños del centro y el norte del Valle fueron azotados por una secuencia de desapariciones forzadas, torturas, homicidios selectivos, detenciones arbitrarias y masacres perpetradas por una alianza entre la fuerza pública y las estructuras criminales del norte del Valle encabezadas por don Diego, el Alacrán y Bananas²⁰⁰. Aproximadamente 245 personas (aunque algunas fuentes aseguran que fueron más de 300) fueron asesinadas en ese lapso, en su mayoría campesinos y trabajadores de cooperativas rurales acusados de ser auxiliares de las guerrillas, particularmente del ELN. El pico de violencia sucedió entre marzo y abril de 1990, cuando hombres de don Diego desaparecieron a varias personas en el corregimiento de La Sonora y asesinaron al sacerdote y líder comunitario Tiberio Fernández, quien fue mutilado de pies y manos, castrado, decapitado y lanzado al río Cauca por denunciar la barbarie que se había tomado Trujillo. La gran mayoría de las muertes siguen en la impunidad. Trujillo, Riofrío, Bolívar y Sevilla fueron una de las primeras muestras de la alianza paramilitar entre narcos y agentes del Estado²⁰¹.

Las acciones violentas no se llevaron a cabo solo en áreas rurales. Por ejemplo, en el casco urbano de Trujillo, la Policía, el Ejército, las autoridades locales y los narcotraficantes se unieron desde 1988 para impedir las marchas y concentraciones campesinas, así como para cometer actos violentos contra líderes e integrantes de las organizaciones sociales. También sucedieron secuestros, desapariciones, torturas y homicidios contra personas señaladas de auxiliar a la guerrilla o consideradas transgresoras del orden social, como delincuentes comunes y consumidores de drogas²⁰².

¹⁹⁸ Para intentar pasar como una estructura de las AUC, Los Rastrojos se hicieron llamar Rondas Campesinas Populares (RCP).

¹⁹⁹ Centro Nacional de Memoria Histórica, *La masacre de Trujillo: una tragedia que no cesa*.

²⁰⁰ La crueldad desatada en Trujillo posteriormente fue replicada por los paramilitares en varias zonas del país: utilización de motosierras para desmembrar a las víctimas, quemaduras con hierros candentes, aplicación de sal y otras sustancias abrasivas en las heridas abiertas, asfixia con chorros de agua, fractura de dedos y levantamiento de las uñas. Rutas del Conflicto, «Masacre de Trujillo».

²⁰¹ *Ibíd.*

²⁰² Centro Nacional de Memoria Histórica, *Bloque Calima de las AUC*.

Un campesino relató a la Comisión el caso de Sevilla, el cual también ilustra la tragedia que se vivió en esa época en el centro y el norte del Valle:

«En los ochenta llegó todo el tema del narcotráfico, muchos de los jóvenes nuestros, compañeros míos de estudio, terminaron delinquiendo en el narcotráfico, terminaron asesinados, terminaron encarcelados, en fin, todo lo que conllevó esa falsa economía. Empezó el territorio a ser, digámoslo así, invadido por personajes foráneos; empezó el proceso de desplazamiento de tierras, ya sea con la intimidación o con el dinero. Veredas del municipio, como La Estrella, Totoró, Raquelita, muchas veredas que tenían minifundios terminaron siendo de dos o tres propietarios solamente. Las fincas de la parte baja, plana, tú sabes que Sevilla está en la cordillera, entonces esas tierras aptas para la ganadería terminaron en manos de la mafia. Todo lo que es la vía de Sevilla hacia Caicedonia y Sevilla hacia la Uribe, terminaron esos territorios en manos de foráneos. [...] Entonces, cuando vino aquel siniestro personaje Miguel Mejía²⁰³, aquí los dueños de las fincas lo aprovecharon y lo utilizaron pa' negocios: “quiero comprarme tal finca, tal persona me debe dinero”. [...] Sevilla tiene tierras compradas por paramilitares, mejor dicho, de esos narcotraficantes que luego se camuflaron de paramilitares para las desmovilizaciones o a la inversa. En la vereda La Melba, de hecho, tenemos todavía tierras que siguen siendo manejadas por estos personajes, personas incluso de los Llanos Orientales que vinieron a comprar tierras por acá»²⁰⁴.

El acaparamiento de tierras por parte de los narcotraficantes trajo profundas transformaciones sobre la posesión y usufructo de la tierra en el Valle. La expansión de los cultivos de uso ilícito en algunos puntos del Valle y el norte del Cauca requirió la ampliación de las fronteras agrícolas a través del desmonte de grandes extensiones de bosques y selvas, junto con procesos de apropiación de tierras de labranza que hicieron aún más crítica la situación de campesinos, afrodescendientes e indígenas. El objetivo del desplazamiento forzado y el despojo no era solo instalar o ampliar zonas cultivos de uso ilícito o laboratorios, sino también fincas ganaderas y de recreo y garantizar zonas despejadas que permitieran mayor libertad para la criminalidad.

El Cartel de Cali, mientras tanto, privilegió la penetración de la economía urbana en Cali y las ciudades intermedias del departamento buscando principalmente lavar

²⁰³ Miguel Ángel Mejía Múnera, narcotraficante vallecaucano. En 2001, junto con su hermano Víctor Manuel, compraron a las AUC una franquicia, la bautizaron como Bloque Vencedores de Arauca y se dedicaron a delinquir en ese departamento, particularmente en Cravo Norte, Puerto Rondón, Tame, Arauca, Arauquita y Fortul. En 2005 intentaron infructuosamente colarse como paramilitares en la negociación con el Gobierno. Compraron entonces otra franquicia paramilitar del Bloque Resistencia Tayrona a Hernán Giraldo y sobre esa base, hacia 2006, constituyeron una banda narcotraficante denominada Los Nevados. Según las autoridades, los hermanos Mejía Múnera, conocidos como Los Mellizos, invirtieron entre 5 y 7 millones de dólares en la compra de esas franquicias paramilitares. Víctor Manuel fue dado de baja por la Policía en abril de 2008 y Miguel Ángel fue capturado en mayo del mismo año. En marzo de 2009 fue extraditado a los Estados Unidos.

²⁰⁴ Entrevista 229-VI-00128. Víctima, campesino, centro del Valle.

las ingentes cantidades de dinero que producía el tráfico a través de una amplia variedad de negocios: constructoras, importadoras, distribuidoras agrícolas, discotecas, emisoras, curtiembres, laboratorios y droguerías (La Rebaja fue una de sus empresas más reconocidas), entre otros. Además, desde la década de 1980 los capos pagaban una nómina que incluía integrantes de la Policía y el Ejército.

Los objetivos de la violencia del Cartel de Cali eran primordialmente los rivales en el negocio, así como algunos funcionarios (jueces, fiscales), integrantes de la fuerza pública y periodistas que se les oponían o denunciaban sus actividades criminales. Sin embargo, alcanzó nuevas cotas en la guerra contra el Cartel de Medellín. Azuzados por la dura competencia ilegal en el mercado estadounidense y alarmados por las dimensiones que adquirió la «guerra contra el Estado» desatada por Pablo Escobar, que traía consecuencias negativas para el negocio y las posibilidades de negociar con el Gobierno, el Cartel de Cali y antiguos aliados del Cartel de Medellín se negaron a seguir apoyando al capo paísa y desataron una disputa que escaló desde desavenencias privadas y delaciones hasta secuestros, asesinatos, masacres y el terrorismo más extremo que afectó a la ciudadanía en general. Esas alianzas se materializaron en la conformación de Los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar)²⁰⁵.

En enero de 1988, el Cartel de Cali destruyó con un carro bomba el edificio Mónaco, el búnker privado de Escobar y su familia en Medellín. Aunque no hubo muertos, el atentado le causó lesiones auditivas a la hija del capo y a partir de allí comenzó una seguidilla de retaliaciones que convirtieron las calles de Bogotá, Medellín, Cali e incluso Nueva York (Estados Unidos) en un campo de batalla entre los carteles. La respuesta de Escobar fue brutal: 50 ataques contra la cadena de droguerías La Rebaja y el Grupo Radial Colombiano, intentos fallidos de secuestrar y matar a los principales cabecillas del Cartel de Cali y el secuestro, desaparición o asesinato de decenas de sus hombres (por ejemplo, en las masacres de Los Cocos y Las Brisas)²⁰⁶. En muchos de esos ataques, cometidos en lugares públicos, murieron y fueron heridas personas que no tenían relación alguna con los carteles.

²⁰⁵ «Habría que pensarse mucho cómo jugó el Cartel de Cali en todo este rollo, porque yo creo que es muy ingenua de gente de izquierda que dice: “Cartel de Medellín igual AUC o Pablo Escobar igual AUC”, cuando la relación era al contrario, o sea, las AUC eran los enemigos de Pablo, los que eran amigos de las AUC era el Cartel de Cali [...]. La guerra de los dos carteles tuvo que ver también con la persecución al movimiento social y popular. Piensa uno en esos años que fueron tan duros en la guerra entre los carteles, en la persecución al movimiento popular, en el genocidio de la UP aquí en la región». Entrevista 440-PR-00259. Actor armado, hombre, excombatiente FARC.

²⁰⁶ El 27 de septiembre de 1990 hombres armados dirigidos por alias Tyson, un sicario al servicio del Cartel de Medellín, irrumpieron disparando indiscriminadamente en la finca Los Cocos, situada entre Cali y Candelaria. Mataron a diecinueve personas y quince más resultaron heridas. Allí se estaba celebrando un partido de fútbol al que supuestamente habían asistido Gilberto Rodríguez Orejuela y Helmer Herrera. La masacre del balneario Las Brisas sucedió el 27 julio de 1991, cuando ocho sicarios ingresaron al lugar buscando a Herrera; el capo no estaba, pero asesinaron a quince personas e hirieron a otras trece.

Bajo la cruel campaña narcoterrorista de los carteles cundió el miedo y la zozobra en las ciudades. Durante los últimos años de los ochenta y principios de los noventa, muchas personas temían ir a sitios públicos y a eventos masivos, como la popular Feria de Cali. En la capital del Valle y otras ciudades se transformó la arquitectura de viviendas y oficinas para dotarlas con búnkeres, caletas, puertas y ventanas a prueba de balas y explosiones y se volvieron comunes los esquemas de guardaespaldas y los carros blindados; algunos civiles, incluyendo funcionarios, se armaron para defenderse²⁰⁷.

Paradójicamente, durante todos estos años el narcotráfico gozó de acogida en amplios sectores sociales de Cali. En primer lugar, porque dinamizó la economía. Mediante sus negocios legales e ilegales, inyectó grandes cantidades de dinero y promovió el empleo y el consumo de bienes y servicios; de igual forma, a través de medidas asistencialistas, tan comunes en los carteles para asegurar apoyo y complicidad social, benefició a los sectores más populares de la ciudad y los municipios aledaños. En segundo lugar, porque transformó las representaciones simbólicas del ocio y la cultura popular: además de los conocidos vínculos con el mundo del balompié, en Cali y otras ciudades pequeñas se vivió un auge del lujo y la «rumba dura» que aún hoy en día son extrañados por muchas personas.

La simpatía de amplios estamentos sociales con los narcos también fue el resultado de la animadversión compartida contra la insurgencia. Las guerrillas, junto con la sociedad civil organizada que en teoría las apoyaba, eran consideradas enemigos comunes: los narcos las comenzaron a ver como rivales en el negocio, dado su paulatino involucramiento en el cultivo, el procesamiento y la exportación de drogas, mientras que sectores de las élites las veían con resquemor debido a que sus demandas sobre la tierra, los derechos y la transformación del modelo económico y el régimen político amenazaban los negocios y el *statu quo* que tanto les beneficiaba.

Los narcos y un sector de las élites, con el apoyo de militares y policías que actuaban clandestinamente, conformaron grupos de civiles armados para contener a las guerrillas y a la sociedad civil organizada. Algunos de esos grupos tenían una dimensión local o regional, mientras que otros buscaban un alcance nacional. Dentro de los primeros se encuentran, por ejemplo, Sicarios S. A. (que contó con miembros del F-2, el Batallón San Mateo y policías de Cartago), las Autodefensas Campesinas de Sevilla y los ejércitos privados del Cartel del Norte del Valle, mientras que dentro de los segundos destacan el MAS (Muerte a Secuestradores) y, más tarde, el Bloque Calima de las AUC. Bien

²⁰⁷ «La sensación de zozobra quedó registrada días después, en otra pequeña noticia publicada por este mismo diario: “Una juez entrena polígono en la Escuela de Carabineros de la Policía de Cali, dentro de los planes de seguridad en marcha debido a las amenazas contra funcionarios judiciales por los narcotraficantes”, decía el pie de foto. Los civiles se armaban, se preparaban para la guerra. Incluso el escritor Humberto Valverde, quien un año antes dirigió la Feria de Cali, recibió un mensaje perentorio del alcalde: al primer atentado terrorista, acabamos la Feria». El País, «En Cali aún hay cicatrices de la guerra entre carteles del narcotráfico».

conocida es la irrupción del MAS en la escena pública: el 2 de diciembre de 1981, una avioneta sobrevoló el estadio Pascual Guerrero de Cali y arrojó papeletas en las que anunciaba su lucha frontal contra el secuestro, justamente cuando jugaban el América y el Atlético Nacional, propiedad de los capos de Cali y de Medellín respectivamente.

Esos sectores tampoco veían con buenos ojos la existencia de partidos de izquierda en la región, pese a que estos nunca fueron electoralmente exitosos. Entre 1958 y 1969 el Partido Comunista Colombiano fue prácticamente el único protagonista, pero, aunque mantuvo su estructura organizativa y su activismo social y sindical, en su condición de minoría ilegalizada²⁰⁸ optó por trabajar con el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), lo que le permitió alguna participación en las corporaciones públicas. Al finalizar la década de 1960, el Movimiento Obrero Independiente Revolucionario (MOIR) y la Alianza Nacional Popular (Anapo) aparecieron en la baraja de opciones partidistas, aunque tampoco consiguieron mayor incidencia electoral. Entre 1970 y 1984 la izquierda partidista continuó siendo marginal, en gran medida porque la variedad de agrupaciones, grupos de estudio y tendencias ideológicas (leninistas, maoístas, trotskistas, etcétera), si bien enriquecieron los debates —en especial en las universidades—, tuvieron como efecto el sectarismo y la confrontación. Esas divisiones, por ejemplo, evitaron que el PCC y el MOIR mantuvieran la convergencia en la Unión Nacional de Oposición (UNO)²⁰⁹.

A diferencia de otros lugares del país, la Unión Patriótica no fue exitosa en el Valle. Nunca presentó candidatos al Congreso y en 1986 apenas obtuvo un escaño en la Asamblea Departamental en alianza con la Anapo. La situación de otros partidos no fue mucho mejor: en 1992 la Alianza Democrática M-19 obtuvo dos curules en la Cámara, una en la Asamblea y una en el Concejo de Cali. Empero, pese a la debilidad electoral, desde 1985 la izquierda partidista comenzó a superar la fragmentación y a unificarse bajo nuevos liderazgos, mayor organización y el apoyo de sectores sindicales, académicos y organizaciones sociales²¹⁰. Más allá de lo electoral, la irrupción de nuevas alternativas trajo esperanzas de apertura política en los territorios:

«En Sevilla, la Unión Patriótica tenía fuerza en la zona montañosa, hacia los lados del Billar, Canoas, La Irlanda, límites con Tuluá. En la zona suroriente de Sevilla había una presencia importante de dirigentes de la Unión Patriótica desde finales de los años ochenta y principios de los noventa [...]. En la zona había grafitis de la UP y, cuando yo hice correría en esas regiones del departamento, los campesinos hablaban de la UP, tenían memoria de la UP. A inicios de los años noventa ya entran otras organizaciones campesinas directamente relacionadas con el Partido Comunista»²¹¹.

²⁰⁸ El PCC fue ilegalizado en Colombia entre 1949 y 1968.

²⁰⁹ Duque, Javier, «La izquierda partidista en Cali 1958-2010. De las confrontaciones y el dogmatismo a los acuerdos y al pluralismo», 65-80.

²¹⁰ *Ibíd.*

²¹¹ Entrevista 440-PR-00759. Experto, movimiento campesino.

Durante los ochenta y los noventa hubo una violenta arremetida contra la izquierda que contó con el apoyo y la aquiescencia de la fuerza pública, que imputó estas prácticas a «manzanas podridas». Los principales blancos de esa «guerra sucia» no fueron los combatientes y milicianos de las guerrillas, sino integrantes de partidos políticos (la Unión Patriótica, A Luchar, el Partido Comunista), así como cientos de sindicalistas, estudiantes, defensores de derechos humanos, opositores e incluso líderes religiosos²¹² acusados de pertenecer, apoyar o simpatizar con la insurgencia. Esta campaña contra-insurgente se concentró en los focos urbanos y productivos. En Yumbo, uno de los centros industriales del Valle, fueron asesinados varios líderes sindicales e integrantes de la UP: Dionisio Hernán Calderón (1985), Olga Bernal Dueñas (1988) y Henry Cuenca (1989), entre otros. Integrantes de partidos de izquierda de la región le hablaron a la Comisión sobre esa «guerra sucia»:

«Básicamente lo que yo pienso es que había un plan sistemático, un plan organizado, que era exterminar la UP. Eso lo sentíamos todos, que era descabezar sobre todo a los dirigentes máximos y los dirigentes intermedios de este movimiento, acabarlos. Y entonces pues eso fue lo que se sintió: los mataban, desaparecían o desterraban [...]. Yo creo que el objetivo era desarticular el movimiento en sí, es decir, que perdiera la ligación con la base y que la base sintiera miedo, se retrotrajera, como efectivamente sucedió: mucha gente ya después no quería saber del movimiento porque se pensaba que si pertenecía a ese movimiento pues era como que prácticamente suicidarse, declarar que iba a estar ahí en la lista de espera para que lo mataran o lo desaparecieran»²¹³.

Otro líder añadió: «Ese periodo del 85 al 90, 92, fue un pico muy fuerte de todo el tema de la violación de derechos humanos, del genocidio de la Unión Patriótica, del aniquilamiento de varias fuerzas sociales y políticas. Todos los días la noticia era compañeros nuestros asesinados a nivel nacional, masacres, candidatos, alcaldes; mi padre en ese momento era concejal de la Unión Patriótica en Cali, entonces yo todo el tiempo pensaba “o es mi papá o soy yo.” Henry Cuenca, que después fue asesinado en Intracamentos de Yumbo, el compañero Germán Dionisio Calderón, toda una generación de gente muy buena, de muchas cualidades. Hoy siguen en plena impunidad esos asesinatos y a mucha gente le tocó irse»²¹⁴.

Los narcos del Valle emprendieron otras represalias violentas. Por ejemplo, en mayo de 1989, tras el robo, violación y asesinato de varias personas que resultaron ser

²¹² El 10 de abril de 1985, un comando armado (que luego se supo estaba compuesto por hombres adscritos al B-2 del Ejército y al DAS) asesinó en el barrio Vergeles al padre belga Daniel Guillard y a Nohemí Arévalo, una empleada de Caritas. Otro caso fue el del cura italiano Giorgio Bussoni, quien fue detenido por el DAS en noviembre de 1975 bajo la acusación de agitar el orden público por su supuesta participación en el paro de los trabajadores del ingenio Riopaila. Bussoni fue acusado por la empresa, el DAS y el Gobierno de promover ideas revolucionarias y fomentar la huelga en asocio con el MOIR y posteriormente fue deportado.

²¹³ Entrevista 582-VI-00069. Líder social, sur del Valle del Cauca, integrante de UP y PC.

²¹⁴ Entrevista 582-VI-00075. Hombre, líder social, Valle del Cauca.

familiares de un narco del norte, comenzó en Cali y otros municipios del Valle una cacería de «escopolamineros». Algo parecido sucedió con las bandas de ladrones de motocicletas luego de que una de ellas asaltó y dejó parapléjico a Carlos Uribe, jugador de la nómina de un club futbolístico de la ciudad²¹⁵. Estas violencias, en el fondo, proponían la construcción de un orden social en tanto las mafias, con el apoyo de algunos sectores del Estado y una porción de las élites, se arrogaban la construcción de una sociedad donde se proscribía ciertos tipos de crímenes, pero, a la larga, también la diversidad, la protesta y la búsqueda de igualdad y justicia social. Igualmente, los narcos y sus aliados buscaban garantizar los privilegios y riquezas conseguidas a través de la violencia. Las haciendas crecían sin el peligro de los abigeos y los ladrones, la producción alcanzaba grandes rendimientos, los tráficos ilegales se conducían sin más amenazas que las de los competidores y el dinero fluía a través de complejas redes de colusión con la legalidad (como el lavado de activos).

Paralelamente, para contener la expansión guerrillera, el Estado desplegó duras medidas de represión que, bajo las doctrinas del anticomunismo y el enemigo interno, terminaron afectando a los movimientos de resistencia y oposición legal (sindicales, estudiantiles, indígenas, afrodescendientes y campesinos, entre otros). Esta situación fue marcada durante el Estatuto de Seguridad instaurado por el gobierno de Julio César Turbay (1978-1982). Pese a que los gobiernos de Barco y Betancur tuvieron posturas menos radicales en torno a la insurgencia y el manejo del orden público e intentaron la negociación, la situación no varió ostensiblemente y las violaciones a los derechos humanos continuaron.

La confrontación mezcló los procesos judiciales con actividades de inteligencia y operativos militares y policiales en el transcurso de los cuales muchas veces se desbordaron los límites de la legalidad: detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos, allanamientos ilegales, atentados, persecuciones y juicios sumarios son parte de los repertorios usados por las fuerzas de seguridad del Estado. Los montajes judiciales también fueron un componente de esa estrategia. Por ejemplo, la operación Relámpago (marzo de 1990) implicó la detención arbitraria y tortura de 42 personas acusadas de pertenecer al ELN, en su mayoría sindicalistas e integrantes de A Luchar, por parte de militares de la Tercera Brigada del Ejército en Cali. Al menos una de las mujeres detenidas fue víctima también de violencias sexuales, un hecho recurrente, pero poco denunciado.

A mediados de los ochenta, Cali fue el escenario de vastos operativos militares contrainsurgentes. El 28 de agosto de 1985, en el marco de la operación denominada «Oiga caleño, vea», en una casa del barrio Cristales murió Iván Marino Ospina, comandante del M-19, junto con su guardaespaldas y cuatro civiles. Meses después, durante los primeros días de diciembre, en el marco de la operación denominada «Cali, Navidad limpia», cerca de 5.000 integrantes de las fuerzas armadas entraron a

²¹⁵ El Tiempo, «Lamentable noticia para el fútbol».

sangre y fuego a la comuna 20. La operación arrojó un número aún indeterminado de víctimas (algunas fuentes hablan de 20 muertos, mientras que la prensa estimó nueve muertos y 35 heridos)²¹⁶. Algunas de las personas detenidas por la fuerza pública fueron sometidas a torturas y violencia sexual:

«A mi cuñada la detuvieron y la torturaron, yo le pregunté a ella y dijo: “nos metieron a un hueco, había como cincuenta allá metidos [...], intentaron violarme, ¡los militares intentaron violarme!” [...]. Yo vi matar compañeros de aquí, un muchacho que lo cogieron ahí lloviendo. Él pidió auxilio, yo hablé con la Policía y le dije [...]: “pero, ole, no le peguen, no le peguen, ¡tampoco!”, porque le estaban pegando muy feo, y un man de esos me puso un fusil así y me dijo: “callate vos”. Se lo llevaron y como a las dos horas apareció muerto, ¡lo mataron!»²¹⁷.

La operación provocó el repliegue de los milicianos del M-19²¹⁸ y el desmantelamiento de los Campamentos de Paz, con lo cual los comandos se militarizaron y ruralizaron y se perdió el trabajo político que la guerrilla mantuvo con los pobladores de los barrios populares de Cali desde 1979²¹⁹. Además, las comunas permanecieron militarizadas cerca de dos años, tiempo en el que el Ejército aprovechó la política de «rostro descubierto» implementada por el M-19 en 1982 y llevó a cabo allanamientos, seguimientos, amenazas y otros atropellos contra quienes permanecieron en el territorio y sus círculos cercanos. En general, durante los ochenta fueron recurrentes las denuncias de abusos de la fuerza pública. Testimonios e indagaciones de organizaciones de derechos humanos evidenciaron la existencia de lugares de detención y tortura ubicados en estaciones de policía o en centros clandestinos como La Remonta en el Batallón Pichincha de Cali²²⁰:

«En el batallón Palacé nos tuvieron tres meses con una serie de vejámenes. [...] A nosotros nos tenían en un salón y por la noche nos sacaban y nos torturaban por ahí, al pie de una quebrada, nos hacían tiros cerquita de la cabeza, nos daban golpes y con las manos y las vistas vendadas. Nos tuvieron así como por 15 días. [...] De

²¹⁶ Guzmán, «Ciudad y violencia».

²¹⁷ Entrevista 216-AA-00005. Actor armado, excombatiente M-19.

²¹⁸ «Entonces con esa sacada de aquí [de la comuna 20] la gente se dispersó, entonces los que estaban estructurados como organización se fueron para el monte unos, otros se fueron para civiles, se dedicaron a hacer su vida». *Ibíd.*

²¹⁹ Holguín, «Generaciones de militantes y accionar colectivo del Movimiento 19 de Abril, Cali-Colombia 1974-1985», 61.

²²⁰ Entrevista 112-AA-00002. Actor armado, hombre, M-19. Entrevista 112-AA-00005. Actor armado, exguerrillero M-19. Entrevista 582-VI-00003. Víctima, defensor DD. HH., violencia política. Entrevista 229-VI-00100. Víctima, hombre, sindicalista, violencia política. Entrevista 582-VI-00060. Víctima, defensor de DD. HH. Entrevista 216-VI-00142. Víctima, hombre, sindicalista, movimientos sociales, Cali. Entrevista 216-VI-00064. Víctima, hombre, sindicalista, Yumbo.

vez en cuando nos llevaban y nos ponían unas vainas eléctricas en los dedos para que “cantáramos”, que nosotros éramos de la guerrilla y que sabíamos dónde estaban»²²¹.

El 22 de febrero de 1980 fueron capturados cuatro integrantes del M-19 (Jorge Marcos Zambrano, Juan Camilo Restrepo, Oscar Fernando Ortega y Luz Mary Bedoya) acusados de intentar secuestrar a la esposa de Ezequiel Pinski, el principal constructor de obras públicas y privadas en Cali. Tres días después de ser trasladados a las instalaciones de la Tercera Brigada en el Batallón Pichincha de Cali, el cadáver de Zambrano apareció en la vía que conduce de Cali a Jamundí, desnudo y con evidentes señales de tortura. Sus familiares y compañeros de detención aseguraron que fue golpeado hasta la muerte en las instalaciones militares. El subteniente Norberto Plata Sánchez y el sargento José Rodrigo Hernández Granados, acusados del homicidio, fueron capturados, pero absueltos en un consejo verbal de guerra el 3 de abril de 1982²²².

Las otras tres personas del M-19 fueron condenadas a dos años de cárcel y recuperaron su libertad a finales de julio de 1982. El 1 de agosto estalló un carro bomba frente al cuartel de la Policía de Cali y el hecho se adjudicó a la guerrilla. Restrepo visitó con su madre las instalaciones de la Policía el 11 de agosto para declarar que nada tenía que ver con esa acción. Luego de cumplir la diligencia, cuando se disponía a abordar un taxi a pocas cuadras de la estación, fue asesinado a tiros delante de su progenitora por un hombre que huyó sin dejar rastro. Presuntamente el crimen fue cometido por el MAS en asocio con agentes del servicio secreto de la Policía F-2, pero quedó impune. Ortega tuvo que exiliarse en México²²³.

Otro caso representativo de la represión estatal fue la «ofensiva total» desplegada contra el M-19 en 1986 en el Valle y el norte del Cauca. El Ejército movilizó una fuerza sin precedentes en la lucha contrainsurgente en Colombia: 15.000 hombres de la Tercera (Cali) y de la Décima Brigada (Melgar), con refuerzos de la Décima Tercera (Bogotá) e incluso del Batallón Colombia y respaldos de artillería, tanques Urutú y Cascabel, helicópteros artillados y aviones de bombardeo T-33 y T-37. El Ejército buscaba cercar al Batallón América y a las tropas del M-19 que operaban en las montañas de la cordillera Central. Simultáneamente, la fuerza pública irrumpió en Aguablanca, Siloé y Terrón Colorado, bastiones de las milicias urbanas del M-19 en Cali. Además de allanamientos y detenciones, torturaron, mataron y desaparecieron a integrantes y simpatizantes de la guerrilla. En abril de 1986 ya se contabilizaban por lo menos 82 desaparecidos. Un sepulturero del cementerio del barrio de Siloé, donde estaba prohibida la entrada de periodistas, le comentó a la prensa: «Aquí todos los

²²¹ Entrevista 582-VI-00049. Hombre, excombatiente M-19, violencia política, UP, Cali.

²²² Comisión Interamericana de Derechos Humanos, «Derecho a la vida. Caso 7348: Zambrano Torres».

²²³ Semana, «Paramilitares: ejército en la sombra», 27 abril de 1986.

días los del F-2 y los del Ejército abren una o dos fosas comunes y en cada una dejan cinco o seis cadáveres»²²⁴.

Además, los «escuadrones de la muerte» que proliferaban en la ciudad dejaron de lado a sus víctimas habituales, como ladrones, prostitutas y homosexuales, y escogieron al M-19 como su blanco principal. Llenaron Cali de letreros denunciando a los guerrilleros como depravados sexuales y repartieron volantes ofreciendo una gratificación de tres millones de pesos por las cabezas de los principales jefes del M-19. Los tiroteos en los barrios y los combates en las zonas rurales cercanas a la capital mantuvieron la ciudadanía caleña en vilo durante semanas:

Se difundió tanto, por la radio y la prensa y por los propios comunicados del Ejército, que el M-19 pensaba «tomarse a Cali», que el resultado ha sido una «toma sicológica» rayana en la paranoia. Cada vez que se oye un tiro en la ciudad –y se oyen muchos– la gente exclama: «¡ya llegaron!», y el síndrome ha afectado a las propias autoridades, que en varias ocasiones se han enzarzado a balazos entre ellas mismas –Policía contra GOES, por ejemplo–²²⁵.

Tanto la comandancia del M-19 como la cúpula del Ejército aseguraban que estaban ganando la guerra y que su enemigo estaba desesperado. Para la gente lo único que estaba claro es que la conflagración, lejos de amainar, estaba creciendo. Aunque en 1986 la negociación parecía lejana, cuatro años después el gobierno de Virgilio Barco logró acuerdos con el M-19, el MAQL, el EPL y el PRT. El M-19 entregó las armas el 8 de marzo de 1990 en Santo Domingo (Toribío, Cauca) y el MAQL el 31 de mayo de 1991 en el resguardo indígena Pueblo Nuevo (Caldono, Cauca). La gente del Valle y el norte del Cauca de nuevo albergó esperanzas de paz, cambio y tranquilidad. Lo que se venía, por el contrario, era la página de la guerra más sangrienta en la historia del país.

²²⁴ *Ibid.*

²²⁵ *Ibid.*





**La cruda guerra de
los múltiples rostros
(1991–2004)**

Crisis agraria campesina y étnica: tercer acto

En la década de los noventa, el Valle se sumió en una de las peores crisis económicas de su historia como resultado de la crisis nacional general ocasionada por la apertura económica, la creciente competencia internacional y el descenso en los precios internacionales del azúcar, la debacle cafetera y la caída del Cartel de Cali, que había ayudado a dinamizar la economía regional. El sector azucarero, sin embargo, logró capotear la crisis y repuntar gracias a la protección del Gobierno nacional (a través de subsidios y otros apoyos financieros a la producción agroindustrial) y la inversión privada, y al finalizar la década había aumentado la superficie plantada: de aproximadamente 76.000 hectáreas en 1987 pasó a cerca de 186.000 en 1999 (otros cálculos más conservadores mencionan cerca de 160.000, aunque de todas formas se observa un crecimiento vertiginoso). El Valle abarcaba más del 80 % de la producción nacional de caña y derivados, pues se calculaba que en todo el país se destinaban 222.088 hectáreas para dicha actividad²²⁶.

La producción estaba altamente concentrada: de los 29 ingenios que existían en la segunda mitad de la década de los cincuenta, subsistían solo trece en 1999. Estos se embarcaron en procesos de reforma productiva para adaptarse a las condiciones impuestas por el libre mercado: fomentaron las empresas asociativas de trabajo para el desarrollo de las labores agrícolas, ampliaron el uso de contratistas para las labores de corte, continuaron con el mejoramiento de variedades de la planta y la distribución del producto se integró con cadenas de comercialización²²⁷. Los sindicatos se opusieron a los recortes de personal y a las cooperativas de trabajo asociado que regulaban y controlaban los procesos de contratación y provisión de fuerza de trabajo a los ingenios azucareros y defendieron la vinculación mediante contrato laboral²²⁸.

Pese a la crisis, los ingenios se vieron beneficiados por la cuota de importación establecida por Estados Unidos, la facultad oligopólica para fijar el precio interno – por lo general, superior al precio internacional – y la diversificación productiva de la cadena del azúcar, que empezó a involucrar la producción de etanol y biocombustible, entre otros productos²²⁹.

Los cultivos de caña en el valle geográfico del río Cauca alcanzaron las 182.000 hectáreas en 1995²³⁰ y continuó siendo el cultivo predominante en el primer lustro

²²⁶ CNMH, *Patrones y campesinos*.

²²⁷ *Ibíd.*

²²⁸ *Ibíd.*

²²⁹ *Ibíd.*

²³⁰ Delgadillo, «La caña de azúcar en la historia ambiental del valle geográfico del río Cauca (1864-2010)».

de los años 2000. En 2005 el área cultivada en caña bordeaba las 195.000 hectáreas y registraba un rendimiento por hectárea de 2.016.531 de toneladas métricas en su equivalente a volumen de azúcar crudo (TMVC). El sector azucarero consolidó una estructura organizativa alrededor de cuatro nodos: productivo (proveedores e ingenios), gremial (Asocaña y Procaña), desarrollo de los mercados (comercializadoras Ciamsa y Dicsa y otros agentes distribuidores) e investigación, asistencia técnica y capacitación (Cenicaña y Tecnicaña). Con estos componentes se conformó un clúster agroindustrial altamente eficiente que se convirtió en ejemplo de desarrollo empresarial en el país²³¹.

Esta situación contrastó con la de la pequeña y mediana producción campesina y étnica. Debido a la desprotección del aparato productivo ante el avance de la agroindustria y la apertura económica, durante los años noventa y los 2000 continuó la disminución del área sembrada de cultivos transitorios y permanentes empleados para abastecer a la población de bienes básicos y solventar las precarias economías rurales. Mientras que en las décadas de los setenta y los ochenta el área sembrada promedio en cultivos transitorios fue de 116.334 hectáreas, a partir de 1991 el área total empezó a decrecer como consecuencia de la apertura económica: por ejemplo, la soya pasó de 77.000 hectáreas en 1979 a 10.257 en 1995; el sorgo, de 61.500 hectáreas en 1982 a 39.354 en 1995 y el maíz pasó de 64.180 hectáreas en 1971 a 6.175 en 1993²³².

La tendencia se profundizó a lo largo de los años siguientes. En 2005 se registraban exiguas hectáreas de siembra: cacao (371,4), caña dedicada a la economía panelera tradicional (5.836,9), plátano (15.618), arroz (3.004), sorgo (4.000), soya (3.239) y tabaco (111,3). Cultivos como el algodón prácticamente habían desaparecido. Tanto en la zona plana como de ladera del Valle y el norte del Cauca repuntó el maíz (16.545 y 3.379 hectáreas respectivamente), pero no estaba destinado al consumo, sino a la producción de agrocombustibles. La ampliación del área sembrada de caña y maíz hacia las tierras de ladera relativamente planas, localizadas en el sur y el norte del departamento del Valle y en el norte del Cauca, agudizó los conflictos socioambientales entre ingenios, campesinos, afrocolombianos e indígenas²³³.

A diferencia de la caña, la economía cafetera decayó durante todo el periodo. En menos de una década se perdió el 22 % del área sembrada y se redujeron la producción y el rendimiento en un 35,3 % y un 16 % respectivamente: mientras que en 1990 había 115.963 hectáreas de café que producían 84.498 toneladas (rendimiento de 0,73 toneladas por hectárea), en 1999 la producción había caído a 89.426 hectáreas y 54.762 toneladas (rendimiento de 0,61 toneladas). Los precios cayeron un 54 %

²³¹ CNMH, *Patrones y campesinos*; Entrevista 068-CO-00871. Integrantes del gremio agroindustria caña.

²³² Delgadillo, «La caña de azúcar en la historia ambiental del valle geográfico del río Cauca (1864-2010)».

²³³ *Ibid.*

desde la ruptura del Pacto Internacional del Café²³⁴. Pese a que los cultivos de hortalizas y frutas se convirtieron durante los noventa en una alternativa para la economía campesina frente a la caída del café²³⁵, terminaron decaendo por las mismas razones: falta de asistencia técnica, mal estado de las vías terciarias y carencia de créditos de fomento, entre otras²³⁶.

En ese contexto, en los años noventa se fortaleció la agricultura forestal. Smurfit adquirió tierras en nuevas zonas del centro y el norte del Valle como Calima-Darién, Restrepo, Tuluá y Caicedonia a través de tres modalidades: compra, alquiler y contratos de cuentas de participación²³⁷. Estos últimos, que comenzaron a implementarse desde finales de los ochenta, son contratos que respetan los derechos de propiedad y, a cambio del uso de la tierra para el monocultivo de pino o eucalipto, vinculan a los propietarios o autoridades tradicionales como socios de la producción. Bajo esa modalidad, los propietarios aportan la tierra y la empresa los insumos y la tecnología; además, la madera en pie restante se distribuye según la participación pactada previamente. En teoría, los contratos de cuenta de participación no se aplican en resguardos indígenas ni en minifundios campesinos y buscan adaptar las plantaciones forestales a las políticas de cambio climático y los mecanismos de desarrollo limpio. Desde el punto de vista de la empresa, los cultivos de pino y eucalipto cumplen con un papel regenerador del suelo en áreas erosionadas no aptas para la agricultura²³⁸.

Para los pobladores rurales, sin embargo, las cosas fueron muy diferentes. Pese a que no existen evidencias judiciales ni reconocimientos explícitos de responsabilidad, en testimonios e informes presentados a la Comisión manifestaron que la expansión de la agricultura forestal no solo trajo daños ambientales, sino que estuvo asociada con distintos atropellos que agudizaron la violencia, la concentración de la tierra y la crisis de la economía campesina y étnica. Destacaron, en primer lugar, el desconocimiento de los derechos étnicos (como la consulta previa), el traslape con territorios colectivos indígenas²³⁹ y afro, el desplazamiento y el despojo de tierras. En segundo lugar, se refirieron a la utilización irregular de servicios de seguridad privada²⁴⁰ y, en tercer lugar, señalaron

²³⁴ *Ibíd.*

²³⁵ Comúnmente los campesinos del Valle poseían productos complementarios al café para el mercado o para autoconsumo, como maíz, frijol, zapallo, cítricos, aguacate, caña panelera, yuca y plátano, entre otros. Sin embargo, el café contribuía con el 75 % del ingreso familiar. Además, solo las fincas más grandes podían dedicar buena parte de su superficie a actividades no cafeteras. *Ibíd.*

²³⁶ CNMH, *Patrones y campesinos*.

²³⁷ *Ibíd.*

²³⁸ Cardona, «Desiertos verdes del suroccidente colombiano».

²³⁹ En algunos territorios hay un traslape con aspiraciones o figuras de resguardos, como sucede en la hacienda El Japio (Caloto).

²⁴⁰ «Utilizan hombres armados cuidando sus fincas [y también tienen] garitas de custodia, en el ordenamiento territorial sabemos que los ríos y su ronda no son de propiedad privada, sin embargo, impiden

vínculos directos con el paramilitarismo expresados en la presencia de campamentos del Bloque Calima de las AUC en predios pertenecientes a Smurfit Kappa²⁴¹. De igual manera, diversos testimonios plantearon una relación directa entre la expansión de la agroindustria forestal con las amenazas, los asesinatos o las desapariciones forzadas de liderazgos sociales, ambientalistas y promotores de restitución de tierras²⁴².

Narcotráfico: una hidra de mil cabezas

El principal beneficiario de la crisis de la economía rural que se desató en los noventa fue el narcotráfico²⁴³. Aunque en la región no surgió un campesinado cocalero equiparable al del Catatumbo o la Orinoquía y los cultivos de coca no alcanzaron la misma dimensión dentro de la economía agrícola, es cierto que muchos campesinos

el acceso, incluso en muchas ocasiones hasta funcionarios de la autoridad ambiental, porque tienen funcionarios de la autoridad ambiental con nombre propio que son los únicos autorizados para entrar allá, porque son bandidos que legitiman el robo de agua y la depredación de bosques». Entrevista 229-VI-00128. Víctima, campesino, centro del Valle.

²⁴¹ Por ejemplo, un campesino de Sevilla (Valle) afirmó: «En esta zona [cordillera Occidental] lo más claro es que algunos ingenios o dueños de tierras que orquestaron la presencia del Bloque Calima, por ejemplo, Smurfit, facilitaron tierras para que se establecieran campamentos [...]. Para que el Bloque Calima avanzara desde esta zona hacia Buenaventura, según lo que alguna gente reporta, sí se establecieron en la zona del Darién y en plantaciones que, como no quedan campesinos en kilómetros, son zonas amplias donde puede haber un campamento tranquilamente; que haya sido que ellos los trajeron, que ellos lo facilitaron, ya sería otra cosa; pero lo que se menciona y rumores, y la gente expresa, es que sí estuvieron ahí, en sus campamentos». Entrevista 230-VI-00083. Testigo, hombre, centro Valle del Cauca. Otro líder de la región expresó: «La coincidencia no parece gratuita, toda vez que hacia los años 2000 el Bloque Calima de las AUC ingresa [en] el norte del departamento del Valle del Cauca y Smurfit Kappa experimenta su proceso de mayor expansión territorial. Algunos de los hechos desafortunados que se inscriben en esta relación son la masacre de La Melba y lo sucedido en la zona alta, en la incursión del Bloque Calima hacia Barragán, donde también se asesinan a varios campesinos en ese tránsito que hacen los paramilitares hacia Barragán por la zona de Sevilla». Entrevista 216-VI-00132. Testigo, hombre, líder social, Valle del Cauca.

²⁴² Un líder ambiental, por ejemplo, relató las motivaciones del asesinato de Mario Pineda, periodista y líder social, en noviembre de 1983: «Cuando iba a llegar Smurfit a Sevilla, había una ONG [Grupo Ecológico El Yarumo] [...] que argumentó por qué no debía llegar la empresa. Un técnico de apellido Naranjo, que trabajaba para ella, le dijo: “Cállate, Mario, que a ti te silenciemos con la caja menor”. A los tres días lo mataron». Entrevista 216-VI-00040. Víctima, ambientalista, centro del Valle del Cauca.

²⁴³ «Tanto la crisis del café como la de los frutales permitieron el avance y consolidación en ciertos espacios rurales del cultivo de la coca. Como ha sucedido en otros lugares del territorio nacional, frente a la inviabilidad de la economía campesina y sus consiguientes limitaciones, este tipo de economía se ha constituido en actividad productiva para satisfacer las necesidades del campesinado, convirtiéndose en un medio de subsistencia frente a la marginalidad de la economía campesina estructurada por el mercado y las políticas estatales». CNMH, *Patrones y campesinos*, 122.

y comunidades étnicas del suroccidente encontraron en los cultivos de uso ilícito un medio para la subsistencia. De acuerdo con los datos del Ministerio de Justicia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), a partir de 2001 los cultivos de coca en el Valle se focalizaron al sur de Buenaventura, sobre el río Naya, en límites con Cauca²⁴⁴, donde la densidad de siembra era superior a 8 ha/km². En 2008 el área sembrada se había expandido al norte del municipio y el foco principal se localizó entre los ríos Anchicayá y Raposo, al tiempo que aparecieron cultivos en Jamundí, Dagua, Bolívar, el cañón de las Garrapatas, el río Calima, el río Dagua y el río Sipí, en la frontera con Chocó. En 2013 prácticamente los mismos territorios seguían afectados, pero hubo una reducción significativa en la densidad de siembra del cultivo que pasó a 1 ha/km² en promedio. Solamente sobre los ríos Naya (sur del departamento) y Calima (al norte) se observaban focos de concentración que oscilaban entre 2-4 ha/km², aunque no había evidencias de la consolidación de grandes clústeres de producción de estupefacientes en esas zonas²⁴⁵. La focalización del cultivo de coca en Buenaventura contribuye a comprender la concentración de actores armados y acciones violentas en el municipio²⁴⁶.

A diferencia de zonas cercanas, como las costas de Nariño y Cauca, el Valle no se convirtió en una zona de siembra a gran escala, sino en una de procesamiento y luego de transporte aprovechando las conexiones con el Eje cafetero, la hidrografía y el puerto de Buenaventura²⁴⁷. Detrás de esas grandes oportunidades para el tráfico nacional e internacional de droga llegaron los grandes carteles, las guerrillas, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y, años más tarde, los grupos paramilitares posdesmovilización, las disidencias de las guerrillas y los narcos mexicanos.

En los ochenta, la consolidación del eje productor Putumayo-Caquetá y la erradicación de cultivos por parte de la Policía impactó el negocio del narcotráfico en el Cauca: el precio de la tierra bajó y eso atrajo a compradores foráneos que buscaban aprovechar la posición geográfica del departamento con el objetivo de acaparar tierras para montar laboratorios de producción de cocaína, hatos ganaderos y explotaciones agrícolas y forestales. El control territorial impuesto por los narcotraficantes y ciertos empresarios que se apropiaron de las tierras generó tensiones con la población campesina y étnica asentada en la región además de violencia en contra de esta, como se

²⁴⁴ «El tema del Naya es muy particular porque el Naya es el río más corto entre la parte andina y la salida al mar, ¿sí? Entonces es una salida superestratégica porque en menor tiempo puede salir de la montaña hacia el mar. Por supuesto, esto tiene una preponderancia muy importante para la economía del narcotráfico, que es el otro elemento que también acentuó, favoreció la existencia del paramilitarismo en la zona». Entrevista 070-PR-00893. Mujer, activista social, Valle del Cauca.

²⁴⁵ Unodc, «Atlas de la caracterización regional de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el departamento del Valle del Cauca».

²⁴⁶ CNMH, *Patrones y campesinos*.

²⁴⁷ *Ibíd.*

evidenció en la masacre de El Nilo en diciembre de 1991²⁴⁸. A finales de los noventa, en el Cauca hubo una nueva bonanza cocalera provocada por el desplazamiento de los cultivos de coca como resultado de la implementación del Plan Colombia en la Orinoquía y el retorno de los cultivadores que años antes habían migrado a sembrar en los departamentos aledaños. Nuevamente la coca dinamizó el mercado y mejoró las condiciones de vida de los pobladores, pero también intensificó el conflicto armado en tanto atrajo la atención de nuevos grupos armados ilegales como las AUC y espoleó el interés en el rentable negocio ilegal de aquellos que ya hacían presencia, a saber, las FARC-EP, el ELN y los carteles del narcotráfico²⁴⁹. Así describió la situación un líder afro del norte del Cauca:

«Desde principios del 2000 hay varias oleadas, varios intentos de colonizar parte del norte del Cauca para la producción de coca. Entonces uno ve que hay gente que llega del sur del país, de Caquetá, de Putumayo, Guaviare, Meta, para cultivar coca en el norte del Cauca. Muchos de ellos también [fueron] despojados por el Plan Colombia y llegan con la idea de seguir produciendo. Lo que piensan es que aquí pueden tener un sitio mucho más marginalizado, donde no hay tanta atención del Estado y pueden asegurar su negocio. Sin embargo, ellos llegan muchas veces a comunidades negras e indígenas, sin importarle cuál es la lógica de organización de estas comunidades, y traen con ellos todos esos impactos del narcotráfico. Y obviamente ya se sabe que los paracos, la guerrilla y el mismo Estado han tenido una relación muy importante con el narcotráfico. Y todo esto como combustible también para el conflicto»²⁵⁰.

Entre 2001 y 2004, los cultivos de coca en el Cauca comenzaron a trasladarse desde la Bota Caucana hacia otros municipios del sur, el centro y la costa Pacífica (Argelia, Balboa, El Tambo, Guapi, Timbiquí y López de Micay) y disminuyó el área cultivada: en 2004 se registraron 1.265 hectáreas, lo cual representa una reducción del 60 % frente a 2001. Este comportamiento se asocia con la intensidad del conflicto armado en el periodo, marcado por las pugnas por el control del territorio, la reorganización de los grupos armados ilegales y el fortalecimiento de la fuerza pública, lo que en conjunto propició un abandono temporal del cultivo por parte de los cultivadores. En efecto, como resultado de los asesinatos selectivos y atroces masacres como la del Naya, en abril de 2001²⁵¹ miles de personas abandonaron el territorio;

²⁴⁸ Unodc, «Atlas de la caracterización regional de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el departamento del Cauca».

²⁴⁹ *Ibíd.*

²⁵⁰ Entrevista 1036-PR-02211. Líder afrodescendiente, norte del Cauca.

²⁵¹ Entre el 10 y el 13 de abril de 2001, un grupo de más de 100 paramilitares del Bloque Calima asesinaron decenas de personas tildadas de ser colaboradores de la guerrilla durante un recorrido a lo largo de los territorios aledaños al río Naya, ubicado en los límites de Cauca y Valle y poblados por comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Luego de la masacre, los paramilitares se enfrentaron con el Frente 29 de las FARC-EP hasta el 16 de abril. La fuerza pública apenas apareció en la zona diez días después. Aunque la comunidad asegura que más de 100 personas fueron asesinadas, solamente

de hecho, ese año registró un pico de desplazamiento forzado que afectó a 24.845 personas. En 2004, como resultado de los movimientos territoriales de las FARC-EP provocados por el Plan Patriota²⁵² y la desmovilización del Bloque Calima, la dinámica del narcotráfico en el Cauca comienza a cambiar nuevamente²⁵³.

Debido a su posición estratégica para el narcotráfico, expresada en los corredores de conectividad con el Pacífico y el centro y sur del país, el Cauca también ha sido un lugar de siembra de amapola. Los primeros registros sobre la planta se remontan a inicios de los noventa, cuando personas ajenas a la región llegaron a Piendamó, Jambaló y los municipios cordilleranos aledaños a repartir semillas y explicar las técnicas de cultivo y de rayado para obtener el látex a partir del cual se pueden producir sustancias como morfina, codeína y heroína. El cultivo de amapola ganó terreno dentro de la población afectada fuertemente por la crisis agrícola, pues sus promotores ofrecían jornales hasta tres veces mayores que los devengados por un campesino cafetero promedio de la región; además, en las épocas de mayor abundancia los indígenas y campesinos llegaron a recibir 1.000 pesos por gramo de látex. Se calcula que en 1992 en el Cauca había 2.300 hectáreas de amapola. Para 1993, en todo el país había entre 10.000 y 20.000 hectáreas ubicadas en Putumayo, Nariño, Huila, Tolima, Caldas y Cauca, que fue uno de los departamentos más afectados porque poseía cultivos por lo menos en 19 municipios. Ante la dimensión del problema, las autoridades comenzaron aspersiones que generaron tensiones con los pobladores, algunos de los cuales buscaron acuerdos con el Gobierno para erradicar voluntariamente y fomentar programas de desarrollo alternativo. En 1994, el terremoto y la posterior avalancha del río Páez afectaron tanto a las personas cobijadas por los programas de sustitución como a los cultivadores de amapola y se profundizó la crisis social y económica en la región²⁵⁴.

Al igual que en periodos anteriores, durante los años noventa y los 2000 grandes propietarios y narcos aprovecharon para adquirir aún más terrenos y propiedades y reconvirtieron las actividades económicas: las tierras de ladera, especialmente en la cordillera Occidental, comenzaron a destinarse a la producción hortofrutícola, la

se han recuperado 27 cuerpos. Según los reportes de Medicina Legal, los cadáveres tenían signos de tortura, heridas con arma cortopunzante y algunos habían sido descuartizados, por lo que no todos pudieron ser identificados. Cerca de 3.000 personas salieron desplazadas a Jamundí y Santander de Quilichao después de la masacre. Rutas del Conflicto, «Masacre de El Naya».

²⁵² «La estrategia militar Plan Patriota, implementada a finales de 2003 y orientada a recuperar el control del territorio que por años había sido considerado de retaguardia de las FARC-EP, focalizado en los departamentos de Meta, Caquetá y Putumayo, fue uno de los factores que influyó en la movilización de este grupo hacia el Cauca, motivados no solo por sus amplios corredores propicios para el tráfico de drogas y armas sino por la factibilidad de siembra y expansión del cultivo de coca». Unodc, «Atlas de la caracterización regional de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el departamento del Cauca», 43.

²⁵³ Unodc, «Atlas de la caracterización regional de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el departamento del Cauca».

²⁵⁴ *Ibíd.*

silvicultura, la ganadería extensiva, el turismo, la siembra de cultivos de uso ilícito y la instalación de «cocinas», desplazando aún más a los pueblos étnicos y al campesinado pequeño y mediano del usufructo de la tierra. Algunos campesinos fueron convencidos mediante dinero o dádivas para sustituir sus cultivos legales por coca, marihuana y amapola, mientras que otros fueron presionados para hacerlo. El cambio en el uso del suelo y la concentración de la propiedad rural por parte de narcotraficantes siguió plegada al despojo violento y la distorsión del mercado, es decir, transacciones comerciales por debajo o por encima de los precios reales²⁵⁵.

El Registro Único de Víctimas (RUV) contabiliza 2.949 casos de abandono o despojo de tierras en Valle y norte del Cauca, de los cuales el 43,6% son atribuidos a los paramilitares y el 33% a las guerrillas. En el 21,2% de los casos no se sabe al responsable. Aún cuando existe subregistro y en general es difícil dimensionar la apropiación de tierras debido a factores como las adquisiciones de buena fe, las legalizaciones de compras irregulares o las formas de violencia utilizadas, estas cifras y el proceso de escucha adelantado por la Comisión evidencian que la disputa por la tierra cumplió un papel relevante en las dinámicas del conflicto armado en la región.

Dando continuidad al *modus operandi* observado en la región desde los años cincuenta –y añadiendo nuevas prácticas como la fumigación con glifosato–, paramilitares, narcotraficantes y particulares recurrieron a amenazas, asesinatos, desapariciones o violaciones sexuales para generar terror, mientras que en otros sabotearon las fuentes hídricas, los cultivos y las propiedades de campesinos, afrodescendientes e indígenas. Nuevamente muchos pobladores rurales se vieron obligados a vender sus tierras o entregarlas a la fuerza a grandes terratenientes, empresas y grupos ilegales. Así lo expresó un líder campesino del sur del Valle, cuyo testimonio sintetiza cientos de situaciones similares escuchadas por la Comisión:

«Ya cuando las fincas quedaron en medio del cañaduzal, ellos utilizaron la quema, y por lo general la quema chamuscaba el cultivo del vecino, ese fue otro problema, entonces empezaron a vender. Y la otra modalidad [...] es que a la caña le aplican un madurante, un glifosato para acelerar el gechamiento [la maduración] de la caña. Pasa la avioneta, fumiga y al otro día aparece el cultivo del vecino marchito. [...] Por lo general fue ese fenómeno el que hizo que mucha gente dijera “no, es que aquí ya no me es rentable, aquí mis frutas se caen”. Por ejemplo, por El Artonal, La Tupia [Pradera, Valle del Cauca], la gente vivía era de los cítricos, naranjas, limones, mandarinas; después ya toda la flor se le caía y todo, y “yo no sé por qué”, pero uno sí sabía por qué era, entonces la gente busca vender»²⁵⁶.

Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) describe cómo la crisis económica, que coincidió con el auge de la economía del

²⁵⁵ CNMH, *Patrones y campesinos*.

²⁵⁶ Entrevista 216-VI-00012. Campesino, líder, desplazado, Pradera.

narco, facilitó desde la década de los noventa la acumulación de tierras. En Toro, por ejemplo, campesinos relataron que una vereda entera, llamada La Chica, desapareció porque todas sus parcelas se convirtieron en una sola finca ganadera; en Ansermanuevo se contó el caso de un personaje que compró dieciséis fincas y las volvió potreros; en Restrepo los campesinos calcularon que más de 800 hectáreas de cafetales corrieron la misma suerte. Historias similares acerca de los «duros» que aprovechando la quiebra de la gente compraron grandes extensiones de tierras cafeteras para convertirlas en potreros dedicados a la ganadería se escucharon en Alcalá, Bolívar, Yotoco, Sevilla, Ulloa, Obando, Roldanillo y Riofrío²⁵⁷. Además, la población que la crisis agraria dejó desocupada fue incorporada a distintas actividades ilegales ligadas al narcotráfico: algunos propietarios y productores rurales cafeteros se convirtieron en mayordomos de fincas o en testaferros; asimismo, los campesinos jóvenes fueron empleados como cuidanderos, «campaneros», «lavaperros», sicarios o en el transporte de pasta de coca a través del cañón de las Garrapatas²⁵⁸.

El control de las reservas hídricas, vitales para las agroindustrias, los cultivos de uso ilícito, el turismo ecológico y la ganadería extensiva, también fue un objetivo primordial de los actores violentos. Así lo explicó un líder campesino del sur del Valle a la Comisión:

«¿Por qué las AUC llegaron aquí? Yo diría que más que todo es el tema del agua. [...] Hoy no hay ya el interés del gremio cañero en la parte plana, ellos ya todo lo tienen absorbido en un 98 %. Porque por allá desde 1960, 70, empezó a desaparecer la producción que había; por ejemplo, el corregimiento de Párraga, el corregimiento de Murillo, el corregimiento de El Higueronal y La Ruiza [Pradera, Valle], eso eran fincas cafeteras, era cacao, mucha fruta, hoy no queda sino el nombre, ya no hay fincas, ya todas están cubiertas en caña. [...] Aquí la zona es muy rica en agua y hoy hay un señor, un empresario de Palmira, que está comprando de a plaza, media plaza, dos plazas, se dice que tiene más de 400 hectáreas en zonas de bosque; el argumento de él es que es muy ecologista, que está con la intención de que esa zona se proteja, pero lo vemos con dudosa acción porque, entre otras, el gremio cañero tiene proyectado construir una reserva hídrica muy grande acá en la hacienda La Ruiza. A ratos uno piensa: “puede ser eso, ¿no?”, de pronto tener de propiedad la zona en donde se produce el agua. [...] Además porque, *vox populi*, acá se escucha que la industria cañera financió el paramilitarismo aquí en la zona sur del Valle y en el centro del Valle»²⁵⁹.

²⁵⁷ Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), *Hacia un Valle del Cauca incluyente y pacífico. Informe regional de desarrollo humano 2008*, 233-34.

²⁵⁸ CNMH, *Patrones y campesinos*.

²⁵⁹ Entrevista 216-VI-00012. Campesino, líder, desplazado, Pradera.

Lo mismo sucedió en el centro del departamento:

«Yo pienso que un motivo específico por el cual han querido desplazar a la comunidad campesina de la región es el páramo [Las Hermosas], porque ahí nacen las aguas del río Tuluá. Ahí están las lagunas de Las Mellizas y ahí es el nacimiento del río Tuluá y no sé qué otro río, y como para nadie es un secreto que sin agua no podemos vivir, detrás del agua hay muchísimas entidades internacionales y pagan lo que sea por hacerse dueños de esas aguas. Entonces nosotros hemos analizado eso, porque aquí grandes extensiones de tierra no hay»²⁶⁰.

En los últimos años de la década de los ochenta y principios de los noventa, los carteles del narcotráfico gozaban de un poder inusitado. Antes de la captura de los grandes capos, el cartel de Cali incluso logró permear las altas esferas de la política nacional, como se comprobó a través del denominado Proceso 8.000. Sin embargo, las disputas intestinas y la presión de las autoridades de Colombia y Estados Unidos finalmente pasaron factura y la muerte, captura o entrega de varios jefes rearmaron el rompecabezas del negocio ilegal en la región. El 26 de abril de 1992, en El Dovio (Valle), fue capturado Iván Urdinola. Tras la muerte de Pablo Escobar en diciembre de 1993, las autoridades se enfocaron en los cabecillas de los carteles de Cali y el norte del Valle. Gilberto Rodríguez fue capturado el 9 de junio de 1995 y su hermano cayó dos meses después. José «Chepe» Santacruz fue detenido el 4 de julio de 1995, escapó de la cárcel La Picota de Bogotá el 11 de enero de 1996 y murió durante un operativo de recaptura en Medellín el 5 de marzo de ese año.

Otros mafiosos decidieron entregarse ante la presión de las autoridades y de sus enemigos: Henry Loaiza, alias el Alacrán, se entregó el 19 de junio de 1995; Hélder «Pacho» Herrera, el 1 de septiembre de 1996 y Orlando Henao en 1997. Sin embargo, con el apoyo de sus hermanos Lorena, Fernando y Arcángel, Orlando Henao siguió manejando los negocios desde la cárcel y ordenando ataques contra los antiguos integrantes del Cartel de Cali y otros miembros del Cartel del Norte del Valle que pudieran cooperar con las autoridades colombianas y estadounidenses. Uno de los ataques que ordenó fue contra Herrera, asesinado el 4 de noviembre de 1998 en la cárcel de Palmira. En retaliación, José Manuel Herrera, alias el Inválido, hermano de «Pacho» y quien también estaba recluido en La Picota, asesinó a Henao el 13 de noviembre de 1998.

Inmediatamente cinco fuerzas comenzaron la lucha para reemplazar al jefe del cartel²⁶¹: la primera, representada por sus hermanos Fernando y Arcángel Henao, herederos naturales por el derecho que imponía la sangre. La segunda, conformada por Hernando Gómez, alias Rasguño, y Víctor Patiño. Gómez era contemporáneo de Orlando y

²⁶⁰ Entrevista 216-VI-00043. Víctima, centro del Valle del Cauca.

²⁶¹ Vanegas, Caicedo, y Trujillo, «Afinidades violentas: la evolución de la red de narcotraficantes del norte del Valle».

compañero temprano en muchas de sus iniciativas ilegales; Patiño, por su parte, se había fortalecido tanto en lo económico como en lo militar gracias a su control sobre el puerto de Buenaventura. La tercera fuerza era liderada por Wilber Varela, alias Jabón, uno de los sicarios más temidos de Orlando Henao, un heredero que reclamaba su lugar por los servicios prestados y que tenía el control sobre el aparato militar del malogrado capo. A Varela lo acompañaban Luis Alfonso Ocampo, Juan Ramírez, alias Chupeta, y el coronel Danilo González. La cuarta estaba conformada por Iván Urdinola y sus hermanos. Aunque Urdinola estaba en la cárcel²⁶², su poder seguía casi intacto y sus aspiraciones estaban reforzadas por el hecho de estar casado con Lorena Henao, hermana de Orlando. La quinta fuerza estaba encarnada en la figura de Diego Montoya Sánchez, alias don Diego, quien había prosperado a la sombra de Iván Urdinola y contaba con mucho dinero y poder militar. Así comenzó el reinado de los peones y de los pistoleros: mandos medios, escoltas, sicarios y algunos empleados de confianza de los capos se convirtieron en jefes peleando por el poder²⁶³.

En principio la lucha se decantó a favor de Varela y el cartel se reorganizó alrededor de su figura. Sin embargo, en 2002 estalló una brutal disputa contra la facción de don Diego. El detonante fue la orden de Varela de asesinar a Miguel Solano, uno de los aliados de Montoya que, sin su conocimiento, estaba colaborando con la DEA. Este hecho, sin embargo, fue parte de un conjunto de desencuentros más amplios entre los distintos núcleos del cartel que se explican por la competencia por el control del mercado ilegal. Ya no cabían en los territorios y uno de los competidores tenía que ser eliminado.

Las alianzas fueron determinantes en la disputa entre Los Rastrojos y Los Machos, los respectivos ejércitos de Jabón y don Diego. Hay indicios de que don Diego se acercó a las AUC, aunque estas se negaron a apoyarlo de manera contundente, mientras que Jabón se asoció con las FARC-EP y el ELN²⁶⁴. Por otro lado, un exoficial del Ejército que tuvo vínculos con Los Machos le confirmó a la Comisión el involucramiento de la fuerza pública en la contienda:

«Pero no solamente fue ese mal cobro o ese asesinato [Miguel Solano], sino que ya había hecho otros asesinatos y él [don Diego] estaba tomando poder matando la gente, quitándole las propiedades y tomando más poder cada vez. Eso estaba respaldado por la Policía, a Varela lo movía la Policía de Carreteras y tenía un brazo armado en el Gobierno, un grupo especial de la Dijin. Entonces cuando eso sucede don Diego busca en la Policía y en el Ejército, don Diego tiene muchos conocidos en el Ejército y en la Policía. [...] La Policía estaba dividida: parte de la Policía, unidades de la

²⁶² El capo fue condenado a una pena de 17 años, pero el 24 de febrero de 2002 murió en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí debido a un infarto.

²⁶³ Centro Nacional de Memoria Histórica, *La masacre de Trujillo: una tragedia que no cesa*.

²⁶⁴ InSight Crime, «Cartel del Norte del Valle».

Policía de inteligencia y operativos estaban penetrados e infiltrados por Varela, y otra parte por don Diego. Y en el Ejército también había unos que trabajaban, que estaban penetrados y vigilados por Varela o por don Diego. [...] Cuando Varela se va pierde injerencia acá, en el 2004 hacemos la retoma del norte del Valle [...], se planea un bombardeo, un ametrallamiento, un desembarco de tropas de fuerzas especiales y una incursión de tropas regulares en el norte del Valle, todos los municipios de Cartago, Versailles, La Unión, El Dovio, y metemos todo ahí. Primero pasan, ¡ral!, al cañón de Garrapatas, después llegan las fuerzas especiales y desembarcan en los campamentos, después llegan tropas regulares y se meten por un lado y por el otro. [...]. Yo corrí con estas operaciones y también entro los bandidos de las autodefensas, yo llevo el armamento del Magdalena Medio en dos camionetas [...] y todos los muchachos se van en bus y llegan a Zarzal, en la finca de Diego se concentran todos [...], sale el Ejército y entraron las autodefensas del norte del Valle»²⁶⁵.

Así pues, se verificó que el narcotráfico había vuelto borrosas las diferencias ideológicas, políticas, económicas y sociales que se enfrentan en el conflicto armado colombiano. El mismo exmilitar comentó:

«Les voy a hablar en general contándoles lo que pasaba acá en el Meta, el Valle, Putumayo o Caquetá, pero en todo el país era la misma modalidad. Usted de día era enemigo de las FARC y de noche nos llamábamos y hacíamos negocios de droga. Entonces, de día usted y yo nos echamos la madre, peleamos, combatimos, pero de noche yo le voy a mandar a Juan y usted manda a Pedro para que ellos se sienten a cuadrar los precios. Entre las autodefensas y las FARC, y el narcotráfico y las FARC, entre todos cogen los cañones y los silencian cuando hay que hacer negocios de droga: el “guerrillo” le compra al paraco, el paraco le vende al narco, el narco le compra al “guerrillo”, el “guerrillo” le vende a las autodefensas»²⁶⁶.

Se estima que la disputa entre don Diego y Jabón dejó más de 3.000 muertos, principalmente en los municipios del centro y el norte del Valle²⁶⁷. Además de integrantes de los grupos armados involucrados, fueron asesinados cientos de civiles señalados de ser auxiliares de alguno de los bandos o por oponerse a la guerra y al narcotráfico en la región. En 2007 don Diego fue capturado y Jabón fue asesinado en 2008 en Venezuela, pero la violencia no se detuvo, pues nuevos jefes y estructuras herederas siguieron disputándose el territorio y las rentas del narcotráfico.

²⁶⁵ Entrevista 084-PR-00429. Actor armado, exmayor del Ejército.

²⁶⁶ *Ibid.*

²⁶⁷ El Espectador, «Los Rastrojos’ siguen en guerra».

Guerrillas: el poder a cualquier precio

Las FARC-EP y el ELN rápidamente quebraron el optimismo con los acuerdos de paz y el cambio político logrados en 1990. Ambas guerrillas desde el principio mostraron desconfianza frente a las negociaciones y acordaron, durante la quinta cumbre de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, en septiembre de 1990, incrementar su actividad bélica contra las fuerzas armadas y la infraestructura económica del país. Aunque se presentaron oscilaciones, las emboscadas, los hostigamientos y los ataques contra instalaciones militares y de Policía, así como las agresiones contra la población civil y la infraestructura –secuestros, toma de poblaciones, homicidios, voladura de oleoductos y torres de energía, destrucción de medios de transporte, etcétera–, aumentaron sostenidamente durante toda la década²⁶⁸.

A partir de la Octava Conferencia, en 1993, las FARC-EP continuaron con su expansión sobre el Valle del Cauca con la creación del Comando Conjunto Occidental (CCO), integrado por los Frentes 6, 8, 29 y 30. En 1996 el Frente 6 amplió su radio de acción en la cordillera Central con las columnas Alonso Cortés y Víctor Saavedra, mientras que el Frente 30 expandió su influencia sobre la cordillera Occidental con la creación de la Columna móvil Jacobo Arenas, que tuvo incidencia en el norte del Cauca y el sur del Valle. En 1997 se creó el Bloque Móvil 1 (luego Arturo Ruiz)²⁶⁹, que extendió sus operaciones en el sur del departamento²⁷⁰. En 1998 el Frente 30 reforzó su presencia en la zona de Buenaventura, Dagua y Calima con la creación del Frente Urbano Manuel Cepeda, que se concentró entre los Farallones de Cali y la vía Cali-Buenaventura²⁷¹. En 2001 dieron forma a un plan militar de tres años bajo el cual el Bloque Móvil y los distintos frentes del CCO tenían que despejar y consolidar un corredor que comunicara el Eje cafetero, el Valle, Cauca, Tolima y Huila.

Después de la ruptura con el Partido Comunista, las FARC-EP se dedicaron a fortalecer de manera autónoma el trabajo político en sus zonas de influencia, específicamente en barrios populares y veredas que, además de estar ubicadas en territorios

²⁶⁸ Camilo Echandía, «El conflicto armado colombiano en los años noventa: cambios en las estrategias y efectos económicos», 117-34.

²⁶⁹ Finalizando los noventa, se conformó en los Llanos del Yarí el Bloque Móvil Arturo Ruiz de las FARC-EP –integrado inicialmente por cuatro columnas–, que llegó al Cauca en 1998 y se expandió hacia Pichindé (Cali), Buenaventura, Dagua, Calima, Darién, Riofrío y el centro del Valle a partir del año 2000 con el objetivo de reforzar la presencia de otras estructuras guerrilleras y su confrontación con el Bloque Calima. Entrevista 440-CO-00493. Actor armado, excombatientes Bloque Móvil Arturo Ruiz de las FARC.

²⁷⁰ Fuentes de Archivo Externa 18081-OE-58, Fiscalía General de la Nación y Ejército Nacional de Colombia.

²⁷¹ Centro Nacional de Memoria Histórica, *El caso de la asamblea del Valle*; Misión de Observación Electoral, *Monografía Político Electoral Departamento del Valle del Cauca 1997 a 2007*.

estratégicos, contaban con índices altos de necesidades básicas insatisfechas y escasa presencia del Estado. Las FARC-EP impulsaron organizaciones clandestinas como el PC3 y el Movimiento Bolivariano y fortalecieron las milicias, al punto que en algunas zonas del norte del Cauca (como Corinto y Miranda) hubo más milicianos que guerrilleros²⁷².

La milicias cumplían diferentes propósitos²⁷³: trabajo político; apoyo logístico (encaletar armas, equipamiento y dinero, por ejemplo); vigilancia; comunicaciones; inteligencia, donde se incluía el monitoreo a la fuerza pública, pero también el perfilamiento de posibles víctimas de secuestro y extorsión y la entrega de información importante para la planeación de tomas y otros golpes militares; gestión de fuentes de financiación (narcomenudeo y cobro de «vacunas», por ejemplo); regulación social en los barrios y participación en acciones armadas en las ciudades (atentados, secuestros, ataques a instalaciones del Ejército y la Policía y asesinatos selectivos, entre otros).

Además de acercarse a sindicatos, estudiantes, organizaciones campesinas y otros sectores teóricamente proclives a su proyecto político-militar²⁷⁴, las guerrillas también buscaron la adhesión de las comunidades étnicas. No obstante, al igual que en los años ochenta, las fuentes consultadas por la Comisión recalcaron los atropellos cometidos por las guerrillas a raíz de los ejercicios de autonomía y control territorial emprendidos por las autoridades indígenas frente al tránsito o permanencia de actores armados en sus territorios, tanto ilegales²⁷⁵ como legales²⁷⁶. Aunque no se cuenta con información estadística detallada, la violencia contra líderes indígenas fue un

²⁷² Entrevista colectiva 058-CO-00688. Exintegrantes, Bloque Efraín Guzmán de las FARC antes “Bloque José María Córdoba” e “Iván Ríos”. Entrevista 615-PR-00407. Actor armado, excomandante Bloque Occidental FARC.

²⁷³ «Entré como miliciana, estaba estudiando en la universidad, entonces tenía, por decir algo, máximo 23, 24 años. Mi acercamiento fue de carácter político, tú sabes que en la universidad se dan todos los grupos [...]. Bueno, más que todo, hacer talleres educativos [...]. Después, ya a hacer mandaditos, después tareas específicas como llevar cartas y como ir a un sitio y al otro para entrevistas, llevar a personas que querían más información o querían contactarse con algunos de los comandantes, entonces, después de hacer las averiguaciones respectivas, pues uno los llevaba». Entrevista 582-VI-00071. Mujer, lideresa, exilio, movimiento campesino.

²⁷⁴ «El frente sindical también era una cantera, el frente estudiantil también era una cantera de cuadros [...] donde teníamos posibilidades, pues nosotros ahí impulsábamos nuestro trabajo y nuestra consigna, que fundamentalmente era combinando todas las formas de lucha, [...] venceremos». Entrevista 667-CO-00553. Actor armado, excombatientes FARC, Risaralda. En ese sentido, antiguos guerrilleros de las FARC-EP relataron acercamientos a instituciones educativas para adelantar tareas de formación política, por ejemplo, en la Universidad del Valle y los colegios Eustaquio Palacios y Santa Librada en Cali y la Universidad del Cauca en Popayán.

²⁷⁵ «Empezó entonces a fortalecerse desde el año 2001 el tema de la Guardia Indígena y nació precisamente para ser los cuidadores del territorio; inclusive, empezamos porque había tanto temor de que llegaran los paramilitares, empezamos en el tierrero a hacer allí el control que pa’ que no pasaran los paramilitares». Entrevista 295-VI-00005. Mujer, indígena, víctima, Norte del Cauca.

²⁷⁶ Entrevista 295-VI-00005. Mujer, indígena, víctima, Norte del Cauca. Entrevista 046-VI-00036. Víctima, lideresa indígena. Entrevista 615-PR-00407. Actor armado, excomandante Bloque Occidental FARC.

elemento reiterado en los testimonios recolectados. Una lideresa del pueblo Nasa, por ejemplo, relató:

«A pesar de que se hubieran hecho diálogos, siempre se identificaba quién era el que lideraba el proceso de resistencia contra ellos y pues a ese era al que le han dado, ¿no? Pero siempre, siempre ha sido el territorio [...], porque es que si la autoridad no hubiera tenido el apoyo de la comunidad, de cada familia, de cada persona, no hubiera podido mantenerse como tal ni en nuestros territorios hubieran empezado realmente a mandar los grupos armados. ¿Y ellos cómo mandaron? Pues ellos mandaron por la fuerza [...], realmente una ideología política que los hiciera mover, nunca lograron eso, siempre fue con las armas, siempre fue bajo amenazas»²⁷⁷.

A medida que el aparato armado y las finanzas de las guerrillas se hicieron más fuertes, el lado político de la combinación de las formas de lucha languideció y la estrategia militar adquirió preeminencia. En el Valle y el norte del Cauca las tomas a los poblados y los secuestros mostraron el lado más virulento de la insurgencia.

Mientras que en los setenta y los ochenta las incursiones armadas de las guerrillas buscaban hostigar a la Policía y conseguir recursos mediante robos a bancos y empresas, en los noventa y principios de los 2000 el objetivo era eliminar la presencia estatal, controlar los recursos públicos y someter a las comunidades al control insurgente. Esta estrategia surgió en la segunda reunión del Comando Conjunto Occidental de las FARC-EP, en junio de 1995, donde se decidió que los frentes 6, 8, 29, 30 y las unidades urbanas atacarían cascos urbanos en Valle y Cauca y emprenderían acciones militares en Cali y en la vía Panamericana. Así lo explicó un antiguo combatiente de la guerrilla:

«Las FARC tomó una decisión en esos territorios donde se estaba sacando físicamente al Estado, a la representación del Estado personificada en el Ejército y la Policía. [...] Quedaba solo el alcalde como representante del Estado, entonces el Secretariado tomó la decisión [de] que en esos territorios donde las FARC había sacado la fuerza pública también saliera el alcalde, también saliera la parte civil del Estado para que quedara bajo el dominio absoluto de las FARC. [...] Porque el Ejército copó los páramos, el Ejército copó todos los rincones y lanzaba operaciones ofensivas en busca de aniquilarnos. [...] Entonces optamos por una estrategia distinta: no ir al páramo, sino bajarnos a combatir en medio de la población y comenzar en la población una disputa con el Estado por el control de las áreas, por el control de las regiones»²⁷⁸.

Las guerrillas expulsaron a la Policía de por lo menos diez municipios del Cauca. El CNMH calcula que entre 1965 y 2013 el departamento sufrió 309 acciones de las guerrillas (entre tomas y ataques), de las cuales casi el 80 %, es decir, 244 fueron

²⁷⁷ Entrevista 295-VI-00001. Mujer, mestiza, víctima, Cauca.

²⁷⁸ Entrevista 615-PR-00407. Actor armado, excomandante Bloque Occidental FARC.

responsabilidad de las FARC-EP. El municipio de Toribío fue el más golpeado, con 32 acciones (ocho tomas y 24 ataques), seguido por Caldoño, con 30 acciones (nueve tomas y 21 ataques)²⁷⁹. Otros municipios altamente afectados fueron Argelia, Suárez, Buenos Aires, Páez, Miranda y Almaguer.

El uso de explosivos improvisados jugó un papel determinante en la estrategia. El sello de las tomas guerrilleras fueron los «cilindros bomba», pero las FARC-EP lograron construir de forma artesanal granadas de mortero, cohetes e incluso minas tipo Claymore. En el norte del Cauca se reportaron 381 víctimas de artefactos explosivos improvisados entre 2000 y 2016²⁸⁰. Debido a sus características—imprecisión, volatilidad e inestabilidad—²⁸¹, estas armas no convencionales no solo afectaron las estaciones del Ejército y la Policía, sino también viviendas y otros bienes protegidos por el derecho internacional humanitario como escuelas, centros de salud e iglesias. Como afirmó la fuerza pública en un informe entregado a la Comisión, las tomas guerrilleras pusieron en peligro los recursos estratégicos del país, dificultaron el trabajo estatal con las comunidades, impidieron la inversión social y de mercado en los territorios, crearon un ambiente perturbador para las comunidades y desarticulaban el tejido social²⁸². El caso de Caldoño ilustra esta situación²⁸³, como lo contó un campesino del municipio:

«Resumiendo, fueron 76 tomas guerrilleras a este casco urbano. [...] Esta escuela de Madre Laura, así se llama, la tumbaron el 6 de junio del 99. O sea que entre el 97 y el 99 hubo unas cuentas que, si me agarro a enumerarlas, no acabamos hoy. Pero duele, porque este barrio, que es el barrio El Jardín y el barrio de La Plaza, quedaron casi destruidos. No solamente tumbaron la escuela, sino todas las viviendas que había, porque los cilindros eran de cuarenta libras o de cien libras. Cuando caía un cilindro de cuarenta libras, tumbaba veinte casas»²⁸⁴.

Muchos relatos de víctimas de distintas incursiones guerrilleras perpetradas entre 1997 y 2012 en Caldoño, Corinto, Toribío y Silvia recordaron los impactos de las tomas, como la muerte de civiles por causa de las confrontaciones y las explosiones;

²⁷⁹ Centro Nacional de Memoria Histórica, *Tomas y Ataques Guerrilleros 1965-2013*.

²⁸⁰ Descontamina Colombia y Unidad para las Víctimas, «Base anonimizada de víctimas de Minas Antipersonal MAP y Municiones Sin Explotar MUSE».

²⁸¹ «En el Cauca llegamos a tener cohetes, pero no tuvimos la capacidad de que fueran más precisos y ahí tuvimos los problemas». Entrevista 615-PR-00407. Actor armado, excomandante Bloque Occidental FARC.

²⁸² Informe 1306-CI-01853, Ministerio de Defensa Nacional de la República de Colombia y Universidad Sergio Arboleda, «Informe 1306-CI-01853. Aporte a la verdad», 294.

²⁸³ De acuerdo con los datos del CNMH, entre 1965 y 2013 en Caldoño se registraron nueve tomas y 21 ataques. Centro Nacional de Memoria Histórica, *Tomas y Ataques Guerrilleros 1965-2013*. Sin embargo, los testimonios recolectados por la Comisión muestran que la percepción de la gente sobre las acciones de las FARC-EP en el municipio es más elevada debido a que contabilizan también otras acciones bélicas, como hostigamientos, atentados y emboscadas.

²⁸⁴ Entrevista 056-VI-00045. Hombre, líder comunitario, víctima.

también describieron las secuelas sobre la integridad física y la salud mental, como mutilaciones, daños auditivos, ceguera y otros traumas. Las tomas frecuentemente fueron seguidas por desplazamientos, tanto individuales como colectivos, que en el contexto de municipios con altos índices de población étnica agravaron el desarraigo y la pérdida de vínculos con el territorio. En Caldono y Toribío –los municipios más afectados por las tomas guerrilleras– entre 1997 y 2016 se registró el desplazamiento de 10.810 personas. El 2005 fue el año con mayor cantidad de desplazamientos masivos²⁸⁵.

La utilización de minas antipersonal y otros artefactos explosivos improvisados también tuvo graves efectos sobre la integridad física y la vida de los miembros de la fuerza pública. El caso de un teniente de infantería del Ejército, recogido en un informe entregado por la fuerza pública a la Comisión, muestra el drama que han vivido cientos de militares y policías durante el conflicto armado interno. El teniente pisó una mina en medio de una operación adelantada contra la columna Gabriel Galvis del Bloque Arturo Ruiz de las FARC-EP en una zona montañosa en jurisdicción de los municipios de Palmira, Florida y Miranda. La operación parecía no tener mucho éxito por la dificultad del terreno y las limitaciones en el aprovisionamiento. Los militares se pertrecharon para una semana y justamente el último día, cuando se ordenó el regreso por falta de resultados y provisiones, encontraron un puesto guerrillero. El evento sucedió mientras los militares se acercaban a la zona:

Yo recuerdo un golpe en el pecho, pero ni idea de que se había activado una mina, sentí el golpe y el zumbido en los oídos... el pitido, pero ni idea, no vi ni humo ni a los soldados. Del instinto, lo que hice al sentir el golpe fue mirarme el pecho y el chaleco, estaba bien, no pensé que me había pasado nada, estaba como aturdido, el tiempo no pasó [...]. Cuando me miré las piernas, una ya no estaba... la pierna izquierda ya no estaba. Entonces, lo que hice fue recostarme a pensar, no sé... recostar la cabeza... y cuando recosté la cabeza, en una de las ramas de ese árbol estaba la pierna completa [...]. Uno reconoce la forma de amarrar sus botas, cómo camina uno, cómo se han gastado, cómo se acomoda uno el camuflado, el pantalón [...]. Entonces, acostado, la veía y decía: «Sí, esa es mi bota, esa es la forma de amarrar mis botas». Ahí sí dije: «Me pasó a mí»²⁸⁶.

Otro informe entregado por el Ejército expone los serios daños físicos y psicológicos que dejó la guerra sobre los integrantes de la fuerza pública:

²⁸⁵ Comisión de la Verdad, «Base de datos de la Consejería Presidencial, para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales».

²⁸⁶ Informe 119-CI-00683, Universidad del Rosario, «Memoria y víctimas en las Fuerzas Militares», 75-76.

Yo era enfermero de combate. Me tocó atender muchos heridos, amputados en los pies, las manos y con esquiras. El momento más duro fue en 2009 en la vereda Los Alpes, Corinto, donde llevábamos unos 20 días. Todos los días teníamos enfrentamientos y las FARC nos hostigaban con tatucos y campos minados. Esa fue la parte que más afectó porque ahí hubo muertos. Tuve que atender a un amputado debido a que una mina le voló las extremidades totalmente y le dejó esquiras. Fue un momento muy duro porque él me clamaba que no lo dejara morir ya que tenía un hijo por el que quería vivir. Hice lo posible. A pesar de los enfrentamientos que habíamos tenido en otros lugares, eso me venía afectando. Sin embargo, yo era muy fuerte. Esa escena me afectó muchísimo porque yo tenía a mi hijo. Yo lloré cuando pasó eso.

Desde ese momento empecé a tener crisis en mi vida. Ya no dormía tranquilo, tenía pesadillas, miraba aquellos guerrilleros muertos, miraba soldados muertos, miraba unos niños y familias que lloraban. Fue algo muy duro y empecé a perder el conocimiento. No me sentía bien y lo único que hacía era aferrarme a Dios. Pensaba mucho en mi familia. En Los Alpes, estuvimos otros días más y siguieron los combates. Subimos a la parte de Cajones, donde también hubo otros enfrentamientos. Hubo muertos, pero ya no del Ejército, sino de la guerrilla. Duramos como veinte días cuidando unos cadáveres, porque el helicóptero no podía entrar allá. El helicóptero entró, los sacamos, volvimos y salimos, y nos tenían una emboscada que escaneamos. El comandante decidió que hiciéramos alto, que nos quedáramos esa noche. Allá murió un soldado de hipotermia porque estábamos arriba, a 5.000 metros de altura al nivel del mar²⁸⁷.

Por otro lado, la decisión de las guerrillas de terminar de mancillar cualquier consideración moral y los mínimos del derecho internacional humanitario y utilizar el secuestro como una herramienta de presión política y fuente de financiación desencadenó desde los ochenta una de las peores tragedias humanitarias del conflicto interno colombiano. Al respecto, un informe entregado por la fuerza pública a la Comisión afirmó:

La guerrilla hizo del secuestro una industria. Las víctimas dejaron de ser industriales, empresarios o personas adineradas, para afectar a ciudadanos del común. Aumentaron las tomas guerrilleras a poblaciones, los ataques a bases militares y puestos de policía que, en muchas ocasiones, iban acompañados del secuestro de

²⁸⁷ Informe 365-CI-00969, Colombia, «Luces para la verdad. Daños causados por las FARC a miembros de la Fuerza Pública y sus familias en la jurisdicción de la Tercera División del Ejército Nacional entre 1961 y 2017», 41-42.

policías o militares; muchos de ellos permanecieron extensos periodos de tiempo en cautiverio, otros fueron asesinados o murieron. Los políticos también fueron presa de ello. Esto cambió la dinámica del secuestro en el país, se convirtió en una de las fuentes de financiación por excelencia de las guerrillas, pero también en un mecanismo de presión política, ya que en determinado momento se exigió la liberación de presos a cambio de los secuestrados²⁸⁸.

Los datos del CNMH muestran que en el periodo comprendido entre 1958 y 1999 en el Valle se presentaron 597 casos de secuestro que dejaron 847 víctimas. Las guerrillas fueron responsables del 82,8% de los casos. La principal motivación de las guerrillas para llevar a cabo el hecho fue económica: el CNMH estima que solo un 6 % de los secuestros cometidos en el departamento en ese periodo fueron de carácter político o militar. Las guerrillas buscaban principalmente obtener financiación para el sostenimiento de las estructuras armadas por medio del cobro de extorsiones a la víctima o sus familiares a cambio de la liberación.

Las principales víctimas del secuestro fueron personas que las guerrillas consideraban integrantes de la clase alta, la burguesía, la oligarquía o la élite, por lo que no solo podían pagar gruesas sumas de dinero, sino también ser utilizadas –al igual que los militares y policías secuestrados– para presionar al Gobierno y conseguir réditos políticos, como zonas de despeje o el intercambio por insurgentes presos. Así, dentro de esa categoría cabían empresarios, terratenientes, comerciantes, políticos e incluso los narcotraficantes o sus familiares. A continuación, se citan los testimonios de tres integrantes del gremio agroindustrial del Valle y el norte del Cauca, quienes le contaron a la Comisión cómo cientos de personas sufrieron el azote del secuestro y la extorsión:

«Henry Eder fue uno de los primeros secuestrados, eso fue mucho antes, en los sesenta, pero los secuestros en nuestro sector empezaron en los años ochenta y se fueron agudizando con el tiempo [...]. En los noventa ya estaban establecidos en nuestro territorio las FARC y el ELN y en los noventa llegaron las Autodefensas a nuestra región con unos ámbitos de acción muy particulares y eso hizo que las acciones delictivas, el crimen y la violencia se aumentaran muchísimo más. [...] Hay que tener en cuenta que en el suroccidente colombiano habían secuestrados productores de caña, pero secuestraban ganaderos, secuestraban productores de maíz, productores de soya, es decir, todo tipo de productores que se habían asentado en el suroccidente. [...] De esta situación, de este flagelo no se ha salvado nadie, no se han salvado sectores, no se han salvado regiones, no se han salvado tamaños de productores.

»Muchos agricultores que fueron secuestrados tenían que vivir un conflicto, digamos, moral, y era el pago del secuestro. Pago la liberación de mi familiar porque

²⁸⁸ Informe 1306-CI-01853, Ministerio de Defensa Nacional de la República de Colombia y Universidad Sergio Arboleda, «Informe 1306-CI-01853. Aporte a la verdad», 323.

obviamente yo tengo que proteger la vida de mi padre, de mi hijo, lo que sea, pero consciente de que ese dinero iba a exacerbar el conflicto, entonces digamos que esa dualidad y esa problemática, además de las afectaciones económicas y todas las demás, generaba un problema filosófico respecto de qué hacer en un momento tan horrible como enfrentar el secuestro. [...] Muchas de esas personas que fueron secuestradas y sus familias pagaban su rescate y no eran liberados y pagaban un segundo rescate para ser liberados; hubo un caso particular, por allá a inicios de los noventa por los lados de Candelaria, de un secuestro que pagaron tres veces y eso lo que hacía era generar mayor cantidad de estrés, porque aun pagando el rescate no se sabía si iban a liberar a la persona. Aquí hubo muchos muertos en cautiverio. [...] El dolor de toda esa familia para recibir muchas veces el cadáver o recibir la noticia de que lo mataron y no recibir el cadáver, ese es un tema horrible, el tema del secuestro es horroroso. [...] Sentirse uno como una mercancía porque a veces alguien lo secuestraba y entonces se lo vendían a otro grupo ilegal, porque eso existió, y aquí nos dábamos cuenta [de] que vendían al secuestrado entre varios grupos ilegales a ver quién tenía más capacidad para hacer la negociación.

»En la mayoría de los casos lo que ocurría era que inicialmente le mandaban a usted un panfleto o el panfleto se lo dejaban en la finca [...], muchos de ellos eran preimpresos, otros eran notas que mandaban hechas a mano o con letras de periódico pegadas en la que hacían la advertencia: “necesitamos que nos pague tanta plata para que usted pueda entrar a su finca y si no lo hace pues lo vamos a secuestrar, o le vamos a dañar la finca, o vamos a matar a su trabajador, o le vamos a secuestrar la familia”. [...] También tomó mucha fuerza el tema de la llamada telefónica para la extorsión. [...] La extorsión fue algo demasiado significativo, lo que pasa, si uno pone una balanza, [es que] el secuestro tiene más peso»²⁸⁹.

Además de esas dramáticas experiencias, en el Valle acontecieron tres secuestros masivos que marcaron el desarrollo del conflicto armado en todo el país. El primero fue el 30 de mayo de 1999, cuando integrantes del Frente José María Becerra del ELN irrumpieron en la iglesia La María y se llevaron a 194 personas. El segundo sucedió el 17 de septiembre del 2000, cuando el ELN secuestró 64 personas en distintos restaurantes ubicados a la altura del kilómetro 18 en la vía Cali-Buenaventura. Durante el cautiverio perdieron la vida tres personas: Miguel Nassiff, Carlos García y Alejandro Henao.

El tercero fue el de los doce diputados del Valle, perpetrado el 11 de abril de 2002 por el Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas y el Bloque Móvil Arturo Ruíz de las FARC-EP. En junio de 2007, once de ellos fueron asesinados mientras estaban en cautiverio. Aunque al principio aseguraron que fue por un intento de rescate por parte del Ejército o supuestos grupos paramilitares, terminaron reconociendo que los ejecutaron al confundir a una de sus propias unidades con un equipo de rescate.

²⁸⁹ Entrevista 068-CO-00871. Integrantes del gremio agroindustria caña.

El secuestro fue planeado como una forma de presión para establecer una zona de despeje en Florida y Pradera y hacer un intercambio humanitario por insurgentes en prisión. Así lo contó un excombatiente de las FARC-EP:

«Fueron políticos, en el sentido de que tenían relación con el intercambio humanitario, única y exclusivamente por el intercambio humanitario. Ni siquiera por corrupción, sino solo porque era para el intercambio humanitario. [...] Una de nuestras principales tareas, según el camarada Manuel [Marulanda], era buscar la liberación de la gente nuestra. Antes de la zona de despeje teníamos retenidos 500 miembros de la fuerza pública y no hubo voluntad de Samper ni de Pastrana para que durante la zona de despeje se diera la liberación de nuestros presos. [...] Entonces concluimos que al Gobierno no le interesaban sus soldados, pero sobre funcionarios públicos o políticos sí iba a haber mayor interés. Por esta razón se ordena la captura de congresistas, alcaldes, políticos y presidentes. En el marco de esta orientación se da la detención de los doce diputados»²⁹⁰.

Sobre esa posibilidad de lograr una zona despeje o el intercambio humanitario, una familiar de uno de los diputados secuestrados relató a la Comisión:

«Cuando [el presidente Uribe] hablaba conmigo trataba de ceder un poco en los términos del acuerdo humanitario, pero finalmente se echaba para atrás. [...] Mi insistencia estaba en que ellos ya lo habían hecho para la negociación con los paramilitares y el punto de Uribe era que en la zona que estaban pidiendo las FARC, que eran Florida y Pradera, había mucha población civil; y mi punto era que allí no había bases del Ejército como tal, sino que había batallones móviles. Por consiguiente, no se podía hablar de un despeje, sino que era un punto de encuentro donde se podía sentar a negociar y no era un acuerdo de paz, sino un acuerdo humanitario que se podía hacer en quince minutos. El argumento del presidente Uribe era que Bush, el presidente de Estados Unidos, había prohibido negociar con terroristas y que las FARC hacían parte de los terroristas. [...] Había pasado ya lo de las Torres Gemelas y la política de Estados Unidos era antiterrorismo»²⁹¹.

Otros secuestros también tuvieron un objetivo de presión política. En 2002, la Columna Jacobo Arenas de las FARC-EP secuestró a Rigo Alberto Calvo, alcalde de La Sierra, quien luego fue liberado con un mensaje conminando a los «alcaldes, personeros, concejales y personal de la Fiscalía de 14 municipios a que renuncien en las próximas 24 horas»²⁹². Entre ellos se encontraban Popayán, Timbío, Rosas, Puracé, Totoró, Silvia, Jambaló, Argelia y San Sebastián. En 2003 algunos de los alcaldes decidieron despachar desde Popayán y otros renunciaron a sus cargos ante las presiones.

²⁹⁰ Entrevista 326-CO-00517. Actor armado, excombatientes, Frente 30 y Frente Urbano Manuel Cepeda FARC, Valle del Cauca.

²⁹¹ Entrevista 230-VI-00080. Mujer, política, víctima.

²⁹² El Tiempo, «Las FARC secuestraron a mandatario».

También hubo acciones contra autoridades indígenas, como el secuestro de Arquímedes Vitonás Noscué, alcalde de Toribío. El 24 de agosto de 2004, Vitonás fue raptado por las FARC-EP junto a Plinio Tróchez (autoridad del cabildo de Toribío), Gilberto Muñoz (coordinador del Centro de Educación Capacitación e Investigación para el Desarrollo Integral de la Comunidad) y dos comuneros indígenas más en San Vicente del Caguán cuando visitaban a las comunidades indígenas asentadas en esa región. Días después, unos 400 comuneros y miembros de la Guardia Indígena se movilizaron desde el norte del Cauca hasta Caquetá y rescataron a los secuestrados²⁹³. La Guardia también logró la liberación de Florian Arnold, misionero suizo secuestrado por las FARC-EP el 3 de julio de 2003 en Mondomo (corregimiento de Santander de Quilichao, Cauca).

Para las FARC-EP y el ELN, el secuestro fue principalmente una herramienta financiera. Llegaron incluso a raptar niños, niñas y adolescentes con fines extorsivos. Entre 2000 y 2002 se registraron en Cali al menos seis secuestros de menores cuyas familias pagaron altas sumas de dinero por su liberación, incluso más de una vez. La modalidad más utilizada fue interceptarles en el trayecto hacia los colegios donde estudiaban. Este fue el caso de Laura Ulloa González, raptada el 20 de septiembre de 2001 por guerrilleros de las FARC-EP en el bus escolar que la transportaba a casa. La menor de 11 años, quien previamente también fue víctima junto con su madre del secuestro de La María, estuvo retenida durante 197 días.

De acuerdo con hipótesis de la fuerza pública, es posible que en esos secuestros hayan participado bandas delincuenciales²⁹⁴ que aprovechaban las facilidades que brindaba el sistema montañoso de los Farallones para evadir la acción de las autoridades y se dedicaban a secuestrar personas para luego vendérselas a los subversivos. Las víctimas habrían sido sometidas a estudios económicos previos y entregadas a la guerrilla a cambio del 10 % del rescate que luego pedía a los familiares. Los niños, niñas y adolescentes se convirtieron en los blancos preferidos porque su condición neutralizaba cualquier iniciativa que pudieran tomar las familias afectadas y las obligaba a aceptar las condiciones impuestas y agilizar el pago de los rescates²⁹⁵.

Otra modalidad del secuestro observada durante los noventa y principios de los 2000 fueron las denominadas «pescas milagrosas», cometidas por la guerrilla sobre

²⁹³ Informe 651-CI-01452. Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), «Entonces, ¡hablamos! Afectaciones del conflicto político armado a los pueblos indígenas que conforman el Consejo Regional Indígena del Cauca».

²⁹⁴ En el mismo sentido se pronunciaron personas entrevistadas por la Comisión: «Para el caso puntual del secuestro de La María, pues fue el ELN, pero sí sé que para otros secuestros la delincuencia común actuaba en la ciudad, secuestrando, haciendo inteligencia, analizando, y luego de que ya habían secuestrado la persona, la entregaban o la vendían a las FARC; pueden haber sido una especie de intermediarios». Entrevista 071-VI-00004. Escritora, víctima de secuestro y extorsión.

²⁹⁵ Semana, «Infancia perseguida».

todo en la carretera que comunica Cali con Buenaventura. Así las recordó una empresaria del Valle del Cauca:

«Hablemos de las “pescas milagrosas” que me parecen horribles, que también fue algo que se sumó a esa tragedia, y era que si usted osaba ir a la finca o moverse en una carretera pues había un retén de cualquier grupo ilegal [...]. Dependiendo de la pinta o del carro [en] que anduviera o de la cédula que tuviera, pues a voluntad del secuestrador tomaba la decisión, si lo dejaba ir o si se lo llevaba, y en ocasiones se llevaban cinco, diez o quince personas y no respetaban niños, adultos, ancianos, lo que fuera»²⁹⁶.

Las pescas milagrosas consistían en la instalación de retenes ilegales, generalmente en las épocas de vacaciones, cuando aumentaba el flujo de viajeros, con el objetivo de interceptar y llevarse a la selva a las personas que podrían tener dinero suficiente para el pago del rescate o serían útiles para ejercer presiones políticas, como los militares o los políticos locales; en otros casos, cuando las personas retenidas no tenían el perfil político o económico deseado por la guerrilla, de todas formas les cobraban extorsiones para dejarlos ir o les robaban las pertenencias. Para infundir mayor terror, en ocasiones las guerrillas quemaban vehículos particulares o de transporte público en los retenes. A diferencia de las otras modalidades de secuestro, supuestamente dirigidas contra los enemigos de clase, las «pescas milagrosas» fueron una práctica indiscriminada que afectó también a las clases medias y bajas. De ahí que fue una de las conductas que más rechazo generó hacia la guerrilla y una de las principales motivaciones de variados sectores sociales para pedir medidas de fuerza en contra de ellas.

Las voces escuchadas por la Comisión durante el ejercicio de esclarecimiento evidenciaron las heridas que dejaron los secuestros (individuales, colectivos y masivos) cometidos por las guerrillas en Cauca y Valle en las víctimas directas y su círculo cercano²⁹⁷. En primer término, señalaron la angustia de enfrentar a las amenazas de muerte, la falta de control sobre la integridad propia y de los allegados, las condiciones inhumanas del cautiverio²⁹⁸ y la incertidumbre por la falta de información sobre los planes de los captores, las negociaciones o los operativos militares de rescate. Estos impactos se agravaron como resultado de las condiciones de género:

«Empezamos a subir y llegamos a un páramo, pero eso fue horrible, el frío más horrible; yo, de por sí, soy superfriolenta, pero era en un páramo, el frío más horrible. Llegamos y dijeron: “aquí tenemos que fijar la carpa”. Entonces yo me acuerdo [de]

²⁹⁶ Entrevista 068-CO-00871. Integrantes del gremio agroindustria caña.

²⁹⁷ Para mayor información sobre el tema ver *Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivas* en este mismo Informe Final.

²⁹⁸ Por ejemplo, familiares de una de las víctimas del secuestro del kilómetro 18 que falleció en cautiverio refirieron las deplorables condiciones bajo las cuales la guerrilla tenía a los cautivos, pues ni siquiera contaban con medicamentos: «La guerrilla tenía una inyección, una solamente, una penicilina de 800 unidades; eso es lo que administraba, no más, no tenían nada, ni primeros auxilios tenían». Entrevista 068-VI-00027. Familiar de víctima de secuestro, Valle del Cauca.

que estaba también otra vez empapada, yo ya estaba tiritando; había otra persona que la tuvieron que abrazar porque ya estaba que le daba una hipotermia. Entonces me acuerdo que nos dijeron: “la única forma de calentarse es que se tienen que quitar la ropa y abrazarse unos a otros”. Para mí fue muy duro porque yo era la única mujer, tampoco conocía a nadie, entonces me puse a llorar y les decía: “no puedo, es que esto va en contra de todo.” Mis mismos compañeros me decían “lo tienes que hacer” [...]. Me acuerdo que me tocó quitarme la ropa y dormir en medio de dos amigos para calentarnos. [...] Al otro día, pues ponerse la ropa empapada y seguimos caminando. [...] También, para entrar al baño, era: “mira, necesito papel higiénico”, y pues, “no, vea, toca con esas hojitas”»²⁹⁹.

Durante el secuestro, algunas personas experimentaron una pérdida de empatía por las personas del grupo que no aportaban a las tareas diarias de supervivencia, como armar la carpa, así la causa fuera una enfermedad o la edad avanzada³⁰⁰. Debido a que a partir del secuestro masivo de la iglesia La María se desarrollaron operaciones militares de gran envergadura focalizadas en la cordillera Occidental, las víctimas refirieron afectaciones por el terror constante que causaban los sobrevuelos y los bombardeos de las aeronaves de la Fuerza Aérea y los combates entre actores armados. Había un sentimiento generalizado entre las víctimas de que cada minuto se debatían entre la vida y la muerte³⁰¹.

Entre las víctimas directas e indirectas del secuestro fueron comunes los cuadros de depresión, ansiedad, paranoia, trastornos del sueño, crisis de nervios, aislamiento social y los pensamientos catastróficos. También se relataron afectaciones en la alimentación y el peso corporal y el abuso de alcohol y sustancias psicotrópicas. Algunas víctimas relataron impactos a nivel espiritual, pues los secuestros y otros hechos de violencia les hicieron dudar de su fe o las llevaron a buscar alternativas mágicas, como la asesoría de «brujos», para conocer la condición y el paradero de sus allegados.

Para muchas personas, el cautiverio significó una interrupción en el proyecto de vida que se alargó por meses o años. También afectó las condiciones económicas de las víctimas de varias maneras, bien porque se perdió al proveedor de recursos o porque el patrimonio se tuvo que sacrificar para pagar los rescates exigidos o para huir en busca de seguridad (incluso al exilio). Para muchas personas el secuestro extorsivo significó la quiebra, pues eran propietarias o empleadas de negocios medianos o pequeños y no poseían el capital que las guerrillas les adjudicaban. Tras la liberación, muchas víctimas experimentaron dificultades para reconstruir sus rutinas cotidianas y proyectos laborales³⁰². Eso se evidenció bastante en el caso de militares y policías³⁰³.

²⁹⁹ Entrevista 068-VI-00033. Víctima, secuestro de La María.

³⁰⁰ Entrevista 068-VI-00027. Familiar de víctima de secuestro, Valle del Cauca.

³⁰¹ Entrevista 068-VI-00034. Víctima de secuestro, hombre.

³⁰² Entrevista 074-VI-00002. Mujer. Víctima. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.

³⁰³ Informe 748-CI-00527, Capitán Jorge Mauricio Cardona Angarita, Laura Andrea Gaitán Aya, Coronel Carlos Arturo Velásquez Peláez, «Los soldados regulares víctimas del secuestro y de la

En el caso de algunas mujeres, los impactos psicosociales se agravaron por la sobrecarga de roles, pues debieron asumir completamente el sustento económico y emocional del núcleo familiar. Algunos adolescentes se vieron obligados a asumir una madurez temprana para emprender la lucha activa por la liberación de sus padres y varios de ellos sufrieron dificultades para seguir con sus estudios y cuadros de estrés por la sobreexposición en los medios de comunicación. Otro impacto importante fue la desconfianza en las instituciones no solo por su incapacidad para evitar los secuestros, sino por la pésima atención posterior. Adicionalmente, algunas personas manifestaron que hoy en día les cuesta retomar contacto con otras víctimas o con las redes de apoyo porque las asocian con el hecho victimizante traumático³⁰⁴. Las secuelas físicas y psicológicas provocadas por el secuestro perduran incluso décadas después del secuestro y la liberación. Para muchas personas el duelo sigue inconcluso, pues nunca volvieron a saber nada de sus seres queridos secuestrados.

Pese a la dureza de la experiencia del secuestro, algunas víctimas la reconvirtieron en un propósito de resiliencia y paz. Por ejemplo, así lo expresó Maurice Armitage, empresario y exalcalde de Cali:

El primer secuestro fue en 2001, fue un secuestro con 55 personas, nos habíamos ido al Pacífico a una pesquería y resultamos secuestrados por el Frente 57 de las FARC, duramos dos meses y medio y tuve la oportunidad de conocer la pobreza del Chocó, la belleza de la naturaleza y las angustias que viven tanto los secuestrados como los secuestradores. El segundo secuestro fue en el 2008, fue un secuestro más violento, más corto, pero violento [...]. Esto ha producido en mí un gran cambio, un gran cambio mental, un gran cambio como empresario y como ciudadano. Desde el momento en que sentí esta angustia de ver qué nos está pasando aquí en nuestro país, me vi en el dilema de tomar una decisión: o me voy del país o me quedo aquí en Colombia tratando de resolver las angustias sociales en las cuales vivimos y le generamos desarrollo al país. [...] Decidí quedarme para luchar por un cambio social a través de la generación de empleo, las segundas oportunidades y el perdón. Y eso es lo que me ha permitido reconciliarme con la vida para ser feliz³⁰⁵.

Otras personas, por el contrario, decantaron la experiencia en el apoyo a soluciones que implicaban el uso de la fuerza, incluso por parte de actores ilegales. El ambiente de miedo, incertidumbre e impotencia generado por los secuestros debilitó las posiciones que abogaban por una salida negociada al conflicto armado (bastante demeritada por

desaparición forzada».

³⁰⁴ Entrevista 068-VI-00030. Testigo, religioso, mediador Iglesia Católica en el secuestro la María.

³⁰⁵ «Espacio de escucha con empresarios víctimas de secuestro y sus familiares», 6 de noviembre de 2020.

el fracaso del Caguán) y ahondó el rechazo al estatus político de las guerrillas no solo por parte de las élites políticas y económicas que más lo sufrieron, sino también por parte de amplios sectores de las clases medias y bajas. La ola de secuestros puso sobre la mesa la incapacidad del Estado para brindar seguridad, incluso a la población de los principales núcleos urbanos; la vulnerabilidad de las élites y los sectores de medianos ingresos, que hasta entonces habían permanecido al margen del conflicto armado, y la sombra de unas guerrillas cada vez más fuertes y capaces de todo para satisfacer sus objetivos, que ya no solo dominaban la zona rural del departamento, sino que demostraban su capacidad de operar en plena capital. La combinación de esos elementos provocó, sobre todo en Cali, una aguda sensación de zozobra y pánico que fomentó las iniciativas legales e ilegales de seguridad privada. Un comerciante entrevistado por la Comisión, víctima de secuestro por parte de las FARC-EP, resumió el sentir de muchas personas en ese momento:

«Me imagino que la formación de los grupos paramilitares también ayudó a que mucha gente se protegiera más. [...] La guerra de guerrillas, como se ha hecho en Colombia con la guerrilla, es muy difícil de controlar; tenemos una geografía apta para ese tipo de acción militar, pero el Estado también ha sido muy laxo con la guerrilla, demasiado laxo. [...] El que tenía plata no podía ir a la finca porque lo secuestraban, lo mataban; nadie, ningún personaje adinerado podía asomarse al campo porque no había quién controlara a la guerrilla. Los paramilitares detuvieron un poquito la fuerza que llevaban, o, si no, le digo que nosotros aquí ya nos mandaban eran ellos; bendito sea Dios, se sabe que todo es malo, lo que pasó, pero a nosotros nos vino a salvar por aquí los paramilitares, ellos nos quitaron la guerrilla de encima»³⁰⁶.

Una nueva generación paramilitar

Un mes después del secuestro de La María tuvo lugar en La Moralia (Tuluá) la primera incursión oficial del Bloque Calima (BC) de las AUC y el inicio del periodo más violento en la historia reciente del Valle y el Cauca. Aunque se ha sostenido que la llegada de los paramilitares a la región fue una respuesta a ese evento, la Comisión ha constatado que el proyecto paramilitar se estaba fraguando desde años antes³⁰⁷.

Las acciones de las estructuras paramilitares antecesoras de las AUC en la región se pueden rastrear incluso hasta la masacre de la hacienda El Nilo en 1991. El 16 de

³⁰⁶ Entrevista 068-VI-00027. Familiar de víctima de secuestro, Valle del Cauca.

³⁰⁷ Así lo documentó el CNMH en el informe sobre el Bloque Calima. En el mismo sentido se pronunciaron varias entrevistas recolectadas por la Comisión con antiguos integrantes del BC y víctimas.

diciembre, un grupo de doce paramilitares, apoyados por miembros de la Policía adscritos a Santander de Quilichao, llegaron a la hacienda, ubicada en el corregimiento El Palo, en el municipio de Caloto, y asesinaron a 20 personas pertenecientes al pueblo Nasa. Cuatro años antes, los indígenas habían ocupado más de 500 hectáreas de la hacienda porque consideraban que hacía parte de sus territorios ancestrales³⁰⁸. Los nuevos dueños que recientemente habían comprado los predios llamaron a los indígenas supuestamente a dialogar y 80 de ellos asistieron a la reunión. Según Orlando Villa, alias Rubén, exparamilitar que participó en la masacre, el crimen fue planeado por Fidel Castaño y varios narcos, terratenientes y ganaderos de la región que lo contactaron para sacar a los nativos de las tierras. Tras la masacre, se dispersaron, pero en pocos días 5.000 indígenas volvieron a ocupar la hacienda y se quedaron permanentemente. Las investigaciones y versiones de los paramilitares implicados han señalado a Jorge Valencia, entonces propietario de la hacienda, como cómplice en la formación del grupo paramilitar, pero otros responsables materiales e intelectuales de la masacre no han sido investigados³⁰⁹.

Víctimas entrevistadas por la Comisión relataron que la violencia contra los indígenas comenzó meses antes de la masacre de El Nilo:

«Eso fue en diciembre, pero desde junio estaban matando líderes. En la hacienda La Josefina estaban tipos a caballo, tipos blancos, colorados, grandotes, armados. [...] Cinco días antes [de la masacre], la señora Betty dijo: “La tierra ya no es mía, la vendí a un apoderado, la vendí y está en manos de un narcotraficante”. [...] El socio que recuerdo en ese entonces era Orlando Villa Zapata, autor intelectual de la masacre [...], era el que armaba y organizaba eso porque tenía vínculos con los paramilitares»³¹⁰.

De igual forma, campesinos entrevistados por la Comisión contaron que hacia 1996 y 1997 empezaron a circular por el territorio personas desconocidas haciéndose pasar por vendedores y «locos», pero en realidad estaban llevando a cabo tareas de inteligencia previas a la incursión de las AUC. También afirmaron que en diversas reuniones llevadas a cabo entre 1997 y 1998, integrantes del Ejército y

³⁰⁸ Acerca de la masacre, el CRIC afirmó en un informe entregado a la Comisión: «Tras la progresiva toma de las tierras planas de la hacienda y un frustrado proceso de negociación para la compra de la tierra por parte del Incora que duró casi cuatro años, se produce la matanza de veinte indígenas Nasa perpetrada por paramilitares con apoyo de la Policía. La responsabilidad estatal en este crimen de lesa humanidad llevó a un escenario de negociación con el gobierno de César Gaviria, en el cual se pactó la reparación colectiva con, entre otras disposiciones, la compra de tierras por parte del Incora: 15.663 hectáreas para nueve territorios indígenas del norte del Cauca en un plazo de tres años». Informe 651-CI-01452. Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), «Entonces, ¡hablamos! Afectaciones del conflicto político armado a los pueblos indígenas que conforman el Consejo Regional Indígena del Cauca», 177.

³⁰⁹ Rutas del Conflicto, «Masacre de El Nilo».

³¹⁰ Entrevista 070-PR-00886. Víctima, mujer, indígena.

otras autoridades emitieron amenazas³¹¹ y anunciaron que los «mochacabezas» ya se aproximaban a la región³¹².

En 1999, los hermanos Castaño enviaron desde Urabá un contingente con el supuesto objetivo de enfrentar a las guerrillas y proveer seguridad en Valle y Cauca. Con el tiempo esta estructura fue bautizada como Bloque Calima. Algunos sectores de las élites políticas y económicas, la fuerza pública y la ciudadanía, agotados de las extorsiones, los secuestros y otras modalidades de la violencia insurgente, vieron esta acción con beneplácito. A la larga, sin embargo, quedaría claro que ese objetivo contrainsurgente fue superficial y el bloque era un piñón más de un complejo mecanismo para salvaguardar intereses políticos y económicos (legales e ilegales) particulares.

En un contexto caracterizado por la reconfiguración del crimen organizado y la expansión de las AUC en el ámbito nacional, la alianza previa entre narcos y fuerza pública que se expresó en la oleada de violencia acaecida en Trujillo, Riofrío, Bolívar, Sevilla y otros municipios abonó la llegada del BC al Valle y al Cauca. Sin embargo, mientras que la base social de la alianza que operó en el centro y el norte del Valle a finales de los ochenta y principios de los noventa estuvo restringida a los narcotraficantes, la que respaldó al BC contó también con las élites económicas y políticas regionales³¹³. El BC se extendió por el resto de Valle y Cauca por solicitud de don Diego y otros narcotraficantes, pero también de hacendados y empresarios. En última instancia, todos se veían afectados por las acciones de los grupos guerrilleros y se sentían amenazados por la organización y movilización social que les impedía el control territorial absoluto³¹⁴. Dicha movilización se fundamentaba en múltiples reivindicaciones políticas, sociales y económicas de sectores obreros, campesinos, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, dentro de las cuales la tierra tenía un lugar preponderante.

El Bloque Calima se estableció inicialmente en el centro del Valle (Tuluá, Buga, Bugalagrande y San Pedro) y allí erigió sus bases principales³¹⁵. Con la llegada de José Veloza alias HH a la comandancia en el 2000, se expandió hacia el sur (Palmira, Pradera, Florida, Jamundí), el Pacífico (Buenaventura y la costa caucana) y el norte del Cauca (Buenos Aires, Suárez y Santander de Quilichao). Desde el principio, la violenta embestida de este bloque –con apoyo de la fuerza pública– se dirigió más en

³¹¹ «Como en septiembre u octubre [de 1998] me dijeron: “esta hijueputa, siendo moza de los guerrilleros, y te da miedo; cómo será cuando lleguen los paramilitares”». Entrevista 216-VI-00043. Víctima, centro del Valle del Cauca.

³¹² Fuente de Archivo Externa 28864-OE-237758, Centro Nacional de Memoria Histórica, «Entrevista 010 organización campesina Valle del Cauca».

³¹³ Centro Nacional de Memoria Histórica, *La masacre de Trujillo: una tragedia que no cesa*.

³¹⁴ Centro Nacional de Memoria Histórica, *Bloque Calima de las AUC*.

³¹⁵ El CNMH identificó once bases del Bloque Calima en el Valle del Cauca. Los testimonios brindados a la Comisión entregaron información específica sobre tres de estas bases, ubicadas en San Pedro, Bugalagrande y Palmira.

contra de la sociedad civil, acusada de auxiliar a la insurgencia, que contra el aparato armado de las FARC-EP o el ELN.

Hasta su desmovilización en 2004, los paramilitares desplegaron un amplio pron-tuario de acciones violentas, tanto letales como no letales: amenazas, extorsiones, robos, secuestros, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, utilización y apropiación de bienes civiles, restricción de movilidad, confinamientos, desplazamientos y despojos, torturas, desapariciones, violencias basadas en género, asesinatos y masacres. Al igual que las guerrillas, los paramilitares también ejercieron constreñimientos electorales³¹⁶ y otras presiones políticas: entre 1999 y 2003, el Bloque Calima declaró objetivo militar a distintos alcaldes por supuestos manejos irregulares del erario, entre ellos los de Puerto Tejada, Corinto, Almaguer, Bolívar, Caldono, La Sierra, Patía y La Vega³¹⁷.

La organización, incursión, recorridos y violencias del paramilitarismo en la región se asemejan a una pintura con matices de intensidad variable que se superponen entre sí: unos colores pierden intensidad y otros resaltan, pero ninguno desaparece. El primer matiz de la pintura es la insurgencia, el segundo es la fuerza pública, el tercero son los empresarios y el cuarto los narcos. La pintura deja en claro que bajo el régimen de violencia confluyeron aquellos con intereses en la defensa de la propiedad y su expansión, en la consolidación del circuito necesario para el tráfico de drogas, en la identificación y eliminación de integrantes de las guerrillas o sus bases de apoyo (reales o supuestas), en el mantenimiento de privilegios y en el control sobre los Gobiernos locales. Esta confluencia de propósitos no resulta extraña y se repite una y otra vez a lo largo del tiempo.

Como se dijo, el primer matiz de la pintura son las guerrillas, pues sus acciones —principalmente el secuestro— estimularon el ejercicio de la violencia privada. El segundo matiz consiste en el papel de la fuerza pública en la conformación y expansión del paramilitarismo. La confluencia de intereses legales e ilegales, junto con la percepción de estar combatiendo enemigos compartidos, llevó a alianzas entre el Ejército, la Policía, los paramilitares, los narcotraficantes y los empresarios. En esa dirección, un antiguo integrante de las AUC sentenció:

«Deme cuarenta fusiles, cuarenta hombres y al comandante de la Policía y controllo el territorio que sea. [...] Lo he dicho en varias ocasiones: es imposible pensar que usted llega con cincuenta hombres armados y uniformados de Tuluá a Santander de Quilichao si la Policía o el Ejército no lo ayudan, si no lo transportan o lo cuidan; eso era un cohonestar permanente con el grupo»³¹⁸.

³¹⁶ Víctimas relataron que tanto el Bloque Calima como el Ejército presionaron a los electores para votar por Álvaro Uribe en las elecciones de 2002: «Entonces, cuando Uribe ganó, ellos [el Bloque Calima] llevaron hasta orquesta en Arenillo [Palmira]; ellos decían: “¡ganó mi patrón!, ¡ganó mi patrón!” y era Uribe». Entrevista 068-VI-00012. Víctima, mujer.

³¹⁷ El Tiempo, «Paras amenazan a nueve alcaldes del Cauca», *El Tiempo*.

³¹⁸ Entrevistas 185-PR-00771. Tercero civil, hombre, financiero AUC.

A diferencia de las iniciativas narcoparamilitares previas, que tenían arraigo en el territorio y estaban constituidas en su mayoría por personas de la región, el Bloque Calima fue un ejército invasor. El grueso de sus comandantes originales (antiguos militares) y de la tropa procedía de Córdoba y Urabá. Además, no fue una estructura militarmente sólida debido a la inferioridad numérica y táctica de sus primeros años de operación y al desconocimiento de los territorios. De ahí que su actividad bélica fue limitada y la alianza con la fuerza pública fue primordial a la hora de ingresar al territorio. Las AUC contaron con el apoyo, por acción u omisión, de algunos integrantes de la fuerza pública en Valle y Cauca. Al respecto, Elkin Casarrubia, alias el Cura, segundo al mando de este bloque, expresó en versiones de Justicia y Paz que antes de la incursión don Diego los puso en contacto con personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía en Tuluá y luego la información para las acciones armadas era entregada por el Ejército, la Policía y el DAS.

El 4 de junio de 2014, en una audiencia de formulación de cargos ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía expuso los nexos que llegó a entablar el Bloque Calima con agentes del orden público para cometer sus crímenes:

En un 49 % de los hechos que se pudieron verificar, hubo participación de la Fuerza Pública. En un 12 % hubo colaboración de más de una autoridad, que permitían el ingreso a las zonas y la presencia de los grupos comandados por Veloza García. La presencia urbana no se hubiera podido dar si no hubiera sido por la acción u omisión de la fuerza pública³¹⁹.

Entre los oficiales que presuntamente estuvieron ligados con este bloque están el general Francisco Pedraza, el teniente coronel Alberto Vargas, el capitán Mauricio Zambrano, el general Jaime Canal y el coronel Jorge Amor³²⁰.

El tercer matiz de la pintura es el papel de los empresarios. En el proceso de Justicia y Paz y ante la prensa, HH señaló categóricamente que la llegada de las AUC al Valle y el Cauca se dio por solicitud de los empresarios de la región que debido al accionar de la guerrilla recurrieron a los Castaño para que enviaran un grupo de las Autodefensas:

[La llegada de las AUC al Valle del Cauca] se da por el pedido de los empresarios de la región, que debido al intenso accionar de la guerrilla recurren a los Castaño para que envíen un grupo de Autodefensas [...]. A las Autodefensas las trajeron los empresarios, ellos les pidieron a Carlos y a Vicente Castaño que montaran el Bloque Calima. La reunión con narcos del Valle fue otra, allí solo estuvieron Diego Murillo, alias Adolfo Paz, o don Berna. Después que habíamos tomado cierto

³¹⁹ Centro Nacional de Memoria Histórica, *Bloque Calima de las AUC*, 492.

³²⁰ *Ibid.*

control, los empresarios se desaparecen y al perder ese apoyo económico, Vicente acude a los narcos [Diego Montoya, Arcángel Henao, 'El Mocho' y Hernando Gómez]. Se hizo en una finca por Cartago para organizar el Bloque [...]. Después de que yo asumo como comandante se generan una serie de reuniones con los empresarios, que volvieron a aportar económicamente para la organización [...]. Toda esta clase alta y políticos que apoyaron nuestras acciones son tan culpables como nosotros por estos muertos [...]. Se cometieron hechos con información que daba la fuerza pública. Ejército y Policía nos colaboraron. Teníamos coordinación para los desplazamientos, en muchas ocasiones movimos tropas de nosotros de Tulúa hasta Buenaventura o hasta Jamundí en camiones del Ejército³²¹.

No obstante, el apoyo a los paramilitares no fue una postura oficial y generalizada por parte de los gremios económicos. Así lo dejaron en claro, por ejemplo, los productores asociados en Procaña que hablaron con la Comisión:

«El sector agroindustrial de la caña de azúcar, el gremio de Procaña, jamás le ha apostado al tema del paramilitarismo. [...] Si ustedes se ponen a ver, el tema del paramilitarismo no aparece por ningún lado; eso no quiere decir que ante las circunstancias, especialmente en la década de los ochenta, noventa, donde por temores muchos de los propietarios vendieron sus tierras y donde los recursos económicos en esos momentos estaban en manos de narcotraficantes, pudiese haber casos aislados que de pronto se hubieran ido por esa línea. Pero nunca como sector y nunca como gremio. [...] Si nosotros tuviéramos el espíritu de paramilitares no habiéramos abandonado las tierras, las familias hubieran permanecido en el territorio y hubieran encontrado eso como la solución»³²².

Es cierto también que otros no tenían la capacidad financiera para recurrir a medidas de seguridad privada, ni ilegales ni legales³²³. Asimismo, es indudable que la cercanía de los grupos paramilitares con algunos representantes de las élites económicas, tanto en el Valle y el Cauca como en otras zonas del país, generó una grave estigmatización ejercida desde todos los bandos de la guerra sobre los gremios y productores en un contexto de violencia generalizada:

«Uno qué puede hacer en un marco de violencia tan horroroso: por aquí, secuestrando la guerrilla, las extorsiones, las amenazas contra los trabajadores, por acá, otro grupo armado también financiado por narcotráfico luchando contra estos y generando una violencia generalizada. [...] Por aquí pasaba la guerrilla, por aquí pasaban

³²¹ El País, «Empresarios trajeron las AUC al Valle».

³²² Entrevista 068-CO-00871. Integrantes del gremio agroindustria caña.

³²³ «No es fácil para un productor de caña tener una empresa de seguridad contratada [...]. Es que muchas personas afuera tienen la concepción de que los productores de caña son todos grandotes y resulta que nosotros tenemos productores desde una plaza, desde una hectárea, pasando a unos de 50 o 200; tenemos de todos los tamaños, entonces difícil pensar que un productor pequeño o mediano pueda tener el recurso económico para pagar una seguridad privada». Ibíd.

los paramilitares y muchos de los enfrentamientos se daban dentro de los cañaduzales. Dígame usted, dueño de una finca de cinco hectáreas, o de 50 o de 500, ¿qué hace?, ¿le avisa a la Policía?, ¿pone un denuncia? No, pues le toca salir pitao' de ahí y hacerse el ciego, el sordo y el mudo como Shakira. [...] Entonces, en ese momento, la capacidad de reacción era mínima; era tanto el miedo, tanto el miedo al secuestro como a pronunciar o referirse sobre alguno de los actores de violencia, porque usted decía esto y era objetivo militar del paramilitar, usted decía algo y era objetivo de la guerrilla. [...] Mejor dicho, no podíamos ni siquiera decir que “tan bueno que la Policía me vino a defender” porque “ah, entonces usted es un paramilitar”. [...] Por supuesto, el gremio tiene que salir a la autoridad legalmente constituida, pero si uno le pedía ayuda a la Policía o al Ejército usted era paramilitar, era un gremio paramilitar. Entonces era un miedo en el que usted no podía ni defenderse ni podía pedir ayuda, ni siquiera de las instituciones legalmente constituidas. [...] Eso es un callejón sin salida. ¿Y qué hace el productor? Nada, mija, porque cualquier cosa que hiciera lo convertía en favorecedor del grupo contrario»³²⁴.

Sin embargo, no se puede desconocer que varios empresarios, a título individual, se involucraron con los paramilitares buscando satisfacer sus intereses particulares. Un antiguo integrante de las AUC explicó así las motivaciones tras las alianzas entre diversos actores en el territorio:

«Imagínese usted que el “señor Rodríguez” no quiere vender la finca, entonces vamos a presionarlo, le vamos a pagar, lo vamos a obligar a ir a la notaría, y eso solo se hace a través del ejercicio de la violencia. [...] El Valle tiene 42 municipios, todos importantes; entonces, a mí me conviene que la “doctora Hernández” sea la alcaldesa de Yotoco; bueno, vamos a meter presión, plata, y ella me va a eximir de los peajes, me va a dejar que mis camiones de caña, a pesar del daño que causan en las vías, que eso no signifique un problema para mí; los acuerdos de agua, todo tiene un interés. En el campo hay intereses múltiples: seguridad, aforos de agua, comprar más tierra barata, el vecino que no me gusta, sacarlo de la zona»³²⁵.

Según versiones libres de varios comandantes en Justicia y Paz, HH asumió las riendas del grupo paramilitar como resultado de las quejas de algunos empresarios ante los Castaño porque su antecesor, David Hernández, alias 39, no estaba combatiendo efectivamente a la guerrilla y estaba al servicio de los narcotraficantes de la región. Una de las primeras acciones del nuevo jefe del Bloque Calima fue buscar nuevos financiadores e incrementar el monto exigido a las élites legales e ilegales:

En primera instancia se reunió con varios empresarios, quienes acordaron entregar 250 millones de pesos a alias «Gordo Pepe» (Byron Jiménez), exsecretario de Vicente Castaño. Entre los asistentes al encuentro estaban María Clara Naranjo Palau,

³²⁴ *Ibíd.*

³²⁵ Entrevistas 185-PR-00771. Tercero civil, hombre, financiero AUC.

gerente del Ingenio San Carlos; Bernardo Tezna y Andrés Orozco, compañero sentimental de Naranjo; Luis Fernando Castro, ganadero y expresidente de la Plaza de Toros de Cali; Manuel Mosquera, tío del exgobernador de Cauca Juan José Chaux Mosquera; y el periodista Mario Fernando Prado. La reunión fue auspiciada por el empresario Édgar Lenis Garrido y se llevó a cabo en la finca El Corcovado, que estaba ubicada en Buenos Aires (Cauca) y era propiedad de Manuel Mosquera³²⁶.

Dichas personas fueron mencionadas por comandantes paramilitares en audiencias de Justicia y Paz, pero la justicia poco o nada ha hecho para corroborar o descartar esas afirmaciones. Una de las pocas acciones penales existentes en torno a los vínculos entre las empresas y los paramilitares es la condena contra Ramiro Rengifo Rodríguez, exjefe de seguridad del Ingenio San Carlos, responsable de los delitos de desplazamiento forzado agravado y concierto para delinquir agravado por entregar información al Bloque Calima sobre supuestos colaboradores de la guerrilla, quienes posteriormente fueron amenazados o asesinados. Uno de los casos por los que fue encontrado culpable fue el de Fredy Ocoró Otero, fiscal del sindicato de trabajadores del municipio de Bugalagrande, quien fue señalado como auxiliador de la guerrilla, lo que lo obligó a abandonar el país por las amenazas contra su vida³²⁷.

El cuarto matiz es la injerencia de los narcos en la importación de los paramilitares a la región, que obedeció a dos razones primordiales: favorecer el despojo de tierras y garantizar el control de la zona donde se producía cocaína y la seguridad de los laboratorios. En eso coincidieron los relatos de víctimas, expertos, empresario y exparamilitares³²⁸ escuchados por la Comisión. Un empresario del gremio de la caña, por ejemplo, relató:

«Parte de la gente que decidió irse vendió sus tierras, en ese momento, estoy hablando comienzos de los ochenta, empieza el tema del narcotráfico duro en el Valle del Cauca, mucha gente vendió sus tierras a lo que después fue apareciendo como el narcotráfico. Hoy en día en el Valle del Cauca hay más de 15.000 hectáreas que están en la SAE [Sociedad de Activos Especiales] o son tierras, decimos nosotros en el argot popular, de mala procedencia. Esa huida de los propietarios de tierra abrió la compuerta a la llegada del narcotráfico al sector agropecuario del Valle del Cauca. Ahí aparecieron capitales y una cantidad de empresarios de alto riesgo a comprar tierras y empresas de todo tipo que generó después un tema tan delicado como fue la llegada del Bloque Calima al Valle del Cauca; esa gente fue la que trajo al Bloque Calima, la mafia trajo la seguridad privada de

³²⁶ Centro Nacional de Memoria Histórica, *Bloque Calima de las AUC*, 183.

³²⁷ El Tiempo, «Condenan a 11 años de cárcel a exjefe de seguridad de ingenio por nexos con paramilitares».

³²⁸ «Los vallecaucanos viven con delirio de cerco, ellos cada vez quieren que la finca sea más grande, cada vez quieren tener más tierra. Entonces, obviamente el paramilitarismo es una herramienta perfecta para eso». Entrevistas 185-PR-00771. Tercero civil, hombre, financiero AUC.

los paramilitares, eso se conoce, eso es público. Y no solamente llegaron a comprar las tierras, sino que llegaron a comprar los puestos en la sociedad y a comprar la política»³²⁹.

Dado que el apoyo financiero que recibió el Bloque Calima por parte de las élites económicas legales fue fluctuante e incluso desapareció, los jefes paramilitares decidieron recurrir a los narcotraficantes para conseguir recursos:

Diego Fernando Murillo Bejarano, alias 'Don Berna' o 'Adolfo Paz', Vicente Castaño, 'HH' e Iván Roberto Duque Gaviria, alias 'Ernesto Báez', se reunieron con industriales, ganaderos, comerciantes y narcotraficantes, entre los que estaban 'don Diego', Arcángel de Jesús Henao; Luis Hernando Gómez Bustamante, alias 'Rasguño'; y Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias 'Gordolindo'. En el encuentro, que se llevó a cabo en una finca en Cartago que pertenecía a Henao, presentaron a 'HH' como nuevo comandante del Bloque y pidieron apoyo económico para expandir el grupo y combatir a la subversión en otros territorios³³⁰.

A pesar de que los mafiosos y los paramilitares tenían enemigos comunes, su alianza fue simbiótica y no propiamente contrainsurgente. El CNMH recogió tres versiones sobre el apoyo que don Diego le suministró al Bloque Calima: la de alias El Cura, quien señaló que fue permanente; la de Juan Mauricio Aristizábal, alias El Fino, exjefe financiero de la estructura, quien afirmó que fue hasta 2002 porque el Bloque Calima se negó a involucrarse en la guerra contra Los Rastrojos; y la del propio don Diego, quien en una declaración ante la Corte Suprema de Justicia afirmó que su financiación fue temporal, pues aunque trajo a las AUC a partir de un acuerdo con los Castaño, tuvieron desavenencias debido a las extorsiones que comenzaron a cobrar a los campesinos³³¹.

Una vez los paramilitares expulsaron a la guerrilla de territorios claves para el narcotráfico, como Buenaventura, procedieron a cobrarles a los narcos una cuota de gramaje que oscilaba entre los 50 y los 100 dólares, en una especie de «control aduanero» que buscaba garantizar que los compromisos adquiridos con los narcotraficantes se cumplieran. Sin embargo, testimonios de exparamilitares negaron que el Bloque Calima se dedicara solo al cobro del gramaje, como sostenía HH, y evidenciaron la participación directa de la estructura en la comercialización, en virtud del control directo que ejercía sobre las rutas de transporte y los puertos. Este bloque también obtuvo rentas del cobro de extorsiones a comerciantes y ganaderos y el hurto de combustible en el poliducto de Ecopetrol ubicados en la vía Cartago-Yumbo-Buenaventura³³².

³²⁹ Entrevista 068-CO-00871. Integrantes del gremio agroindustria caña.

³³⁰ Centro Nacional de Memoria Histórica, *Bloque Calima de las AUC*, 185.

³³¹ *Ibíd.*

³³² *Ibíd.*

En el intersticio entre el tercer y el cuarto matiz hay que considerar a las personas que tenían un pie en la legalidad y otro en la ilegalidad. Un líder religioso que desarrolló su labor pastoral durante la época más dura del conflicto en el Valle y el norte del Cauca, por ejemplo, refirió a la Comisión el caso de Mario Valencia Trujillo:

«Mario Valencia era acusado públicamente, es decir, se sabía que él era el que había traído las Autodefensas. Al mismo tiempo, se decía que la plata de él era del narcotráfico, que era uno del narcotráfico, como de bajo perfil, y realmente era de bajo perfil, porque de él no se supo sino con lo del secuestro de La María; y que era el marido de Luz Mery Tristán [una reconocida deportista] y todo eso, pero no se sabía mucha cosa de él»³³³.

Valencia era un importante empresario caleño dedicado al negocio de los caballos finos. Al parecer, fue víctima de varias extorsiones por parte de las FARC-EP y del ELN y su hermano fue una de las personas secuestradas en La María. En 2003 fue capturado, sindicado de narcotráfico y lavado de activos. Según las autoridades colombianas y estadounidenses, bajo el alias de El Joven o El Caballista, trabajó con los hermanos Rodríguez Orejuela desde los ochenta y fue su sucesor en el negocio del narcotráfico en Cali. Se presume que conformó una de las organizaciones más grandes de exportación de cocaína por vía marítima desde los puertos de Tumaco, Buenaventura y Guapi. Las autoridades le seguían la pista desde la época del cartel, pero debido a que siempre manejó un perfil de empresario legal fue muy difícil comprobar los nexos con los traficantes³³⁴.

En contraste con una cierta complacencia que mostró el Estado hacia el paramilitarismo, la respuesta ante la expansión insurgente y la movilización social de nuevo fue violenta. Aunque los gobiernos de Ernesto Samper (1994-1998) y Andrés Pastrana (1998-2002) mostraron posiciones más proclives al diálogo (la de Pastrana cambió tras la ruptura de los diálogos del Caguán), la gente siguió denunciando las violaciones impelidas por la militarización de los territorios: ocupación de bienes protegidos, bombardeos, asesinatos, ametrallamientos indiscriminados, robos de bienes y animales, daño de cultivos, ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y amenazas. Además, las confrontaciones armadas provocaron desplazamientos (masivos e individuales) y confinamientos y muchas veces la población civil quedó en medio del fuego cruzado. Estos atropellos se pronunciaron bajo la política de Seguridad Democrática del presidente Álvaro Uribe (2002-2010)³³⁵.

La estigmatización de la población civil como colaboradora o integrante de las guerrillas fue una piedra angular de la violencia ejercida por el Bloque Calima y la fuerza pública:

³³³ Entrevista 068-VI-00031. Hombre, víctima, sacerdote.

³³⁴ Semana, «De paso fino».

³³⁵ Entrevista 1036-PR-02576, entrevista mujer lideresa, Santander de Quilichao. Entrevista 070-PR-00893. Mujer, activista social, Valle del Cauca.

«La guerrilla pasaba y se iba, entonces nosotros ya éramos guerrilleros para la tropa, nos decían: “estos guerrilleros”; y esa ofensa tan verraca a toda hora: “que estos hijueputas”, que no sé qué [...], entonces comenzamos a cogerle pereza a la tropa y a cogerle cariño a esa gente»³³⁶.

En los retenes que instalaron en varios puntos —donde también se relataron casos de robos de alimentos y combustible—, los paramilitares y militares obligaban a los hombres jóvenes a desnudarse en busca de marcas en hombros, espalda y piernas, que eran tomadas como prueba de militancia guerrillera por la supuesta carga de equipos pesados o la marcha con botas. De igual manera, la estigmatización recaía sobre las organizaciones:

«Lo que se tendía a decir era que las organizaciones que estaban en la zona rural eran un brazo político de las FARC; independientemente de lo que hicieran o lo que no hicieran las organizaciones, siempre fueron tildadas como un brazo político de las FARC»³³⁷.

Las insignias e impactos de la guerra

La inclemente tormenta de violencia que durante este periodo experimentó el país en general, y el suroccidente en particular, fue el resultado de la disputa por el control territorial y la imposición de órdenes sociales por parte de la guerrilla y los paramilitares. Sus aparatos armados estaban en su punto máximo; las alianzas entre actores legales e ilegales para defender los respectivos intereses estaban maduras y parecían imbatibles en el contexto del posicionamiento de proyectos políticos autoritarios posteriores a la desilusión con los procesos de paz y la nueva constitución. Y el entorno económico nacional e internacional, proclive a las economías extractivas y el narcotráfico, aportó el combustible inagotable para la violencia. Fue el momento en el que todos los actores estaban convencidos de que podían ganar la guerra; en contraposición, la población civil inerme en medio del fuego cruzado, la democracia y la esperanza de paz fueron los inconcusos perdedores.

Según testimonios de víctimas en Valle y el norte del Cauca, las violencias tuvieron un marcado componente de género: «[los militares] a toda hora nos ofendían, nos trataban de perras, de putas, de que éramos las mozas de los guerrilleros, de que cada hija mía tenía un papá guerrillero diferente»³³⁸. Y también de racismo: «ellos [AUC] decían: es que pa' nosotros todo indio es guerrillero»³³⁹. Y en relación con la población

³³⁶ Entrevista 216-VI-00043. Víctima, centro del Valle del Cauca.

³³⁷ Entrevista 440-PR-00259. Actor armado, hombre, excombatiente FARC.

³³⁸ Entrevista 216-VI-00043. Víctima, centro del Valle del Cauca.

³³⁹ Entrevista 532-VI-00012. Víctima, mujer, campesina.

afrodescendiente «había acciones más crueles; por ejemplo, en San Miguel a varias personas las mataron y utilizaron sus cabezas como balón de fútbol. [...] Yo creo que por el hecho de ser negros las prácticas violentas eran más fuertes»³⁴⁰.

Al igual que a mediados de los setenta³⁴¹, la década de los noventa y los primeros años de los 2000 fue uno de los periodos con mayores índices de violencia antisindical, en un contexto influenciado por la flexibilización laboral y la privatización ligadas a la apertura al libre mercado³⁴². Además de estigmatización, atentados y asesinatos, las detenciones y despidos arbitrarios, allanamientos, robo de información, «chuzadas» telefónicas, montajes judiciales³⁴³ y amenazas³⁴⁴ se volvieron cotidianos para decenas de sindicalistas y defensores de derechos humanos. Pese a las denuncias ante la Fiscalía, la Policía y otras entidades, la

³⁴⁰ Entrevista 070-PR-00891. mujer, afrocolombiana, lideresa.

³⁴¹ «Asimismo, si bien desde mitad de los años setenta hubo auge de paros y huelgas obreras que lograron mejoras laborales y sociales en servicios públicos, transporte y educación, especialmente en Yumbo, varias acabaron siendo reprimidas violentamente por la Policía y el Ejército, como la huelga de los corteros de la caña de azúcar en Riopaila de 1976, e implicaron el inicio de despidos arbitrarios y “listas negras” de sindicalistas vetados por las empresas». Entrevista 112-VI-00014. Hombre, líder social.

³⁴² «En ese proceso de apertura económica, la nueva Constitución [...], también se da una arremetida por parte del Gobierno nacional, la aplicación de su neoliberalismo en una legislación que de una u otra forma salen los compañeros a enfrentar. La Ley 30 de la educación superior, la Ley 93 del sistema de salud que golpea a los trabajadores de la salud, la Ley General de Educación, la Ley de Servicios Públicos. Son las organizaciones sindicales las que salen al frente a oponerse a estas medidas. Es toda una andanada para acabar con los derechos fundamentales». Entrevista colectiva 679-CO-00365. Sindicalistas del SER.

³⁴³ Por ejemplo, entre 2003 y 2006 se desarrolló la operación Dragón, un plan para judicializar y asesinar a liderazgos sindicales de Emcali y defensores de derechos humanos. En esta operación participaron el DAS, militares activos de la Tercera Brigada, una empresa de seguridad privada y altos funcionarios de la Superintendencia de Servicios Públicos. Aunque el plan fue descubierto y denunciado desde 2003, solo 16 años después fueron condenados algunos militares. Así refirió el caso a la Comisión una víctima: «En el año 2003, una persona que trabaja con los paramilitares entregó una información de que iban a asesinar a tres compañeros y al resto, alrededor de doce dirigentes, el Ejército de Colombia le estaba haciendo un seguimiento; un coronel de la Tercera Brigada nos venía haciendo el seguimiento [...]. En mi caso particular, decían en ese informe, con mi foto y nombre personal, que yo era responsable de comunicaciones del ELN en el Valle del Cauca. Fuimos objeto de todo ese bloque de las chuzadas del DAS, porque ese fue el momento álgido y nosotros éramos un bloque fuerte de defensa de lo público en el Valle. A esa cosa la llamaban operación Dragón». Entrevista 582-VI-00063. Víctima, lideresa sindical.

³⁴⁴ Así lo contó una antigua lideresa sindical: «Después de que llego de hacer unas denuncias frente a todo lo que había pasado acá [Empresa de Servicio Público de Aseo de Cali (Emsirva)], empiezan las amenazas a mi vida, las llamadas amenazantes a mí, a mi familia, a los correos; tan es así que llegaron al punto de mandarme sufragios a mi casa, yo recibí sufragios vía correo, me llegó un sufragio a la casa donde simplemente me amenazaban de muerte. Fui sacada en un pasquín que fue colgado en la página de la Policía Nacional donde decía: “se buscan bandas sindicales con precio para sus cabezas”, “se buscan vivos o muertos”, en el formato que tiene la Policía Nacional para los delincuentes. Yo era la única mujer, me pusieron dizque alias la Reina Negra». Entrevista 236-VI-00005. Sujeto colectivo, Víctimas, Familiares, Testigos, afrocolombiano.

violencia y la estigmatización siguen impunes³⁴⁵. Sindicalizarse se convirtió en sinónimo de despido, ostracismo o muerte. Así relató su experiencia un líder sindical del Valle:

«A comienzos o mediados del año 99 la gerente de ese tiempo habló de privatizar la empresa, que era una empresa de orden municipal con un 100 % de capital público; entonces eso hizo que el tema sindical se tornara mucho más fuerte y, claro, con sus correspondientes retaliaciones [...]. Al interior de la empresa, para algunos directivos de la gerencia y de la junta directiva de ese entonces, yo era visto como un subversivo, como un miembro de la guerrilla [...]. Entonces inicia el proceso de privatización y los del sindicato empezamos a denunciar: “no estamos de acuerdo, están cometiendo una irregularidad, nos están mintiendo”, y nos amenazan las Autodefensas, ¡qué curioso! [...]. El momento de mayor amenaza y panfleteo a los líderes del movimiento sindical de Cali fue cuando hicimos una alianza con Sintraemcali, Sindesena, el Sintrahuv [...]. El encuentro agudizó el tema de las amenazas, porque en ese momento estaba Bellas Artes en crisis financiera a punto de cierre, el HUV [Hospital Universitario del Valle] en esa lucha por evitar la tercerización, la lucha eterna de los presupuestos de las universidades públicas [...]. La consigna nuestra era defender lo público»³⁴⁶.

Asimismo, la violencia recayó sobre el movimiento estudiantil. Además de la coerción contra los liderazgos universitarios, los campus fueron infiltrados y sometidos a vigilancia permanente. Un líder estudiantil de la Universidad del Valle relató a la Comisión:

«Golpea el hecho de que te están siguiendo, que te fotografían, que te leen los movimientos, uno siente eso y sabe eso; o sea, a la universidad llegaron a coger varios, algunos tomando fotos, y la misma vigilancia, sobre todo la privada, los protegían, si no los linchaban, pana, eso eran hordas de gente buscando acabar con el infiltrado [...]. Robaban muchas bicicletas, se desaparecían maletines, una cosa va amarrada con la otra. Esa vaina no sabría explicarla muy bien, yo creo que también como parte de crear un ambiente de desconfianza y tensión dentro de la universidad. Es como un pueblo, usted echa a rodar una bola y de ahí se va solo, la gente termina creyendo que todo el mundo es ladrón. Yo me acuerdo, se metieron y robaron diez pantallas de computador de la biblioteca, recién comprados, video beam. Después la cosa mermó, pero había mucha represión y crecimiento de la delincuencia al interior de la universidad»³⁴⁷.

De igual forma, otro líder estudiantil que terminó enrolado en la guerrilla contó que en la Universidad del Valle:

³⁴⁵ Así lo relató un integrante de un comité de derechos humanos del Valle a la Comisión: «El caso nuestro, de la seccional Valle del Cauca, nosotros llevamos recibiendo desde el año 2008 amenazas vía telefónica, mensajes de texto, panfletos, cartas intimidantes en nuestras sedes, seguimientos de personas a funcionarios o a los voluntarios del comité; pero está todo en investigación y está todo en la más absoluta impunidad». Entrevista 582-VI-00057. Víctima, defensor de derechos humanos, Valle del Cauca.

³⁴⁶ Entrevista 353-VI-00002. Víctima, líder sindical, hombre.

³⁴⁷ Entrevista 112-VI-00043. Hombre, líder estudiantil, Valle del Cauca.

«Había profesores que se señalaban de hacer inteligencia. Recuerdo vendedores ambulantes dentro de la Universidad que se señalaban de ser tiras³⁴⁸ [...]. En varios casos de detenciones de compañeros, la Policía les mostraba videos internos de la universidad, así que uno partía de que había cámaras instaladas [...] y había también un debate muy fuerte en torno a los expendedores de droga al interior de la Universidad, muchos decían que eran agentes o eran funcionales a la inteligencia del Estado»³⁴⁹.

Otro de los efectos más graves de la guerra entre el Estado, los paramilitares, las guerrillas y los narcos —y una evidencia clara de su recrudecimiento— fue el reclutamiento forzado y la utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. De acuerdo con datos de la Unidad de Víctimas y el CNMH, pese al subregistro, se estima que cerca del 80 % de las más de mil víctimas registradas fueron reclutadas entre 1999 y 2006. Los municipios más afectados en el norte del Cauca fueron Suárez, Jambaló, Corinto y Toribío, estos tres últimos con una presencia mayoritaria de comunidades indígenas. Los mayores responsables fueron las guerrillas (64,7%), seguidas por los grupos paramilitares (16,2%); en los casos donde se pudo identificar el responsable específico, las FARC-EP fueron el actor con mayor número de casos, seguido por el ELN y las AUC.

En algunos casos los grupos armados ejercieron coerción sobre los menores de edad o sus familias:

«La guerrilla a los 15 años me reclutó a mí forzosamente. En ese tiempo había un comandante que se llamaba “Arley” o “Piernas”³⁵⁰. Y pues yo fui a hablar con él [...] y le dije que, pues, no me azotara a mí y a mi familia, que nos dejara en paz. Me dijo que para dejarme en paz mi familia, pues que tenía que yo hacer parte de ellos [...]. Trabajé con ellos como miliciano, yo seguí en la región [...]. Luego viene el Ejército [...], me presenté a la 03 en Miranda [Tercera Brigada del Ejército] y me obligaron a volverme informante [...] para capturar a mandos de la guerrilla [...]. El mismo Ejército hicieron que la guerrilla se diera cuenta y empezaron ya a desplazar a mi mujer, a desplazar a mi mamá, a mis hermanos»³⁵¹.

En otros, los actores armados aprovecharon las condiciones de vulnerabilidad que vivían los niños, niñas y jóvenes, tanto por la desprotección del Estado como de sus padres, cuidadores o comunidades, para facilitar el reclutamiento y mostrarlo como algo voluntario. Los motivaban con promesas de remuneración, protección (frente a la violencia intrafamiliar u otros actores ilegales), poder y prestigio a través de las

³⁴⁸ Se les llama «tiras» a los policías encubiertos.

³⁴⁹ Entrevista 440-PR-00259. Actor armado, hombre, excombatiente FARC.

³⁵⁰ John Edison Guzmán, alias Arley o Piernas, era comandante de la cuadrilla Alonso Cortés de las FARC-EP y, según las fuerzas militares, integró el anillo de seguridad de alias Pablo Catatumbo. Murió en junio de 2009 en un combate contra el Ejército en límites entre Tolima y Valle del Cauca.

³⁵¹ Entrevista 582-VI-00030. Víctima, líder indígena, norte del Cauca, hombre.

armas, ascenso social y mejoramiento de condiciones, satisfacción de las tres comidas diarias o regalos simples³⁵².

Los testimonios expusieron varios mecanismos de resistencia de las comunidades indígenas y campesinas ante el reclutamiento. Uno de ellos fue encarar directamente los actores armados por parte de los mayores, autoridades locales, padres de familia o docentes. Por ejemplo, en Santo Domingo (Florida, Valle) accionaban pitos cuando algún actor armado intentaba reclutar. Muchas veces las presiones de ese tipo evitaron que se llevaran a los menores o lograron que fueran devueltos a sus hogares. En otros momentos se llevaron a cabo diálogos y negociaciones con comandantes de los actores armados para disuadirlos del reclutamiento o pedir la liberación de los menores. También se conocieron casos en los que las personas reclutadas lograron escapar o donde la intercesión de alguien con contactos dentro del grupo ilegal logró la liberación. El reclutamiento forzado desencadenó otros hechos victimizantes como el desplazamiento del núcleo familiar o el exilio.

El despojo y el desplazamiento dejaron profundas huellas tanto individuales como colectivas en los pobladores de la región. Partir hacia otros pueblos o a la ciudad fue una decisión obligada para salvaguardar la vida, la integridad y –cuando las circunstancias lo permitían– unos pocos enseres. Las familias se desintegraron por la pérdida de algunos de sus miembros o por la separación física. En familias con víctimas de desaparición forzada, en las rutinas cotidianas pervive el anhelo de su regreso: «yo todavía pienso: “¿será que está vivo y va a llegar?”. Y un tiempo yo me soñaba mucho con él, entonces todos los días servíamos el almuerzo y servíamos pa’ él, de ver si llegaba él»³⁵³. Algunos testimonios expresaron que el dolor, el desarraigo y la pérdida de las posesiones y los familiares fueron devastadores para las personas mayores, quienes terminaron muy enfermos o muriendo de «pena moral».

La democracia también perdió. Las asociaciones productivas, los sindicatos, las organizaciones campesinas, los consejos comunitarios, los cabildos indígenas y las juntas de acción comunal perdieron su dinámica de funcionamiento y, por ende, su incidencia³⁵⁴. El temor operó –y lo sigue haciendo– como un obstáculo para la participación social, política y comunitaria:

«Ya la gente no va a ningún tipo de reuniones, le da miedo hablar de política. ¡Y sí que les tiene temor a esos listados que hay que firmar de asistencia! Porque con esos listados, con esos mismos listados, fue que llegaron a matar la gente»³⁵⁵.

³⁵² Así lo relató la madre de una niña abordada por paramilitares: «Ella, cuando ya entró, llevaba Cheetos, llevaba unos yogures, y le digo yo: “¿Usted de dónde sacó eso?”. Me dice: “Ese señor me los dio que para que yo le dijera que si la guerrilla venía para acá”. Y yo le dije: “¿Y usted qué le dijo?”. “Le dije que, pues, como yo siempre los veo, entonces le dije que ellos pasan”». Entrevista 068-VI-00014. Mujer víctima, sur de Valle del Cauca.

³⁵³ Entrevista 046-VI-00043. Víctima, mujer, campesina.

³⁵⁴ Entrevista 440-PR-00940. Víctima, lideresa social, centro del Valle del Cauca, campesina.

³⁵⁵ Entrevista 112-VI-00017. Víctima, hombre, comerciante.

La violencia y el miedo también resquebrajaron las relaciones de confianza al interior de las comunidades, las organizaciones e incluso las familias:

«El conflicto nos dejó fue mucha desconfianza, la desconfianza entre nosotros mismos, de la misma familia; porque es que en esto uno ve de todo, ¿no? Uno ve que hay veces la misma familia lo traiciona a uno, entonces uno dice “no, yo qué voy a confiar en este primo”»³⁵⁶.

En la escucha de la Comisión se conocieron historias de líderes y lideresas que fueron víctimas de señalamientos, persecuciones o ataques por parte de los actores armados y, pese al contexto de temor generalizado, al no sentirse respaldados por la comunidad o la organización, se consideraron traicionados o abandonados.

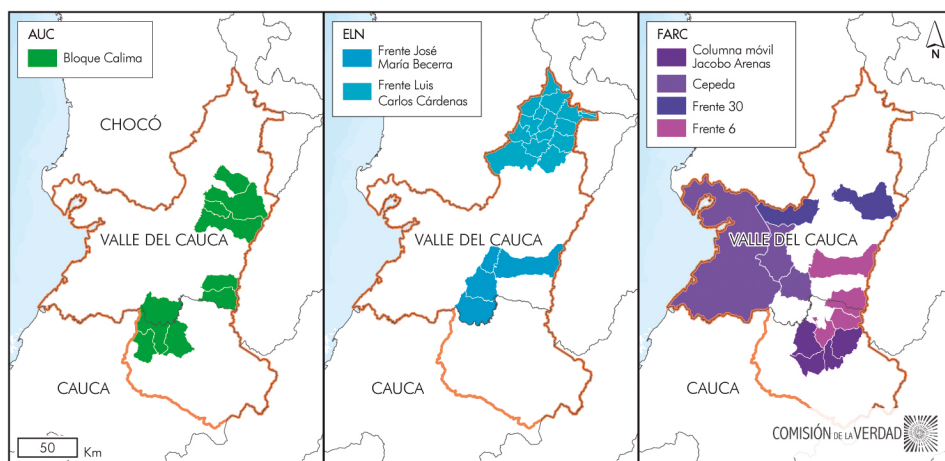
En el ámbito individual, los testimonios recogidos por la Comisión hicieron hincapié sobre los impactos en la salud física, especialmente los relacionados con el sistema nervioso y circulatorio (hipertensión, accidentes cerebrovasculares, infartos, arritmias y otros problemas cardíacos), dolores de cabeza y amnesia, y también en la salud mental: alteraciones en el sueño, llanto prolongado, depresión, ideas e intentos de suicidio, consumo excesivo de alcohol o drogas, pérdida de apetito y consecuente disminución de peso, dificultad para dormir, ansiedad, paranoia, temor a la oscuridad y a ciertos estímulos (como los sonidos fuertes o el ladrido de los perros). Las mujeres sentían mayores inseguridades ante la llegada de los actores armados; se escucharon casos de embarazadas que, al ser expuestas directa o indirectamente a situaciones de violencia, perdieron a sus hijos o hijas o estos nacieron con enfermedades o malformaciones.

Además, en los lugares de acogida las personas desplazadas enfrentaron un sinnúmero de dificultades económicas y sanitarias (físicas y psicológicas). Las víctimas, además, sufrieron estigmatización y exclusión agravada por su pertenencia étnica. Frecuentemente allí continuó la cadena de violencia, bien porque la persecución de los actores armados las alcanzó o porque surgieron nuevos hechos victimizantes, como desplazamientos intraurbanos. En el caso particular de las mujeres y niñas, sumado a la victimización por motivos raciales o económicos, se expusieron a otras violencias por su condición de género, como la prostitución y otras formas de explotación sexual³⁵⁷.

³⁵⁶ Entrevista 216-VI-00018. Víctima, agricultor, Pradera.

³⁵⁷ Entrevista 236-VI-00005. Sujeto colectivo, Víctimas, Familiares, Testigos, afrocolombiano.

Mapa 4. Presencia de actores armados en la región del Valle y norte del Cauca (1991-2004)



Fuente: DANE, 2021; CERAC, 2014; MOE, 2019.

Resistir y resistir

Pese a la crisis económica y el «desmadre» de la violencia, en la región se vivió un florecimiento de la organización y la resistencia. Con el trasfondo de las negociaciones de paz, la segunda mitad de los noventa se caracterizó por una intensa ola de movilización social en contra de la violencia y el modelo económico y la creación de nuevas organizaciones con diversos ámbitos de acción: derechos humanos, asesoría legal, resolución de conflictos y construcción de paz, desarrollo, medio ambiente, derechos de las mujeres y autonomía étnica, entre otros. En el Cauca se evidenció un marcado incremento de las movilizaciones de las organizaciones campesinas e indígenas, que aún hoy privilegian la vía Panamericana como escenario para reivindicar sus demandas en materia de tierras, reconocimiento político y jurídico y garantía de derechos en general.

En 1994 se creó la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), que recoge 22 cabildos indígenas y está articulada al CRIC. Lideradas por esas organizaciones, a partir de 1997 las comunidades indígenas del norte del Cauca dieron un nuevo aliento a las ocupaciones de predios para presionar su compra y posterior adjudicación a las comunidades indígenas y campesinas por parte de las entidades del Estado. Aunque para estos sectores se trataba de acciones legítimas de recuperación de tierras, generaron duros conflictos con los titulares y propietarios. Desde 1999, estas acciones decayeron debido a las medidas implementadas por la fuerza pública (como

la militarización de predios o la represión de movilizaciones y tomas), la reacción paramilitar, los pleitos legales y administrativos y la oposición de sectores políticos (locales, regionales y nacionales) y de la opinión pública, que –sobre todo en un contexto de revitalización de las posturas anticomunistas y contrainsurgentes– veían con malos ojos esas acciones. A partir de 2005, impulsadas por las mingas indígenas, estas acciones volvieron a tomar fuerza.

Como un proceso paralelo, en el año 2000 surgió la Guardia Indígena. Comenzó en los territorios de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), filial del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), pero paulatinamente se ha ido fortaleciendo en todos los pueblos indígenas de Colombia. La Guardia ha sido una forma de protección colectiva no violenta cuyo objetivo es la defensa de los derechos humanos, el territorio, la autonomía y la cultura propia frente a los fuertes impactos del conflicto armado y otras violencias en los territorios. Ha defendido el plan de vida y el pensamiento indígena y es un instrumento de resistencia civil que propende por la armonización territorial y la convivencia comunitaria. Actúa en caso de amenaza o riesgo en los territorios indígenas, pero no porta armas. Su bastón de mando simboliza el mandato de las comunidades y el ejercicio de derecho propio; está tallado en madera de árbol de chonta y tiene un juego de cintas de cuatro colores (verde: la naturaleza; rojo: la sangre de los antepasados; azul: el agua; y negro: la tierra) y un chumbe tejido por las mujeres mayores. También se usan otros símbolos como la cerbatana y las flechas, entre otros, con un significado acorde a la cosmovisión de cada pueblo. Su forma de gobierno se guía por las autoridades indígenas y deriva su mandato de las asambleas comunitarias. Cuenta con la participación voluntaria, pues la razón de su existencia también es garantizar la pervivencia de los pueblos a través de un camino intergeneracional de dignidad y derechos humanos. Posee más de 20.000 defensores y defensoras de la vida de los 115 pueblos indígenas de Colombia. La Guardia Indígena ha conseguido acciones humanitarias como la liberación de secuestrados, ha promovido la protección de la vida en enfrentamientos entre grupos armados, ha prevenido el reclutamiento de niños y niñas en el conflicto, ayuda en la búsqueda de personas desaparecidas y adelanta acciones protección y prevención frente a minas antipersonal³⁵⁸.

Por su parte, la movilización afro tuvo un primer impulso en 1989 con la organización Sinécio Mina³⁵⁹, que durante las discusiones de la Asamblea Constituyente se articuló con otras organizaciones del nivel nacional para la discusión del artículo transitorio 55 de la Constitución de 1991, que daría paso al reconocimiento de las

³⁵⁸ Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), «La Guardia Indígena, cuidadora del territorio y la vida».

³⁵⁹ Sinécio Mina fue un esclavizado negro que luchó en la Guerra de los Mil Días. Es uno de los referentes históricos del movimiento social nortecaucano.

comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales³⁶⁰. Uno de sus objetivos era la inclusión del norte del Cauca como territorio de comunidades negras, pero finalmente la Ley 70 reconoció solo el andén del Pacífico bajo esa condición y eso ha limitado jurídicamente la titulación colectiva en el norte del Cauca. Desde 1994 se crearon los primeros consejos comunitarios como una instancia de gobierno propio sobre los territorios afrodescendientes y en 2003 se consolidó la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc) donde se congregan 42 consejos de la zona plana y montañosa de la región.

Desde mediados de los noventa, especialmente en el corredor centro-norte del Valle, la movilización social se dinamizó bajo el liderazgo de organizaciones campesinas como la Asociación Campesina del Centro del Valle (Acaceva), Los Yarumos y Raíces Campesinas, que promovieron acciones como bloqueos de vías y cabildos abiertos para exigir garantías en materia de derechos humanos, acceso a la tierra, educación, salud, trabajo y servicios públicos. También se crearon nuevas organizaciones campesinas como la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca (Astracava). En ese contexto, las mujeres se sumaron a la lucha por la reforma agraria y se organizaron para defender su derecho a la titularidad de la tierra, por ejemplo, en el marco de organizaciones como la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca (ASOM).

El papel de las mujeres en esos procesos ha sido determinante. Grupos de mujeres indígenas, por ejemplo, hicieron recorridos en Toribío, Jambaló y Corinto para oponerse a la presencia de estaciones de Policía en zonas urbanas porque aumentaban el riesgo de la población civil durante las hostilidades. ASOM y el programa Mujer ACIN rompieron el silencio y denunciaron la violencia sexual ejercida sistemáticamente por todos los actores armados ante instancias nacionales e internacionales, como la Misión Internacional de Verificación a la Situación Humanitaria y de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia. Un informe entregado por ASOM a la Comisión expone algunas de esas experiencias de construcción de paz lideradas por mujeres:

Las Renacientes es un grupo de siete mujeres jóvenes de diferentes veredas del municipio de Buenos Aires, hijas de asociadas y fundadoras de ASOM, que conformaron un colectivo de jóvenes para promover el relevo generacional al interior de ASOM. Las Renacientes son el reflejo de la continuidad de la organización y del legado de resistencia de las mayores de la comunidad. El grupo inició en el 2017, al comenzar la segunda «Escuela de formación política de mujeres constructoras de paz a partir del conocimiento de sus derechos» en Santander de Quilichao,

³⁶⁰ Hurtado, *La construcción de un modelo de ciudadanía diferenciada: el empoderamiento político de la población afrocolombiana y el ejercicio de la movilización étnica*. Universidad del Cauca, «Memorias del Primer Coloquio Nacional de Estudios Afrocolombianos».

organizada por la Asociación. A partir de ese momento, se convocaron las mujeres más jóvenes de la organización alrededor de sus intereses bajo la premisa de continuar con el legado de las mayores y al mismo tiempo abordar nuevos temas de interés de la comunidad³⁶¹.

Desde finales de los noventa, las comunidades y organizaciones enfrentaron el temor a los actores armados –tanto legales como ilegales– y dieron muestras de resistencia civil. Al respecto, víctimas de Caldonó relataron varios casos en los que «frentearon» a las guerrillas:

«El 12 de noviembre de 2001, la guerrilla se iba a meter a las cuatro de la tarde, un día lunes. Y me dio por organizar lo que hoy se llama la resistencia civil. O sea, yo creo que estaba loco; yo y la gente que me siguió. Le dije a la gente: “organicémonos y vamos a salir con banderas blancas y con ropa blanca, con lo que tengamos blanco y los frentamos; ya dañaron las escuelas, la estación, ya están acabando con el pueblo, vamos a decirles que cuál es la pendejada, nosotros no somos ricos, somos pobres todos”. Y nos fuimos a frentarlos [...]. Las mujeres no llegaron solas [...]. Y comenzamos a dar la vuelta con las banderas y a gritar consignas, que pa’ gritar consignas sí uno es bueno. Me acuerdo tanto: “Caldono unido jamás será vencido”. Y gritábamos [...] “los paramilitares y la guerrilla la misma mierda son, matan, destruyen los pueblos y después dicen que no son”»³⁶².

Frente al paramilitarismo la situación fue más compleja. Mecanismos como el silencio, el enclaustramiento³⁶³ o «pasar desapercibido» fueron simultáneamente un efecto del dominio y el miedo y estrategias para resistir y permanecer en el territorio. La gente desplegó pequeños actos de resistencia cotidiana, como dejar de cultivar alimentos y de criar animales con el fin de no sostener a las estructuras armadas en sus territorios. Se refugiaron en los matorrales y en los cafetales durante los combates y las incursiones a los cascos urbanos. En el ámbito individual, fue usual que las personas se aferraran a sus creencias religiosas para alivianar el dolor y continuar con su vida cotidiana. Para las personas mayores, el círculo familiar (en especial nietos y nietas) fue un refugio importante. En el caso de las mujeres, la compañía de otras mujeres (amigas y familiares) también fue una fuente de fortaleza.

Ante el drama del secuestro, en Cali y otros municipios se celebraron movilizaciones exigiendo la libertad de todas las personas cautivas y el cese inmediato de esta

³⁶¹ Informe 110-CI-00217, Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca (ASOM) y Women’s Link Worldwide, «Voces valientes», 93.

³⁶² Entrevista 056-VI-00045. Hombre, líder comunitario, víctima.

³⁶³ «Porque esa es como la norma, ¿no? Encerrémonos y apaguemos las luces. El que prenda luces es porque está pendiente de qué está pasando, entonces apagamos las luces. Esa era la reacción de la gente acá. Y nadie sabe nada, nadie escuchaba nada, así el vecino preguntara, nada, nadie sabe nada». Entrevista 582-VI-00002. Víctima, campesina, sur del Valle del Cauca.

práctica. También se crearon organizaciones que sirvieron como apoyo emocional a las familias e impulsaron acciones en contra del secuestro, como la Corporación de Víctimas de Secuestro La María y la creación de la «zona de distensión» en la plaza de toros de Cali, que congregaba inicialmente a familiares de las víctimas de La María y luego se amplió a los del secuestro del kilómetro 18 con el apoyo de los medios de comunicación y la Iglesia católica. En febrero de 2008, millones de personas marcharon en Cali y muchos otros lugares del país exigiendo el cese del secuestro y otras acciones violentas de las FARC-EP y la liberación sin condiciones de todos los secuestrados.

Otra importante iniciativa es Vallenpaz, una «corporación privada sin ánimo de lucro que fue creada en el año 2000 con el objetivo de contribuir a la construcción de paz en Colombia por medio de la generación de oportunidades de desarrollo en comunidades campesinas del suroccidente afectadas por el conflicto armado»³⁶⁴. Tras el impacto del secuestro de La María, Vallenpaz se planteó el propósito de

Promover el desarrollo integral en el sur occidente colombiano en comunidades rurales afectadas por la violencia y en condiciones críticas de pobreza, cultivos ilícitos, presencia precaria del Estado colombiano y grupos al margen de la ley que limitan la consolidación de capital social, generan desplazamiento y consecuentemente la disminución de la actividad agrícola³⁶⁵.

La entidad reconoce que el Valle es un departamento afectado por el narcotráfico, grupos guerrilleros, paramilitares y otras organizaciones armadas al margen de la ley y que se caracteriza por una histórica concentración de la tierra, lo que ha dado pie a diferentes procesos de lucha con una importante movilización indígena y afrocolombiana. De ahí la pretensión de aglutinar sectores diversos (personas naturales, ONG, empresas privadas, iglesias, universidades, asociaciones y cooperativas campesinas, organizaciones de base y entidades gubernamentales) para atacar de raíz los problemas del campo, buscando evitar que los campesinos se vinculen con los grupos armados y que las acciones de estos expulsen a los campesinos hacia la ciudad³⁶⁶. Sobre la experiencia de Vallenpaz, un empresario le contó a la Comisión:

«En enero del 2000 crean a Vallenpaz con esa misión de apoyar el desarrollo rural en las periferias de Cali, entendidas como el departamento del Valle, Cauca y Nariño, en la periferia del Valle, para darle oportunidades a las familias campesinas de la región para que no se desplacen a Cali; es una forma de mitigar el desplazamiento o la migración. La logística de hacer eso, de consolidar ese sistema comercial, no

³⁶⁴ Vallenpaz, «Historia - ¿Quiénes somos?»

³⁶⁵ *Ibid.*

³⁶⁶ *Ibid.*

es fácil; entonces yo empecé a formular un proyecto para hacer un centro logístico que fuera una empresa con ánimo de lucro, donde Vallenpaz tuviera participación y donde los campesinos tuvieran participación y eso sería, digamos, de lo que Vallenpaz viviría y tendría una autonomía, porque es una empresa con ánimo de lucro donde Vallenpaz tiene acciones, pero tiene una gerencia, toda una estructura aparte y la utilidad de esa empresa le hacen donaciones a Vallenpaz. Ese proyecto conseguí financiarlo con recursos de la Unión Europea, nos conseguimos la plata para eso y para todo el soporte productivo de los campesinos del norte del Cauca, que eran los que más producían para los mercados de Cali. De lo que adolecí yo para sacar ese proyecto adelante fue de apoyo empresarial»³⁶⁷.

³⁶⁷ Entrevista 068-VI-00040. Entrevista a empresarios Valle (experiencia Vallenpaz).



Reconfiguración de la guerra (2004–2016)

Crisis agraria campesina y étnica: cuarto acto

Durante los primeros lustros del siglo XXI continuó la expansión de los cultivos de caña en el Valle y el norte del Cauca: 184.413 hectáreas en 2003, 201.098 en 2009 y 199.614 en 2014³⁶⁸. El descenso en el área sembrada se explica por el incremento en el rendimiento y la producción debido, principalmente, a la mecanización del cultivo y la recolección. Las reformas tecnológicas y laborales, que derivaron en el desmejoramiento de las condiciones de los trabajadores agroindustriales y en despidos masivos³⁶⁹, originaron agudos conflictos entre estos y los propietarios de los ingenios. Como resultado, en 2005 y 2008 cerca de 14.000 corteros de caña suspendieron labores y se movilizaron pidiendo mejoras laborales y sociales³⁷⁰. Sobre esos paros, un líder sindical le comentó a la Comisión:

«Todos los corteros de caña de los doce ingenios que hay en la franja del río Cauca fueron tercerizados por cooperativas de trabajo asociado, luchamos porque las cooperativas no permitían la lógica de responsabilidades frente a los accidentes de trabajo, frente a la entrega de las dotaciones, el vestuario, frente a las condiciones de salud y seguridad en el trabajo. Empezamos a abrir caminos enviando documentos a los ingenios, pero siempre decían que la empresa contratante no eran ellos, pero los ingenios colocaban

³⁶⁸ Correa et al., «Transformaciones territoriales producidas por la agroindustria de la caña de azúcar en las comunidades étnicas de López Adentro y El Tiple, Colombia», 847-60.

³⁶⁹ «Las preocupaciones sobre la situación laboral de los corteros de caña no son en realidad un asunto nuevo. En junio de 2008, la Procuraduría General de la Nación anunció que investigaría su penosa situación laboral y tomaría cartas en el asunto. Tres años atrás, en 2005, por los mismos motivos se llegó a un primer paro que no mejoró en nada la situación. Poco ha cambiado desde entonces y el modelo de contratación, base de la disputa de ahora, sigue siendo el mismo. Aproximadamente 100 cooperativas de trabajo asociado contratan a más de 9.000 personas y liberan a los ingenios azucareros de las responsabilidades que bajo contratación directa deberían asumir. No sin razón exigen los corteros, a través de su sindicato nacional (Sinalcorteros), contratación directa, estabilidad laboral y negociaciones colectivas. A lo cual el Ministerio de Protección Social, en un tono más bien cínico, ha respondido que, dado que los corteros, bajo este modelo de contratación, son empresarios y trabajadores al mismo tiempo, “los asociados de una cooperativa no pueden ejercer el derecho de negociación colectiva, ni votar la huelga”. El Espectador, «El paro de los corteros de caña».

³⁷⁰ El pliego de los corteros incluía reivindicaciones como la contratación directa, estabilidad laboral y sustitución patronal para los trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado; suspensión de la importación y legalización de las máquinas de corte; salarios justos de acuerdo a las tablas de precios de corte concertado; peso justo y real de la caña cortada en jornadas de trabajo; mecanismo proporcional entre trabajadores e ingenios para la supervisión de las básculas; vestuario y dotación adecuada para los trabajadores; garantías sociales (vivienda, educación y salud) para los trabajadores y sus familias; debida atención a los trabajadores incapacitados y discapacitados; retribución económica en función de la inversión y el desarrollo social de las comunidades de los municipios donde los tienen influencia directa; no represalias y garantías sindicales para los trabajadores. CNMH, *Patrones y campesinos*.

el horario, la disponibilidad, la orden de dónde se tiene que trabajar y ellos les decían a las cooperativas a quiénes tenían que contratar. Entonces bajo eso vislumbramos, que ese fue el aporte de Asonal, el contrato realidad y nos fuimos a un cese de actividades. Para ese momento la ley decía que personal tercerizado no podía sindicalizarse; nosotros logramos revertir, con acciones de hecho, esa condición, primero fue en el 2005 y después vino otro paro más general en el 2008 [...]. Ahora ya los compañeros pues tienen el reconocimiento, eso generó grandes controversias al interior del modelo azucarero, del sector empresarial»³⁷¹.

El paro inició el 15 de septiembre de 2008 y duró poco más de dos meses. Los trabajadores de los ingenios y sus familias contaron con el apoyo de organizaciones como la CUT y el movimiento indígena del Cauca. El conflicto laboral llevó al bloqueo de las plantas de Manuelita, Providencia, Central Tumaco, Mayagüez, Pichichí, Castilla y María Luisa, entre otros ingenios. La agroindustria azucarera, que dejó de ganar cerca de 27.000 millones de pesos diarios entre etanol y azúcar, perdió más de un billón de pesos. El impacto económico y social se expandió a otros sectores, pues las actividades comerciales, de servicios y de transporte en el sur del Valle y el norte del Cauca se vieron afectadas³⁷².

Contando con la intermediación de la Organización Interamericana del Trabajo y la Gobernación del Valle, trabajadores e ingenios se sentaron a negociar. Entre el 1 y el 15 de noviembre de 2008 se fueron levantando los bloqueos. Aunque cada ingenio negoció el pliego de peticiones de manera particular, los acuerdos en general estuvieron orientados a reconocer un pago mayor por cada tonelada de caña cortada, la implementación del programa de vivienda y educación para las familias de los corteros de caña y mayores garantías de contratación y permanencia, aunque el sistema de tercerización a través de las cooperativas de trabajo asociado continuó siendo la forma de vinculación laboral³⁷³.

Aunque el Gobierno y los empresarios moderaron sus posturas, al principio la estrategia se enfocó en la coerción antes que en la solución de la situación laboral de los corteros. El ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, dijo que tras la huelga se escondían «fuerzas oscuras» y que la Policía y el Ejército estaban informados de la situación y «abiertos a cualquier mecanismo que permita volver a la normalidad». Términos parecidos utilizó el presidente de Asocaña, Luis Fernando Londoño, quien veía «fuerzas extrañas» en el movimiento huelguista. Los industriales de la caña también argumentaban que la huelga era promovida por una minoría de trabajadores pertenecientes a las cooperativas, quienes estaban impidiendo que la mayoría pudiera ingresar a los ingenios

³⁷¹ Entrevista 582-VI-00062. Hombre, líder sindical, Valle del Cauca.

³⁷² Montoya, Gloria, «El paro de corteros de caña en el Valle del Cauca-Colombia: una acción colectiva de cara al modelo económico».

³⁷³ *Ibid.*

a continuar con la producción³⁷⁴. Algunos integrantes del gremio productor acusaron a los protestantes de estar siendo manipulados por la izquierda:

«Hasta el momento eso [corte de caña] nunca se había considerado una labor inhumana, como se dice ahora. Porque con ese dinero hoy en día yo creo que no hay ningún hijo de cortero que sea cortero y el ingreso que recibía esa gente era tan importante que con eso tenían sus casas y educaban a sus hijos, y hoy muchos de los hijos de corteros son profesionales. Y valga la verdad, la izquierda de Colombia, la mal llamada izquierda, fueron los fomentadores de ese paro, que fue totalmente en contra del empleo en el sector azucarero. [...] Traer la cosecha mecanizada, eso es un hecho histórico en Colombia que yo creo que hay que tenerlo en cuenta porque eso incrementó el odio hacia el sector azucarero. [...] Una labor que era importante, que era digna en esa época, se volvió un tema indigno, hoy consideran que ser cortero de caña es una labor de esclavos, yo no sé hasta dónde eso sea razonable o no»³⁷⁵.

Durante este periodo se consolidó en la región un modelo económico soportado en la agroindustria, el comercio y los servicios, donde el clúster de la agroindustria azucarera demostró un proceso de innovación que ha permitido consolidar un ordenamiento territorial determinado por las áreas con cultivo y el entramado urbano regional que soporta la prestación de servicios y la provisión de mano de obra a la agroindustria azucarera y, más recientemente, etanol y agrocombustibles. Sin embargo, en la segunda década del siglo XXI se alcanzó el límite de expansión del cultivo de la caña en el valle geográfico del río Cauca. Ante el agotamiento de la tierra apta para el cultivo o la indisponibilidad de esta (por ejemplo, debido a que está dedicada a otras actividades productivas), los empresarios del Valle han intentado extender las plantaciones en otras regiones, como la altillanura en Meta y Vichada³⁷⁶.

Durante las primeras décadas del 2000 la producción cafetera siguió descendiendo. Según datos del Banco de la República, en 2011 en el Valle había 68.038 hectáreas que tenían un rendimiento de 0,18 toneladas, lo que evidenciaba que desde 1990 el departamento perdió el 58,6 % del área sembrada, al tiempo que disminuyó la producción y el rendimiento por hectárea³⁷⁷. Los caficultores se sumaron al paro agrario nacional de 2013, pues, pese a las iniciativas gremiales por recomponer la economía³⁷⁸, la situación era insostenible: cerca de 15.000 personas se movilizaron para reclamar, al

³⁷⁴ El Espectador, «El paro de los corteros de caña».

³⁷⁵ Entrevista 068-CO-00871. Integrantes del gremio agroindustria caña.

³⁷⁶ CNMH, *Patrones y campesinos*.

³⁷⁷ *Ibíd.*

³⁷⁸ Intentando conjurar la crisis, atraer inversión, impulsar el desarrollo sostenible y la conservación de la biodiversidad y fomentar la identidad cultural cafetera, el gremio cafetero del Valle impulsó la iniciativa de declarar algunos municipios (Trujillo, Sevilla, Ulloa, Caicedonia, Riofrío, Sevilla, El Águila, El Cairo, Ansermanuevo y Argelia) como parte constitutiva del patrimonio cultural de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). A la par, implementaron proyectos para certificar a los productores, diversificar la producción agrícola y renovar y tecnificar los

igual que en los años noventa y principios de los 2000, precios rentables y estables para la carga de café, mayor protección a los medianos y pequeños productores, planes de desarrollo, asistencia técnica y mejoras en la infraestructura, al tiempo que manifestaron su oposición a las importaciones en el marco de los tratados de libre comercio³⁷⁹.

En el marco de esa continua crisis cafetera, se profundizaron los procesos de tránsito hacia la ganadería extensiva, la silvicultura y la producción hortofrutícola. Estos últimos, sin embargo, tampoco lograron despegar: para 2012, el área sembrada (donde destacaban los cítricos, chontaduro y banano) no superaba las 30.000 hectáreas³⁸⁰. Mientras tanto, combinando las diversas modalidades de adquisición de tierras, en las zonas de media montaña continuó la expansión de los cultivos de pino y eucalipto. Según datos de Smurfit, en 2014 el proyecto forestal poseía 69.111 hectáreas, de las cuales 44.387 correspondían a pino y eucalipto y 21.597 eran bosques naturales. Esta área se extendía por 36 municipios en seis departamentos (Valle, Cauca, Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío)³⁸¹.

Este contexto de crisis agrícola, aunado con los intereses de los actores ilegales en el territorio, facilitó el repunte de los cultivos de coca en el suroccidente desde 2005. A la par con los aumentos del área cultivada en el Valle, en el Cauca los cultivos alcanzaron 4.168 hectáreas en el 2007, lo que representó un aumento del 98 % frente al año anterior. Entre 2008 y 2011 el cultivo de coca aumentó y se estabilizó en un promedio de 5.800 hectáreas anuales, aunque en 2009 hubo un pico (6.144 hectáreas) que posicionó al departamento en el tercer lugar de mayor área sembrada en el país, detrás de Nariño y Guaviare. Entre 2012 y 2013, en el departamento se evidenció un descenso a 3.326 hectáreas (una reducción del 46 % respecto a 2009), pero en 2014 nuevamente llegaron a contabilizarse 6.389 hectáreas cultivadas, un aumento del 103 % respecto a 2001. En 2013 el Cauca ocupó el quinto lugar de afectación departamental por cultivos de coca, superado por Nariño, Putumayo, Norte de Santander y Caquetá³⁸².

La oscilación en los cultivos de coca en el Cauca se explica en parte por la dinámica de la minería. Como resultado de los buenos precios internacionales del oro, desde los primeros años del siglo XXI se intensificó la explotación minera en el Pacífico y el norte del Cauca, específicamente en Suarez, Buenos Aires y Santander de Quilichao. En estos territorios las comunidades afro explotaban el metal en su mayoría de manera artesanal, bajo un criterio de complementariedad económica: mezclar pequeña ganadería

cultivos. Para eso, en 2012 el Comité Departamental de Cafeteros invirtió 42.116 millones de pesos. Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), Machado, y Rincón.

³⁷⁹ *Ibíd.*

³⁸⁰ *Ibíd.*

³⁸¹ *Ibíd.*

³⁸² Unodc, «Atlas de la caracterización regional de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el departamento del Valle del Cauca».

y agricultura con labores de minería tradicional, tanto en algunos ríos como en los socavones³⁸³. Esta economía fue estable hasta comienzos de la década del 2000, cuando irrumpieron el paramilitarismo y las pretensiones de minería a gran escala, como lo relató a la Comisión una lideresa afrodescendiente del norte del Cauca:

«En el tema minero, esto fue apoyado más que todo por la vía paramilitar; había aparentemente un nexo con esta estructura del paramilitarismo y la minería ilegal. De hecho, una de las cosas que uno podía ver en el territorio es que, justamente donde hubo fuerte presencia de grupos paramilitares, fue donde hoy se está desarrollando esa minería ilegal con retroexcavadora, donde hay grupos que protegen esa minería incluso con armas, que genera mucho riesgo para nuestro territorio»³⁸⁴.

Las guerrillas y las mafias locales también se vieron atraídas por la bonanza aurífera. Debido a la presión de las autoridades antinarcóticos, las pugnas entre competidores en el tráfico de drogas y la rentabilidad del oro, todos los grupos armados ilegales revaluaron la balanza costo-beneficio-riesgo y vieron en la economía extractiva minera una muy buena oportunidad³⁸⁵. De ahí la violencia contra la población civil y los liderazgos locales que se oponen al desarrollo de una minería ilegal o a gran escala que consideran excluyente y peligrosa para sus tradiciones, autonomía y territorio, como se evidenció en el caso del corregimiento de La Toma (Suárez, Cauca)³⁸⁶. En 2010, el Consejo Comunitario dejó un importante precedente para los procesos organizativos afro del norte del Cauca al ganar la batalla jurídica contra Héctor Jesús Sarria, quien pretendía realizar una explotación minera en 99 hectáreas de La Toma. La Corte Constitucional, en la sentencia T-1045A, suspendió la licencia de explotación y ratificó el derecho a la consulta previa y al debido proceso de esta comunidad³⁸⁷.

Por su parte, tras un aumento entre 2001 y 2002, los cultivos de amapola mostraron una tendencia a la baja debido a las políticas de fumigación y erradicación voluntaria estimuladas por el Gobierno. Aun así, en 2014 el Cauca seguía siendo el segundo productor (detrás de Nariño) y concentraba el 25 % de las 22.515 hectáreas cultivadas en todo el país entre 2001-2014. Históricamente se ha reportado presencia de cultivos en 20 municipios, pero cerca del 65 % se concentraba en Almaguer, Bolívar, La Vega, Sotará y San Sebastián³⁸⁸.

³⁸³ Informe 1180-CI-01017. Aconc, «Memoria del conflicto y resistencia del pueblo negro y afrodescendiente del norte del Cauca».

³⁸⁴ Entrevista 1036-PR-02136. Lideresa afrodescendiente, norte del Cauca.

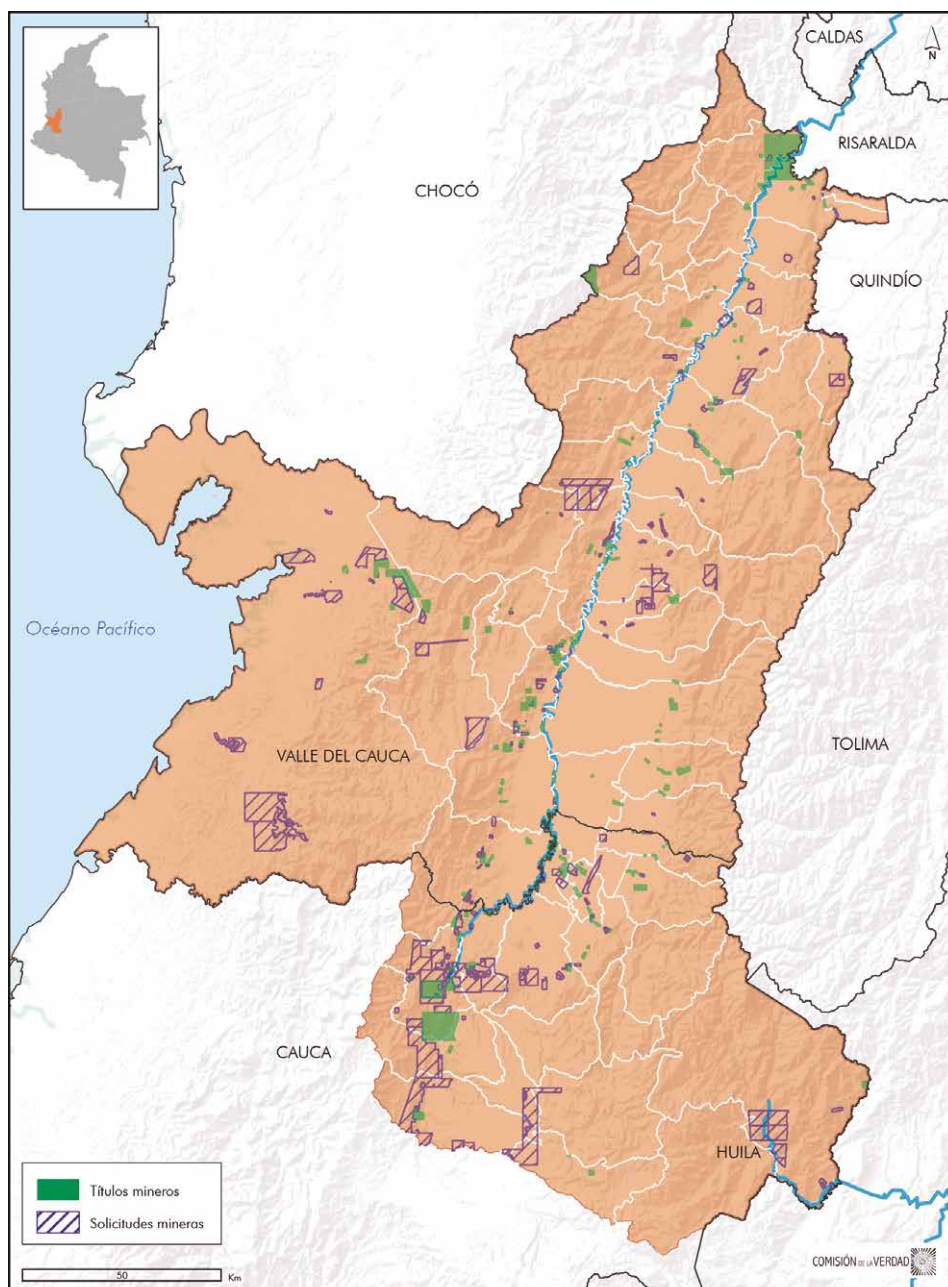
³⁸⁵ El interés sobre la explotación minera explica en parte el descenso del área sembrada con coca en Cauca entre 2012 y 2013, cuando se registraron 3.326 hectáreas (una reducción del 46 % respecto a 2009). Unodc, «Atlas de la caracterización regional de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el departamento del Cauca».

³⁸⁶ *Ibíd.*

³⁸⁷ «Sentencia T-1045A/10», 10.

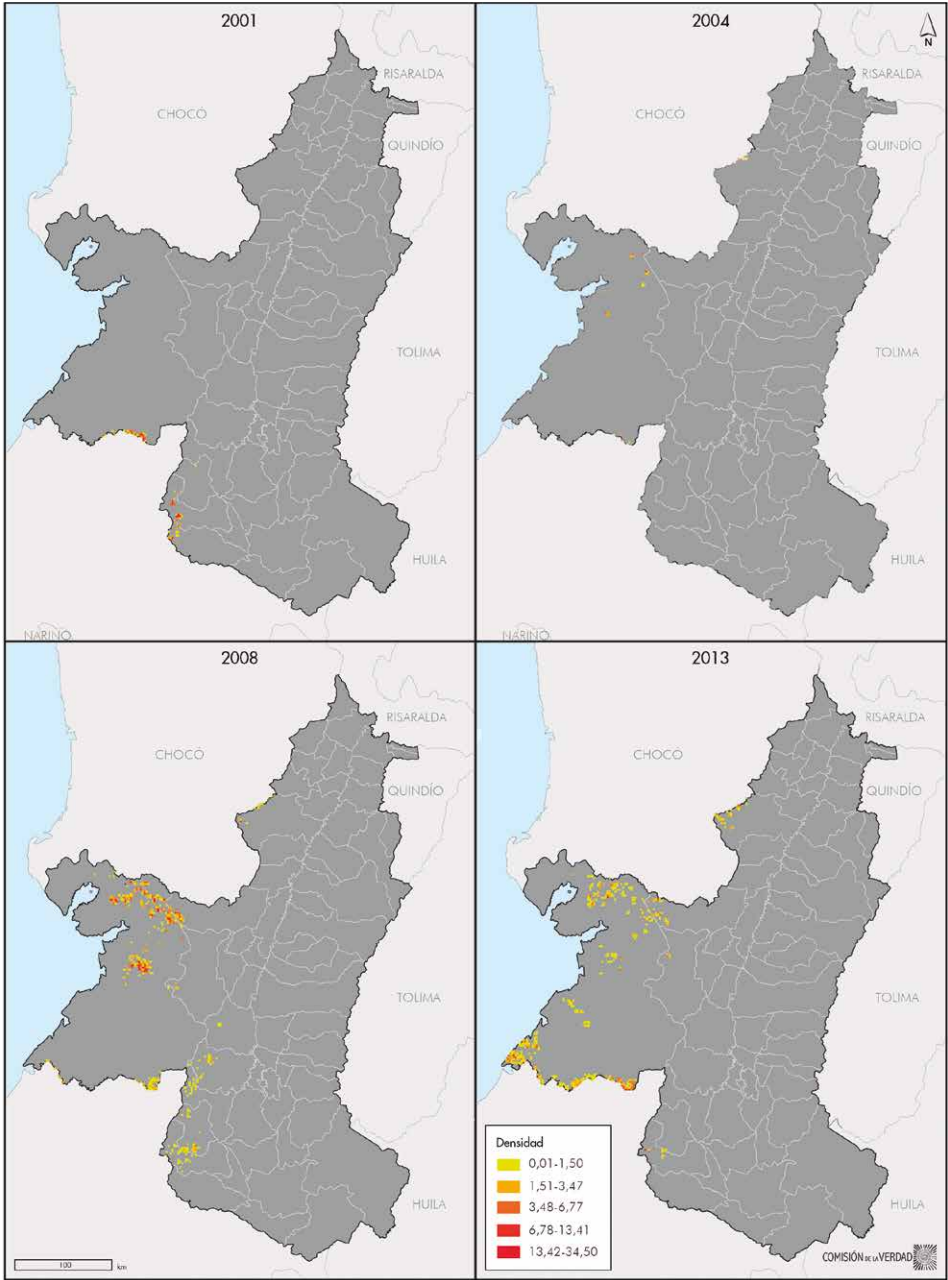
³⁸⁸ Unodc, «Atlas de la caracterización regional de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el departamento del Valle del Cauca».

Mapa 5. Títulos y solicitudes mineras en la región del Valle y norte del Cauca (2004-2016)



Fuente: DANE, 2021; ANM, 2022.

Mapa 6. Densidad de cultivos de coca en la región del Valle y norte del Cauca (2001-2013)



Fuente: DANE, 2021; SIMCI, ODC, 2020.

Aunque no se cuenta con estadísticas fiables, el otro cultivo de uso ilícito clave en la región es la marihuana. La planta llegó a la región desde mediados de los cincuenta y fue crucial en el surgimiento y fortalecimiento de los carteles de Cali y del norte del Valle. Luego, en los ochenta, tanto los carteles como la guerrilla y los paramilitares privilegiaron el cultivo de coca para la producción y comercialización de cocaína. Aproximadamente desde 2010 se observó un resurgimiento de la marihuana y el Cauca, sobre todo en los municipios del norte, se convirtió en uno de los principales epicentros del cultivo, tanto al aire libre como en invernaderos. Según las autoridades, Caloto, Corinto y Toribío eran los municipios con mayor presencia del cultivo de marihuana y de allí salía aproximadamente la mitad de la marihuana que se comercializaba en todo el país³⁸⁹. Las FARC-EP controlaron el negocio de la marihuana hasta su desmovilización en 2016.

Paras y narcos: nuevos grupos, viejas violencias

Pese a los recelos y críticas que despertó el proceso de desarme, desmovilización y reinserción de las AUC, la gente en el Valle y el Cauca confiaba en tener un descanso en el derramamiento de lágrimas y sangre. Lastimosamente, la desaparición del Bloque Calima dio paso a la lucha entre las guerrillas, los grupos posdesmovilización, las bandas criminales y ejércitos mafiosos como el Clan del Golfo, La Empresa, Los Rastrojos, Los Machos y las denominadas Águilas Negras por el control de territorios, el narcotráfico y otras economías ilegales. En ese contexto, a principios del siglo XXI hubo un repunte de la violencia homicida, las amenazas, las extorsiones, la desaparición forzada, el reclutamiento³⁹⁰ y el desplazamiento principalmente en las zonas rurales y los núcleos urbanos del centro y el norte del Valle.

Una de las principales fuentes de violencia en la región durante el periodo fueron las guerras de Los Rastrojos, primero contra Los Machos y luego contra otros rivales surgidos en el seno del Cartel del Norte del Valle. Una víctima le contó a la

³⁸⁹ *Ibíd.*

³⁹⁰ La Defensoría del Pueblo denunció que en Buenaventura, durante el 2009, las FARC-EP intentaron recomponer su estructura reclutando jóvenes y contratando delincuentes comunes, desempleados y menores de edad para cometer los actos violentos. En 2011 el programa Mujer ACIN también denunció públicamente la situación de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en el norte del Cauca como informantes y guías, entre otros. 263-CI-00218, Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y Tejido Mujer Çxhab Wala Kiwe.

Comisión la experiencia del municipio de Zarzal, uno de los tantos lugares donde la gente quedó en la mitad de las atroces disputas entre narcos:

«Dos bandos en ese tiempo había acá, que eran Los Rastrojos y Los Machos; Zarzal era territorio de Los Machos de don Diego Montoya y Roldanillo era de Los Rastrojos, entonces se vivía una situación muy tensa en todo momento. La gente vivía atemorizada porque cada rato habían semanas de cuatro muertos, en esos tiempos no rebajaba el año de 70 asesinatos, entonces la población en todo momento vivía sufriendo eso. Yo creo que aquí en Zarzal no hay una familia que no tenga un asesinado, porque ese conflicto generó por ahí unas 400 muertes. Como del 2002 más o menos, por ahí hasta 2010, en la época que cogieron a don Diego Montoya, empezó a suavizarse eso. [...] Ellos tenían una modalidad de asesinato, tenían una parte que le llaman Cumba, es el río Paila, es un bañadero, pero más para adentro. [...] Y ellos tenían por allá cocodrilos y llevaban a la gente y se los tiraban pa' que comieran, llevaban la gente a torturarla y a echársela a esos cocodrilos; también tenían fosas comunes donde los enterraban. [...] Las autoridades no podían hacer nada aquí, hermano, el que se pusiera a averiguar o a proceder como policía lo mataban, aquí el policía que fuera pendejo se hacía matar, aquí el policía era un espectador más»³⁹¹.

Entre 2002 y 2007 la guerra entre los ejércitos de don Diego y Jabón fue relativamente equilibrada. Sin embargo, tras la captura del primero en septiembre de 2007, Los Machos se quedaron sin recursos financieros y sufrieron una desbandada en sus filas, situación que fue aprovechada por Los Rastrojos para apropiarse de sus territorios y negocios ilegales en el Valle, el cañón de las Garrapatas y la zona del San Juan en Chocó³⁹². En pocos meses el grupo creció, pero Varela, que había huido a Venezuela desde 2004 para evadir la presión de las autoridades y de sus enemigos, comenzó a perder el control de sus subalternos. En febrero de 2008, los hermanos Comba (Luis, Javier y Juan Calle Serna) y Diego Pérez, alias Diego Rastrojo, lo traicionaron y lo mataron en el país vecino.

Tras la muerte de Varela, Los Rastrojos crecieron hasta convertirse en un jugador poderoso en los negocios del narcotráfico, la extorsión y el secuestro. Partiendo de su tradicional centro de operaciones en el Valle y la costa Pacífica, comenzaron a expandirse, primero hacia Nariño, Cauca y el Eje cafetero y luego hacia el norte y el oriente del país. Otra ficha clave del grupo fue Daniel «El Loco» Barrera, quien junto a los Comba y Diego Rastrojo fue parte de la cúpula original de Los Rastrojos. El Loco mantuvo sus operaciones en Meta y Guaviare y estuvo a cargo del tráfico internacional, mientras que Diego Rastrojo comandó las fuerzas rurales y los hermanos Comba manejaron las redes de sicarios en las áreas urbanas. La rápida expansión del grupo fue facilitada por sus alianzas con el ELN y las FARC-EP en torno al narcotráfico. En 2010, Los Rastrojos eran el grupo narcotraficante más fuerte y operaba por lo

³⁹¹ Entrevista 582-VI-00052. Víctima, norte del Valle del Cauca.

³⁹² El Espectador, «Los Rastrojos' siguen en guerra».

menos en un tercio de los departamentos de Colombia e incluso lograron extender sus actividades criminales a Venezuela y Ecuador³⁹³.

Debido a la naturaleza de su distribución geográfica, Los Rastrojos funcionaron de una manera descentralizada e inestable, altamente dependiente de los mandos medios y bajos. El secreto de su éxito criminal, sin embargo, fue que no trataron de controlar cada parte de la cadena de distribución de la droga, sino que buscaron alianzas estratégicas con otros grupos ilegales, incluyendo las guerrillas, en las fases de siembra, fabricación y transporte interno y ellos se concentraron en controlar los puntos de embarque, especialmente en la frontera con Venezuela y el océano Pacífico; esos puntos les dieron el control sobre la droga que salía y los insumos químicos que entraban. Además de la cocaína, la organización incursionó en el tráfico de efedrina, un componente clave para la fabricación de éxtasis, aprovechando que no tiene control legal en el territorio nacional³⁹⁴. Para facilitar sus operaciones criminales, Los Rastrojos aprovecharon las alianzas con la Policía y el Ejército, construidas desde los días del Cartel del Norte del Valle y renovadas por el Loco Barrera. El grupo también se benefició del reclutamiento de experimentados combatientes desmovilizados de las AUC³⁹⁵.

Sin embargo, hacia 2011 Los Rastrojos comenzaron a afrontar la venganza de los «narcos junior», herederos de los antiguos capos del Cartel del Norte del Valle. Mario Urdinola, alias Chicho, hijo de Iván (fallecido en 2002 en la cárcel), comenzó a formar una coalición a la que se unieron Greylin Varón Cadena, hijo de Fernando Varón (ambos usaron el alias de Martín Bala), y Andrés Arroyave, hijo de José Arroyave, un antiguo socio del cartel asesinado en 2010 por Los Rastrojos. Los «junior» contaron con el apoyo de Víctor Patiño, un viejo jefe del Cartel del Norte del Valle cuyas colaboraciones con la DEA provocaron la retaliación de Los Rastrojos contra su familia y sus socios³⁹⁶.

La alianza acudió a la única mafia capaz de enfrentarse a Los Rastrojos: el Clan del Golfo. A cambio de dinero y armas, le entregaron los remanentes de Los Machos y las redes y rutas de tráfico que aún controlaban en la costa Pacífica. Esta nueva guerra, aunque corta, disparó la violencia en el Pacífico, el centro y el norte del Valle y Cali. El desgaste, sumado a la persecución de las autoridades colombianas y estadounidenses, quebró a los cabecillas de ambos bandos y poco a poco fueron cayendo: los hermanos Comba se entregaron en mayo de 2012 y en cuestión de meses la estructura de mando fue diezmada, probablemente como resultado de sus declaraciones; Diego Rastrojo fue capturado en junio y el Loco Barrera en septiembre. Por el otro lado, Urdinola, Arroyave y Varón fueron detenidos en 2013³⁹⁷.

³⁹³ InSight Crime, «Los Rastrojos».

³⁹⁴ El Espectador, «El poder de 'Los Rastrojos'».

³⁹⁵ InSight Crime, «Los Rastrojos».

³⁹⁶ InSight Crime, «15 años de sangre y venganza».

³⁹⁷ Ibid.

Sin embargo, la caída de las cabezas del crimen no detuvo la violencia ni los negocios ilegales. El Clan del Golfo se quedó en el norte del Valle y poco a poco se fue extendiendo hacia el centro y el sur del departamento. Los Rastrojos se dividieron en facciones controladas por los lugartenientes de los Comba, mientras que la familia Urdinola y otros socios de don Diego mantuvieron algunos grupos armados que siguieron operando bajo el nombre de Los Machos. Todas estas bandas se han reorganizado en una especie de destilado donde se mezclan antiguos guerrilleros, narcotraficantes, paramilitares, miembros de la fuerza pública y criminales comunes. Controlan territorios más acotados, donde hacen justicia por mano propia; la flexibilidad de los negocios ilegales los define y pasan de las extorsiones a los asesinatos por encargo y de estos al microtráfico y los préstamos con usura. Sus colusiones con el mundo de la legalidad, aunque persisten, no tienen los alcances e intensidad de antes.

La mano dura del Estado y la revolución guerrillera sin brújula

Desde los últimos años de la administración de Andrés Pastrana, y especialmente durante la vigencia de la política de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe, el Estado emprendió importantes transformaciones tácticas y desplegó una férrea ofensiva militar en la región. Debido a que las zonas de alta montaña eran cruciales para la movilidad de las guerrillas y el narcotráfico, el Ejército instaló batallones especializados allí. El primero fue el Batallón de Alta Montaña n.º 3 Rodrigo Lloreda Caicedo, activado en mayo de 2003 en el corregimiento de Felidia, en Cali, para vigilar los Farallones. En 2011 se instaló el Batallón de Alta Montaña n.º 8 Coronel José María Vesga en la zona montañosa de Tacueyó, en el norte del Cauca, y en 2014 el Batallón de Alta Montaña n.º 10 Mayor Oscar Giraldo Restrepo, con jurisdicción en Caicedonia, Sevilla, Bugalagrande, Tuluá, San Pedro, Buga, Guacarí y Palmira. Adicionalmente, el Ejército desplegó las fuerzas de tarea conjunta para mejorar la efectividad de sus acciones a nivel territorial. En diciembre de 2001 se desplegó la Fuerza Apolo, con jurisdicción en los municipios de Pradera y Florida (Valle), Miranda, Corinto, Caloto, Toribío, Jambaló, Páez e Inzá (Cauca).

En 2007 comenzó la implementación del Plan Nacional de Consolidación Territorial (PNCT), cuyo objetivo era combatir a las guerrillas y consolidar áreas libres de cultivos ilícitos a través de iniciativas cívico-militares como las operaciones de respuesta rápida, el desarrollo de proyectos productivos de sustitución, infraestructura y conectividad y el ordenamiento de la propiedad, entre otros. El PNCT incluyó al

Cauca-Cordillera Central como región priorizada y funcionó en Caloto, Corinto, Miranda, Santander de Quilichao y Toribío³⁹⁸.

Uno de los principales efectos de la política de Seguridad Democrática fue el debilitamiento del aparato militar y financiero de las FARC-EP. Desde principios del siglo XXI, el grupo armado comenzó a perder comandantes claves, decenas de combatientes (por muerte, desertión o entrega a las autoridades), fuentes de financiación y toneladas de material de guerra, lo que las llevó a replegarse y retomar tácticas de la guerra de guerrillas. Por ejemplo, la operación Cali Libre, desplegada en los Farallones tras el secuestro masivo de los diputados del Valle en abril de 2002, resultó en el desmantelamiento de 21 campamentos subversivos, la destrucción de 95 hectáreas de cultivos ilícitos y más de mil kilogramos de droga procesada y la incautación de 584 cilindros de gas, 16 toneladas de víveres, 52.000 unidades de munición y más de 150.000 dólares³⁹⁹.

En 2009 la fuerza pública mató a alias Arbey o Piernas, comandante de la Compañía Móvil Alonso Cortés, lo que significó la desmovilización de aproximadamente el 60 % de sus integrantes⁴⁰⁰. El golpe más duro fue la muerte de Guillermo León Sáenz Vargas, alias Alfonso Cano, máximo comandante de las FARC-EP, durante un operativo de la operación Odiseo en Suárez, Cauca, el 4 de noviembre de 2011. Aproximadamente desde 2012 se produjo un descenso en los combates por iniciativa de las Fuerzas Militares que no obedeció a una reducción en la capacidad bélica del Estado, sino a una mayor concentración del esfuerzo militar en los objetivos de alto valor y en la contundencia de las operaciones⁴⁰¹.

Sin embargo, el reverso de este éxito militar inédito del Estado fue una emergencia humanitaria también sin antecedentes. En el suroccidente, al igual que en otras zonas del país, la implementación de la política de Seguridad Democrática estuvo acompañada del incremento de prácticamente todos los índices para medir la violencia, como los asesinatos, las masacres, el desplazamiento forzado, el despojo y la violencia sexual. En el Cauca, por ejemplo, según datos del Ministerio de Defensa, los homicidios mostraron un aumento sostenido en el periodo 2002-2007 y pasaron de 30 por cada cien mil habitantes (pch) a 55,8 pch; en 2009 la tasa descendió a 48,73 casos pch, pero aun así superaba la tasa nacional y era significativamente más alta que la que había cuando inició la ejecución de la política. Por su parte, en cuanto a la dinámica del desplazamiento forzado, en 2002 se alcanzó un pico de más de 15.000 personas desplazadas; en 2003 y 2004 se observó un descenso notable

³⁹⁸ Unodc, «Atlas de la caracterización regional de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el departamento del Cauca».

³⁹⁹ Caracol Radio, «Lo mejor, la operación “Cali libre”».

⁴⁰⁰ Fiscalía General de la Nación. «Tomo XXX. Génesis. Bloque Occidental “Comandante Alfonso Cano” FARC-EP».

⁴⁰¹ Camilo Echandía, «Cincuenta años de cambios en el conflicto armado colombiano (1964-2014)».

(hubo cerca de 5.000 cada año), pero en 2005 de nuevo comienza a aumentar hasta alcanzar un pico de casi 20.000 personas en 2008. Igualmente, entre 2002 y 2009 se registraron 1.434 casos de violencia sexual física contra mujeres en el Cauca, lo que implica que entre 18 y 23 mujeres fueron violentadas sexualmente cada mes. Estos datos resultan aún más preocupantes si se tiene en cuenta que en zonas donde existe presencia de actores armados menos del 20 % de las mujeres denuncian los hechos de violencia sexual de los que han sido víctimas⁴⁰².

Esa exacerbación fue el resultado del accionar de todos los actores armados, incluyendo a la fuerza pública. Efectivamente, las denuncias sobre graves violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario cometidas por militares y policías se incrementaron durante el periodo. Aunque los niveles de violencia bajaron al finalizar la política de Seguridad Democrática, la gente en Valle y Cauca continuó denunciando atropellos de la fuerza pública en los años siguientes, asociados a la continuidad de las políticas de militarización del territorio. De la mano de la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial (Pncrt)⁴⁰³ implementada por el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) a la par que negociaba con las FARC-EP, se instauró un control cívico-militar en zonas de alta presencia de grupos armados ilegales. Así lo contaron pobladores y expertos⁴⁰⁴ consultados por la Comisión:

«Había campañas cívico militares para este tipo de acciones. Es decir que se diluyó de facto el poder civil. [...] Lo más importante de esta época de los años 2010 en adelante, hasta el 2014, 2015, que se consolidó el proceso de paz, fue la acción de las Fuerzas de Tarea Conjunta, y eso, por supuesto, ocasionó que hubiera más combates y más bajas de civil, porque entre combatientes, pues allá verán porque es problema de ellos, pero lo grave es que haya afectaciones a los civiles. [...] En el 2011, por la agudización de la confrontación entre las FARC y las fuerzas gubernamentales, varias veredas fueron el teatro de operaciones, escenarios de combate entre la Fuerza de Tarea Conjunta Apolo y las tropas de la Columna móvil Gabriel Galvis, principalmente»⁴⁰⁵.

La ofensiva narcoparamilitar de las AUC y posteriormente de grupos posdesmovilización y de la fuerza pública provocó la transformación de las tácticas bélicas de las FARC-EP. En 2005 el Comando Conjunto de Occidente incrementó la actividad político-militar en las ciudades, principalmente Cali y Buenaventura, la apertura de

⁴⁰² Fajardo, «La Seguridad Democrática y su impacto en la vida de las mujeres del Cauca».

⁴⁰³ El Decreto 4161 de 2011 crea la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial encargada de la implementación, ejecución y seguimiento de la PNCR.

⁴⁰⁴ «Quiénes quedaban mandando en los territorios no eran los alcaldes ni el gobernador, la máxima autoridad territorial en las zonas controladas por una fuerza de tarea conjunta, como Florida y Pradera, eran los generales que comandaban las Fuerzas de Tarea Conjunta». Entrevista 440-PR-00759. Experto, movimiento campesino.

⁴⁰⁵ Entrevista 440-PR-00759. Experto, movimiento campesino.

nuevos corredores y el desarrollo de los principios de la guerra de guerrillas móviles. En el marco de este plan, se replantean las labores que venían realizando las subestructuras, por ejemplo, el Bloque Móvil Arturo Ruiz:

«El Bloque Móvil en un inicio no tenía en sus planes todos los temas de organización de masas, reclutamientos, finanzas, inteligencia, eran los frentes los que tenían esas responsabilidades. Después del 2005 empiezan a realizar todas estas tareas antes descritas, pero eran responsabilidades nuevas y debían coordinar con las direcciones de las otras unidades; se debía mantener la prudencia en su accionar del trabajo urbano porque ya se tenían otras unidades operando en esas zonas [...]. Las FARC controlaban que los alcaldes cumplieran con el programa de gobierno, las comunidades les hacían llegar razones y si no cumplían les hacían un juicio»⁴⁰⁶.

De igual forma, la Columna móvil Jacobo Arenas se replegó a los cascos urbanos e intensificó el trabajo de las milicias:

«Entonces la Jacobo Arenas tuvo que recurrir más a la milicia que a la guerrillera. Entonces, en esa dinámica de la milicia, se ve envuelta mucha población civil, porque el miliciano está allá adentro de la población civil. [...] La Jacobo llegó a contabilizar 8.000 milicianos, pero vaya a ver con cuántos se disponía en el momento. La Jacobo disponía por ahí de 70 unidades que pudieran reaccionar en el momento, de resto era gente que sí podía estar en el territorio y todo eso, pero mantenía era rotándose porque tenían sus familias»⁴⁰⁷.

En 2006, en el sur del Valle, las FARC-EP trazaron un plan de trabajo dirigido al sector campesino con el objetivo de «consolidar la coordinación campesina del departamento fortaleciendo sus organizaciones; trabajar por la unidad del sector campesino con las comunidades indígenas y afrocolombianas; e iniciar trabajo con los trabajadores de la agroindustria y contribuir al proceso de unidad popular en el departamento»⁴⁰⁸. No obstante, el plan no llegó a buen término y la guerrilla terminó privilegiando las iniciativas bélicas. Por ejemplo, la Columna móvil Gabriel Galvis montó en Pradera y Florida campamentos para la instrucción de guerrilleros reclutados; de igual manera, antiguos combatientes de las FARC-EP le contaron a la Comisión que las casas abandonadas por familias desplazadas por el conflicto armado se usaron para montar talleres de fabricación de explosivos o laboratorios para el procesamiento de cocaína⁴⁰⁹.

En el sur del Valle, la Columna móvil Gabriel Galvis instaló campos minados para evitar el avance de la tropa del Ejército⁴¹⁰, pero estos terminaron afectando también

⁴⁰⁶ Entrevista 440-CO-00493. Actor armado, excombatientes Bloque Móvil Arturo Ruiz de las FARC.

⁴⁰⁷ Entrevista 615-PR-00407. Actor armado, excomandante Bloque Occidental FARC.

⁴⁰⁸ Fiscalía General de la Nación. «30-Tomo XXX. Génesis. Bloque Occidental “Comandante Alfonso Cano” FARC-EP», 107.

⁴⁰⁹ Entrevista 582-PR-02416. Actor armado, hombre, ex combatiente FARC.

⁴¹⁰ Fiscalía General de la Nación, «Génesis. Tomo XXIX Génesis Bloque Móvil Arturo Ruiz FARC-EP».

a la población civil. La base de datos de Map-Muse de Descontamina Colombia⁴¹¹ y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv) registran en Pradera 40 víctimas entre 2005 y 2014, todos hombres cuyas edades estaban entre los 18 y los 40 años. En Florida, en el mismo periodo, se anotan 80 víctimas (dos mujeres y 78 hombres). El testimonio de un campesino del sur del Valle evidenció el impacto del minado de fincas civiles:

«Ahí nos tocaba el Sexto Frente, nos tocaba la columna Gabriel Galvis. [...] Ya en el tiempo, cuando recrudece la guerra con la guerrilla, el Ejército hace un Batallón de Alta Montaña cerca de la finca y la guerrilla toma la decisión de minar la finca en diferentes puntos. Al extremo que un trabajador cae en un campo minado. El Ejército, en vez de llegar con una posición de colaboración [...], llegan es mirando. La razón para ellos de que el muchacho haya caído en el campo minado era que el muchacho era guerrillero, que estaba instalando la mina, o que ahí había algo importante para ellos que estaban cuidando»⁴¹².

Las FARC-EP también implementaron una táctica de lucha antiaérea con artefactos explosivos improvisados para enfrentar los bombardeos llevados a cabo en el marco de la operación Fuego Azul II, adelantada por la Tercera División del Ejército y la Fuerza Aérea⁴¹³. Así lo relataron excombatientes de la guerrilla a la Comisión:

«A la superioridad que el Ejército venía teniendo con aviones y helicópteros, que era lo que los hacía inmunes a la lucha guerrillera y les presentaba una superioridad enorme [...], en el Cauca las FARC desarrolló artesanalmente esa lucha antiaérea, lucha antihelicópteros; desarrolló una artillería artesanal que venía perfeccionando tecnológicamente, a la que ya se le aplicaban aparatos electrónicos para hacer más fácil la detección de los objetivos contra los que se estaba combatiendo. Y toda esa lucha entonces vino haciendo que la superioridad aérea que el Gobierno tenía antes, ya no la tenía en el Cauca y eso hacía que la extensión de la guerra se mantuviera»⁴¹⁴.

Durante su Novena Conferencia (2007), las FARC-EP establecieron un plan financiero para evitar el colapso militar y político⁴¹⁵ bajo el cual las subestructuras armadas se encaminaron aún más al narcotráfico. Las columnas Libardo García y Miller Perdomo, por ejemplo, se desplazaron hacia el Pacífico para controlar la comercialización de pasta base de coca⁴¹⁶. De igual manera, recurrieron al secuestro extorsivo como mecanismo de

⁴¹¹ Descontamina Colombia y Unidad para las Víctimas, «Base anonimizada de víctimas de Minas Antipersonal MAP y Municiones Sin Explotar MUSE».

⁴¹² Entrevista 216-VI-00014. Víctima, campesino, sur del Valle del Cauca.

⁴¹³ Fiscalía General de la Nación. «Tomo XXX. Génesis. Bloque Occidental “Comandante Alfonso Cano” FARC-EP».

⁴¹⁴ Entrevista 615-PR-00407. Actor armado, excomandante Bloque Occidental FARC.

⁴¹⁵ Fiscalía General de la Nación. «30-Tomo XXX. Génesis. Bloque Occidental “Comandante Alfonso Cano” FARC-EP».

⁴¹⁶ Fiscalía General de la Nación, «Génesis. Tomo XXIX Génesis Bloque Móvil Arturo Ruiz FARC-EP».

financiación, operando conjuntamente con bandas criminales o grupos de delincuencia común, quienes cometían los secuestros en cascos urbanos y trasladaban a las víctimas a zonas rurales donde operaba la guerrilla⁴¹⁷. Estas acciones se centraron en el sur del Valle, particularmente en Florida, Pradera, Cerrito, Palmira y Cali.

Para las FARC-EP, la presencia en el suroccidente era crucial para mantener la comunicación entre los comandos conjuntos Occidental y Oriental, por lo que intentaron recuperar y expandir el control territorial sobre los corredores de las cordilleras y el Pacífico. En 2008 Guillermo León Sáenz Vargas, alias Alfonso Cano, designado máximo comandante de las FARC-EP tras la muerte de Pedro Antonio Marín, alias Tirofijo, llegó al norte del Cauca con el objetivo de recuperar el territorio tradicional de retaguardia e inspeccionar el narcotráfico⁴¹⁸. Este movimiento se enlazó con la ejecución del Plan Renacer (2009), bajo el cual la guerrilla intentó reaccionar y ajustarse a los cambios en el tablero de la guerra. Para recuperar terreno político, retomaron la promoción de la protesta social y la acción política; paralelamente, la táctica bélica se concentró en el repliegue y defensa de la retaguardia mediante la utilización de redes de inteligencia, francotiradores, explosivos improvisados, minas antipersonal y ataques contra la infraestructura y la fuerza pública que requirieran bajo esfuerzo en su ejecución.

Tras la muerte de Alfonso Cano en 2011, se apreció un aumento en el accionar de las FARC-EP en el Cauca y recuperaron por lo menos parcialmente zonas estratégicas para el narcotráfico como el corredor norte-sur de la cordillera Central. En Argelia, El Patía, Balboa y la costa Pacífica aumentaron los cultivos y la producción de droga, al tiempo que en el norte del departamento se vigorizaron las operaciones mineras ilegales⁴¹⁹. En 2012, sobre la base del Comando Conjunto de Occidente, se conformó el Bloque Occidental Comandante Alfonso Cano⁴²⁰. La estructura pasó a la ofensiva, al punto que, en ese año, de los 2.148 ataques, hostigamientos, combates y atentados registrados en el país, el 30 % (645) se presentaron en el Cauca⁴²¹. El objetivo de la guerrilla era demostrar fortaleza en medio de los acercamientos para la negociación con el gobierno de Juan Manuel Santos. Así lo explicó un antiguo integrante de la guerrilla a la Comisión:

«Antes del proceso de paz tocaba que peliar, porque se venía un acuerdo de paz y tocaba que mostrar era la fortaleza militar de las FARC y que no estábamos rendidos. [...] Entonces eso se hizo para que en el 2011, 2012, en esa época, la confrontación

⁴¹⁷ *Ibíd.*

⁴¹⁸ Unodc, «Atlas de la caracterización regional de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el departamento del Cauca».

⁴¹⁹ *Ibíd.*

⁴²⁰ Informe 79085-OE-207639, Jurisdicción Especial para la Paz, «Documento de ampliación territorial de versión voluntaria colectiva».

⁴²¹ Unodc, «Atlas de la caracterización regional de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el departamento del Cauca».

armada fuera en una mayor escala, hasta el punto de ser ya no una guerrilla en esa parte del suroccidente a la defensiva, sino que pasamos a ser una guerrilla ofensiva donde el Ejército, la Policía, pues eran atacados; no esperábamos que nos buscaran, sino que los buscábamos a ellos. Decía el camarada Caliche [Antonio Mahecha Marín]: “al enemigo no hay que dejarlo dormir, hay que asediarlo, hay que buscarlo”»⁴²².

El bloque aumentó la fabricación de explosivos artesanales para enfrentar a la fuerza pública por aire y tierra⁴²³. También incrementó el uso de francotiradores, sobre todo en el norte del Cauca donde operaba la Columna móvil Jacobo Arenas, con el supuesto objetivo de mejorar la efectividad de los ataques a la fuerza pública y reducir el impacto de las acciones armadas sobre las comunidades⁴²⁴.

Desde el punto de vista financiero, el narcotráfico, las extorsiones y la minería ilegal siguieron siendo las principales fuentes de ingreso del grupo guerrillero. En el caso de la minería ilegal, cobraban extorsiones a empresas de explotación aurífera en Buenaventura, en el Valle, y en Buenos Aires y Suárez, en el Cauca⁴²⁵. No obstante, el interés por la minería no fue solo de las FARC-EP. Campesinos del sur del Valle y el norte del Cauca le relataron a la Comisión la importancia que ha tenido la minería dentro de las economías de guerra de la insurgencia, los paramilitares, las mafias locales e incluso el propio Estado:

«Últimamente se ha hablado mucho de la minería, parece que hay polígonos ya adjudicados a ciertos explotadores de diferentes metales; está en el objetivo de diferentes actores, entonces nos preocupa eso. Se ha hablado mucho de explotaciones mineras de cobre, carbón, incluso oro; los estudios que se han hecho han considerado que esta cordillera es muy proclive a ese tipo de minerales que están tan escasos. Y como nunca han sido explotados, pues eso ha despertado el interés en muchos grupos, sobre todo del mismo Estado que ve en la presencia permanente de las guerrillas un problema para la explotación. Entonces eso explica de alguna manera que después de la presencia de actores guerrilleros se viera la presencia de grupos paramilitares o grupos de autodefensas, esos llegan en la década del 2000»⁴²⁶.

La extracción de oro estuvo acompañada de amenazas, asesinatos, secuestros y despojo de propiedades colectivas de los consejos comunitarios y de los resguardos indígenas. También trajo daños ambientales como la sedimentación de los ríos, situación que ha alterado los patrones de pesca de las comunidades y amenaza su soberanía alimentaria. En general, el proceso de apropiación violenta ligado a la minería ha afectado los estilos de vida tradicionales y las estructuras económicas y

⁴²² Entrevista 582-PR-02416. Actor armado, hombre, ex combatiente FARC.

⁴²³ Fiscalía General de la Nación. «Tomo XXX. Génesis. Bloque Occidental “Comandante Alfonso Cano” FARC-EP».

⁴²⁴ *Ibíd.*

⁴²⁵ *Ibíd.*

⁴²⁶ Entrevista 068-CO-00029. Víctimas, comunidad campesina.

sociales de los grupos étnicos⁴²⁷. Así describió a la Comisión un líder del norte del Cauca esos perniciosos efectos:

«En el 2012 llegó la pandemia de la minería ilegal y ahí sí eso fue el acabose de la comunidad por completo. Porque vivimos una época muy, pero muy aciaga acá en nuestra comunidad; se nos llenó la comunidad de un poco de gente extraña, gente de malas mañas, de malas costumbres. Nos cambiaron el sistema de vida, mucha bulla, mucho ruido, una bebeta en días de semana, no, no, no, ruido a toda hora; mejor dicho, a partir de que llegó esa peste, esa plaga de esa minería acá, nuestra comunidad cambió hasta la cultura. Yo no sé, la gente es vulnerable a ese tipo de cosas y como es lo que estaba en moda; problemas con las muchachas, mucho embarazo, no, muchas cosas, mucha vaina, mucho vicio, no, de todo»⁴²⁸.

A la par con la transformación de las tácticas militares y la expoliación económica, el Bloque Occidental de las FARC-EP trató de retomar el trabajo organizativo mediante el Plan Timanco 2012, el cual contaba con nueve líderes encargados de adelantar trabajo político-militar con diferentes movimientos campesinos e indígenas, pero tampoco surtió los resultados esperados y se mantuvo la arremetida bélica⁴²⁹. Así las cosas, hasta la firma del armisticio en 2016, la población civil quedó atrapada en el pulso entre la guerrilla y las fuerzas militares, ambas interesadas en mostrar ventaja militar y fortaleza de cara a las negociaciones.

La resistencia incansable

Las primeras décadas del siglo XXI vieron resurgir la movilización y la protesta social. Según un reporte del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), entre 2002 y 2008 la movilización social alcanzó en Colombia una media de 643 protestas por año; además, en 2007 se registró el ciclo de protestas sociales más alto desde 1975⁴³⁰. En el suroccidente, pese a que organizaciones y comunidades enfrentaban una nueva crisis económica e intentaban recuperarse de los embates de todos los actores del conflicto armado, hicieron un esfuerzo enorme por aguantar y defender sus reivindicaciones. Aunque los irresueltos problemas de la tierra y las demandas

⁴²⁷ Defensoría del Pueblo, *Informe especial de riesgo: economías ilegales, actores armados y nuevos escenarios de riesgo en el posacuerdo*.

⁴²⁸ Entrevista 1036-VI-00006. Líder comunitario, afrodescendiente, norte del Cauca.

⁴²⁹ Fiscalía General de la Nación. «30-Tomo XXX. Génesis. Bloque Occidental “Comandante Alfonso Cano” FARC-EP».

⁴³⁰ Sosa, «La protesta estudiantil en la Universidad del Valle entre 1968-1971 y 2007-2011. Una lectura comparada».

particulares –como el mejoramiento de las condiciones laborales y la financiación de la educación– eran el núcleo de la movilización, también surgieron exigencias por el cese de la violencia, la salida negociada al conflicto armado y la satisfacción de los derechos de las víctimas.

La minga indígena se convirtió en uno de los principales símbolos de la movilización y la resistencia. Desde sus orígenes, ha estado asociada con el trabajo colectivo y los aportes voluntarios de la comunidad para buscar el buen vivir común, pero ahora es también sinónimo de «caminar la palabra», es decir, de la movilización y protesta en pro de la reivindicación de la paz y los derechos. La primera vez que se escuchó hablar de una minga indígena en ese sentido político en el Cauca fue en noviembre de 1999, cuando los nativos bloquearon por 23 días la vía Panamericana entre Cali y Popayán hasta que el presidente Pastrana prometió atender la emergencia social, cultural y económica de los pueblos ancestrales (Decreto 982). Esa fue la primera de más de diez mingas que en los últimos 20 años se han desarrollado en el Cauca⁴³¹. Las mingas no han agrupado solo a los pueblos indígenas, sino que han contado con el apoyo de organizaciones y comunidades afro, grupos de mujeres, estudiantes, sindicalistas y otros sectores populares.

En septiembre de 2004 se llevó a cabo la «Minga por la vida, la justicia, la alegría, la autonomía y la libertad», en la cual más de 40.000 personas se movilizaron desde Piendamó (Cauca) hasta Cali en rechazo a los atropellos contra los derechos humanos cometidos bajo la política de Seguridad Democrática, las políticas y leyes que favorecían el desplazamiento y el despojo de tierras y las negociaciones de tratados de libre comercio. Otra de las más relevantes fue la «Minga de resistencia social y comunitaria» celebrada en octubre de 2008, la cual reunió a más de 40.000 personas que demandaban garantías del derecho a la vida y otros derechos humanos; el cese de la agresión contra los pueblos y comunidades y la ocupación de sus territorios y el cumplimiento de la declaración de la ONU sobre pueblos indígenas y demás declaraciones, pactos, acuerdos y tratados sobre la materia; el desmonte de la legislación que promovía el despojo de tierras (como el código minero); el debate nacional sobre los tratados de libre comercio y el cumplimiento por parte del Gobierno de los acuerdos establecidos en mingas y otros espacios anteriores⁴³².

Frecuentemente las mingas han sido estigmatizadas y violentadas por la fuerza pública y grupos de civiles armados y los acuerdos derivados de ellas han sido incumplidos:

En mayo de 2006, más de 18.000 indígenas y campesinos coparon ese territorio para rechazar el tratado de libre comercio (TLC) con los Estados Unidos y la

⁴³¹ RCN Radio, «Así han sido las mingas indígenas en Colombia desde 1999».

⁴³² Organización Indígena de Colombia (ONIC), «Minga Social y Comunitaria por la Defensa de la Vida, el Derecho a la Protesta Social y la Jurisdicción Especial Indígena - JEI». Entrevista 230-PR-02003. Experto, Valle del Cauca.

reelección de Álvaro Uribe. Entonces, el clamor era la salida negociada al conflicto con las insurgencias [...]. Fueron seis días de encuentro, calificados por el Gobierno como «una movilización del terrorismo, el narcotráfico y la guerrilla» [...]. Dos años más tarde, cuando Uribe ya era presidente por segunda vez, estas comunidades convocaron en la hacienda La María la Minga Nacional de Resistencia Social y Comunitaria, la cual se realizó desde el 12 de octubre de 2008. Más de 40.000 comuneros se desplegaron por la Panamericana para presionar el diálogo con Uribe y exigir el fin del conflicto armado. Luego de los enfrentamientos con el Esmad y de la muerte de un indígena, finalmente se acordó una reunión con el presidente en la Universidad del Valle [...]. El 2 de noviembre de 2008, finalmente, Uribe llegó al resguardo de La María y durante varias horas escuchó las denuncias de los nasas sobre la represión del Gobierno a estas comunidades, tildadas por el mandatario como auxiliadoras del terrorismo. En ese acto, los indígenas se quedaron sentados al escuchar el himno nacional y Aida Quilcué, entonces consejera mayor del CRIC y hoy una de las voceras de la minga, le dijo a Uribe que lo hacían como protesta ante las agresiones de la fuerza pública, que días antes había incursionado en el resguardo, cortado y quemado las banderas de Colombia y de la organización indígena. La discusión no terminó en acuerdo y los indígenas llegaron caminando a Bogotá el 22 de noviembre. En diciembre de ese año, en un retén militar, fue asesinado Edwin Legarda, el esposo de Aída Quilcué. El diálogo político no prosperó, pero se pactó la adjudicación de 10.000 hectáreas al CRIC, de las cuales, al final de su mandato, se habían entregado 9.000. En la era de Juan Manuel Santos se convocó una nueva minga, ante los incumplimientos de gobiernos anteriores. Fueron nueve días de enfrentamientos entre la fuerza pública y los indígenas, que dejaron una decena de heridos [...]. A mediados de 2016, nuevamente la minga convocó al Gobierno a La María para exigir el cumplimiento de los acuerdos [...]. Ahí, el Estado pactó que cumpliría con la adjudicación de tierras para los indígenas y campesinos. Ese acuerdo no se ha cumplido en su totalidad⁴³³.

Pese a eso, para los indígenas, las mingas han tenido efectos políticos importantes. Así lo afirmó el CRIC a la Comisión:

Al denunciar la injerencia de la fuerza pública y la guerrilla de las FARC en los ejercicios de control territorial, sentamos una distinción contundente alrededor de nuestro proyecto político: luchar por la vida digna. Para ello apuntamos nuestros esfuerzos hacia una iniciativa de paz amplia y popular organizada mediante el diálogo y la participación ciudadana. Los análisis que construimos en ese momento dieron pie para la consolidación de las Mingas de Resistencia Social

⁴³³ El Espectador, «¿Por qué la minga indígena resiste tanto tiempo?».

y Comunitaria y reafirmar a La María-Piendamó como lugar estratégico para la movilización y el encuentro entre diferentes sectores. La configuración de estos espacios apuntaló las iniciativas de resistencia civil y propició los diálogos con los diferentes actores armados, de modo que empezamos a interlocutar directamente como parte de una estrategia conjunta por incidir en la política de paz⁴³⁴.

Por otro lado, tras la arremetida del Estado, las guerrillas y los paramilitares, a principios del siglo XXI más de 70 organizaciones sociales y políticas de Valle y Cauca (incluyendo varios sindicatos) se unieron, se capacitaron y crearon una red de derechos humanos:

«La estrategia era generar una coraza política con los sectores populares y a nivel nacional, hacíamos toda la bulla que hay que hacer pa' que todo el mundo supiera, de tal manera que cuando los enemigos nos iban a atacar sabían que nosotros no andábamos con intereses personales, sino sociales y colectivos. La mística fue algo muy bonito que nos permitió esa resistencia, o sea, la mística indígena, la mística del espíritu, todas esas cosas que tienen los sectores populares»⁴³⁵.

Varias voces de líderes y lideresas de la región insistieron en esta idea de aglutinar organizaciones para construir una «coraza» o una «sombrialla» protectora ante los señalamientos y la violencia. Una lideresa del Valle, por ejemplo, afirmó:

«Marcha Patriótica era un movimiento donde acudían todas las organizaciones sociales pensándose en una nueva Colombia, lo mismo el Pupsoc [Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano]; son sombrillas para evitar que lo sigan persiguiendo a uno por nexos con los grupos insurgentes [...] porque vos sabes que aquí persiguen al que tiene voz más dura y ya lo van acusando de algo, entonces precisamente era para estar siempre unidos y protegiéndonos entre todos»⁴³⁶.

Hacia el 2007 el movimiento estudiantil se revitalizó y la protesta tomó nuevamente las calles como a principios de los setenta, ya no bajo lógicas del antinorteamericanismo y la búsqueda de la democracia interna de las universidades, sino por las inconformidades ante los planes de desarrollo gubernamentales, el desmejoramiento de la calidad de la educación y la privatización. En las protestas que surgieron entre 2007 y 2011, en las cuales las universidades locales como la del Valle y la del Cauca jugaron un papel importante, los estudiantes expresaron su inconformidad sobre los ajustes en el pasivo pensional contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo y las reformas a la Ley 30 de 1992, especialmente en materia de financiación. De igual manera, hubo movilizaciones en torno a pliegos particulares, como sucedió en marzo de 2011

⁴³⁴ Informe 651-CI-01452. Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), «Entonces, ¡hablamos! Afectaciones del conflicto político armado a los pueblos indígenas que conforman el Consejo Regional Indígena del Cauca».

⁴³⁵ Entrevista 582-VI-00063. Víctima, lideresa sindical.

⁴³⁶ Entrevista 582-VI-00071. Mujer, lideresa, exilio, movimiento campesino.

en la Univalle, cuando la asamblea estudiantil promovió protestas contra la crisis de la cafetería central, el plan de acción del alma mater en torno al espacio público y el manejo de la seguridad y la negociación que se venía adelantando con la Alcaldía de Cali para el préstamo de los centros deportivos⁴³⁷.

El Gobierno nacional, sobre todo durante la época Uribe, deslegitimaba las demandas de los estudiantes afirmando que eran promovidas con violencia por parte de la comunidad estudiantil y estaban infiltradas por los cuadros urbanos de las guerrillas. Sin embargo, aunque la violencia sin duda ha existido como mecanismo de expresión y protesta, suele ser ocasional y promovida por organizaciones específicas y no es una estrategia deliberada de toda la comunidad; además, paulatinamente ha integrado repertorios de protesta innovadores que han obligado a los Gobiernos a transformar sus discursos⁴³⁸.

Otra notable iniciativa de resistencia y convivencia son las mesas interétnicas e interculturales que han conformado las comunidades y organizaciones campesinas, afro e indígenas en el Cauca desde 2002. Representantes de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc), la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y otras organizaciones comunitarias del departamento se han sentado a dialogar con el objetivo de conocer las dinámicas organizativas de cada grupo étnico y sus respectivas perspectivas de desarrollo, construir confianza, zanjar conflictos y encontrar puntos en común y soluciones a los problemas compartidos en sus territorios⁴³⁹.

Los diferendos en torno a la tierra son centrales: los campesinos demandan la concesión de Zonas de Reserva Campesina, específicamente en Tuluá y Pradera (Valle), Miranda, Corinto y Caloto (Cauca)⁴⁴⁰; los afrodescendientes buscan que, al igual que a sus pares de la costa Pacífica, les titulen colectivamente sus territorios y los indígenas calculan que tienen un déficit de por lo menos 142.000 hectáreas. En las mesas se plantea que los sitios donde hay mayores tensiones y potencial de conflicto son Buenos Aires, Suárez, Santander de Quilichao⁴⁴¹, Corinto, Caloto y Miranda. Otro

⁴³⁷ Sosa, «La protesta estudiantil en la Universidad del Valle entre 1968-1971 y 2007-2011. Una lectura comparada».

⁴³⁸ *Ibíd.*

⁴³⁹ Verdad Abierta, «Afros, indígenas y campesinos construyen paz en el norte de Cauca».

⁴⁴⁰ Entrevista 070-PR-00893. Mujer, activista social, Valle del Cauca.

⁴⁴¹ «El caso más conocido es el de la finca San Rafael, en la zona rural de Santander de Quilichao, la cual fue entregada por el Ministerio de Agricultura a los indígenas Nasa como parte de la reparación por la masacre de El Nilo. Sin saberlo y sin consultar a las comunidades, el ministerio les dio la finca a los indígenas, pese a que hace parte del territorio de un consejo comunitario. Este incidente llevó a que afros e indígenas se enfrentaran violentamente en varias ocasiones, dejando cientos de heridos y dos indígenas muertos. Roller Escobar, coordinador de Derechos Humanos de la Unidad de Organizaciones Afrocaucanas (Uaofroc), considera que sin la interlocución que se dio en las mesas interculturales, no habría sido posible que las dos comunidades cesaran las agresiones y llegaran a una solución dialogada. “Las relaciones que los líderes construyeron en los seis grandes encuentros que

punto de discrepancia es la minería: mientras que los afrodescendientes están a favor, los indígenas se oponen⁴⁴².

Para solucionar esas desavenencias, en las mesas se han concertado varios acuerdos: dialogar antes de hacer pronunciamientos públicos, porque antes había una guerra mediática y de comunicados; privilegiar la salvaguarda del territorio y los recursos naturales; generar confianza por medio del intercambio de semillas, productos y experiencias; y negociar conjuntamente con el Gobierno, para lo cual han definido que la Cumbre Agraria y Popular es la máxima instancia de discusión. También han llegado a acuerdos más concretos, como la aceptación de la minería por parte de las comunidades afro siempre y cuando se haga de manera artesanal. La salida negociada al conflicto armado también ha sido una postura común⁴⁴³. A partir de estas experiencias, en 2016 surgió el Consejo Interétnico e Intercultural como un espacio para tramitar las diferencias entre los procesos organizativos, promover el gobierno propio interétnico y congregar las luchas y apuestas políticas de campesinos, afrodescendientes e indígenas del Cauca.

se realizaron antes de este conflicto sirvieron para para bajar la tensión y llegar al acuerdo de que los indígenas le cedían la finca al consejo comunitario a cambio de que el Estado los compensara con otra³⁹». Verdad Abierta, «Afros, indígenas y campesinos construyen paz en el norte de Cauca».

⁴⁴² *Ibíd.*

⁴⁴³ *Ibíd.*



**La esperanza de
la paz y el búmeran
de la guerra (2016–2020)**

Un acuerdo rezagado

La firma del Acuerdo Final de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP de nuevo alimentó las esperanzas de paz, equidad y apertura democrática en el país. Los alcances a medias de las negociaciones adelantadas en las décadas pasadas y las experiencias previas de reactivación del conflicto llamaban a la cautela, pero las señales eran muy alentadoras: era la primera vez que las FARC-EP, la guerrilla más poderosa del país, se había sentado en la mesa sin ases bajo la manga. Además, la agenda de negociación por primera vez abordó integralmente las piedras angulares de la guerra: el problema de la tierra, la participación política, el narcotráfico y el ejercicio de la violencia por parte de particulares. La fuerza pública también se montó en el tren de la paz, como consta en un informe entregado por la Policía a la Comisión:

Se creó la Unipep, también conocida como «Policía de la Paz», considerada por algunos analistas como un caso ejemplar de construcción de paz desde la perspectiva de una organización de seguridad que antes era el enemigo de las FARC. Esta Unidad fue creada para acompañar la implementación del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y el grupo guerrillero de las FARC-EP en abril de 2016, siete meses antes de la firma del Acuerdo Final, cuando apenas se habían acordado los borradores sobre los puntos de reforma agraria integral, participación política y solución para el narcotráfico. El propósito fue crear una policía especial que estuviera capacitada para asumir las responsabilidades en la implementación y en la dejación de armas y cese al fuego y ofrecer garantías de seguridad durante el posacuerdo, sin necesidad de acudir a los tradicionales cuerpos de paz⁴⁴⁴.

El informe recoge relatos de policías y exguerrilleros dispuestos a apostarle a la paz, la reconciliación y la convivencia:

Esta humanización del policía está asociada con la identificación del excombatiente con el policía. El excombatiente se identifica con el policía porque ambos, en su opinión, comparten la experiencia de la guerra, la formación militar y, en algunos casos, la pertenencia a familias que viven en contextos de pobreza. De esta manera, la identificación con el policía abre la puerta para la comprensión humana del otro y la posibilidad de establecer una confianza con el otro. Para los excombatientes, esta identificación excombatiente-policía les permitió entenderse mutuamente y

⁴⁴⁴ Informe 748-CI-00865, Policía Nacional de Colombia, «Protección y reconciliación. Un análisis de la experiencia de la Policía Nacional de Colombia durante el cese al fuego con las FARC-EP. 2020», 61.

favoreció una disposición mutua para la reconciliación: «Yo iba muy preparado para decir “oiga, hermano, esta guerra es necesario pararla, porque nos estamos matando”; y antes de que yo pudiera decirles algo, ellos [policías] me echaron todo el discurso a mí». Entonces yo les dije: «hermano, yo venía a decirles eso, que no podemos volvernos a matar» [...]. «Que ellos me dijeran eso que yo les iba a decir fue necesario para saber que podemos avanzar en esta construcción, porque nosotros somos la gente del pueblo y nos podemos entender tranquilamente. De ahí me surgió la idea de que no podemos volver al error de dispararnos y volver a esa guerra»⁴⁴⁵.

Siguiendo la tendencia del resto del país, en el Cauca el plebiscito de refrendación de octubre de 2016 gozó de un apoyo significativo por parte de las poblaciones más afectadas por la guerra y el *sí* ganó con un 67,32 % de los votos. Específicamente en algunos municipios del norte, el apoyo a los acuerdos fue contundente: Jambaló, con un 86,27 %; Toribío, 84,80 %; Caldono, 79,84 %; Caloto, 72,90 %; Buenos Aires, 72,15 %; Corinto, 69,22 %; Miranda, 63,71 %⁴⁴⁶. En el Valle la situación estuvo más dividida: el *sí* obtuvo el 52 % de los votos generales y ganó en Buenaventura (70,66 %) y la mayoría de los municipios del sur, aunque por márgenes apretados. Por el contrario, en el norte y el centro, regiones tradicionalmente más conservadoras, la tendencia fue el apoyo al *no*: La Unión (72,5 %); El Águila (69,11 %); Ansermanuevo (68,40 %); El Dovio (67,15 %); Toro (63,65 %); Versalles (63,15 %); Trujillo (62,71 %); Cartago (61,88 %) y Caicedonia (61,11 %)⁴⁴⁷. A diferencia de otras capitales del país, en Popayán y Cali ganó el *sí*, con un 58,87 % y un 54,27 % respectivamente.

La victoria del *no* en el plebiscito provocó incertidumbre en esas poblaciones afectadas por la guerra. Al respecto, Oscar Rodrigo Campo, gobernador del Cauca de la época, expresó en una entrevista a la prensa:

Como demócratas entendemos lo que el país de una u otra manera se ha pronunciado referente a la desaprobación al acuerdo de paz a través del plebiscito y esperamos que las voces oficiales se pronuncien para empezar a revisar en qué escenario empezamos a entrar. [...] Como caucanos, le hablamos al país: nos resistimos a seguir siendo el escenario del conflicto colombiano. Cauca sueña, tiene esperanza, que sea otro escenario el que nos cobije y desde allí nuestra postura muy seguramente se sumará a la de los otros departamentos que han sido epicentros de la guerra, como Nariño o Chocó⁴⁴⁸.

⁴⁴⁵ *Ibíd.*, 178-79.

⁴⁴⁶ *El Tiempo*, «Cauca se resiste a seguir siendo escenario del conflicto: Gobernador».

⁴⁴⁷ *El Tiempo*, «Valle, ganó el Sí pero resultado nacional no dio espacio para celebración».

⁴⁴⁸ *El Tiempo*, «Cauca se resiste a seguir siendo escenario del conflicto: Gobernador».

Tras una rápida renegociación donde se incorporaron las sugerencias de los defensores del *no*, el Acuerdo de Paz fue ratificado en noviembre de 2016 y en todo el territorio nacional las FARC-EP empezaron su proceso de desmovilización. En los territorios históricamente más afectados por la guerra, como el Valle y el norte del Cauca, la gente vio con una mezcla de optimismo y recelo cómo cientos de hombres y mujeres de la guerrilla salían del monte, entregaban las armas y comenzaban el arduo tránsito a la vida civil. El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (luego renombrado como Sistema Integral de Paz) dio sus primeros pasos con la conformación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Comisión de la Verdad. La JEP entró en funcionamiento y comenzó a pedirles cuentas a los responsables de la violencia⁴⁴⁹, la UBPD empezó a rescatar los miles de cuerpos que la guerra dejó incógnitos y la Comisión comenzó a escuchar a víctimas y responsables para intentar desenredar las causas y consecuencias de la guerra.

Sin embargo, pese a los esfuerzos políticos y financieros gubernamentales, en territorios como el norte del Cauca la gente aún no ve materializadas las promesas del Acuerdo de Paz y duda del compromiso del Gobierno para implementarlas. Además, entidades como la Procuraduría⁴⁵⁰ y la Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional⁴⁵¹, así como algunos integrantes del Congreso⁴⁵², han evidenciado en sendos informes las falencias en la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia. Los retrasos se observan principalmente en los puntos relacionados

⁴⁴⁹ Por medio del auto 078 del 8 de noviembre de 2018 la JEP abrió el caso 005, relativo a la situación territorial en la región del norte del Cauca, en los municipios de Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío, Caldono, Jambaló, Miranda, Padilla y Puerto Tejada, en el Cauca, y Palmira, Florida, Candelaria y Jamundí en el sur del Valle del Cauca. Este caso fue priorizado por la Sala de Reconocimiento luego del análisis de los informes presentados por la Fiscalía General de la Nación, la Organización Nacional Indígena de Colombia y el Centro Nacional de Memoria Histórica, donde se identifican de graves violaciones a los DD. HH. y al DIH, como desplazamiento forzado, secuestros, tortura, violencia sexual, confinamiento, siembra de minas antipersonal, reclutamiento ilícito, desaparición forzada, amenazas y atentados al medio ambiente y al territorio por parte de integrantes de las FARC-EP y de miembros de la fuerza pública entre el 1 de enero de 1993 y el 1 de diciembre de 2016. A marzo 31 de 2021, la Sala de Reconocimiento ha acreditado 178.219 víctimas, de las cuales tan solo 70 corresponden a acreditaciones individuales y el resto (178.149) a alguno de los 107 sujetos colectivos acreditados como víctimas del caso. Igualmente, la Sala registra la realización de 35 versiones voluntarias a exmiembros de las FARC-EP que actuaron en la región y 15 diligencias de coordinación interjurisdiccional e interjusticias y de diálogo intercultural en territorio del norte del Cauca y en el Valle del Cauca. Procuraduría General de la Nación, «Tercer Informe al Congreso sobre el estado de avance de la implementación del Acuerdo de Paz».

⁴⁵⁰ *Ibíd.*

⁴⁵¹ Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación Cinep/PPP-Cerac, «Décimo informe de verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia».

⁴⁵² Congreso de la República, «¿En qué va la paz 5 años después de la firma del acuerdo final?».

con la reforma rural integral, la participación política, las garantías de seguridad y el capítulo étnico⁴⁵³.

En cuanto a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el décimo informe de la Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación evidenció el desigual tratamiento entre regiones: mientras Sierra Nevada tiene la mayor participación con un 10 % del total de recursos, seguida por cuenca del Caguán con 7 %, Alto Patía y norte del Cauca⁴⁵⁴ con 6,8 % y Macarena-Guaviare con 6,6 %, en el caso del Pacífico Medio⁴⁵⁵, de un total de 18 iniciativas presentadas, ninguna ha sido aprobada, sin que las explicaciones técnicas sean claras para la comunidad⁴⁵⁶. En lo que concierne a la solución del problema de drogas ilícitas, la Procuraduría identificó 953 veredas en las que se suscribieron acuerdos voluntarios de sustitución y que no fueron incluidas dentro de la focalización del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS); 396 de ellas han registrado operaciones de erradicación forzada entre 2016 y 2019. Los departamentos donde hubo veredas con acuerdos colectivos sin individualizar y que registraron erradicaciones forzadas fueron Nariño, con 138 veredas en los municipios de Olaya Herrera, Barbacoas, Roberto Payán y Policarpa, seguido por Cauca, con 83 veredas en Corinto, Balboa y Cajibío⁴⁵⁷.

En las regiones más afectadas por el conflicto armado sigue sin garantizarse la democratización del acceso a la tierra: si bien ya se cumplió con el proceso de formalización del 99,6 % de las hectáreas de tierra previstas por entregar (siete millones de hectáreas), tan solo el 0,4 % han sido adjudicadas (de una meta de tres millones). Las dificultades de seguridad han retrasado las actuaciones de la Unidad de Restitución de Tierras y de otras entidades en el territorio. Por ejemplo, en la subregión PDET de Alto Patía y norte del Cauca la presencia de minas antipersonal y actores armados han obstaculizado la georreferenciación de predios, necesaria para avanzar en la restitución tanto en la ruta individual como en la étnica. De igual manera, en la subregión Pacífico Medio los procesos de restitución e implementación de otros puntos del acuerdo se han visto obstaculizados por la presencia de grupos armados. Hasta agosto de 2021 no había avances en el cumplimiento de órdenes judiciales de restitución contenidas en la única sentencia

⁴⁵³ Procuraduría General de la Nación. «Procuraduría radicó Tercer Informe al Congreso con 322 recomendaciones relacionadas con la implementación del Acuerdo de Paz».

⁴⁵⁴ La subregión está compuesta por 24 municipios distribuidos en tres departamentos: Florida y Pradera (Valle), Argelia, Balboa, Buenos Aires, Cajibío, Caldon, Caloto, Corinto, Santander de Quilichao, Suarez, Toribío, Jambaló, El Tambo, Mercaderes, Miranda, Morales, Patía y Piendamó (Cauca), Policarpa, Cumbitara, El Rosario, Leiva y Los Andes (Nariño).

⁴⁵⁵ Conformada por Buenaventura (Valle), Guapi, López de Micay y Timbiquí (Cauca).

⁴⁵⁶ Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación Cinep/PPP-Cerac, «Décimo informe de verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia».

⁴⁵⁷ Procuraduría General de la Nación, «Tercer Informe al Congreso sobre el estado de avance de la implementación del Acuerdo de Paz».

de restitución étnica proferida en Buenaventura a favor del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Yurumanguí⁴⁵⁸.

Sobre el punto de seguridad, se observan las mayores debilidades de la implementación del acuerdo. Con base en las cifras de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Procuraduría reportó que entre 2016 y junio de 2021 en Colombia han sido asesinados por lo menos 500 líderes y lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos. Diversas fuentes oficiales, académicas y de la sociedad civil hacen cálculos aún más desesperanzadores y estiman que solo en Cauca y el Valle fueron asesinados entre 129 y 329 líderes y lideresas entre 2016 y julio de 2020.

Líderes y lideresas campesinas, así como las autoridades étnicas, se han convertido en objetivo de violencia por parte de todos los actores armados (paramilitares, guerrillas, fuerza pública y mafias) debido a sus acciones de control territorial y el rechazo a los cultivos de uso ilícito y el tráfico de droga en sus territorios. Amenazas, asesinatos selectivos, atentados y masacres —que a su vez han disparado el desplazamiento forzado—, estigmatizaciones, reclutamientos y desapariciones, de nuevo se han vuelto cotidianos. Estos hechos de violencia sistemática buscan limitar la organización y participación política, impedir la garantía de los derechos humanos y entorpecer los procesos de implementación del acuerdo, restitución de tierras, defensa del medio ambiente y sustitución de cultivos de uso ilícito. Un dirigente indígena del norte del Cauca retrató la zozobra que han vivido cientos de líderes sociales en la región:

«Hubieron unas personas que no se reincorporaron y empezaron a escucharse diferentes nombres de los grupos armados: que el EPL, que las Águilas Negras, que las disidencias, que el ELN. Entonces empezó como una zozobra [...]. A mí en el 2017 me mandaron una carta donde me dicen que yo soy objetivo militar y que donde me vean, me matan [...]. Cuando ya me dirigía para acá me alcanzan dos personas en una moto, me sacan un revólver y me dicen: “vea, nosotros somos la nueva guerrilla” [...], dizque el Bloque Primero de las FARC, que vienen a mandar todo esto [...], que ellos no me quieren ver en el territorio, que ese cuento de líder, que ese cuento de la organización es una fachada, que yo me estoy escudando a través del resguardo, que actualmente trabajo con el Ejército»⁴⁵⁹.

Asimismo, según la Misión de Verificación de Naciones Unidas, a junio de 2021 se habían registrado 278 homicidios contra personas en proceso de reincorporación. Gran parte de los asesinatos selectivos han sido ejecutados bajo la modalidad de sicariato en los lugares de residencia de las víctimas, en sitios concurridos, como establecimientos comerciales y en vías públicas veredales. La mayoría de los autores

⁴⁵⁸ *Ibíd.*

⁴⁵⁹ Entrevista 582-VI-00030. Víctima, líder indígena, norte del Cauca, hombre.

materiales no han sido identificados⁴⁶⁰. Específicamente en el Cauca, entre 2017 y noviembre de 2020, por lo menos 56 excombatientes fueron asesinados en Argelia, Caloto, Buenos Aires y Santander de Quilichao. Asimismo, de los 437 excombatientes residentes en el Valle del Cauca, hasta noviembre de 2020 habían sido asesinados 19⁴⁶¹, incluyendo Jorge Enrique Corredor González, alias Wilson Saavedra, quien hizo parte del Frente 21 de las FARC-EP y fue el primer reincorporado asesinado que tuvo rango de comandante⁴⁶². También se conocieron casos de amenazas, desaparición y desplazamiento forzado.

Aunque el Gobierno adjudica la violencia contra excombatientes esencialmente a la reincidencia en actividades criminales, también se explica por otros motivos. En primer lugar, por represalias ante la negación de los reincorporados a entrar a nuevos grupos armados, quienes los buscan por su experiencia en los quehaceres bélicos, contactos y conocimiento de los territorios. En segundo lugar, por rencillas y disputas que quedaron pendientes entre grupos armados debido a la dejación de armas de las FARC-EP. Y, en tercer lugar, por «ajustes de cuentas» personales contra antiguos integrantes de la guerrilla. En el contexto del posacuerdo, los grupos armados empezaron una cadena de venganzas y deslegitimación, acusándose mutuamente de ser narcos, delincuentes, «traidores» y de trabajar con la fuerza pública. En la mitad de esta violencia ha quedado la población civil.

Una nueva fase de la guerra

Aunque en los meses posteriores a la firma del acuerdo hubo descensos en los niveles de violencia en la mayor parte del país, pronto las disidencias o desertores de las FARC-EP, el ELN y los grupos paramilitares de nueva generación comenzaron a disputarse los espacios y las jugosas rentas de las economías de guerra, especialmente del narcotráfico. El Cauca, sobre todo en los municipios del norte, es uno de los epicentros de la nueva fase del conflicto armado colombiano. Su ubicación como punto de conexión entre el Pacífico y el centro del país, sus características geográficas, la institucionalidad pobre, la deficiente implementación de los Acuerdos de Paz, la trayectoria de las FARC-EP en el territorio, las aspiraciones de los procesos organizativos de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas y el mantenimiento de economías de guerra son algunos de los factores fundamentales para la reproducción

⁴⁶⁰ El Tiempo, «¿Por qué están matando a los reincorporados de las FARC?».

⁴⁶¹ Álvarez y Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), «Diagnóstico de los casos de violencia letal».

⁴⁶² El Espectador, «Primer excomandante de las FARC asesinado después del proceso de paz».

de grupos armados, el surgimiento o agravamiento de disputas y, en consecuencia, para que se desatara la violencia contra las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas⁴⁶³.

Tras un breve periodo de tranquilidad, nuevamente la población civil ha quedado en el fuego cruzado entre todos los actores armados, incluyendo la fuerza pública⁴⁶⁴. En el norte del Cauca y el sur del Valle, desde 2017, aparecieron diversas disidencias de los frentes y columnas de las FARC-EP, como el Frente Unido Fuerza Pacífico y las columnas Dagoberto Ramos y Jaime Martínez. Al principio las disidencias de las FARC-EP chocaron entre sí, pero desde 2019 se repartieron la región, lo que les permitió expandirse y fortalecerse a través de estrategias de alianzas instrumentales⁴⁶⁵: la columna Jaime Martínez se posicionó en la cordillera Occidental, en Buenos Aires y Suárez, mientras que la Dagoberto Ramos se ubicó en la cordillera Central, sobre Caldone, Toribío, Jambaló, Corinto, Miranda, Caloto y Santander de Quilichao. Presuntamente en 2020 ambas estructuras se asociaron para enfrentar al ELN y otros adversarios con el objetivo de recuperar y mantener el control del Cauca y el sur del Valle.

Según alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, entre el 2017 y 2019 se escuchó sobre la presencia de Los Pelusos (originados en las viejas disidencias del EPL) en Suárez, Cajibío, Morales, Miranda, Corinto, Caloto y Santander de Quilichao. En ese periodo, el grupo habría entrado en confrontación con las columnas Jaime Martínez y Dagoberto Ramos y, ante el poderío militar de estas, tuvo que replegarse hacia Miranda, Corinto y el sur del Valle, en Florida y Jamundí. Durante 2020 y 2021 no se tiene registro de acciones de Los Pelusos en el norte del Cauca⁴⁶⁶. Otras fuentes en el territorio han manifestado que los disidentes o mafiosos están utilizando el nombre del EPL, pero realmente ese grupo no tiene presencia en la zona.

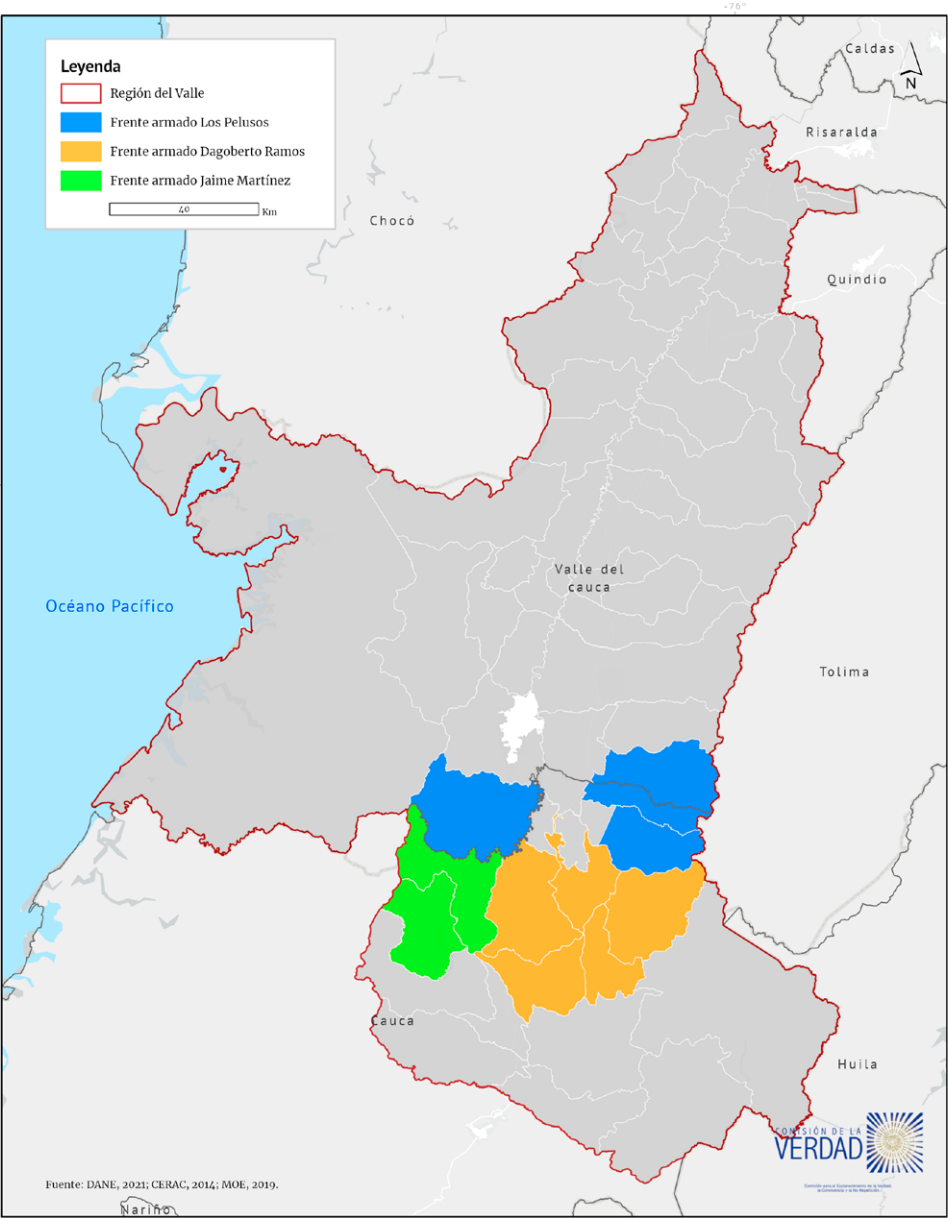
⁴⁶³ Fundación Paz y Reconciliación, «Grupos armados Posfarc: una nueva espiral de violencia en Colombia».

⁴⁶⁴ «El conflicto social continúa porque cada vez las respuestas del gobierno han sido terribles [...]. Cuando descalifican cualquier lucha social [...] es cuando entonces entendemos lo que hemos calificado como “terrorismo de Estado”, que tiene que ver con lo psicológico, con los atentados, con los asesinatos y con las desapariciones [...]. Nosotros hemos sido víctimas directas de un terrorismo de Estado». Entrevista 112-VI-00025. Líder sindical, militante del PCC y la UP.

⁴⁶⁵ «Ahorita las disidencias de las FARC [columna Jaime Martínez] han recogido a la delincuencia en los corregimientos, a los delincuentes, a los que hacen, roban, meten droga [...], entonces ya los tienen con ellos; y lo más delicado es que han armado a muchos de esos delincuentes, porque para mí son delincuentes que no tienen una ideología». Entrevista 440-VI-00011. Víctima, lideresa, sur del Valle del Cauca.

⁴⁶⁶ Fundación Paz y Reconciliación, «Grupos armados Posfarc: una nueva espiral de violencia en Colombia».

Mapa 7. Presencia de las disidencias de las FARC (2016-2020)



Fuente: DANE, 2021; CERAC, 2014; MOE, 2019.

El ELN también entró en la disputa mediante la compañía Milton Hernández del Frente Manuel Vásquez Castaño. Según las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, en 2017 hizo presencia en Caldono, Jambaló y Toribío; en 2018, en Miranda, Corinto y Caloto; en 2019, en Suárez y Santander de Quilichao; y en 2020, en Santander de Quilichao, Caloto, Corinto y Miranda. Este repliegue hacia los límites con el Valle se debe a los enfrentamientos contra las disidencias de las FARC-EP, quienes han ganado parcialmente la disputa militar. Si bien el ELN sobrevive en algunos municipios del norte del Cauca, su presencia es más fuerte en El Tambo y Argelia, en el sur del departamento.

En la arremetida contra el ELN, las fuerzas militares y los grupos paramilitares, las disidencias reeditaron algunas de las tácticas bélicas de las FARC-EP, como los hostigamientos desde terrenos boscosos elevados y la utilización de explosivos improvisados. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, con eso no solo buscan afectar a las fuerzas armadas, en retaliación a los duros golpes que les han propinado, sino también aterrorizar a la población civil⁴⁶⁷. Acción Contra Minas registra once víctimas no fatales de Map-Muse entre 2016 y 2020 en el norte del Cauca, siete civiles y cuatro miembros de la fuerza pública.

La vinculación de niños, niñas y adolescentes a las estructuras armadas ilegales también ha sido recurrente en la nueva dinámica del conflicto armado en la región. Así lo afirmó un líder e integrante de la Guardia Indígena del norte del Cauca a la Comisión:

«Hay mucha información que en estos lados está la disidencia, está el ELN, ahora hablan de [segunda] Marquetalia y todo eso, de la gente del Estado, que Los Pelusos, que el EPL; pues sí, o sea, hay una cantidad de grupos armados dentro del territorio y el fin de ellos es reclutar jóvenes y la disputa del narcotráfico, yo creo que eso es muy claro acá. [...] Hay muchos jóvenes en este resguardo, mucha población juvenil que a veces son vulnerables. Yo creo que, más que todo, eso y el sitio del territorio es muy estratégico por sus montañas, por sus cordilleras. Entonces yo creo que eso es lo más apeteído por estos grupos»⁴⁶⁸.

Según el Gobierno, entre 2016 y 2020 se registraron 59 casos de reclutamiento forzado en Cauca, la mayoría en el norte del departamento⁴⁶⁹; no obstante, según la Defensoría del Pueblo y las organizaciones territoriales, la cifra debe ser mucho mayor, pues muchas personas prefieren no denunciar este tipo de hechos por motivos de seguridad o desconocimiento. Un informe de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) estima que en 2019 mínimo hubo quince casos de reclutamiento, en 2020 aumentó a 110 y en 2021 a 272. El municipio más afectado ha sido Toribío y

⁴⁶⁷ Semana, «MinDefensa denunció nueva modalidad de las disidencias de las FARC para generar terror en el Cauca».

⁴⁶⁸ Entrevista 434-VI-00022. Víctima, líder indígena, norte del Cauca.

⁴⁶⁹ Presidencia de la República, «Informe sobre el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos armados organizados y grupos delictivos organizados».

el 70 % de las víctimas son niñas, quienes estarían siendo trasladadas a otras zonas del Cauca y a Nariño. Por lo menos 26 menores de edad reclutados han muerto en medio de combates entre las disidencias y la fuerza pública⁴⁷⁰. Estas vinculaciones se llevan a cabo a través de la fuerza, del «enamoramiento» o del ofrecimiento de dádivas a los menores, quienes fácilmente acceden, atraídos por el dinero fácil, la posibilidad de ascenso social o las carencias que afrontan en sus hogares y comunidades.

Las disidencias también han retomado las extorsiones y la persecución a las personas supuestamente relacionadas con la fuerza pública, delincuentes comunes y consumidores de estupefacientes. Así lo relataron pobladores de la región a la Comisión:

«Y ellos [las disidencias] hace como 15 días pusieron unos comunicados que llegaron a los celulares y ahí es donde dice que los jóvenes que prestaron servicio militar deben de abandonar la región. [...] Que este comunicado va pa' todos los líderes indígenas y juntas y ahí es que hablan de los que prestan el servicio militar, que a donde los lleguen a coger con la libreta, los declaran objetivo militar. [...] Pero ahora ellos sí advierten que joven que lo vean metiendo vicio, se lo llevan, o... [...]. En un panfleto que regaron este miércoles, no más dice que jovencitos que fumen marihuana, que los vean en otras actividades, van a ser objetivo militar. Y que va a haber “limpieza” y que ya los tienen detectados. [...] Sí, uno mantiene con una zozobra ahí [...]. ¿Qué les interesa? El territorio. A ellos, no dejarse sacar del territorio y usted sabe, pa' qué nos vamos a hablar mentiras, hay mucho cultivo ilícito»⁴⁷¹.

Otro testimonio agrega:

«Ahorita ya tenemos una situación con las disidencias de las FARC. [...] Se identificaron, pues, como las disidencias de este Jaime ¿Martínez?, sí, Jaime Martínez. [...] Entonces me pidieron pues que les diera 20 millones de pesos, yo les dije que no, que yo 20 millones de pesos no tenía, que yo era una persona asalariada. [...] Entonces se llevaron a la fuerza un toro, un toro aproximadamente de 3 millones de pesos. [...] En este momento estamos en el sector rural, con eso que están extorsionando la gente, pero la gente no denuncia por miedo. [...] Ellos me dijeron: “ahora no es que vas a ir de sapa a contar lo que está sucediendo acá”. [...] Inclusive le dije: ustedes están actuando igual que las Autodefensas; entonces me dijo: “¿por qué?, no digas eso!”. Y le digo: “porque están llegando así, a querer amedrentar la gente, a quererla amenazar y a querer todo a la fuerza”»⁴⁷².

La Defensoría del Pueblo, las ONG y las organizaciones y comunidades en el territorio han denunciado también la presencia de paramilitares y nuevas mafias del narcotráfico como las Águilas Negras y el Clan del Golfo. Estos grupos habrían llevado a cabo acciones de control social como restricciones a la movilidad y exterminio

⁴⁷⁰ RCN Radio, «En 2021, al menos 272 menores indígena han sido reclutados en Cauca».

⁴⁷¹ Entrevista 582-VI-00029. Víctima, mujer, sur del Valle del Cauca, indígena.

⁴⁷² Entrevista 440-VI-00011. Víctima, lideresa, sur del Valle del Cauca.

de ladrones de motocicletas. En 2017 también se registraron amenazas mediante panfletos firmados por el Clan del Golfo contra el CRIC y «organizaciones de derechos humanos, sindicalistas, reclamantes de tierras, defensores de presos de las FARC y ELN, los que hacen informes de derechos humanos, miembros de las organizaciones políticas de las FARC, Congreso de los Pueblos, Unión Patriótica, Marcha Patriótica, entre otros»⁴⁷³. Según datos de la Policía, durante el 2019 circularon 114 panfletos en el Cauca, de los cuales 39 eran alusivos a GAO, 22 a las Águilas Negras, quince al Cartel de Sinaloa, once a facciones disidentes de las FARC-EP, siete al ELN, siete al Clan del Golfo, cuatro al EPL y dos a la segunda Marquetalia, entre otros, lo cual evidencia un gran interés de diferentes estructuras armadas en el territorio⁴⁷⁴.

El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo indicó que desde 2017 en el norte del Cauca, el sur del Valle y el Pacífico hacen presencia los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. En municipios PDET como Caloto, Corinto y Miranda amenazaron a través de panfletos a funcionarios del nivel municipal y regional encargados de implementar el Acuerdo de Paz; de igual manera, en la zona rural de Jamundí, Pradera y Florida, autoridades y pobladores atribuyeron a esos carteles algunas amenazas, secuestros y asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y miembros de la Guardia Indígena. Sin embargo, otras versiones de la prensa y algunos testimonios de excombatientes de las FARC-EP señalan que en realidad los autores de estas amenazas son las disidencias de la guerrilla:

«La Dagoberto Ramos y la otra, que no me acuerdo, [...] son las dos que se crearon ahí, que empezaron a operar aquí, pero son lo mismo. Es el mismo grupito, pero que tenía dos nombres distintos, pero ambos estaban bajo el lineamiento de Brandon que, digamos, era el enlace que ellos tenían directo con Gentil Duarte. Cuando ellos entran aquí se hacen llamar Cartel de Sinaloa, cuando inician las confrontaciones con las comunidades indígenas [...]. Entonces ahí ellos se empiezan a hacer pasar como Cartel de Sinaloa, pues para crear el temor de la gente y todo eso, pero, cuando empiezan a ver ese rechazo, ellos vuelven y toman el nombre de disidencia, le ponen el nombre de la Dagoberto Ramos y esta otra y empiezan a operar como disidencia. Pero en sí ellos son lavaperros del Cartel de Sinaloa que controla las cocinas de ese territorio. Al Cartel de Sinaloa no le interesa las disputas territoriales, simplemente que sus laboratorios estén funcionando»⁴⁷⁵.

Por otro lado, en el norte del Valle y el sur del Eje cafetero perduraron los reductos de Los Rastrojos y Los Machos, quienes continúan la confrontación por el control del narcotráfico. Según la Defensoría del Pueblo, estos grupos habrían hecho circular panfletos anunciando labores de «limpieza social», amenazando de muerte a «violadores,

⁴⁷³ Defensoría del Pueblo, «Informe de riesgo N° 010-17 A.I.», 14.

⁴⁷⁴ Sistema de Alertas Tempranas Defensoría del Pueblo, «Alerta Temprana N° 019-20».

⁴⁷⁵ Entrevista 582-PR-02416. Actor armado, hombre, ex combatiente FARC.

extorsionistas, cuatrerros, sapos, ladrones, milicianos y bandas de microtráfico». La Defensoría identificó algunos desplazamientos forzados, presiones, amenazas y extorsiones cometidas por esos grupos⁴⁷⁶.

En Cali, sobre todo en las comunas más empobrecidas (14, 15 y 21), se registró la presencia de milicias urbanas del Frente de Guerra Occidental del ELN, Los Rastrojos, el Clan del Golfo, los carteles mexicanos y oficinas de cobro de las mafias. Estos actores estarían involucrados en el tráfico de drogas y de personas y el reclutamiento de jóvenes. Se reportó además la circulación de panfletos amenazando a líderes de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados e integrantes del Partido FARC (rebautizado Comunes en 2017), lo cual desencadenó desplazamientos intraurbanos⁴⁷⁷.

La presencia y las acciones violentas de todos esos grupos ilegales han impulsado nuevamente el desplazamiento forzado. Entre 2016 y 2020 la Unidad de Víctimas registra 11.515 víctimas. Suárez, Corinto, Miranda, Buenos Aires y Caloto fueron los municipios más afectados. Por otro lado, según los datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en el norte del Cauca se han presentado trece masacres entre 2016 y mediados de 2021 que han dejado un saldo de 51 civiles muertos. Los municipios de Santander de Quilichao y Corinto son los que presentan un mayor número de masacres (tres cada uno), seguidos de Suárez, Buenos Aires (dos cada uno), Miranda y Toribio (una masacre cada uno).

La persistencia de la guerra en el norte del Cauca se explica en gran parte por las economías de guerra y una de sus causas es la minería. Pese a que los distintos grupos poblacionales del territorio manifiestan su rechazo a la minería ilegal y la megaminería⁴⁷⁸ de manera casi unánime, pues la ven como una amenaza al territorio, a la autonomía, al medio ambiente (en especial contra las fuentes hídricas) y a la vida misma, existen personas que se han sumado a las explotaciones ante la falta de opciones laborales, desempeñándose directamente en la extracción, en la prestación de servicios, en el alquiler y venta de predios o en la conducción de las máquinas⁴⁷⁹. Junto con la

⁴⁷⁶ Defensoría del Pueblo, «Informe de riesgo N° 010-17 A.I.».

⁴⁷⁷ Defensoría del Pueblo, *Informe especial de riesgo: economías ilegales, actores armados y nuevos escenarios de riesgo en el posacuerdo*.

⁴⁷⁸ «En el caso de la minería a gran escala las multinacionales han realizado 652 solicitudes que equivalen a 1.106.667 hectáreas del departamento [Cauca] [...]. Aproximadamente las 2/3 partes del área total del departamento están solicitadas en concesión para exploración. A raíz de esto, las diferentes colectividades han hecho un pliego de peticiones desde la plataforma de la cumbre agraria étnica y popular. En este espacio se le exige al Gobierno nacional una nueva política nacional minero-energética con participación activa de las comunidades; que se detenga la concesión de títulos mineros hasta no se concierte con los territorios; y que se revisen los títulos mineros que han sido aprobados en territorios ancestrales indígenas y afros sin consulta previa. Una de las zonas más afectadas por la solicitud de títulos mineros es el macizo colombiano, conocido por la riqueza de sus fuentes hídricas». Duque, *Capacidades locales para la paz. Recursos y retos para el postconflicto en la región Cauca*, 24.

⁴⁷⁹ Duque, *Capacidades locales para la paz. Recursos y retos para el postconflicto en la región Cauca*.

presión económica, el problema de la minería ilegal ha crecido como resultado de la coacción por parte del ELN, las disidencias, los paramilitares, las mafias locales y particulares, tal y como lo expresó una lideresa afro del norte del Cauca:

«La minería ilegal en el territorio es fortín para la subsistencia de grupos armados, pero también es un atractivo para los empresarios, porque en este territorio se han hecho concesiones de títulos mineros a multinacionales y ha llegado la minería a cielo abierto con retroexcavadora y cúbcos [perforaciones] [...]. En Suárez y Buenos Aires esta situación fue un combustible para subsidiar a grupos armados en su momento, pues pedían cuotas, es decir, pedían impuestos a quienes estaban realizando esta minería en su momento, y pues, la gente, desprotegida, les tocaba pagar estos impuestos. Y pues esta situación hoy no ha cambiado, sigue la minería fortaleciendo y manteniendo a grupos armados, siguen cobrando vacunas, siguen atemorizando a la gente»⁴⁸⁰.

Mientras que hace décadas las insurgencias defendían la explotación tradicional frente a los modelos de extracción a gran escala con el objeto de legitimar su presencia, paulatinamente las comunidades fueron obligadas a adoptar modelos extractivos que produjeran mayores cantidades de capital (como la mecanización y la utilización de mercurio y cianuro), sin importar los impactos sobre el ambiente, la sociedad y los derechos humanos. Las FARC-EP dominaban los municipios caucanos donde se concentra la actividad extractiva (Timbiquí, López de Micay, Guapi, Patía, El Tambo, Bolívar, La Vega, Santander de Quilichao, Suárez, Caloto y Buenos Aires), pero tras su desarme y desmovilización se han intensificado las disputas entre los nuevos actores armados. Debido a la tendencia histórica de las comunidades y organizaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas caucanas de oponerse a la presencia de grupos armados en sus territorios y a las actividades mineras ilegales, han aumentado las presiones violentas sobre ellas⁴⁸¹. La situación es tan crítica que muchos habitantes de la subregión tenían claro hace años que los diálogos con las FARC-EP serían irrelevantes, pues «nunca va a existir la paz con megaminería»⁴⁸².

La otra economía de guerra importante en la región es el narcotráfico. Aunque el norte del Cauca no es una zona predominantemente cocalera —de hecho, la mayoría de los cultivos se ubican en el sur y la costa Pacífica—, sí es una subregión crucial para el cultivo de marihuana, especialmente en los municipios ubicados sobre la cordillera Central (Caloto, Corinto, Miranda y Toribío). Además, gracias a sus conexiones con el Pacífico y el sur y el centro de Colombia, es una de las principales rutas por donde se mueven todos los productos de las economías ilegales (hoja de coca, pasta base, cocaína, marihuana, amapola y oro), tanto por la parte alta como por la plana. La presencia

⁴⁸⁰ Entrevista 1036-PR-02136. Lideresa afrodescendiente, norte del Cauca.

⁴⁸¹ Defensoría del Pueblo, *Informe especial de riesgo: economías ilegales, actores armados y nuevos escenarios de riesgo en el posacuerdo*.

⁴⁸² Duque, *Capacidades locales para la paz. Recursos y retos para el postconflicto en la región Cauca*, 25.

de grupos armados y de la persistencia de la violencia contra comunidades y líderes sociales está ligado a la disputa por esas rentas.

El norte del Cauca conforma el centro de producción de marihuana más grande de Colombia. En los relatos de los pobladores, de los funcionarios y de los periodistas es común la comparación de las montañas con un pesebre que en las noches se ilumina gracias a los invernaderos clandestinos instalados en medio de la densa vegetación. Pese a las dificultades metodológicas para la medición de los cultivos, en 2016 la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc) calculaba que en Cauca había 507 km² de cultivos de marihuana en invernadero. Una buena porción de ellos (58 % del total) se ubicaron en el norte y el centro del departamento: Toribío (21 %), Corinto (14 %), Caloto (9 %), Santander de Quilichao (8 %), Miranda (3 %), Jambaló (1 %), Buenos Aires (1 %) y Suárez (1 %)⁴⁸³.

Aunque según datos de Naciones Unidas desde 2014 los cultivos de coca en Cauca mostraron una tendencia a la baja⁴⁸⁴, la siembra y el tráfico de marihuana repuntó, sin que hasta la fecha sea posible hablar del monopolio de una organización o de un gran jefe que lo controle completamente. Quizá sea este modelo de explotación, constituido sin mayor planificación y del cual dependen cientos de familias de comunidades campesinas y étnicas, la explicación de la persistencia de esta actividad por más de cincuenta años.

Según declaraciones de habitantes y funcionarios, desde 2015 aparecieron en la región hombres desconocidos ofreciendo tres millones de pesos a quien sembrara marihuana en su tierra, prometiendo una ganancia adicional de nueve millones más de pesos por la venta del producido tras la cosecha que dura en promedio tres meses. Aunque los pobladores son conscientes de que esos negocios están directamente articulados con la violencia y la corrupción en los territorios y han manifestado expresamente su intención de participar en una transformación económica basada en el agroecoturismo, la falta de alternativas económicas hace que los cultivos de uso ilícito sean la única fuente viable de sustento para muchos campesinos, indígenas y afrodescendientes⁴⁸⁵.

⁴⁸³ Unodc, *Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2016*.

⁴⁸⁴ «Según un reciente informe sobre los cultivos de coca en Colombia, en el departamento del Cauca muestran una baja en el 2013 de un 23 % con respecto del año anterior, con 3.326 hectáreas sembradas. Estas bajas pueden ser explicadas por dos razones. La primera, según el trabajo de campo, se relaciona con el incremento del precio del oro, lo que hace que los recursos que se pueden adquirir por la minería ilegal sean mejores que los percibidos por cultivos de coca. La segunda razón está asociada al enorme subregistro que tienen las cifras nacionales sobre los cultivos de uso ilícito. En el trabajo de campo se logró identificar que en la zona norte existen amplias zonas, especialmente en alta montaña y piedemonte, de territorios indígenas y campesinos con cultivos de coca y marihuana que en las estadísticas no aparecen, y parecieran municipios libres de estos cultivos». Duque, *Capacidades locales para la paz. Recursos y retos para el postconflicto en la región Cauca*, 26.

⁴⁸⁵ *Ibíd.*

Desde la desmovilización de las FARC-EP, en la región floreció un *boom* marimbero que atrajo a cientos de familias indígenas y campesinas. En esa zona se ha sembrado amapola, coca y los cultivos de marihuana no son ninguna novedad, pero se dispararon por el aumento de los precios. En 2018, mientras la arroba (25 libras) de hoja de coca costaba 35.000 pesos, la libra de «moño» de marihuana la pagaban a 40.000. A eso se sumó la ventaja del procesamiento fácil y rápido: mientras que la hoja de coca necesita laboratorios para obtener la base o el clorhidrato de cocaína, con la marihuana basta con «cortar la mata, extraer el moño y empacarlo», como le explicó un campesino a un medio de comunicación. En ese momento se estimaba que cada familia tenía entre 1.500 y 2.000 matas de marihuana sembradas en sus parcelas y los cultivos podían ocupar entre 7.000 y 12.500 hectáreas. La variedad predominante era la denominada *creepy*, creada a través de ingeniería genética y caracterizada por su alta concentración de tetrahidrocannabinol (THC, principal psicoactivo del cannabis) y su eficiencia (se puede cosechar cada tres meses). Desde 2015 el precio de la *creepy* se incrementó en un 45 % y pasó de 778.900 pesos a 1.094.100 por kilogramo⁴⁸⁶. Campesinos e indígenas se encargaban de las tareas productivas, mientras que los grupos armados posfarc se ocupaban de la seguridad y de cobrar cuotas a los traficantes. La marihuana sembrada en el norte del Cauca es comercializada dentro y fuera del país por bandas ilegales radicadas en Cali, Popayán, Medellín, Bogotá y otras ciudades intermedias⁴⁸⁷.

Detrás de ese auge marimbero, de nuevo vienen los problemas. Por ejemplo, dirigentes de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) manifestaron ante las autoridades y los medios de comunicación que la situación no solo ha incrementado el consumo local, sino también la presencia de forasteros y grupos armados que han disparado la delincuencia, las riñas, las amenazas, la violencia sexual, los robos y los asesinatos⁴⁸⁸. Para algunos pobladores de la región, el éxito del narcotráfico solo es explicable por la permisividad de la fuerza pública y los acuerdos entre poderosos actores legales e ilegales en el territorio:

«Uno tiene que decir aquí que es permisiva la fuerza pública. Porque uno no entiende, yo soy de Corinto y todas esas lomas, y las de Tacueyó, están iluminadas. Está la vía principal y nunca cogen un cargamento; nunca hacen control de los insumos. Y cuando cogen, cogen algo poquito; cogen a uno con una arrobita y lo condenan a diez, doce, ocho, no sé cuántos años, pero los grandes cargamentos nunca aparecen. Entonces, uno dice, bueno, tiene que haber complicidad. Yo me atrevo a decirlo, porque uno, ¿cómo lo entiende? ¿De qué otra manera?»⁴⁸⁹.

Esto decían los pobladores en un informe entregado a la Comisión:

⁴⁸⁶ Semana, «El 'triángulo de oro' del cannabis».

⁴⁸⁷ Camilo González, «Cauca: reacomodos territoriales violentos en el post-acuerdo».

⁴⁸⁸ Semana, «El 'triángulo de oro' del cannabis».

⁴⁸⁹ Entrevista 295-VI-00005. Mujer, indígena, víctima, Norte del Cauca.

Alguna gente habla [de] que hay algunos acuerdos entre grupos narcotraficantes y empresariales con las disidencias; acuerdos muy de ciertas personas, se atreven a hablar de que, de las disidencias, a lo mucho cuatro o cinco personas saben de estos acuerdos, e igual de los otros sectores [...]. De ahí para abajo la gente no sabe, los mandos medios, los mandos escuadra, los mandos operativos creen que están con la revolución, que están siguiendo el legado Marulanda; porque esto es lo que históricamente han conocido, lo que culturalmente conocen y lo que sus mandos ahora les dicen. Es una teoría que ojalá no sea cierta, pero que es posible. Explicaría todo esto que está pasando: que en el Cauca, en el norte del Cauca, también en el Pacífico y en otras regiones del país se estén dando con esa facilidad todas estas masacres, estas acciones militares, de los paramilitares, de las insurgencias, la disidencia de [las] FARC, con tanta militarización en los territorios. No es muy descabellado pensar que efectivamente hay unos acuerdos muy por encima. ¿En qué terminarán estos acuerdos? Pues que alguna gente, en un tiempo, saldrá para el exterior o se quedará en zonas más alejadas con mucha plata, con ejércitos propios que los cuiden, y otros seguirán en lo que se llama la lucha armada del pueblo. Así quedará develado efectivamente que hubo unos acuerdos que al final le servirán a los más poderosos, en este caso el Estado, que logró desarticular procesos sociales, acabar con liderazgos sociales, impedir que unieran procesos regionales o nacionales, etcétera⁴⁹⁰.

A la par de la guerra y el narcotráfico, en el posacuerdo las comunidades del norte del Cauca y sur del Valle siguen aquejadas por los conflictos por la tenencia de la tierra entre las empresas, los consejos comunitarios, los resguardos indígenas y los campesinos; de igual manera, persisten las disputas alrededor de las zonas de reserva forestal y el acceso al agua entre la agroindustria y las comunidades. La gente en Corinto, Caloto, Miranda, Padilla y Guachené, por ejemplo, le sigue pidiendo a las empresas que dejen de sembrar pino y caña, que den prioridad a cultivos de alimentos y cesen la ocupación de las zonas ancestrales de las comunidades indígenas. Por otro lado, en Suárez y Buenos Aires las comunidades afro siguen exigiendo la finalización de los proyectos de extracción de minerales en sus territorios. La respuesta del Gobierno, tanto a la guerra como a estos conflictos interculturales y ambientales, sigue siendo la militarización, desconociendo las condiciones de pobreza que viven las comunidades, la corrupción de las instituciones y sus funcionarios y las afectaciones que traen los proyectos económicos y la violencia a las dinámicas y el tejido social de las comunidades⁴⁹¹. Lejos de cesar, la guerra y la crisis económica tienden a acentuarse. No obstante, las comunidades y organizaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes del Valle y el Cauca siguen anhelando que las promesas de paz y desarrollo algún día se hagan realidad.

⁴⁹⁰ Informe 262-CI-01224, Corporación Ensayos, «La guerra no es una balacera», 141.

⁴⁹¹ Indepaz, «Los focos del conflicto en Colombia».





Conclusiones

El modelo económico implementado en la región desde mediados del siglo XX ha traído resultados ambivalentes para la gente del Valle y el Cauca. Por un lado, la región ha disfrutado de niveles de bienestar, modernización y prosperidad inéditos. El flujo de capital ha traído consigo beneficios privados, pero también públicos, como el mejoramiento de la infraestructura y el acceso a servicios públicos y bienes de consumo. Sin embargo, el fomento privilegiado a la agroindustria azucarera instalada en la planicie del valle geográfico del río Cauca, en detrimento de la economía agrícola de las laderas de las cordilleras Central y Occidental, ha dejado a las economías campesinas y étnicas más vulnerables a la crisis y a la consecuente penetración de los capitales ilegales. Además, desde los años cincuenta (e incluso desde antes, si se tienen en cuenta los antecedentes coloniales y las Quintiniadas), el ejercicio de la violencia por parte de actores privados con el objetivo de salvaguardar la estructura de la tierra, proteger sus privilegios y mantener cerrado el régimen político ha sido una de las piedras angulares de la guerra en la región y es un importante factor de persistencia. El resultado de esos fenómenos ha sido una sociedad con altos niveles de inequidad y con conflictos sociales irresueltos que terminan promoviendo la violencia.

La transformación política y económica que ha vivido la región desde mediados del siglo XX se ha construido sobre una paradoja que ayuda a comprender el origen y el comportamiento de la violencia: el campesinado y la población étnica son simultáneamente la solución y la amenaza para el modelo productivo y el régimen político regional y local. Por un lado, constituyen la fuente principal de mano de obra al servicio de la agroindustria, una capa importante de los consumidores y el grueso del electorado necesario para acceder al manejo del Estado. Pero, al mismo tiempo, sus luchas en pro de la tierra, la defensa del medio ambiente y diferentes derechos económicos, políticos y sociales frenan la expansión y la rentabilidad agroindustrial y bloquean el posicionamiento político de ciertos proyectos y sectores en el Gobierno regional y local. Esto, sumado a las doctrinas anticomunistas y contrainsurgentes, explica que históricamente la agitación social haya encontrado una respuesta violenta por parte del Estado y los grupos de civiles armados. Paradojas similares han enfrentado las guerrillas, los paramilitares y los ejércitos de narcos, pues a la par que necesitan a la gente para dinamizar las economías ilegales, legitimar sus proyectos político-militares (lo cual es especialmente importante en una región tan étnicamente diversa como el Valle y el Cauca) e incluso engrosar las tropas, les estorban debido a sus reivindicaciones y a sus ejercicios de autoridad territorial donde ningún actor armado es bienvenido.

Desde los años cincuenta, en la región hay un vínculo entre el ejercicio de la violencia y la propiedad y uso de la tierra. En algunos casos, el vínculo fue claro y directo: particulares (narcotraficantes, paramilitares, empresarios, terratenientes) desplazaron a la población campesina y las comunidades étnicas a través de diversas modalidades de violencia física (amenazas, asesinatos, masacres y violencias sexuales aleccionadoras), coerciones sobre la producción y el territorio (daño de cultivos, propiedades y

fuentes de agua) y fraudes. En otros, diferentes particulares que no fueron responsables directos de la violencia aprovecharon sus efectos (descenso del precio, abandono) para adquirir tierra a través de medios legales.

En el Valle y el Cauca, miles de personas han tenido que abandonar su tierra y su cultura acuciados por la pobreza y la violencia y huir desde las zonas planas hacia las montañas o las ciudades, donde muchas veces se encuentran con más violencia, miseria, racismo y abandono. Por esa razón, esta región necesita promover con mayor decisión un modelo de ordenamiento del territorio participativo, intercultural, que se salga de la lógica de los enemigos en guerra y asegure la ocupación productiva de la tierra, promoviendo la integración de campesinos, pueblos étnicos y pobladores de los barrios populares de Cali y las otras ciudades de la región a los circuitos de producción de riqueza y bienestar. De lo contrario, la ciudad y la región seguirán presenciando estallidos sociales y conflictos violentos. Varios de los jóvenes que se movilizaron en el paro del 2021 le dijeron a la Comisión que marchan y pelean a pesar de la represión y la violencia porque no tienen nada que perder, porque la pobreza, la opresión y la exclusión que viven es casi igual a la muerte.

Desde las primeras décadas del siglo XX, en el Valle y el Cauca comenzaron a surgir organizaciones fuertes, principalmente sindicatos y agrupaciones campesinas, a las cuales luego, en los setenta, se sumarían organizaciones étnicas que hoy en día son referentes nacionales, como el CRIC. Sus reivindicaciones económicas, políticas y sociales —que progresivamente se conectaron más directamente con temas del conflicto armado, como la defensa de los derechos humanos y la exigencia de la salida negociada al conflicto armado— desde el principio fueron objeto de dura represión y persecución por parte de la fuerza pública, ejércitos privados de los carteles, «escuadrones de la muerte» y estructuras paramilitares.

Desde los años sesenta, los momentos de efervescencia en la organización y la movilización son respondidos con violencia. Tal proceder se ha justificado frecuentemente bajo el deber constitucional de defender los bienes (públicos y privados) y los derechos de los integrantes de la fuerza pública y de las personas que no participan o no están de acuerdo con la movilización; de igual manera, se arguye la penetración de estructuras criminales y de las guerrillas en las organizaciones, marchas, paros y protestas. Aunque bajo el principio de la combinación de las formas de lucha, las directrices de los planes estratégicos para la toma del poder y la progresiva «narcotización» del conflicto eso fue lo que sucedió —y sigue sucediendo—, la represión policial, militar y judicial ha afectado masiva e indiscriminadamente al movimiento social, inclusive durante comprobadas actuaciones pacíficas y en el marco de la legalidad.

La violencia también viene del lado insurgente. Aunque las guerrillas crecieron gracias al trabajo político con las organizaciones sociales y las comunidades y al principio las alentaron, luego las terminaron violentando cuando la estrategia militar adquirió prelación y cuando la gente se les opuso, por ejemplo, en los casos en los que criticaron abiertamente las tomas o los secuestros, o cuando la Guardia Indígena

reclamó autonomía territorial y rechazó la presencia de todos los actores armados en el territorio, tanto legales como ilegales.

El norte del Cauca fue uno de los principales «laboratorios» de la estrategia de conquista de poder de las FARC-EP tras la radicalización que sobrevino a la Octava Conferencia (1993). Las violentas y reiteradas tomas en municipios como Caldonio y Toribío demostraron la desconexión de la guerrilla con su base social, la preeminencia de la estrategia bélica sobre la política y los mayores niveles de indistinción en la conducción de las hostilidades y el escalamiento de la guerra, expresada en la utilización de armamento irregular y su máxima insignia: los cilindros bomba. De igual forma, la deplorable estrategia del secuestro emprendida por las guerrillas en la región (sobre todo por el ELN) significó un punto de inflexión en la guerra no solo en el suroccidente, sino en todo el país. Los secuestros masivos de la iglesia La María, el kilómetro 18 y los doce diputados, junto con las «pescas milagrosas» y el secuestro individual de miles de personas (incluyendo varios menores de edad), minaron de manera irreparable el estatus político de las guerrillas y la defensa de la salida negociada al conflicto y apuntalaron el anhelo por seguridad a cualquier precio y las salidas de fuerza que tuvieron impactos cruciales en el desarrollo de la guerra desde los años noventa.

El narcotráfico ha sido central en el desarrollo de la guerra en la región desde los años setenta y aún hoy, pese a sus profundas mutaciones, es su piedra angular. El Cartel de Cali, el Cartel del Norte del Valle, el Bloque Calima, los ejércitos de narcos, las FARC-EP y más recientemente el Clan del Golfo, las disidencias y los carteles mexicanos, no han escatimado en violencia para controlar el negocio. Desde los años setenta, el quid del narcotráfico en el suroccidente no ha sido solo el funcionamiento de la cadena de siembra, procesamiento y comercialización de la coca, la marihuana y la amapola, sino la incorporación de las mafias como agentes de cambio en el uso del suelo, el paisaje y las relaciones de propiedad en el contexto de las crisis económicas que han sufrido las poblaciones campesinas y étnicas. Grandes propietarios y narcos reconvirtieron las actividades económicas de la región: las tierras de ladera, especialmente en la cordillera Occidental, comenzaron a destinarse a la producción hortofrutícola, la silvicultura, la ganadería extensiva, el turismo y la siembra de cultivos de uso ilícito, desplazando aún más a los pueblos étnicos y al campesinado pequeño y mediano del usufructo de la tierra. Resolver el problema del narcotráfico es imperativo en el camino de la construcción de paz. Desarmar la industria ilegal alrededor de la coca y la marihuana no solo disminuiría drásticamente la violencia en la región, sino que podría convertirse en una rentable alternativa económica.

El otro combustible de la guerra en la región, particularmente en el norte del Cauca, ha sido la minería, tanto la megaminería como la minería ilegal. Para resolver este problema se necesita avanzar en una propuesta de ordenamiento territorial colectiva, en el respeto y garantía de los derechos territoriales de las poblaciones étnicas y campesinas y desmontar los entramados de corrupción que mantienen la ilegalidad

y la criminalidad, entramados que incluyen políticos, gobernantes locales y regionales, miembros de la fuerza pública, empresarios y algunos sectores de las comunidades.

La sólida estructuración y movilización de las comunidades y las organizaciones en el suroccidente ha desatado violencia desde todos los bandos. Sin embargo, al mismo tiempo, la fuerza y la resistencia de campesinos, indígenas, afrodescendientes, sindicatos, estudiantes, mujeres y población LGBTIQ+, entre otros colectivos, es la que ha permitido aguantar la arremetida del Estado, los paramilitares, las guerrillas y los ejércitos de narcos y recomponer, por lo menos en parte, los lazos sociales, la cultura y los modos de vida deshechos por la guerra.

Los devenires de la guerra insurgente-contrainsurgente en la región, y en especial el dolor de las víctimas de todos los sectores sociales, impele a la Comisión a hacer un llamado a las disidencias, al ELN, a los paramilitares y a cualquier otro actor armado a reconocer que la guerra no es el camino. La Comisión también hace un llamado a sectores de las élites políticas y económicas, de la fuerza pública y del Estado en general a dejar de ver la organización y movilización popular como un enemigo, a promover el diálogo democrático de las diferencias, un modelo de seguridad para la paz y un modelo de desarrollo económico incluyente que ponga en el centro el bienestar de toda la población. La violencia no es la vía para tramitar los intereses, solucionar los conflictos ni arreglar los problemas. Por esa vía siempre se terminan traicionando los ideales y los objetivos y dejando desolación y muerte. Basta ya. Es la hora de la democracia y la paz.

Referencias

- Alexievich, Svetlana. *La guerra no tiene rostro de mujer*. Penguin Random House, 2015.
- Almarío, Oscar. *La configuración moderna del Valle del Cauca 1850-1940: espacio, poblamiento, poder y cultura*. Popayán: Universidad del Cauca, 2013.
- Ararat, Lisifrey et al. *La toma. Historias de territorio, resistencia y autonomía en la cuenca del Alto Cauca*. Bogotá: Observatorio de Territorios Étnicos, Pontificia Universidad Javeriana; Consejo Comunitario Afrodescendiente de La Toma, Suárez, Cauca.
- Asocaña. «Sector agroindustrial de la caña». Acceso 15 de febrero de 2022. <https://www.asocana.org/publico/info.aspx?Cid=215#:~:text=En%20esta%20regi%C3%B3n%20hay%20actualmente,de%202.750%20cultivadores%20de%20ca%C3%B1a>.
- Betancourt, Darío y García, Martha. *Matones y Cuadrilleros. Origen y evolución de la violencia en el occidente colombiano 1946-1965*. Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1991.
- Betancourt, Darío. «Las cuadrillas bandoleras del norte del Valle, en la violencia de los años cincuenta». *Historia Crítica* 4 (julio, 1990): 57-68. <https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/histcrit4.1990.03>
- Caracol Radio. «Lo mejor, la operación Cali Libre». 14 de enero de 2003. https://caracol.com.co/radio/2003/01/14/judicial/1042498800_083188.html
- Cardona, Diego. «Desiertos verdes del suroccidente colombiano». *Revista Biodiversidad* (julio, 2009): 12-14. <https://grain.org/es/article/entries/1247-desiertos-verdes-del-suroccidente-colombiano>
- Catálogo de Microdatos de la Comisión de la Verdad ID 002-MD. Base anonimizada de víctimas de Minas Antipersonal MAP y Municiones Sin Explotar MUSE. Descontamina Colombia, 2019.
- Catálogo de Microdatos de la Comisión de la Verdad. Base de datos personas desplazadas (expulsión) por departamento y municipio a nivel nacional. Consejería Presidencial, para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. 2021.
- Celsia. «Central Hidroeléctrica Salvajina». Acceso 26 de mayo de 2022. <https://www.celsia.com/wp-content/uploads/2021/04/CENTRAL-HIDROELECTRICA-SALVAJINA.pdf>
- Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia. *El cultivo de la caña en la zona azucarera de Colombia*. Cali: Cenicaña, 1995.

- Centro Nacional de Memoria Histórica. “*Patrones*” y *campesinos: tierra, poder y violencia en el Valle del Cauca (1960-2012)*. Bogotá: CNMH, 2014.
- . *Bloque Calima de las AUC: depredación paramilitar y narcotráfico en el suroccidente colombiano*. Bogotá: CNMH, 2018.
- . *El caso de la Asamblea del Valle: Tragedia y reconciliación*. Bogotá: CNMH, 2018.
- . *Nuestra vida ha sido nuestra lucha. Resistencia y memoria en el Cauca indígena*. Bogotá: CNMH, 2012. <https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2012/cauca.pdf>
- . *Tomas y Ataques Guerrilleros (1965-2013)*. Bogotá: CNMH, 2016.
- . *Trujillo. Una tragedia que no cesa*. Bogotá: CNMH, 2011. <https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/Trujillo-Una-tragedia-que-no-cesa.pdf>
- Coetzee, John Maxwell. *Contra la censura: ensayos sobre la pasión por silenciar*. Debate, 1996.
- Comisión de la Verdad. «Dime la verdad». 21 de diciembre de 2018. Video. <https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/dime-la-verdad-video-lirico>
- . «Encuentro por la Verdad: Toluviejo, once historias de vida». 27 de octubre de 2021. Video. <https://www.youtube.com/watch?v=YAS0ZN0YluM>
- . «La Guardia Indígena, cuidadora del territorio y la vida». 31 de octubre de 2020. <https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/guardia-indigena-cuidadora-del-territorio-y-la-vida>
- . «Lineamientos metodológicos. Escuchar, reconocer y comprender». Módulo de Captura, Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. 2019.
- . «Reconocimiento de responsabilidades en el secuestro de Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverri». 7 de agosto de 2021. Video. https://www.youtube.com/watch?v=iIuhD960_60
- . «Reflexiones en torno al valor de la escucha profunda». 28 de agosto de 2021. https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=537931037469999
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos. «Capítulo II. Derecho a la Vida. Caso 7348: Zambrano Torres». <http://www.cidh.org/countryrep/colombia81sp/Capitulo2.htm>.
- Congreso de la República. *¿En qué va la paz 5 años después de la firma del acuerdo final?* Bogotá, noviembre de 2021.
- Correa-García, Esteban, Vélez-Correa, Jorge, Zapata-Caldas, Emmanuel, Vélez-Torres, Irene y Figueroa-Casas, Apolinar. «Transformaciones territoriales producidas por la agroindustria de la caña de azúcar en las comunidades étnicas de López

- Adentro y El Tiple, Colombia». *Land Use Policy* 76 (2018): 847-860. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.03.026>
- Corte Constitucional. Sentencia T-1045 de 2010. <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/t-1045a-10.htm>
- Corte Federal de Brooklyn (USA) y la Fiscalía General de la Nación (Colombia). «Transcripción de la declaración rendida por Luis Hernando Gómez». Nueva York, 15 de diciembre de 2020.
- Defensoría del Pueblo. Alerta Temprana n° 019-20. 8 de mayo de 2020.
- . Informe de Riesgo n° 010-17 A.I. 30 de marzo de 2017.
- . *Informe Especial: Economías ilegales, actores armados y nuevos escenarios de riesgo en el Posacuerdo*. 2018. <https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/economiasilegales.pdf>
- Delgadillo, Olga Lucia. «La caña de azúcar en la historia ambiental del valle geográfico del río Cauca (1864-2010)». Tesis de doctoral, Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, 2014. <https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/15735>
- Delgado, Johnny. *El bandolerismo en el Valle del Cauca (1946-1966)*. Secretaría de Cultura del Valle del Cauca, 2011.
- Dimitrijević, Nenad. «Justice beyond Blame: Moral Justification of (The Idea of) A Truth Commission». *The Journal of Conflict Resolution* 50 (n.º 3, 2006): 368-382.
- Duque, Javier. «La izquierda partidista en Cali 1958-2010. De las confrontaciones y el dogmatismo a los acuerdos y al pluralismo». *Perspectivas Internacionales* 7 (nº 1, 2011).
- Echandía, Camilo. «El conflicto armado colombiano en los años noventa: cambios en las estrategias y efectos económicos». *Colombia Internacional* 49-50 (2000): 117-134. <https://doi.org/10.7440/colombiaint49-50.2000.06>
- . «Cincuenta años de cambios en el conflicto armado colombiano (1964-2014)». *Revista Zero* (agosto, 2014): 1-14.
- El Espectador. «¿Por qué la minga indígena resiste tanto tiempo?». 28 de marzo de 2019. <https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/por-que-la-min-ga-indigena-resiste-tanto-tiempo-article/>
- . «El fin del imperio Henao». 28 de diciembre de 2012. <https://www.elespectador.com/judicial/el-fin-del-imperio-henao-article-394404/>
- . «El paro de los corteros de caña». 25 de septiembre de 2008. <https://www.elespectador.com/opinion/editorial/articulo-el-paro-de-los-corteros-de-cana/>
- . «Los Rastrojos siguen en guerra». 29 de junio de 2008. <https://www.elespectador.com/judicial/los-rastrorjos-siguen-en-guerra-article-23010/>
- . «Primer excomandante de las Farc asesinado después del proceso de paz». 14 de mayo de 2019. <https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/primer-excomandante-de-las-farc-asesinado-despues-del-proceso-de-paz-article/>

- . «Tomas de pueblos por las FARC: nunca más». 26 de junio de 2017. <https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/tomas-de-pueblos-por-las-farc-nunca-mas-article/>
- El País. «Empresarios trajeron las AUC al Valle: Ever Veloza». 28 de enero de 2008. <http://historico.elpais.com.co/paisonline/notas/Enero282008/jud02.html>
- . «En Cali aún hay cicatrices de la guerra entre carteles del narcotráfico». 1 de diciembre de 2013. <https://www.elpais.com.co/judicial/en-cali-aun-hay-cicatrices-de-la-guerra-entre-carteles-del-narcotrafico.html>
- . «La “guerra del hampa” en Cali». 25 de julio de 1973.
- El Tiempo. «¿Por qué están matando a los reincorporados de las FARC?». 19 de mayo de 2019. <https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/por-que-estan-matando-a-los-reincorporados-de-las-farc-363678>
- . «Así conocimos a ese tal Tirofijo, relata anciano de 82 años». 21 de marzo de 2009. <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4892991>
- . «Cauca se resiste a seguir siendo escenario del conflicto: Gobernador». 3 de octubre de 2016. <https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/reaccion-desde-cauca-sobre-resultado-plebiscito-42037>
- . «Condenan a 11 años de cárcel a exjefe de seguridad de ingenio por nexos con paramilitares», 26 de enero de 2010. <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7041408>
- . «Guerra entre FARC y Cartel de Cali». 20 de noviembre de 1992. <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-244490>
- . «Lamentable noticia para el fútbol». 17 de julio 1991. <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-121389>
- . «Las FARC secuestraron a mandatario». 27 de junio de 2002. <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1344107>
- . «Liberada la hermana de José Santacruz Londoño». 21 de enero de 1993. <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-20106>
- . «Paras amenazan a nueve alcaldes del Cauca». 8 de enero de 1999. <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-873402>
- . «Valle, ganó el sí pero resultado nacional no dio espacio para celebración». 3 de octubre de 2016. <https://www.eltiempo.com/colombia/cali/plebiscito-en-el-valle-el-si-tuvo-un-52-44-por-ciento-frente-al-47-55-del-no-33960>
- Empresa de Energía del Pacífico (EPSA). «Nosotros». Recuperado de <http://portal.epsa.com.co/nosotros/presencia-geogr%C3%A1fica/salvajina>
- Entrevista 046-VI-00031. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Florida, 2019.
- Entrevista 046-VI-00036. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Florida, 2019.

Entrevista 046-VI-00043. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Tuluá, 2019.

Entrevista 056-VI-00045. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Caldon, 2019.

Entrevista 057-PR-00909. Actor armado, militar, compareciente.

Entrevista 059-PR-00004. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Silvia, 2019.

Entrevista 068-AA-00001. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Cali, 2020.

Entrevista 068-CO-00029. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Pradera, 2019.

Entrevista 068-CO-00871. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Cali, 2021.

Entrevista 068-VI-00012. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Pradera, 2019.

Entrevista 068-VI-00027. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Cali, 2019.

Entrevista 068-VI-00030. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Cali, 2020.

Entrevista 068-VI-00031. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Cali, 2020.

Entrevista 068-VI-00033. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Cali, 2020.

Entrevista 068-VI-00034. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Cali, 2019.

Entrevista 068-VI-00040. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Cali, 2021.

Entrevista 070-PR-00886. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Popayán, 2020.

Entrevista 070-PR-00891. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Popayán, 2020.

Entrevista 070-PR-00893. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Popayán, 2020.

Entrevista 074-VI-00002. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Cali, 2019.

Entrevista 084-PR-00429 -39748. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Villavicencio, 2020.

Entrevista 1023-PR-02307. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Cali, 2020.

Entrevista 1036-PR- 02211. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Santander de Quilichao, 2020.

Entrevista 1036-PR- 02315. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Santander de Quilichao, 2020.

Entrevista 1036-PR-02576. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Santander de Quilichao, 2020.

Entrevista 1036-VI-00006. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Santander de Quilichao, 2020.

Entrevista 112-AA-00002. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Cali, 2020.

Entrevista 112-AA-00004. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Cali, 2020.

Entrevista 112-AA-00005. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Cali, 2020.

Entrevista 112-PR-02085. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Cali, 2020.

Entrevista 112-PR-02085. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Bogotá, 2019.

Entrevista 112-VI-00014. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Cali, 2019.

Entrevista 112-VI-00017. Tomada por Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Tuluá, 2019.

Entrevista 112-VI-00029. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Buga, 2019.

Entrevista 112-VI-00029. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Buga, 2019.

Entrevista 112-VI-00043. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Cali, 2020.

Entrevista 185-PR-00771. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Bogotá, 2020.

Entrevista 216-AA-00004. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Cali, 2019.

Entrevista 216-AA-00005. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Cali, 2019.

Entrevista 216-CO-00016. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Cali, 2019.

Entrevista 216-PR-00787. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Cali, 2020.

Entrevista 216-VI-00012. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Pradera, 2019.

- Entrevista 216-VI-00014. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Pradera, 2019.
- Entrevista 216-VI-00018. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Pradera, 2019.
- Entrevista 216-VI-00040. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Sevilla, 2019.
- Entrevista 216-VI-00043. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Tuluá, 2019.
- Entrevista 216-VI-00064. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Yumbo, 2019.
- Entrevista 216-VI-00109. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Cali, 2020.
- Entrevista 216-VI-00126. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Pradera, 2020.
- Entrevista 216-VI-00132. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Sevilla, 2020.
- Entrevista 216-VI-00142. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Cali, 2020.
- Entrevista 219-VI-00056. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Popayán, 2019.
- Entrevista 229-VI-00100. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Cali, 2020.
- Entrevista 229-VI-00128. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Virtual, 2020.
- Entrevista 230-PR-02003. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Cali, 2020.
- Entrevista 230-VI-00027. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Pradera, 2019.
- Entrevista 230-VI-00080. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Cali, 2020.
- Entrevista 230-VI-00083. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Virtual, 2020.
- Entrevista 236-VI-00005. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Cali, 2019.
- Entrevista 238-VI-00056. Líder de la comunidad de Tabaco, comunidad afrodescendiente.
- Entrevista 295-VI-00001. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Santander de Quilichao, 2019.
- Entrevista 295-VI-00005. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Toribío, 2019.

Entrevista 326-CO-00517. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Cali, 2020.

Entrevista 336-PR-00343. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Virtual, 2020.

Entrevista 353-VI-00002. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Cali, 2020.

Entrevista 421-VI-00017. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Tuluá, 2020.

Entrevista 431-PR-00066. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Tumaco, 2019.

Entrevista 434-VI-00022. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Toribío, 2020.

Entrevista 440-PR-000940. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Virtual, 2020.

Entrevista 440-PR-00259. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Cali, 2019.

Entrevista 440-PR-00759. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Cali, 2020.

Entrevista 440-VI-00011. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Jamundí, 2020.

Entrevista 532-VI-00012. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Cajibío, 2019.

Entrevista 582-PR-02416. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Cali, 2020.

Entrevista 582-VI-00002. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Palmira, 2019.

Entrevista 582-VI-00003. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Cali, 2019.

Entrevista 582-VI-00008. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Cali, 2019.

Entrevista 582-VI-00010. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Cali, 2019.

Entrevista 582-VI-00029. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Florida, 2020.

Entrevista 582-VI-00030. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Florida, 2020.

Entrevista 582-VI-00049. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Tuluá, 2020.

Entrevista 582-VI-00052. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Zarzal, 2020.

- Entrevista 582-VI-00057. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Cali, 2020.
- Entrevista 582-VI-00060. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Cali, 2020.
- Entrevista 582-VI-00062. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Cali, 2020.
- Entrevista 582-VI-00063. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Cali, 2020.
- Entrevista 582-VI-00069. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Cali, 2020.
- Entrevista 582-VI-00071. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Cali, 2020.
- Entrevista 582-VI-00075. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Cali, 2020.
- Entrevista 602-PR-00270. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Corinto, 2020.
- Entrevista 615-PR-00407. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Popayán, 2019-2020.
- Entrevista 660-VI-00011. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Bogotá, 2021.
- Entrevista 667-CO-00553. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Pereira, 2020.
- Entrevista colectiva 058-CO-00688. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Medellín, 2020.
- Entrevista colectiva 440-CO-00493. Tomada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Cali, 2020.
- Escobar, Cristina. *Experiencia de organización campesina en el Valle del Cauca. 1960-1980*. Bogotá: IMCA, 1987.
- Evento de instalación de la Comisión. «Palabras del presidente de la Comisión Francisco de Roux, S. J.». 2018.
- Fajardo, Samira. «La seguridad democrática y su impacto en la vida de las mujeres del Cauca». *Papel Político*, vol. 18, núm. 1, (enero-junio 2013). <https://www.redalyc.org/pdf/777/77727849008.pdf>
- Fuente de Archivo Externa 18081-OE-58. Fiscalía General de la Nación. «Presentación Contextualización BOAC». 2020.
- Fuente de Archivo Externa 18082-OE-69-30. Fiscalía General de la Nación. «Tomo XXX. Génesis Bloque Occidental Comandante Alfonso Cano FARC-EP». 2020.
- Fuente de Archivo Externa 28864-OE-237758. «Entrevista 010 organización campesina Valle del Cauca». 2019.

- Fuente de Archivo Externa 79085-OE-207639. Jurisdicción Especial para la Paz. «Documento de ampliación territorial de versión voluntaria colectiva».
- Fuente de Archivo Externa. Fiscalía General de la Nación «Tomo XXIX. Génesis Bloque Móvil Arturo Ruiz FARC-EP». 2019.
- Fuente de Archivo Externa. Fiscalía General de la Nación. «Tomo XXIX. Génesis Bloque Móvil Arturo Ruiz FARC-EP». 2019.
- Fundación Ideas para la Paz. *Capacidades locales para la paz. Recursos y retos para el post-conflicto en la región Cauca*. Bogotá, 2015. https://www.ideaspaz.org/especiales/capacidades-locales-para-la-paz/descargas/FIP_CartillasRegiones_04Cauca.pdf
- Fundación Paz & Reconciliación. *Grupos armados posfarc: una nueva espiral de violencia en Colombia*. 2021. <https://pares.com.co/wp-content/uploads/2021/08/Informe-DISIDENCIAS-DE-LAS-FARC-1.pdf>
- Fundación Smurft-Kappa. *Plan de manejo forestal 2014-2018*. <http://www.smurftkappa.com/Resources/Documents/Plan%20de%20Manejo%20Forestal%202014-2018.pdf>
- Gironza, Indira. «Memoria del movimiento estudiantil de 1971 en la Universidad del Valle: entre la política y la cultura». Tesis, Comunicación Social y Periodismo. Cali: Universidad del Valle, febrero de 2014. <https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/handle/10893/11321>
- González, Camilo. «Cauca: reacomodos territoriales violentos en el postacuerdo». *Razón Pública*, 16 de julio de 2018. <https://razonpublica.com/cauca-reacomodos-territoriales-violentos-en-el-post-acuerdo/>
- Guzmán, Álvaro. «Ciudad y violencia: Cali en el siglo XX». En *Historia de Cali, siglo XX. Tomo II: Política*, coordinado por Esteban Morera, 327-375. Cali: Universidad del Valle, 2012.
- Guzmán, Germán, Fals Borda, Orlando y Umaña, Eduardo. *La violencia en Colombia. Tomos I y II*. Colombia: Taurus, 2006.
- Holguín, José y Reyes, Miguel. «Generaciones de militantes y accionar colectivo del Movimiento 19 de abril, Cali-Colombia 1974-1985». *Testimonios* 4 (2015).
- Holguín, José y Reyes, Miguel. «Militancia urbana y accionar colectivo del M-19 en Cali, 1974- 1985. Un enfoque teóricamente situado». Trabajo fin de grado, Universidad del Valle, 2014.
- Hurtado, Teodora. «La construcción de un modelo de ciudadanía diferenciada: el empoderamiento político de la población afrocolombiana y el ejercicio de la movilización étnica». Memorias del Primer Coloquio Nacional de Estudios Afrocolombianos. Universidad del Cauca, Popayán 24 a 26 de octubre de 2001.
- Informe 110-CI-00217. Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca (ASOM) y Women's link worldwide. «Voces valientes. Sobrevivientes de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca narran

- su verdad sobre el conflicto armado». Módulo de Captura, Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. 2019.
- Informe 1180-CI-01017. Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc). «Memoria del conflicto y resistencia del pueblo negro y afrodescendiente del norte del Cauca». Módulo de captura, Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. 2021.
- Informe 1306-CI-01853. Universidad Sergio Arboleda y Ministerio de Defensa Nacional de la República de Colombia. «Aporte a la verdad: contexto de la Fuerza Pública para la memoria histórica». Módulo de Captura, Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. 2022.
- Informe 262-CI-01224. Corporación Ensayos para la Promoción de la Cultura Política. «La guerra no es una balacera: continuidades y discontinuidades de las guerras en el norte del Cauca». Módulo de Captura, Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. 2021.
- Informe 263-CI-00218. Tejido Mujer Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN). «Tejemos la historia para sanar la memoria». Módulo de captura, Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. 2020.
- Informe 651-CI-01452. Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). «Entonces, ¡hablamos! Afectaciones del conflicto político armado a los pueblos indígenas que conforman el Consejo Regional Indígena del Cauca, 1971-2021». Módulo de Captura, Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. 2021.
- Informe 748-CI-00527. Jorge Cardona, Laura Gaitán y Carlos Velásquez. «Los soldados regulares víctimas del secuestro y de la desaparición forzada». Módulo de Captura, Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. 2020.
- Informe 748-CI-00642. Fuerzas Militares. «Informe Aletheia. Graves infracciones al DIH y violaciones a los DD. HH. emblemáticas perpetradas por grupos armados ilegales en el marco del conflicto armado 1961-2016». Módulo de Captura, Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. 2020.
- InSight Crime. «15 años de sangre y venganza: disputa del Cartel del Norte del Valle». 11 de junio de 2013. <https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/15-anos-de-sangre-y-venganza-continua-disputa-del-cartel-del-norte-del-valle/>
- InSight Crime. «Cartel del norte del Valle». 17 de agosto de 2014. <https://es.insightcrime.org/noticias-crimen-organizado-colombia/cartel-del-norte-del-valle/>
- InSight Crime. «Los Rastros». 3 de enero de 2006. <https://es.insightcrime.org/sin-categorizar/rastros/>

- Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. *Los focos del conflicto en Colombia. Informe sobre presencia de grupos armados*. Bogotá, 2021. <http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2021/10/INFORME-DE-GRUPOS-2021.pdf>
- Jelin, Elizabeth. *La lucha por el pasado: cómo construimos la memoria social*. Buenos Aires: Siglo XXI, 2017.
- Jurisdicción Especial para la Paz. «Diagnóstico de los casos de violencia letal que afectan a los excombatientes de las FARC-EP en el Valle del Cauca, Cauca y Nariño». 2021. <https://www.jep.gov.co/JEP/documents1/Situaci%C3%B3n%20de%20violencia%20letal%20contra%20excombatientes%20de%20las%20FARC-EP%20en%20Valle%20del%20Cauca,%20Cauca%20y%20Nari%C3%B1o.pdf>
- Mancini, Simeone. «Tenencia y uso de la tierra por la industria azucarera del Valle del Cauca». *Acta Agronómica*. Palmira: Universidad Nacional. Facultad de Agronomía. IV, 1. 1954.
- Medina, Carlos. «FARC-EP y ELN Una historia política comparada (1958-2006)». Tesis doctoral Universidad Nacional de Colombia. 2010. <https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/7221/469029.2010.pdf?sequence=1>
- Medina, Carlos. «FARC-EP. Notas para una historia política 1958-2006». 2009. https://historiapolitica.com/datos/biblioteca/lucha%20armada%20AL_molina%20gallego.pdf
- Mina, Mateo. *Esclavitud y libertad en el Valle del río Cauca*. Bogotá: La Rosca, 1975.
- Ministerio de Justicia-Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). «Atlas de la caracterización regional de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el departamento del Cauca». Bogotá, 2016. http://www.odc.gov.co/Portals/1/politica-regional/Docs/2016/RE0640_cauca.pdf
- Ministerio de Justicia-Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). *Atlas de la caracterización regional de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el departamento del Valle del Cauca*. Bogotá, 2013. <https://www.minjusticia.gov.co/programasco/ODC/Publicaciones/Publicaciones/RE072015-caracterizacion-regional-problematika-asociada-drogas-ilicitas-vcauca.pdf>
- Misión de Observación Electoral. *Monografía Político Electoral Departamento del Valle del Cauca 1997 a 2007*. Bogotá: MOE y Corporación Nuevo Arcoíris, 2007.
- Molano, Alfredo. «Riochiquito». *Agencia Prensa Rural*. 21 de julio de 2014. <https://prensarural.org/spip/spip.php?article14647>
- . *Del llano llano: relatos y testimonios*. Bogotá: El Áncora Editores, 1995.
- . «Asalto a Marquetalia». *El Espectador*. 14 de junio de 2014. <https://www.elspectador.com/colombia/mas-regiones/asalto-a-marquetalia-article-498380/>

- Montoya, Gloria. «El paro de corteros de caña en el Valle del Cauca-Colombia: una acción colectiva de cara al modelo económico». *Entramado*, Vol. 7, N° 1, 2011 (enero-junio). Cali: Universidad Libre.
- Nuevo Siglo. «Norte del Cauca, gran destino turístico por descubrir». 15 de octubre de 2017. <https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2017-norte-del-cauca-gran-destino-turistico-por-descubrir>
- Organización Indígena de Colombia (ONIC). «Minga social y comunitaria por la defensa de la vida, el derecho a la protesta social y la Jurisdicción Especial Indígena». 11 de noviembre de 2015. <https://www.onic.org.co/noticias/879-minga-social-y-comunitaria-por-la-defensa-de-la-vida-el-derecho-a-la-protesta-social-y-la-jurisdiccion-especial-indigena-jei>
- Peñaranda, Ricardo. «De rebeldes a ciudadanos: el caso del Movimiento Armado Quintín Lame». En *De las armas a la política*, Ricardo Peñaranda y Javier Guerrero (compiladores). Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1999.
- Presidencia de la República. Decreto 588 de 2017, «por el cual se organiza la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición».
- . *Informe sobre el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos armados organizados y grupos delictivos organizados*. Bogotá: 2021. <https://derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/Documents/2021/210921-Informe-Reclutamiento-NNA.pdf>
- Procuraduría General de la Nación. *Tercer informe al Congreso sobre el estado de avance de la implementación del Acuerdo de Paz*. Bogotá, 2021. <http://www.secretariase-nado.gov.co/cuatrenio-2018-2022/legislatura-2021-2022/informes-y-publicaciones-1/6112-tercer-informe-acuerdo-de-paz-2021/file>.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). *Hacia un Valle del Cauca incluyente y pacífico. Informe regional de desarrollo humano 2008*. http://uvsalud.univalle.edu.co/pdf/plan_desarrollo/idh_valle_2008_1.pdf
- Quintero, León. «Los Pájaros del Valle del Cauca». *Estudios de Derecho* 65 (n° 145, 2008): 243-258. <https://revistas.udea.edu.co/index.php/red/article/view/851>
- RCN Radio. «Así han sido las mingas indígenas en Colombia desde 1999». 20 de octubre de 2020. <https://www.rcnradio.com/recomendado-del-editor/asi-han-sido-las-mingas-indigenas-en-colombia-desde-1999>
- . «En 2021, al menos 272 menores indígena han sido reclutados en Cauca». 1 de diciembre de 2021. <https://www.rcnradio.com/colombia/sur/en-2021-al-menos-272-menores-indigena-han-sido-reclutados-en-cauca>
- Relatoría espacio colectivo de preparación de víctimas de los pueblos Embera Chamí y Embera Katío para el reconocimiento de responsabilidades de las antiguas FARC-EP a la población de El Carmen de Atrato (Chocó), 2022.
- Revista Semana. «¿Quiénes son los Pepes?». 29 de marzo de 1993. <https://www.semana.com/nacion/articulo/quienes-pepes/19520-3/>

- . «El “triángulo de oro” del cannabis». 20 de octubre de 2018. <https://www.semana.com/nacion/articulo/norte-del-cauca-se-produce-la-variedad-de-marihuana-mas-potente/587503/>
- . «Infancia perseguida». 28 de octubre de 2001. <https://www.semana.com/infancia-perseguida/47810-3/>
- . «La gran ofensiva». 27 de abril de 1986. <https://www.semana.com/nacion/articulo/la-gran-ofensiva/7613-3/>
- . «MinDefensa denunció nueva modalidad de las disidencias de las FARC para generar terror en el Cauca». 21 de septiembre de 2021. <https://www.semana.com/nacion/articulo/mindefensa-denuncio-nueva-modalidad-de-las-disidencias-de-las-farc-para-generar-terror-en-el-cauca/202100/>
- . «Pacto con el diablo». 16 de febrero de 2008. <https://www.semana.com/nacion/articulo/pacto-diablo/91048-3/>
- . «Paramilitares: ejército en la sombra». <https://www.semana.com/especiales/articulo/paramilitares-ejercito-en-las-sombras/809-3/>
- . «De paso fino». 8 de febrero de 2003. <https://www.semana.com/de-paso-fino/56354-3/>
- Rodríguez Triana, Tania Esperanza. «La paz comienza por lo territorial». *Pax crítica: aportes teóricos a las perspectivas de paz posliberal*, 167-194. Tecnos, 2019.
- Rodríguez, Diana y Cepeda, Edilberto. «Concentración de la tierra en Colombia». *Comunicaciones en Estadística* 4 (n° 1, 2011): 29-42. <http://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/estadistica/article/view/17>
- Rojas, José María. *Sociedad y economía en el Valle del Cauca. Tomo V. Empresarios y tecnología en la formación del sector azucarero en Colombia 1860-1980*. Cali: Universidad del Valle, 1983.
- Rutas del Conflicto. «Masacre de El Nilo». <https://rutasdelconflicto.com/masacres/el-nilo>
- Rutas del Conflicto. «Masacre de Trujillo». En: <https://rutasdelconflicto.com/masacres/trujillo>
- Sánchez, Gonzalo y Merteens, Donny. *Bandoleros, gamonales y campesinos*. Bogotá: El Áncora Editores, 1992.
- Sánchez, Ricardo. «Las iras del azúcar: la huelga de 1976 en el Ingenio Riopaila». *Historia Crítica* 35 (2008): 34-57.
- Schejtman, Alexander y Berdegú, Julio A. *Desarrollo territorial rural*. Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, 2004.
- Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación CINEP/PPP-CERAC. *Décimo informe de verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia*. Bogotá, 2021.
- Serje, Margarita. *El revés de la nación: territorios salvajes, fronteras y tierras de nadie*. Bogotá: Universidad de los Andes, 2005.

- Sosa, Yeison. «La protesta estudiantil en la Universidad del Valle entre 1968-1971 y 2007-2011. Una lectura comparada». *Revista Forum* 13 (enero-junio, 2018).
- Sucasas, Alberto. «Interpelación de la víctima y exigencia de justicia». *La ética ante las víctimas*, 76-99. Madrid: Anthropos, 2003.
- Todorov, Tzvetan. *Memoria del mal, tentación del bien*. Península, 2002.
- Vanegas, Gildardo, et al. «Afinidades violentas: la evolución de la red de narcotraficantes del norte del Valle». *Sociedad y Economía* 42 (mayo, 2021). <https://www.redalyc.org/journal/996/99668843003/html/>
- Vargas, Bryan y Ariza, Rosembert. «Liberación de la madre tierra: entre la legitimidad y los usos sociales de la ilegalidad». *Revista Estudios Socio-Jurídicos* 22 (nº 1, 2020): 203-231. doi: <http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/sociojuridicos/a.7641>
- Verdad Abierta. «Afros, indígenas y campesinos construyen paz en el norte de Cauca». 13 de mayo de 2015. <https://verdadabierta.com/afros-indigenas-y-campesinos-construyen-paz-en-el-norte-de-cauca/>
- . «Bloque Calima, un depredador paramilitar marcado por el narcotráfico». 5 de agosto de 2018. <https://verdadabierta.com/bloque-calima-depredador-paramilitar-marcado-narcotrafico/>
- . «FARC: el origen (1953-1964)». 18 de noviembre de 2012. <https://verdadabierta.com/el-origen-1953-1964/>
- Villarraga, Álvaro. «30 años de una paz pionera». *El Tiempo*, 21 de marzo de 2020. <https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/m-19-30-anos-de-su-des-movilizacion-y-el-impacto-en-la-vida-democratica-47559>

Anexos



Anexo 1. Anexos del tomo



Anexo 2. Anexos generales del Informe Final



Anexo 3. Plataforma digital



Anexo 4. Constancias y aclaraciones de los comisionados



Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad,
la Convivencia y la No Repetición.

